

CAHIERS DES AMÉRIQUES LATINES 53

2006 / 3

SOMMAIRE



CHRONIQUE 5

- **El triunfo de Cristina Kirchner y el futuro de la Argentina** 7
par Ricardo González-Leandri et Elda González Martínez

DOSSIER

VENEZUELA : PORTRAIT D'UNE SOCIÉTÉ AU QUOTIDIEN

- **Introduction : le Venezuela contemporain à l'épreuve des faits** 17
par Julien Rebotier et Sandrine Revet
- **Modelos en colapso. Perspectiva histórica sobre la crisis del viaducto 1 en la autopista Caracas-La Guaira** 23
par Rogelio Altez
- **La République bolivarienne du Venezuela et le droit** 49
par Guy Mazet
- **Venezuela, espacio urbano y globalización** 67
par Nubis Pulido
- **Services et développement urbains au Venezuela. Le cas du service de l'eau potable** 89
par Anne Péné-Annette
- **Les territoires de l'informel. Étude du commerce de rue à Caracas** 101
par Mathilde Gauvain
- **La pobreza como objeto mediático en Venezuela** 117
par Leopoldo Tablante
- **Luttes urbaines et démocratie à Caracas (2001-2004). Vers la redéfinition de l'espace public vénézuélien** 147
par Armelle Racinoux et Emiliano Zapata

ÉTUDES

- Les exclus du *boom* migratoire mexicain 173
par Nathalie Gravel
- L'application de la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en Bolivie.
Le cas des droits reproductifs et sexuels à La Paz et El Alto 191
par Virginie Rozée

INFORMATION SCIENTIFIQUE

Lectures 211

LES AUTEURS 225

CHRONIQUE

Ricardo González-Leandri y Elda González Martínez*

El triunfo de Cristina Kirchner y el futuro de la Argentina

El 28 de octubre de 2007 se celebraron elecciones generales en la República Argentina. Se trató de los sextos comicios realizados después de la dictadura militar que asoló al país entre 1976 y mediados de la década del 80. Además de elegir presidente y vicepresidente de la nación, se votó también para cubrir el cargo de gobernador en ocho provincias y para renovar la mitad de los escaños de la cámara de Diputados de la Nación y un tercio de los del Senado. Para consagrarse en la primera vuelta y no tener que someterse a un *ballotage*, la candidatura presidencial más votada debía obtener más del 45 % de los votos, o bien el 40 % pero, en este caso, con una diferencia con respecto a la segunda de más del 10 %.

No hubo mayores sorpresas. Como muchos analistas políticos habían pronosticado desde bastante tiempo antes, la fórmula del Frente para la Victoria, compuesta por Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos, venció de forma rotunda. Reunió un 45,29 % del total de sufragios, por lo que superó con holgura, casi un 22 %, a la Coalición Cívica capitaneada por Elisa Carrió, a la que se sumó el “voto útil” de una parte del electorado más ostensiblemente opositor. Esa holgada diferencia permitirá a los ganadores disponer de una amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. También

* Grupo de Estudios Americanos, Instituto de Historia / Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España).

podrán contar con el respaldo de gran parte de las veinticuatro provincias, entre ellas la de Buenos Aires – en la que el candidato oficialista, Daniel Scioli, actual vicepresidente de la Nación, obtuvo un resultado notable que rondó el 50 % de los sufragios – y con un número importante de intendencias en el políticamente influyente conurbano bonaerense.

En otro aspecto se trató de una elección presidencial especial, dado que por primera vez en la historia se presentaron tres candidatas, de las cuales dos quedaron en el primer y segundo lugar. Esto ha motivado una serie de reflexiones, puesto que el fenómeno es visto como un indicio local de una tendencia más extendida. Según varios enfoques, las elecciones de Merkel en Alemania, Bachelet en Chile y las candidaturas de Ségolène Royal y Hillary Clinton en Francia y Estados Unidos expresarían cambios en el mundo, o al menos en parte del mundo occidental, tanto entre las propias relaciones de género, como entre éstas y la esfera política. La reflexión acerca de esta mayor participación política femenina se da obviamente también para Argentina, donde en general las mujeres de los distintos estratos sociales observan con satisfacción unos acontecimientos que curiosamente coinciden, como señala Dora Barrancos, con una implosión de la política tradicional y con la pérdida de hegemonía de los partidos tradicionales. Como no podía ser de otra forma, en sus primeras declaraciones como presidenta electa Cristina Kirchner hizo referencia a esta cuestión. Entre otras cosas, además de convocar “a las obreras, las estudiantes, y las que han quedado solas al frente del hogar” expresó : “Siento que tengo una obligación con el género en cuanto a demostración de eficiencia y eficacia.”

Sin embargo, el optimismo debe ser forzosamente moderado, dado que la traducción de esta mayor presencia de mujeres en las altas esferas de la política no tendrá, como parece, una traducción ni fácil ni inmediata al terreno social. Por ejemplo, tanto Cristina Kirchner como Elisa Carrió se apresuraron durante la campaña electoral a manifestarse en contra de la despenalización del aborto, una de las reivindicaciones más importantes de los colectivos femeninos organizados.

La candidata ganadora, Cristina Fernández, licenciada en derecho por la Universidad Nacional de la Plata, donde fue compañera de estudios de Néstor Kirchner, es una experimentada política, de la cual en absoluto puede decirse que haya hecho carrera a la sombra de su marido. Por el contrario, cuando el actual presidente era aún un “desconocido” para el ámbito político nacional, Cristina Fernández ya se enfrentaba al aparato político del justicialismo encabezado por Carlos Menem. Si bien es cierto que el ex presidente la había elegido como una de las diputadas que supuestamente defenderían su gestión, al poco tiempo fue desplazada de las comisiones que integraba, y expulsada del grupo justicialista oficial. Cristina Fernández inició su trayectoria política pública hace ya casi treinta años, en 1989. Comenzó como Diputada provincial en Santa Cruz,



cargo para el que fue reelecta en varias ocasiones ; a la política nacional accedió en 1995 al ser elegida Senadora ; en 1997 ingresó al Congreso como Diputada nacional, también por Santa Cruz, y en el periodo 2001 a 2005 fue nuevamente nombrada Senadora por la misma provincia, periodo en el que llegó a ejercer como presidenta de la Cámara. Desde 2005 es Senadora Nacional en representación de la provincia de Buenos Aires, tras derrotar en unas elecciones, sin duda decisivas, a “Chiche” Duhalde, esposa del ex gobernador de la provincia y ex presidente de la República, Eduardo Duhalde, máximo representante de un sector entonces dominante en el aparato político peronista de la Provincia de Buenos Aires y principal competidor de los Kirchner por la hegemonía en el partido y en la política nacional.

El indiscutible triunfo del Frente para la Victoria puede ser también leído, además de cómo un obvio aval ciudadano a su cabeza de lista, como una muestra de apoyo mayoritario a la gestión del gobierno de Néstor Kirchner, ahora saliente. Puede afirmarse, en consecuencia, que en primer lugar buena parte de los argentinos, incluso muchos que no votaron a los triunfadores, apostó por el cierre de un periodo que sin duda debe calificarse como de excepción, dadas las complejas circunstancias que envolvieron el acceso a la presidencia del actual mandatario en el año 2003, con sólo un 22 % de apoyo en las urnas. En segundo lugar optó mayoritariamente por un determinado tipo de continuidad y, en muchos casos, también por la profundización del modelo social y político que comenzó a prefigurarse durante estos últimos años.

La dimensión real del éxito de Cristina Kirchner y del Frente para la Victoria sólo adquiere pleno sentido si se lo relaciona con el abrumador contexto de la crisis social del año 2001 y sus secuelas en los años posteriores. Los hechos son conocidos, pero vale la pena hacer aquí una breve referencia. Tras la derrota electoral del presidente de la Rúa en octubre, se produjo una fuerte presión por parte de los clientes a los bancos al comenzar a retirar en masa sus depósitos. Ello obligó al gobierno a decretar el “*corralito*” que no fue otra cosa que la prohibición de retirar sus ahorros del sistema. La falta de confianza pública era absoluta y se produjo un fuerte estallido social, cuya represión se saldó durante el tiempo que duró la crisis con la muerte de cuarenta personas en todo el país. Puede hablarse de una crisis total, económica, social y, sobre todo, institucional. La prueba más fehaciente de ello fue que en una semana hubo cinco presidentes distintos. Como medidas extremas se decretaron el “default” y el cambio de convertibilidad de la moneda que hasta entonces estaba equiparada artificialmente con el valor del dólar. Los primeros meses del 2002 fueron caóticos. Los acuerdos con el FMI todavía no se consolidaban y el conjunto de la población, incluidos amplios estratos medios, se vio sumergido en una pobreza extrema, de la que se suponía que tardaría décadas en salir. Lo más grave de todo fue la absoluta pérdida de

confianza en las instituciones y en el poder judicial, contra los que se realizaron importantes marchas cívicas, los llamados “*cacerolazos*”.

Resulta difícil obviar que dicha crisis fue consecuencia directa del traumático experimento liberalizador del gobierno de Carlos Menem y del errático accionar posterior del presidente Fernando de la Rúa, que dejaron al Estado en buena medida incapacitado para ejercer sus funciones propias y a la sociedad civil atomizada y desarticulada. El eslogan de la época, “que se vayan todos”, expresó con toda crudeza el hartazgo y la desafección política de amplios sectores de la sociedad argentina en esos momentos. A ello hacía referencia Cristina Kirchner, a la hora de los primeros festejos cuando recordaba “aquellas circunstancias, muy distintas y muy difíciles”. Hacia esa misma dirección apuntaba también su llamado a “todos los argentinos y argentinas a reconstruir el tejido social e institucional”.

Si bien hoy en día la situación social y económica es sin duda muy distinta, por lo que muchos tienden a olvidar el calado de aquella crisis y sus consecuencias estructurales, todavía quedan importantes secuelas y gran cantidad de cuestiones fundamentales irresueltas. En ese sentido, el triunfo de Cristina Fernández representa, en términos sociales, una suerte de negociación que sugiere la manera, compleja y contradictoria, elegida por la sociedad argentina para salir de una crisis que no es meramente coyuntural, sino estratégica y de proyecto colectivo. La complejidad en que está inmersa esa opción le viene dada, además, por el persistente apego de importantes sectores de la ciudadanía, tanto altos y populares como de derecha e izquierda, a esquemas sociales e ideológicos tradicionales y en algunos casos hasta anacrónicos.

En tal sentido la distribución social y regional de los sufragios en estas últimas elecciones expresa una mezcla, contradictoria pero dinámica, entre lo viejo que persiste y lo nuevo que aún no se consolida. Ello ha sido interpretado por sectores de la oposición, de manera un tanto esquemática, como debido al predominio de un voto, pobre, tradicional y cautivo, fomentado por la política clientelar del gobierno. Desde sectores más afines al oficialismo se responde que es difícil pensar en la existencia en el país de un 45 % de pobres “cautivos”. Los resultados presentan muchos matices; si bien es cierto que el Frente para la Victoria obtuvo un voto masivo en las zonas más pobres del país, también lo es que tuvo un fuerte apoyo en importantes franjas de los sectores medios. En las zonas más urbanas y económicamente más dinámicas, los resultados obtenidos también fueron buenos, aunque no alcanzaran para lograr el triunfo, como en Córdoba, Ciudad autónoma de Buenos Aires y Rosario (a pesar de que ganó en el conjunto de la provincia de Santa Fé). Sus grandes valedores siguen siendo tanto los sectores populares como las clases medias de la “poderosa” provincia de Buenos Aires.



Un poco más arriba hicimos referencia a lo que Cristina Fernández y su éxito representan en cuanto a continuidad; es útil por lo tanto hacer algunas precisiones, dado que la cuestión puede ser analizada desde distintas perspectivas. Es obvio que los Kirchner conforman un sólido equipo político, por lo que a pesar de los inevitables cambios de estilo, es previsible una continuidad con respecto a la mayoría de las políticas llevadas a cabo durante estos últimos cuatro años. Los objetivos explícitos fijados por Cristina Fernández apuntan a ello: reducción del desempleo y la pobreza, crecimiento sostenido, reactivación de las economías regionales y aumento de la masa de jubilados y de sus haberes, en especial en los escalones más bajos. El nombramiento del futuro gabinete no permite tampoco vislumbrar cambios sustanciales con respecto a la actuación del anterior gobierno; en realidad sucede lo contrario, lo que destaca es más bien la consolidación en la cúspide de un grupo de “operadores políticos” de la máxima confianza del “equipo presidencial”. Con estos antecedentes es también poco probable que se den cambios drásticos en las segundas líneas de mando de la Administración.

El electorado que ha optado mayoritariamente por la candidata ganadora ha expresado en primer lugar su acuerdo con la marcha de la economía y una evidente aprobación de lo actuado en esa línea en los últimos años: hay que destacar que el país lleva sesenta meses continuados de reactivación económica con unos niveles de crecimiento anual realmente importantes – en torno al 8 % –, aunque es cierto que tras la crisis se parte de niveles extraordinariamente bajos. Otros indicadores son también notables y señalan sin duda el porqué de ese deseo popular de continuidad: por ejemplo, entre el 2003 y el 2007 el empleo aumentó un 49 % y el salario real un 36 %, mientras que el incremento de la masa salarial real del sector privado durante ese mismo periodo fue del 103 %. A ello hay que agregar otras cuestiones que exceden lo económico coyuntural y se vinculan con cierta voluntad política (más allá del oportunismo que algunos puedan observar en ello), como el fuerte esfuerzo inclusivo hacia capas de la población especialmente golpeadas por la crisis y el aumento de las jubilaciones y pensiones y su actualización, como la propia Cristina Fernández se ocupó de destacar en los actos de campaña y entrevistas recientes.

Pero si bien “se vota con el estómago” como dice un dicho popular, ese voto se conforma dentro de un marco donde intervienen de manera decisiva otros factores, en general de índole política e institucional. Determinadas actuaciones del gobierno, como la estrategia utilizada para negociar la deuda externa frente al FMI, otros organismos internacionales, y con los llamados “fondos buitres”, el mayor control que se impuso a las actividades y al cumplimiento de los contratos por parte de las empresas privatizadas, entre muchas otras, tuvieron como resultado devolver al Poder Ejecutivo como representante máximo del Estado, una presencia y una capacidad reguladora que muchos pensaban ya perdidas

para países como la Argentina. Ello derivó en un aumento de la confianza en el papel del Estado y, por derivación, – aunque siempre relativa – en el conjunto del espacio político como ámbito de representación y negociación, que estaba bajo mínimos. Otros dos elementos también fundamentales que ayudaron a crear ese marco de mayor confianza e institucionalidad fueron el nombramiento de una Corte Suprema de Justicia realmente independiente del Poder Ejecutivo y su política de derechos humanos, con la derogación de las leyes de Punto Final y los indultos otorgados por el Gobierno de Menem a los militares condenados por crímenes durante la última dictadura.

Sin embargo tampoco pueden lanzarse las campanas al vuelo, dado que la situación política y social es precaria en Argentina todavía. Además, la permanente búsqueda de hegemonía y de una cierta unanimidad “movimientista” por parte del peronismo produce una lógica desconfianza en amplios sectores de la población, incluso en muchos que en estas elecciones optaron por la fórmula ganadora. La idea de una “Convergencia Plural” – que implica la creación de un polo de gobierno de centro izquierda, conformado por sectores peronistas y no peronistas –, uno de los eslóganes más utilizados por la candidata ganadora, representa en tal sentido una ventana abierta al optimismo. Ello puede tener éxito en la medida que sirva para mejorar la calidad institucional y para la consolidación de ciertos rasgos esenciales del funcionamiento democrático, tan dejados de lado en la Argentina, y no para el logro de un mero “disciplinamiento” de voluntades. Con todas sus contradicciones, es también la propia realidad política la que marca un poco el camino ; en tal sentido, no puede dejar de destacarse que el triunfo en primera vuelta de la fórmula Cristina Kirchner y Julio Cobos, del sector del partido radical cercano al gobierno, los llamados “radicales K”, se dio en parte gracias a este apoyo que en absoluto fue menor. En las siete provincias gobernadas por estos radicales Cristina Kirchner obtuvo más del 50 % de los votos. Pero para obtener una “Convergencia Plural” plena, los acuerdos no pueden limitarse a contactos en la cúspide con los “radicales K”, sino que éstos deben ampliarse a otras fuerzas políticas progresistas y de izquierda, sobre todo a los socialistas de Santa Fé y a los movimientos sociales.

El desafío es grande y el éxito no está para nada asegurado para Cristina Kirchner, dado que la tarea que tiene por delante es ciclópea. El nivel de corrupción del país es todavía muy fuerte, e incluso ha llegado a salpicar en los últimos tiempos hasta al propio gobierno. A pesar de las buenas intenciones de la Corte Suprema la justicia todavía está muy desnaturalizada. Por otra parte, el desmantelamiento del Estado es prácticamente irreversible en muchas áreas y el perfil industrialista que el Frente para la Victoria pretende impulsar como modelo económico para el país se ve desafiado por la venta cotidiana de activos empresariales a capitales extranjeros. La situación social y el nivel de pobreza en algunas regiones todavía siguen siendo alarmantes. Por otra parte no debe

confundirse, como piensan muchos, esta holgada victoria, con un entusiasmo de la población por sus fuerzas políticas. Muchas de las secuelas del “que se vayan todos” siguen aún en pie.

Pero hay un punto que sí mueve al optimismo y es el hecho de que Cristina Kirchner parece haber aprendido muchas de las amargas lecciones de la historia argentina de los últimos tiempos y se muestra firmemente convencida de la necesidad de trabajar de manera conjunta con los distintos sectores sociales, y no sólo con las cúpulas sectoriales, para lograr un acuerdo que facilite la consolidación de un proyecto social estratégico, es decir de largo plazo, del que el país carece. Lo que no es poco.

DOSSIER

Venezuela : portrait d'une société au quotidien

Introduction : le Venezuela contemporain à l'épreuve des faits

Dans le paysage des sciences sociales françaises, mais aussi européennes et nord-américaines, portant sur l'Amérique latine, on ne peut que se réjouir de l'intérêt nouveau que suscite depuis quelques années le Venezuela. Si, jusqu'au milieu des années 1990, le pays et ses dynamiques n'attiraient que rarement l'attention de la communauté scientifique, l'arrivée au pouvoir de Hugo Chávez Frías et les politiques controversées qu'il a mis en œuvre ont progressivement renversé la tendance de relative indifférence à l'égard de ce pays. Numéros thématiques de revues, essais et ouvrages de synthèse se sont multipliés, souvent centrés sur la figure énigmatique et polarisatrice de Chávez et sur l'analyse des discours du président. Dans le même temps, l'imaginaire français sur le Venezuela, inexistant ou strictement limité aux représentations d'un pays riche en pétrole et peuplé de Miss Monde étendues sur des plages de sable blanc, laissait progressivement la place à une série de commentaires sensationnels à propos du leader de la Révolution bolivarienne. L'expérience du Venezuela à l'heure du « chavisme » gagnait ainsi les colonnes de la presse, souvent par le biais d'un discours partisan et peu intègre scientifiquement, célébrée parfois, décriée souvent du fait de la persistance de la pauvreté, de l'inégale répartition des richesses, ou des mécanismes de pouvoir discrétionnaires.

Ce dossier est né de cet intérêt renouvelé pour le Venezuela et du constat concomitant selon lequel, dans le cadre de ces analyses, la société vénézuélienne

* Université Paris III – Sorbonne Nouvelle, Institut des Hautes Études de l'Amérique latine / CREDAL – UMR 7169.

elle-même n'apparaît souvent qu'en creux. Ce sont pourtant les dynamiques sociales, culturelles ou urbaines qui font la richesse du Venezuela actuel ; nous avons donc fait le pari de rassembler ici quelques études empiriques qui, seules, permettent de les éclairer. Nous proposons d'entrer dans le Venezuela par la porte de son quotidien, à travers tout ce qui, pour être familier, reste pourtant trop souvent mal connu¹. Placer le Venezuela d'aujourd'hui à l'épreuve des faits : c'est la démarche pragmatique et empirique dont témoigne le titre de ce dossier. On y parlera donc de ce qui fait la réalité quotidienne des Vénézuéliens, de la ville et de ses marchands de rue (*buhoneros*), de la télévision, de la pauvreté, du droit et de la propriété privée, des affrontements entre « pro » et « anti » Chávez, de l'eau et des routes. Autant d'objets qui permettent de dépasser l'analyse de la façon dont le pays – ou son président – se « dit » pour parvenir à mettre en lumière la façon dont il se « fait ».

C'est d'abord un Venezuela urbain, qui, sans surprise, apparaît dans ce numéro. Dans ce pays dont la population urbaine frôle ou dépasse, selon les méthodes de calcul, les 90 %, la question de la ville est centrale. À cet égard, le Venezuela partage avec d'autres pays latino-américains l'expérience d'un processus d'urbanisation (trop) rapide – caractéristique d'un développement à marche forcée, lié à l'exploitation pétrolière dès le second tiers du XX^e siècle – et la kyrielle de problématiques sociales engendrées par les migrations rurales et le manque de planification urbaine (chômage, pauvreté, précarité, violence, etc.). Mais la ville, loin d'être uniquement analysable en termes de manques, est aussi un lieu plein. C'est ainsi le théâtre de dynamiques au niveau local ou municipal, comme le montre l'analyse que livre Anne Péné-Annette sur la gestion du service de l'eau par les communautés de Barcelona-Puerto La Cruz. Mettant en lumière la tension inhérente au mode de gouvernement actuel, entre d'une part une volonté de mettre en place les modalités d'une participation effective et d'autre part la tentation de maintenir un contrôle centralisé sur les processus de décision, cette étude de géographie sociale montre le rôle particulier que jouent les femmes dans la création et la gestion des coopératives. Le phénomène actuel de création de coopératives soulève pourtant encore bien des questions et appelle d'autres études, dans la mesure où la création de presque 100 000 coopératives depuis 1999² constitue un phénomène politique, économique et social, dont les modalités de mise en œuvre et les conséquences méritent d'être éclairées.

La ville qui apparaît dans ce dossier est aussi une ville paradoxale, faite autant de circulations que de confrontations dont les espaces publics sont le

1. Olivier Schwartz, « L'empirisme irréductible », postface à Nels Anderson, *Le Hobo. Sociologie du sans-abri*, Paris, Nathan, coll. « Essais et recherches », 1993 [1923], p. 265-308.

2. En 1998, le nombre de coopératives enregistrées dans le pays était de 877. Il est aujourd'hui de 102 768 selon les chiffres de la SUNACOOOP (la Superintendencia nationale des Coopératives), qui dépend du ministère de l'Industrie et du Commerce (<http://www.sunacoop.gob.ve/index.html>).



reflet. Mathilde Gauvain souligne la teneur de ce paradoxe en décrivant les trottoirs occupés par des vendeurs ambulants qui fournissent les *caraqueños* en produits de toutes sortes, et, parallèlement, les processus de stigmatisation en œuvre à l'encontre de ces mêmes marchands. Son analyse, qui avance l'idée selon laquelle les *puestos des buhoneros* constitueraient en quelque sorte des « interfaces entre deux territoires sociaux » en dépit de processus discursifs de mise à distance, a le mérite de mettre en lumière des dynamiques que l'analyse perd parfois de vue, comme l'interdépendance entre la ville « formelle » et la ville « informelle ».

Une autre opposition apparente de la ville, souvent trop vite associée à la dichotomie entre ville « formelle » et ville « informelle », est mise en scène par Armelle Racinoux et Emiliano Zapata au travers de la confrontation entre tenants et détracteurs du pouvoir en place. La mise en question de l'espace public, menacé par l'appropriation politique partisane, est à l'origine de vifs épisodes d'affrontements au cœur de cet espace public urbain, qui devient à la fois acteur et médiateur de la rivalité des deux camps. Paradoxalement, l'auteur met en avant le fait qu'une telle confrontation, aussi violente soit-elle, est dans le même temps le gage de prémices démocratiques qui voient, face à une position politique, se dresser sa contradiction dans l'espace public. Enfin, il apparaît que le discours manichéen, qui présente un Ouest de Caracas « chaviste » et un Est « opposant », ne résiste pas à l'épreuve d'une réalité finalement moins homogène, à laquelle il est nécessaire d'apporter des nuances.

En outre, une scène publique apparaît centrale dans plusieurs des études réunies dans ce dossier : les médias. Médias qui véhiculent et participent à la construction du discours stigmatisant sur les *buhoneros* (Mathilde Gauvain). Médias qui contribuent à la dualisation de la société en conflit (Armelle Racinoux et Emiliano Zapata). Médias à partir desquels Leopoldo Tablante propose d'observer la mise en objet du phénomène de la pauvreté depuis la fin des années 1980. Dans cette étude, l'auteur propose à la fois une remise en perspective – historique, économique, politique – des phénomènes de médiatisation de la pauvreté et une véritable déconstruction de ces mécanismes. Il met en lumière les enjeux politiques du traitement médiatique de la pauvreté et des phénomènes trop souvent passés sous silence dans les études consacrées au Venezuela, comme le racisme structurant et silencieux qui parcourt la société ou les inégalités de genre.

Toutes ces scènes urbaines révèlent enfin leur ancrage dans une temporalité qui semble définir le Venezuela actuel : celle de l'urgence. Urgence de situations quotidiennes en matière de logement, de sécurité, d'alimentation ou d'emploi, qui demeurent problématiques pour une majorité de Vénézuéliens et dont la résolution à ce jour s'inscrit dans des dynamiques telles que les *misiones* par exemple. Urgence, encore, de la « méthode » de

fonctionnement du pouvoir, portée par ce qui semble davantage être un mouvement qu'un parti et dans lequel certains voient plus d'arbitraire que de droit (Guy Mazet).

Il est dès lors légitime de s'interroger : le Venezuela actuel développe-t-il des modèles de crise – c'est-à-dire des modèles susceptibles de faire face à la crise qu'il traverse – ou bien le pays est-il confronté à une crise de ses modèles ? Au-delà, les dynamiques que l'on observe actuellement au Venezuela se situent-elles dans la continuité ou en rupture avec des processus antérieurs, avec des dynamiques plus anciennes ? Autant de questions qui constituent la toile de fond de ce dossier à partir de perspectives et de disciplines différentes.

Rogelio Altez se saisit ainsi de cette question des modèles à partir du cas concret de la gestion des voies de communication entre Caracas et La Guaira. Il nous montre, en adoptant une perspective historique, que la « crise du viaduc » qui coupa en janvier 2006 la capitale de son littoral est en réalité une crise structurelle, qui plonge ses racines dans la période coloniale et qui, associant les questions de pouvoir aux aléas naturels, a présidé à la construction d'un modèle de gestion publique fondé sur le principe de l'urgence. L'effondrement récent du viaduc invite ainsi à s'interroger sur la capacité du pays à reconstruire sur les ruines des modèles du passé. L'inauguration d'un nouveau viaduc quelque seize mois plus tard seulement, si elle constitue un véritable défi relevé par le gouvernement, ne remet pas en question l'analyse en termes structurels que propose l'article.

C'est encore la question des modèles qui occupe Guy Mazet, qui s'interroge sur la teneur juridique des postures internationales adoptées par le gouvernement vénézuélien et sur leur manque d'orthodoxie. À travers les différentes décisions prises par le président Chávez, doit-on comprendre que le modèle du libre-échange est « troqué » au nom d'autres modèles qui seraient soutenus par l'éthique ou l'entraide ? Le droit – international et national – peut-il être mis au service de telles transformations ?

C'est enfin de confrontation de modèles dont il est question dans la contribution de Nubis Pulido sur les villes vénézuéliennes contemporaines. Pour un pays structurellement urbain, les rythmes de croissance, les tailles des villes, leur distribution dans le réseau urbain national, ainsi que le sens que tout cela prend au niveau de l'exercice du pouvoir ou du développement territorial, ont fait l'objet au Venezuela d'études urbaines classiques depuis quelques décennies. Forte de cette tradition, l'auteur pose une série de questions originales et se demande si la trajectoire des villes intermédiaires, qui suit un modèle urbain global, est remise en question par la confrontation avec un modèle politique centralisateur.



Comment comprendre, dès lors, cette donnée actuelle de l'urgence ? « L'idiosyncrasie »³, souvent invoquée au Venezuela comme une explication générale impossible à remettre en question sous peine de mépriser d'intouchables spécificités culturelles, ne permet pas de comprendre ces pratiques récurrentes. Il en va de même pour l'accusation fréquente portée contre « l'intérêt politicien à court terme », qui n'a rien de spécifique au Venezuela. En revanche, le peu de cas fait des questions d'inclusion sociale et de solidarité dans l'histoire des politiques publiques au Venezuela détermine certainement la compréhension du type de développement social national que l'on connaît encore aujourd'hui. En se penchant sur des dynamiques de longue durée, Rogelio Altez observe bien cette absence de vision nationale qui se situerait au-delà des temporalités immédiates, qui relèvent souvent de l'opportunisme politique, populiste ou même économique. En cela, l'arrivée du président Chávez au pouvoir, pour révolutionnaire qu'elle se prétende, ne semble pas entraîner de rupture indiscutable.

Cette posture de l'urgence et les réponses immédiates qu'elle appelle, justifiées par la dette sociale contractée au fil des décennies par des régimes répondant à une démocratie de toute évidence plus politique que sociale, caractérise encore la façon dont le pays est mené aujourd'hui. L'assistance s'inscrit dans les modèles de réponse courants au Venezuela : parer au plus pressé souvent selon des principes circonstanciés, intéressés et partisans ; jugements ou décisions politiques parfois discrétionnaires ; fonctionnements institutionnels dépendant des relations interpersonnelles et du positionnement politique. Trop occupé – pour l'essentiel dans les tranchées médiatiques – à résister aux pressions d'ordre divers émanant de l'intérieur et de l'extérieur, le pouvoir chaviste serait-il toujours dans une phase de transition ou de consolidation ? Ou bien pouvons-nous déjà conclure, en invoquant certaines pratiques actuelles du pouvoir, qu'elles ne font que reprendre les pires logiques de la période antérieure ?

C'est probablement dans des formes nouvelles de participation que la rupture semble malgré tout opérer, ce dont ne témoigne que ponctuellement les articles de ce dossier. Si cette question de la participation est un enjeu fort pour la plupart des démocraties actuelles, les formes qu'elle prend au Venezuela demeurent en effet peu abordées de manière empirique. Dans l'espace académique qui analyse la situation du pays, on trouve à cet égard deux types de postures. Pour certains, la participation directe et la formation de conseils communaux s'inscrivent dans une dérive autoritaire, servie par la captation d'une légitimation politique à peu de frais. Pour d'autres, les formes

3. Très présent dans les discours en Amérique latine, ce terme renvoie à une manière d'être qui serait singulière, à des pratiques, des comportements et des références qui seraient propres aux contextes locaux. « L'idiosyncrasie » peut prendre des atours revendicatifs quand il s'agit de prendre ses distances avec des influences extérieures, qu'elles soient européennes ou nord-américaines. Elle est également invoquée comme l'interprétation ultime de ce que l'on ne sait expliquer.

que prennent les nouveaux mécanismes d'exercice de la démocratie sont trop complexes pour être balayées de la sorte et les nouvelles formes de gestion publique (Conseils locaux de Planification et de Participation, Comités sectoriels, Conseils communaux, Conseils de Travaux locaux, etc.) sont de nouveaux modèles requérant une attention renouvelée et des méthodes d'analyse adaptées. Gageons que ce travail qui reste à effectuer donnera lieu à de riches publications à l'avenir.

Dans un contexte mondialisé où la souveraineté échappe souvent aux citoyens, le processus vénézuélien, quoi qu'il porte comme valeurs politiques et sociales, ne mérite pas de disqualification *a priori*, dans la mesure où il est majoritairement et librement consenti à travers de multiples processus électoraux. L'analyse et la compréhension du Venezuela contemporain constituent plutôt un véritable défi pour les sciences sociales : si « étudier et lutter » n'est plus qu'un vague refrain du passé pour certains, « étudier sans préjuger » doit être à l'ordre du jour. Entre une science idéologisée et l'illusion d'une neutralité péremptoire et sans appel, il est nécessaire d'investir tout le champ de la nuance, d'éclairer les contextes et leur pertinence et d'adopter un certain décentrement par rapport aux productions médiatiques. L'ambition de ce numéro est de démontrer la nécessité de comprendre le processus politique vénézuélien pour ce qu'il implique en termes de réalités nationales et locales, mais aussi globales. Le nouveau, le complexe, l'original ou l'événement lancent inmanquablement le défi d'une remise en question réflexive et c'est bien à cela que nous invite le Venezuela d'aujourd'hui. Se cramponner aux modèles traditionnels d'analyse, derrière des références plus « normées » que démontrées et au nom d'un certain « réalisme scientifique », ne reviendrait qu'éclairer le Venezuela à l'ombre du passé. Ce dossier n'entend être qu'une modeste contribution à ce que les sciences sociales peuvent apporter à la compréhension des dynamiques qui traversent le Venezuela contemporain. Ce laboratoire bouillonnant, foisonnant, mais aussi déroutant et dérangeant, demande aux chercheurs de se dégager de postures construites *a priori* et d'inventer, pour le comprendre, des modèles d'analyse qui permettent de saisir toute la complexité des réalités qu'ils observent.

Rogelio Altez*

Modelos en colapso.

Perspectiva histórica sobre la crisis del viaducto 1 en la autopista Caracas-La Guaira

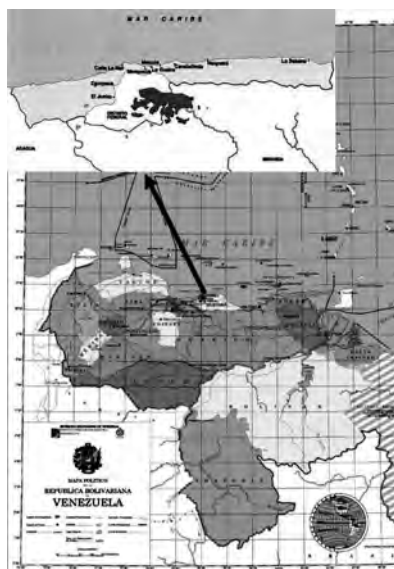
Introducción : tramas vulnerables

Cuando el 5 de enero de 2006 la noticia sobre la fractura del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira impactara sobre la sociedad venezolana en general, una cadena desordenada y ansiosa de opiniones se tejió de inmediato, dejando en evidencia el enfrentamiento de posiciones e intereses políticos, el oportunismo de líderes espontáneos y la falta de respuestas certeras y previsiones sobre el caso. Asimismo, con el colapso de esta autopista, única vía de comunicación terrestre en uso entre el puerto y aeropuerto que sirven a Caracas, también se hizo evidente la falta de redundancia en los caminos que conectan a estos lugares, como un indicador de la alta vulnerabilidad a la que se ve expuesta la capital de la república en relación con sus puertas de entradas nacionales e internacionales. No obstante, los indicadores de vulnerabilidad no sólo se expresaron en las condiciones materiales vinculadas a la escena de la fractura del magnífico puente, pues también quedó en claro que el proceso de transformación de las relaciones de poder que vive el país desde que se fundara la quinta república entre 1999 y el año 2000, ha generado escenarios contundentes de fragilidad subjetiva y política, convirtiendo a esta

* Escuela de Antropología, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela / Sociedad Venezolana de Historia de las Geociencias. En autor quiere agradecer a las profesoras Mercedes Marrero (Facultad de Arquitectura), María Virginia Nazul y Celia Herrera (Facultad de Ingeniería), de la Universidad Central de Venezuela, por el estímulo inicial en el desarrollo de este trabajo.

coyuntura en un desastre de proporciones mayores a las estrictamente materiales. Sin embargo, para comprender el por qué del impacto desplegado por la caída de esta estructura vial en un contexto como el presente, resulta ineludible revisar el proceso histórico que construyó las condiciones que se articularon para ello, comenzando por entender la dinámica misma de las vías de comunicación entre Caracas y el litoral central.

FIGURA 1 : SITUACIÓN RELATIVA DEL ESTADO VARGAS
SOBRE EL MAPA POLÍTICO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



Fuente : Instituto Geográfico Simón Bolívar [Marcano y Barrios, 2001, p. 34].

En este sentido, es pertinente señalar que las conexiones entre lugares no surgen por espontaneidades o curiosidades naturales entre quienes conforman las sociedades y comunidades que finalmente se conectan a través de caminos y rutas, sino por procesos que cristalizan y articulan intereses concretos situados en esas sociedades y comunidades. He allí que esos lugares¹, construyen conexiones², que son el producto histórico de sus relaciones con el medio ambiente y con otras sociedades y comunidades. Son, pues, caminos, senderos o rutas históricamente producidas³. Por lo tanto, cada

1. Espacios contruidos tanto en lo concreto como en lo simbólico, en el sentido que a ello le otorga Marc Augé [1996].
2. Siguiendo a Eric Wolf [1987], cuando señala que esos contactos son el resultado de procesos múltiples interconectados; es decir, no sólo debe observarse la simple bi-direccionalidad en las relaciones construidas entre dos lugares que se unen por un camino, sino que ello debe asociarse a la articulación de esas relaciones con otros procesos que concomitantemente afectan su construcción material y simbólica.
3. De acuerdo a lo que Maurice Godelier [1989] ha dejado claro en cuanto a que la organización social de la especie humana es la única que, por encima de simplemente organizarse y a diferencia de otras especies que también lo hacen, produce la sociedad.



uno de esos caminos, al igual que los que han unido a Caracas con su puerto La Guaira, son el resultado material de intereses concretos claramente definidos y comprensibles. Conocerlos implica, en consecuencia, entender la dinámica propia que les caracteriza, así como las causas que permitieron su advenimiento, desarrollo, eficacia, desgaste y cese o colapso, a través de los procesos con los que se articularon para su existencia, pues, al fin y al cabo, son eficaces o se desgastan ya que están en relación con el propio contexto en el cual se encuentran funcionando.

Los caminos y rutas, por consiguiente, son tramas [Augé, 1996] conformadas materialmente que construyen relaciones concretas y simbólicas. Su función se despliega en relación con los contextos a los cuales articula y de allí que su eficacia, concreta y simbólica, opera mientras los intereses que le crearon y le necesitan permanezcan vigentes. El cese de esos intereses, o bien el desgaste de los modelos en los cuales esos intereses construyeron esas tramas, conduce al colapso de las funciones con las que operan los caminos o rutas. Las conexiones que se construyen a su alrededor y desde su operatividad, conviven con su proceso de existencia. Por ello no es una coincidencia que, en este caso, los caminos y recursos desplegados para conectar a Caracas con La Guaira hayan sido eficaces en la medida que los intereses que les construyeron permanecieron vigentes.

Asimismo, los intereses que se articulan para desplegar un recurso de comunicación entre lugares (es decir, caminos, senderos, carreteras, autopistas, redes ferroviarias), sólo pueden desplegarse eficientemente en tanto el modelo de poder⁴ y desarrollo existente se encuentre articulado material y simbólicamente con esos intereses. El cese, desplazamiento, transformación o colapso del modelo, lleva al fracaso de los intereses y al desgaste de los recursos desplegados desde sus funciones. En este sentido, las tramas relacionales surgidas en la plena funcionalidad de las articulaciones generadas en los modelos vigentes, sufren el desgaste de la misma manera que lo hacen todos los componentes de ese modelo.

En el caso de las vías de comunicación entre Caracas y La Guaira, puede ser claramente comprendida su articulación histórica con los procesos y modelos mencionados, observándose con ello que su eficiencia como caminos o su

4. El concepto de poder que se utiliza en este trabajo es entendido, ante todo, como una relación [Weber, 1964], la cual, por consiguiente, es siempre social: "El concepto de poder no puede aplicarse a las relaciones individuales." [Poulantzas, 1986, p. 126-127]. George Balandier [1969, p. 43-44] ha dicho, asimismo, que el poder posee la "capacidad de producir efectos", dentro de los cuales se encuentra el más determinante de todos: el de poner a la realidad en orden. En este sentido, puede coincidir con Michel Foucault [1977, p. 113] cuando afirma que "el poder está en todas partes", al tiempo que no se trata de una institución, sino de "una situación estratégica compleja en una sociedad dada". Es siguiendo a estos sentidos teóricos que en este trabajo se tratará a los conceptos derivados de poder (relaciones de poder, modelos de poder, estrategias de poder, o bien poder político). En esto último, cuando se haga mención a la política y sus relaciones, se hará desde lo planteado por Karl Mannheim, cuando aseguró que la política es "[...] sólo expresión superficial de las situaciones económicas y sociales que subyacen profundamente [...]" [Mannheim, 1966, p. 212].

eficacia como recursos contruidos por intereses y poderes, demostró su funcionalidad en la medida en que tal articulación preservó su vigencia. Esas tramas contruidas a lo largo de los múltiples procesos que conforman la dinámica histórica de la sociedad venezolana en general, han demostrado su alta dependencia de la eficiencia material de los recursos puestos en práctica por las relaciones de poder y los intereses. Luego de cinco siglos de transformaciones, ceses, despliegues y re-despliegues de poderes y contextos, aquellas tramas han sido y continúan siendo vulnerables a la dinámica concreta de la historia. Son, en consecuencia, tramas vulnerables en la misma proporción que lo son los referentes materiales que las sostienen tangiblemente.

Entre mulas y trenes

La historia de los caminos entre el valle caraqueño y su puerto en el Mar Caribe, debe comprenderse a partir de la apropiación de los espacios originada por el proceso de conquista y asentamiento español en el territorio hoy venezolano. El caso de la fundación de Caracas, hacia la segunda mitad del siglo XVI (en una fecha no documentada que ronda el año 1567), posee la particularidad de haberse erigido contruyendo y articulando dos lugares al mismo tiempo : la ciudad como tal y su puerto, La Guaira. Éste se encuentra ubicado fuera de ella, detrás de una serranía con alturas que se despliegan entre el Pico Occidental (2.478 metros) y el Pico Naiguatá (2.765 metros), cuya extensión hacia sus faldas norte y sur se prolonga entre 7,8 y 4,5 kilómetros, respectivamente, observándose con ello una topografía de altas y abruptas pendientes, las que determinan la formación de torrenteras, quebradas y valles intramontanos [Garner, 1959 ; González de Juana *et al.*, 1980; Cunill Grau, 1987], corresponsables de los permanentes movimientos de masa y aludes característicos de dicha topografía. Esta serranía, llamada del Ávila por la elevación homónima que se alza al norte y al frente de Caracas, se ve cortada hacia el oeste por un abra profunda generada por el cañón del río Tacagua, el cual se prolonga hasta el mar. Este abra ofrece un acceso natural hacia el litoral, el cual no será utilizado sino hasta el siglo XIX, pues la fundación de caminos propuesta por los españoles se apoyó en una lógica diferente para aprovecharse de la topografía de la región.

Ciertamente, fue característica de las estrategias españolas para contruir caminos al inicio del modelo colonial, el uso de senderos trasmontanos para sortear las elevaciones y generar comunicación terrestre entre pueblos y ciudades, aprovechando en la mayoría de los casos los caminos preexistentes y las picas (cornisas y atajos estrechos) ya surcados por los indígenas. En el caso del contacto establecido entre Caracas y su puerto, originalmente fueron aprovechadas varias picas que atravesaban la serranía de manera perpendicular a la elevación. Sin embargo, con la llegada de algunos piratas a principios del siglo XVII, estos caminos tuvieron que ser cerrados para mayor seguridad



FIGURA 2 : RUTA DEL CAMINO DE LOS ESPAÑOLES SEÑALADA SOBRE UN DETALLE DEL MAPA DE AGUSTÍN CRAME DE 1778, "PLANO-CROQUIS DE LA SERRANÍA ENTRE CARACAS Y LA COSTA DE LA GUAYRA"



Fuente: Amodio *et al.* [1997, p. 98-99]. Este sendero atravesó las elevaciones de la serranía de manera perpendicular.

[Amodio *et al.*, 1997], conservando sólo uno de ellos, el cual es conocido históricamente como “el camino de los españoles”, a pesar de que su nombre formal fuese el de Camino Real. Desde entonces y hasta el siglo XIX, ése fue el único acceso con el que contó Caracas para llegar al mar.

La operatividad de este camino sobrevivió tres siglos a todo tipo de amenazas naturales : lluvias normales y extraordinarias, sismos, deslizamientos y desprendimientos de rocas. Su uso fue óptimo de acuerdo a la demanda que el tráfico y la circulación de productos y personas exigieron hasta finales del siglo XVIII, cuando su desgaste se hizo evidente y la falta de recursos para su mantenimiento contribuyó al descenso de su efectividad. Se trataba de un camino usado por recuas de mulas y gente a pie, de acuerdo a lo señalado por Cruxent [1971], y no por carruajes o carretas, las cuales iniciarán sus funciones hacia el siglo XIX. Cuando en 1795 se comisionara al ingeniero Francisco Jacott para planificar una vía alternativa que sustituyera a la ya existente [Valery, 1978], sus

cálculos al respecto señalaron como el recorrido más conveniente una cornisa que bordeaba al cañón del Tacagua, suavizando con ello el trazado del camino, ensanchando la capacidad de circulación, alargando un poco más la marcha e iniciando con ello un razonamiento que aún sobrevive en la actualidad : el de evitar la perpendicularidad en las vías trasmontanas.

El plan de Jacott no se vería atendido sino hasta la primera mitad del siglo XIX, luego de que el proceso emancipador culminara y con ello la incipiente república buscara modernizar sus recursos para su inserción en el mercado libre. Hasta entonces, aquel camino que había sobrevivido a piratas, lluvias y terremotos, era la única vía de comunicación que le otorgaba a Caracas su salida al mar. En aquel contexto colonial, donde la circulación de riquezas se hallaba restringida a la satisfacción del comercio cerrado y controlado por la corona española, el camino de recuas resultaba suficiente. Las amenazas que enfrentó, asimismo, determinaron también esa condición excluyente de existencia que le permitió erigirse como único recurso de comunicación. Su presencia solitaria resultaba ser una medida de seguridad y su durabilidad operativa (tres siglos), soportó los embates de fenómenos naturales que azotaron su resistencia, provocando su cotidiana interrupción debido a las lesiones sufridas⁵. Hacia el cese del modelo colonial, este camino daba señales de desgastarse al mismo tiempo que colapsaba el dominio español⁶. De allí que el ingeniero Jacott propusiera una alternativa de mejores proporciones. Pero tal idea habría de esperar al surgimiento de otro modelo : el del liberalismo republicano.

El camino de mulas y gente de a pie no satisfacía las necesidades de un comercio fluido, con el que tanto soñaron los fundadores de la república. Hacia 1833, la Sociedad Económica de Amigos del País⁷ sentenciaba que “el comercio y el estado actual del mundo han creado nuevas necesidades y dado aumento y perfección a las relaciones y goces de la vida social” [1958, tomo II, p. 162], lo cual ameritaba “remover los obstáculos que el estado físico del país opone a sus cambios y comunicaciones”. En una afirmación reveladora, señalaban que:

5. El 11 de junio de 1641 sobrevino un terremoto destructor en Caracas y La Guaira que arruinó a ambas localidades. El camino que las unía también se vio afectado por el desprendimiento de rocas que tapió algunos lugares a lo largo de su trayecto, según documento hallado en el Archivo General de Indias, Audiencia de Santo Domingo, legajo 218, correspondiente a un informe elaborado por el entonces obispo Fray Mauro de Tovar dirigido al rey, fechado el 14 de agosto de 1641.

6. El Camino Real era una vía de tierra apisonada cuyas condiciones fueron más o menos las mismas (tendiendo al deterioro) durante tres siglos. Sin embargo, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se inició un proceso de refacción, logrando empedrarlo finalmente en el año 1803. Sobre el detalle técnico del empedrado, véase Amodio *et al.* [1997]. El empedrado del camino supuso un adelanto tecnológico al respecto, lo cual coincide (y no por casualidad) con el declive final de su eficiencia. Se trató de una medida que implicó un avance tecnológico, al tiempo que representó su desarticulación con los nuevos modelos de desarrollo en los que se estaba insertando la región.

7. Organismo creado y conformado por las élites de la sociedad criolla que gobernaba el país luego de consumada la emancipación. Su objeto era el de dinamizar las condiciones materiales de la nación recién fundada para favorecer sus intereses. En sus actividades rutinarias se discutía sobre



“sólo falta, pues, que se faciliten los medios de transporte ; pero repetimos con sentimiento que tantas ventajas serán casi ilusorias mientras nos contentemos con trillar las mismas veredas que los castellanos encontraron en tiempo de la conquista, y que conservaron en el espacio de tres siglos por los vicios del sistema colonial, o por el carácter apático y rutinario del gobierno español.” [p. 163].

Apostaban a ensanchar los senderos para hacerlos “susceptibles de carruajes” y confiaban en que se trataba de un recurso que no sólo beneficiaría al comercio, sino también a la sociedad en general, pues suponían que “el amor al trabajo” florecería con la creación de medios de comunicación óptimos:

“¿ Y esto cómo se alcanza ? [...] Facilitando los cambios, allanando los obstáculos, aproximando las distancias, y haciendo así que las ganancias sirvan para acrecentar los capitales productivos [...]. Todos estos medios indirectos de extinguir el ocio, y con él, la inmoralidad que engendra, se reducen a la necesidad de caminos, y no más que caminos.” [p. 164].

La importancia de los caminos “para el progreso y la civilización” [p. 166] que observaba la Sociedad Económica de Amigos del País, se hallaba en plena concordancia con el nuevo modelo de sociedad y de relaciones de poder que se desplegaba flamante en los albores de la vida republicana de la Venezuela decimonónica, el cual se alzó sobre el derrotado modelo colonial. En pleno proceso de transición de la colonia a la modernidad de las instituciones, el centenario sendero colonial fue golpeado una vez más por amenazas naturales cuando el 26 de marzo de 1812 otro terremoto provocaba graves derrumbes a lo largo de su recorrido, interrumpiendo una vez más la comunicación fluida entre ambos lugares⁸. Esta imagen recurrente empujaba los aires de cambios que más tarde llevaría a retomar el proyecto de Jacott, ahora en manos de la joven república.

La lectura de la realidad que la Sociedad Económica estaba expresando en sus manifiestos sobre los caminos, concuerda con los ideales de desarrollo que se aspiraban entonces, ahora con perfiles de modernidad y progreso como nortes alucinantes. En ese ambiente y con las necesidades claramente definidas hacia la viabilidad de los flujos comerciales, será hacia 1837 cuando se reinicien las obras para construir un camino carretero con el que pudiese comunicarse mejor la capital con su puerto [Alegrett, 1988]. Finalmente, en 1845 se inaugura la nueva vía, dando paso por primera vez a

(*Suite de la note n° 7*) el comercio, la agricultura, la incipiente industria, los productos, los precios, las formas de financiamiento compartido con las autoridades locales para el desarrollo de infraestructura y, también, sobre las condiciones de los caminos como medios de comunicación indispensables para el progreso. Véase al respecto, *Sociedad Económica de Amigos del País, memorias y estatutos, 1829-1839*, Banco Central de Venezuela, Caracas, 1958, 2 tomos, compilados por Pedro Grases y anteceditos por un estudio elaborado por Pascual Venegas Filardo.

8. Existe una variada documentación que da cuenta de esto y puede ser consultada en Grases *et al.* [1999], o en las referencias que a ello se hacen en Altez [2005].

los coches de tracción a caballo y con ello a la construcción de nuevos referentes al respecto⁹.

El surgimiento del camino carretero desplazó el uso del camino de los españoles¹⁰, y continuó con la falta de redundancia en las vías de comunicación entre Caracas y La Guaira, contando con ese recurso único hasta la llegada del ferrocarril en 1883, justo cuando se asomaban nuevas transformaciones en las relaciones de poder venezolanas. Dentro de las características que diferenciaban al nuevo camino de la antigua vereda, se destaca el hecho de que ya no se trataba de un sendero perpendicular a la elevación de la montaña, sino que era ésta una vía que se desplegaba rodeando a la seranía de manera longitudinal, precisamente, aprovechando la suavidad ofrecida por el cañón del Tacagua. Con ello se evitaban las fuertes pendientes del antiguo Camino Real y se inauguraba una lógica en la construcción de las vías entre el litoral y Caracas que prevalecerá hasta el presente. Este sentido en la construcción se realizó en correspondencia con las nuevas necesidades de tránsito y transporte, coherentes también con la necesaria transformación de las condiciones materiales a favor de los intereses del nuevo poder y del comercio libre. Y esa lógica será continuada, también, por el desarrollo del caballo de hierro.

En efecto, con la llegada a la silla presidencial de Antonio Guzmán Blanco (1870-1888), la inversión extranjera obtuvo la entrada al país de la mano del tren. La inauguración del Ferrocarril La Guaira a Caracas tuvo lugar el 24 de julio de 1883¹¹, coincidiendo con el centenario del natalicio del Libertador Simón Bolívar, como parte de un acto demagogo característico del caudillo liberal, y fue construido con capital inglés, pues no existían recursos nacionales para enfrentar un proyecto con aquellas características [Harwich, 1992]. Coincidió esta avanzada ferroviaria con la expansión del capitalismo hacia las periferias, como una de las etapas características de la industria de los trenes y de la penetración consecuente de regiones estratégicas para el modo de producción capitalista [Hurtado, 1990]. Y en este nuevo proceso de articulación de intereses, la sociedad venezolana se reacomodaba coherentemente.

Vale la pena señalar que con la presencia del tren se salvaba por vez primera la mencionada falta de redundancia en las vías de comunicación entre el litoral y la capital, contando a partir de entonces con dos alternativas para

9. El 24 de enero de 1846, el periódico caraqueño *El Patriota* anunciaba en su portada el servicio del coche "El Rayo", el cual salía desde La Guaira rumbo a Caracas, todos los días a las 5 y media de la mañana y de regreso desde Caracas a las 2 de la tarde, "sin ninguna demora". Aseguraba la "remuda de caballos" en el sector Guaracarumbo advirtiendo que se trataba del vehículo más cómodo que había. El precio era de 20 reales.

10. Aunque el camino fue olvidado, éste nunca desapareció, a pesar de que su mantenimiento cesara totalmente.

11. Este ferrocarril no fue el primero en Venezuela, pues en 1877 se inauguró el Ferrocarril Bolívar, que recorría de Tucacas a Barquisimeto. Véase Harwich [1988].



la circulación comercial y social. El país se estaba dirigiendo sobre rieles hacia su verdadero lugar dentro de las redes del capitalismo : la periferia. En estas condiciones objetivas se desplegaban los intereses nacionales sobre el desarrollo material de las conexiones comerciales, construyendo un escenario en torno a las vías de comunicación entre Caracas y La Guaira, donde empezaban a competir los rieles con los caminos, ganando ampliamente la primera batalla la locomoción. Hasta que la industria automotriz haga su aparición y la competencia cambie de características.

El sistema multimodal

El siglo XIX señaló el camino recorrido por la sociedad venezolana entre su lugar en la periferia del imperio español, hacia el lugar que ocuparía permanentemente en el orden capitalista del mundo : una misma periferia, pero con condiciones distintas. Ese recorrido, asimismo, fue cambiando sus estrategias de desplazamiento, al tiempo que se adaptaba a las demandas que su proceso de articulación con el mercado mundial capitalista le exigían. Resulta ilustrativo, al respecto, la forma a través de la cual se construyeron las nuevas vías de comunicación entre Caracas y La Guaira en medio de este proceso, puesto que (tal como ya se advirtió), operó otra lógica en su construcción, desplazando a la perspectiva perpendicular del Camino Real, tendiendo a un emplazamiento cada vez más longitudinal de los caminos. Esto puede observarse ya en la mencionada elaboración del camino carretero del siglo XIX, el cual apostó por rodear la serranía y bordear el cañón del Tacagua, dibujando una cornisa a gran altitud cuyo recorrido se iniciaba a nivel del mar en las afueras de la localidad litoralense de Maiquetía, complicando su tramo con cerradas curvas a la altura de la zona conocida como “el zigzag”, pasando por la localidad llamada Plan de

FIGURA 3 : PASO DE LA CARRETERA Y DEL FERROCARRIL POR LA “PEÑA DE MORA”



Fuente : *Revista Shell*, nº 3, 1952; Martin [1888]. En la imagen de la izquierda se observa el paso de la carretera construida por el gobierno de Juan Vicente Gómez por la escabrosa zona llamada “Peña de Mora”. En la imagen de la derecha se aprecia el paso del ferrocarril por la misma localidad, en una cota que recorre la misma cornisa varios metros más abajo.

Manzano y llegando a Catia, en el extremo oeste del valle de Caracas. La construcción de la vía férrea acompañó el despliegue de la carretera, incluso en “el zigzag”.

Cuando se inauguró el ferrocarril entre ambas localidades, la modernidad de los modelos de desarrollo parecía dar firmes pasos en el territorio venezolano. El modelo del comercio sobre carretas que estaba dando paso a la locomoción y a la ingeniería de punta, tendría que enfrentar, al igual que en los contextos del pasado, las mismas variables que cotidianamente interrumpieron el paso entre Caracas y su puerto. La pretensión de sustituir el vetusto recurso de la tracción de caballos por la tracción de la máquina hacía suponer que la batalla contra el tiempo y la naturaleza estaba ganada. Más velocidad y potencia representaban progreso, desarrollo y control sobre los elementos. Sin embargo, el nuevo modelo tecnológico tropezaría rápidamente con los fenómenos naturales, tal como en el pasado lo habría hecho la vereda de los castellanos, comenzando a demostrar que existe cierta relación entre la inversión de tecnología y la eficiencia y durabilidad de los caminos construidos.

Esto empezaba a hacerse manifiesto ya en 1892, cuando lluvias extraordinarias generaron severos movimientos de masa con desprendimientos de rocas, los cuales obstruyeron las vías férreas. Más tarde, cuando un nuevo terremoto se hizo sentir el 29 de octubre de 1900, los efectos sobre la naturaleza fueron los mismos: más desprendimientos de rocas sobre los rieles¹². El ferrocarril, al igual que el camino carretero, había sido construido atravesando laderas inestables, generando aún mayor inestabilidad con sus cortes longitudinales a la topografía¹³. La perpendicularidad del camino colonial guardaba una relación más armónica con la morfología montañosa, puesto que corría en el sentido de los deslizamientos, mitigando con ello sus impactos en la vía. Al atravesar el trazo, la probabilidad de que los movimientos de masa descansaran en las terrazas construidas para el transporte era, ciertamente, mayor. He allí que la vulnerabilidad de estas alternativas se hacía proporcionalmente creciente, en relación con el avance tecnológico que en ellas se invertía. Y esto se verá incrementado en el futuro con el resto de las alternativas.

Mientras tanto, el ferrocarril se alzaba como un victorioso símbolo de progreso y modernidad, de la mano del desplazamiento progresivo de las formas decimonónicas de poder, representadas en el caudillismo regional y espasmódico, para dar paso a la dominación centralista que se concentraba

12. Sobre los efectos de estos fenómenos, hay extractos de documentación citada y publicada en Altez [2005b].

13. La obra de ingeniería que significó la construcción del ferrocarril entre Caracas y La Guaira fue, sin duda alguna, de una envergadura impresionante. No sólo destaca el haber colocado en esa topografía una terraza mucho más sólida y compacta, siguiendo el trazo de la carretera, sino el hecho de que sobre esas características se armaron rieles para un “caballo de hierro”. Y ante esto debe tomarse en cuenta que los rieles de un tren no admiten un solo milímetro de desplazamiento.



históricamente en Caracas. El advenimiento del siglo XX marcó esa diferencia de manera sensible, cuando asumiera el mandato el general Juan Vicente Gómez, recio dictador quien se encargó de borrar los liderazgos regionales y unificar definitivamente al país en torno al ideal de nación¹⁴. Los trenes, asimismo, acompañaban con su paso certero estas transformaciones. No obstante, pronto algunos cambios determinantes en la geopolítica mundial afectarían también a las inversiones venezolanas en vías de comunicación.

En efecto, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, tiene lugar un proceso de transformación estructural en las relaciones construidas en torno al modo de producción capitalista, las cuales permitieron desplegar estrategias que han sido reconocidas históricamente como responsables de la transformación geopolítica del globo, prefigurando los resultados que el Nuevo Orden Mundial impondría medio siglo después. Neocolonialismo, imperialismo y petróleo se combinarían para cambiar las formas de dominación y de circulación de la riqueza. En medio de todo esto, el surgimiento de la industria automotriz jugaría un rol fundamental, puesto que para el desarrollo de los automóviles se combinan tres tipos de materia prima que marcarían los derroteros del nuevo expansionismo europeo : el petróleo, el caucho y el acero. Las dos primeras fueron determinantes, donde el ejemplo más dramático lo han representado las regiones del Medio Oriente y la península surasiática del Vietnam.

De la mano de la transformación estructural de las relaciones capitalistas, sobrevino la transformación infraestructural de los desarrollos urbanos y de la circulación comercial. Esto se vería ilustrado con el despliegue material de la industria automotriz, la cual necesitó combustible para su movilidad, caucho para su desplazamiento, asfalto para la vialidad y acero para sus carrocerías. En el caso de Venezuela, las exploraciones petroleras de principios de siglo XX auguraron el despliegue rápido y exitoso de la industria automotriz, en desmedro del caballo de hierro. El combustible y el asfalto se combinaron para escalar posiciones en la batalla con el ferrocarril. Sin embargo, es importante señalar que, al principio de ese siglo, los intentos de inserción del tránsito terrestre vehicular contaban con una perspectiva complementaria en relación al desarrollo de los trenes, pues la construcción de las “carreteras centrales” venezolanas tuvo como objetivo articular a las estaciones ferroviarias con el transporte automotor [Alegrett, 1988]. Esto permitió que por algunos años existiesen sistemas viales multimodales, tal como los disfrutaría, por ejemplo, la comunicación entre Caracas y La Guaira.

14. Interesantes análisis e investigaciones sobre los proyectos de nación y la avanzada de los ferrocarriles pueden observarse en los trabajos de Hurtado [1990], Harwich [1988; 1992] y Kogan [2004].

FIGURA 4 : DETALLE DEL PLANO DE RICARDO RAZZETTI EN 1929



No obstante, Kogan [2004] opina que entre carreteras y trenes existió una relación competitiva y no complementaria¹⁵. Esto resulta más acertado cuando se observan los resultados históricos de la convivencia entre ambas formas de transporte en Venezuela, donde finalmente las formas del capitalismo que se desplazan sobre caucho, combustible y asfalto, desplazaron definitivamente a las que lo han hecho sobre rieles. Pero mientras las nuevas estrategias de circulación y transporte hacían su acto de aparición en territorio venezolano, por algunas décadas sobrevivió una competitiva existencia compartida. En el caso de las vías entre la capital y su puerto, de la mano del presidente Gómez se lograron cambios importantes que permitieron contar con verdadero sistema multimodal.

El surgimiento de la fábrica de cements La Vega en el año 1907, contribuyó a esta estrategia de desarrollo impulsada por el gobierno de Gómez, ya que fue especialmente durante su mandato que se construyeron, repararon y consolidaron los sistemas de carreteras más importantes existentes en el país, y en ello tuvo un papel preponderante el uso del cemento. Por ejemplo, en el caso del camino carretero Caracas-La Guaira construido en 1845, se inician en 1912 las reparaciones de la vía, “modernizando” sus condiciones a partir de la utilización de cemento y mano de obra barata¹⁶, con lo cual se mejoran las posi-

15. Cuando Alegrètt [1988] señala que aquellas carreteras centrales sólo alcanzaron a conformar una red desarticulada que no cumplió la función que se propuso, quizás esté haciendo referencia a la misma percepción.

16. El gobierno de Juan Vicente Gómez aprovechaba la fuerza de trabajo de los presidiarios para este tipo de obras.



bilidades de paso de vehículos en su trayecto. En un artículo de *El Nuevo Diario*¹⁷ publicado a la sazón, se señalaba también que con “rellenos de consideración” en los tramos más estrechos y pendientes, se construían “fuertes muros de sostenimiento, calzadas en la parte del talud y amplias alcantarillas que ponen el piso a prueba de toda contingencia por causa de las lluvias y de los frecuentes derrumbes de piedras en un terreno tan accidentado como el que recorre este camino”. Pero esta iniciativa no se limitó solamente a reparar la vieja carretera, pues le construyó una variante que trazó una nueva terraza desde Plan de Manzano hasta “el zigzag” (ver figura 4). Con ello, en este contexto tan especial de inicios del siglo XX, los caminos entre Caracas y el litoral central disfrutaban de un verdadero sistema multimodal, dejando atrás la falta de redundancia en las vías de comunicación.

La eficiencia de esta estrategia, acorde con el modelo de desarrollo impuesto en el momento y en correspondencia con los crecientes intereses fijados en la explotación petrolera, contribuiría tendenciosamente al desgaste del modelo que se desplegaba sobre rieles, y haría de la verdadera competencia entre el transporte automotor y la locomoción¹⁸ una batalla que se libraría en los primeros cincuenta años del siglo XX, hasta que nuevas relaciones de poder tomaran la palabra y las acciones.

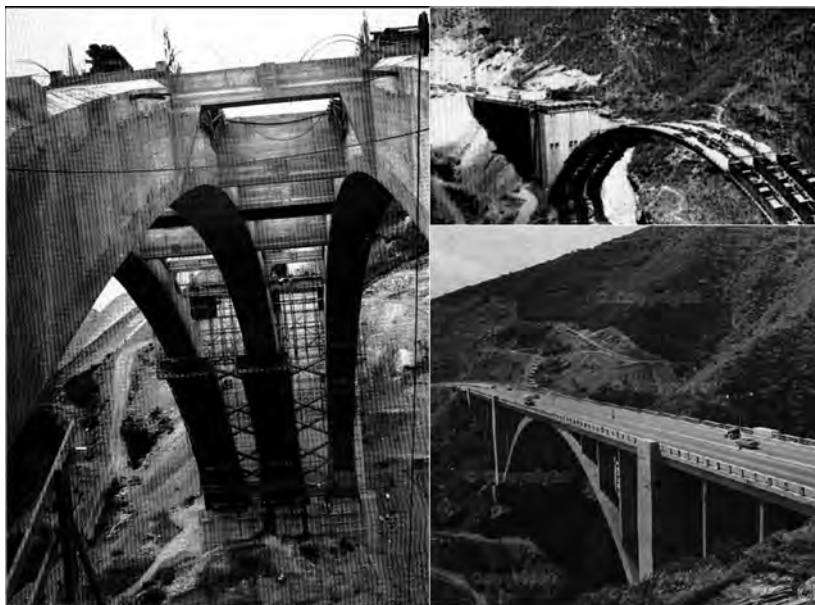
El retorno a la falta de redundancia

Los años de gracia para el sistema multimodal entre Caracas y La Guaira llegarían a su fin de la mano del embate de las mismas amenazas naturales que han acompañado históricamente a la región. Y esto no podría ser de otra manera, pues a pesar de que la naturaleza pueda ser intervenida por la cultura, los fenómenos no pueden ser detenidos o desplazados de su lugar de actuación. La relación inadvertida con esta circunstancia es responsable de buena parte de la vulnerabilidad a la que se exponen sociedades y comunidades en todo el

17. El periódico caraqueño *El Nuevo Diario* reseñaba en un artículo del 16 de mayo de 1914 (“Carretera de Caracas-La Guaira”, p. 4), la “perfecta conservación de la macadamización” de la carretera que se estaba reparando para esa fecha. La técnica utilizada para la nivelación de carreteras hasta la aparición del cemento y posteriormente del asfalto, fue la popularmente conocida como “macadam”, de allí que se hiciera mención a la “macadamización” de las vías. Esta técnica, que ciertamente proviene de un ingeniero escocés de nombre John Loudon Mac Adam [*Enciclopedia Universal Ilustrada*, tomo 31, p. 1128], consiste en hacer un pavimento de piedra machacada, que se aplicaba sobre la superficie y se aplanaba con un rodillo. Más tarde, y dependiendo de los recursos que se poseyeran, se aplicó el asfalto o el cemento sobre esta misma técnica.

18. Es interesante acotar que esta competencia posee aspectos que deben ser tomados en cuenta. Algunos detalles: los trenes resultan más eficientes para transportar grandes volúmenes de carga homogénea, entre un punto de origen único a un destino también único, mientras que el transporte automotor se ofrece más eficiente en el acopio de productos de origen disperso, o a la inversa, es decir, desde un punto central puede distribuir su transporte hacia vías dispersas [Kogan, 2004]. En conclusión, los vehículos poseen mayor versatilidad y movilidad, contra la uniformidad del transporte ferroviario. Mientras que los trenes poseen una mayor capacidad de carga como su mayor ventaja, ante las limitaciones que frente a ello presenta el transporte automotor.

FIGURA 5 : EL VIADUCTO 1



Composición donde se aprecian diferentes momentos de la construcción del viaducto 1 y su estado recién inaugurado. Fuentes de las imágenes: *Revista Shell*, n° 3, 1952, para las etapas de su construcción, y *Archivo Fotográfico Shell* del Centro de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello para la imagen del puente ya culminado.

mundo. En el caso de las vías de comunicación a las que se hace referencia, tanto el tren como la carretera y sus variantes, experimentaron severos daños con las lluvias extraordinarias de 1938, 1948 y 1951. Estas dos últimas resultaron determinantes para el desgaste definitivo de aquellos recursos viales y de transporte.

Las crisis generadas por la afectación sufrida en las vías de comunicación a manos de fenómenos naturales, puede sumarse a las que todas las alternativas antecesoras en los caminos entre Caracas y La Guaira habrían soportado con anterioridad. Desde los sismos de 1641, 1812 y 1900, pasando por las lluvias de finales del siglo XVIII (1780, 1781 y 1798), las de finales de siglo XIX (1892), y las ahora mencionadas de la primera mitad de siglo XX¹⁹, se aprecia una recurrencia cotidiana que ha obligado a una severa convivencia de la región con estos fenómenos. De allí que es necesario comprender que las decisiones que históricamente se han tomado en relación a estos caminos, carreteras o vías férreas, guardan una relación indivisible con la intervención y el comportamiento del medio ambiente. Aquí resulta pertinente recordar lo que Wolf [1987, p. 97] cita de Marx : “El hombre enfrenta el material de la

19. Un estudio del impacto de todos estos eventos en el litoral central se encuentra en Altez [2005b].



naturaleza como una de sus propias fuerzas [...]. Al cambiarla, cambia al mismo tiempo su propia naturaleza.”²⁰

La eficacia de estos sistemas de comunicación se estaba poniendo a prueba junto con el modelo que sostenía las relaciones de poder fundadas desde los procesos que destronaron a los caudillos decimonónicos. Durante los años que van desde el gobierno de Gómez hasta 1948, aproximadamente, tuvo lugar un proceso de “decadencia de los sectores sociales tradicionales”, junto al “deterioro de las relaciones de peonaje, la descomposición del sector agroexportador y latifundista de la clase dominante”, y el surgimiento de un “proletariado incipiente” y una “burguesía que se fortaleció y expandió” [Castillo, 2003, p. 15-16]. Mientras tanto, en la batalla entre la locomoción y la combinación combustible-caucho-acero estaba perdiendo el primero de los contendientes nombrados, pues, en efecto, “el ferrocarril no pudo competir con la llegada del camión y el automóvil” [Harwich, 1988, p. 174]. Desde 1931, según este autor, el Ferrocarril La Guaira a Caracas había dejado de pagar dividendos a sus accionistas. Estaba condenado.

Hacia 1948²¹, precisamente, se daba inicio a “los años del buldózer”, parafraseando el título del libro de Castillo [2003], cuando un nuevo giro en las relaciones de poder permite el ascenso de un nuevo bloque comandado por militares, entre los que destacaría el general Marcos Pérez Jiménez. Con este hombre en el gobierno se desplegó un plan que fue llamado estratégicamente como Nuevo Ideal Nacional, donde se pretendía consolidar finalmente a la república a partir de elementos cohesionadores, como por ejemplo resultaba serlo el desarrollo de la construcción :

“Para que Venezuela pueda cumplir su destino histórico en función del Ideal Nacional, tenemos que fijar como grandes objetivos, el mejoramiento moral, intelectual y material de sus habitantes y la transformación nacional del medio físico.”²²

Fue en medio de este proceso de “transformación nacional del medio físico” que la eficacia del ferrocarril empezaría a decaer dando paso al transporte automotor. Señala Harwich [1988] que para 1950 el gobierno había comprado el ferrocarril Caracas-La Guaira, dando inicio al proceso de intervención del Estado en el desarrollo de las vías férreas, y con ello al estancamiento definitivo

20. Continúa Wolf con sus propias palabras: “esta relación activa de la especie con la naturaleza, aunque fincada en características biológicas, se pone en práctica por medios exosomáticos de tecnología, organización e ideas.”

21. Como una clara ilustración de la relación ineludible entre la toma decisiones vinculadas a la variable determinante que significa la dinámica de la naturaleza, debe destacarse que en ese mismo año de lluvias extraordinarias, y ante los colapsos de la carretera, su variante y el ferrocarril, el gobierno nacional había decretado la construcción de la Autopista Caracas-La Guaira y dos años más tarde, en 1950, se inician formalmente los trabajos que culminarían con la inauguración de la misma en 1953.

22. Alocución de Pérez Jiménez en el Ministerio de la Defensa el 4 de julio de 1951, citada por Castillo [2003, p. 37]. El subrayado pertenece a este trabajo.

de los ferrocarriles. Y no es una casualidad que sea bajo el régimen dictatorial de Pérez Jiménez que se construyese “la autopista más costosa del mundo”²³, y con ella un trío majestuoso de viaductos que hacían suponer que se trataba de la obra de ingeniería más importante de las Américas, luego del canal de Panamá²⁴. La propuesta de la autopista era excluyente : sólo 17 kilómetros entre la capital y el aeropuerto, nada más que 36 curvas y apenas 15 minutos de duración para el recorrido. Aseguraba, además, que las curvas poseían un radio mínimo de 300 metros, frente a los 15 metros que ofrecía la carretera, y que el grado máximo de pendientes sería del 6 % en general, mientras que en los dos túneles alcanzaría sólo el 3 %²⁵. La modernidad, como siempre, resultaba aplastante.

Acusada de “tortuosa”, la carretera con sus variantes fue desplazada. El tren sucumbió también frente a los camiones y autobuses, y finalmente la comunicación entre Caracas y La Guaira volvió a un sistema monomodal de falta de redundancia en los caminos, esta vez por el desuso de las alternativas y la contundencia del “progreso”. La huella constructora de Pérez Jiménez, evidente aún en casi toda Venezuela, fue sepultada por la ideología del proyecto democrático que le derrocó el 23 de enero de 1958, y su herencia no se correspondió con los intereses de las nuevas relaciones de poder fundadas por el modelo liberal burgués bipartidista, nacido del colapso de las pretensiones nacionalistas excluyentes del dictador de mitad de siglo.

La noción de “desarrollo, progreso y bienestar de Pérez Jiménez, se mide por kilómetros construidos, toneladas de cemento y cabillas utilizadas” [Castillo, 2003, p. 203], y minimiza con ello el resto de los aspectos de la sociedad que pretendía integrar a su ideal nacional. Mientras tanto, lo que de ello recoge el nuevo poder que se alzaba victorioso, es sólo una infraestructura que no posee diálogo

23. Así titulaba la conocida revista *Mecánica Popular* (noviembre de 1952), un artículo de seis páginas (p. 22-24, 144-145 y 148) dedicado a la construcción de la autopista Caracas-La Guaira.

24. El viaducto 1, ubicado en el kilómetro 4 de la autopista, destacaba como la obra más prominente de aquel proyecto. Contaba con 302 metros de longitud, un arco central de 152 metros de luz y una elevación de 70 metros. *Mecánica Popular* diría que “es el puente de arco de concreto más grande del Hemisferio Occidental y el quinto en tamaño en el mundo entero”. Los tres viaductos se construyeron con concreto precomprimido, y la obra estuvo a cargo de la compañía francesa Campeon Bernard, bajo la dirección de Robert Shama. Interesante resulta el dato de que el ingeniero Eugene Freyssinet, inventor del concreto precomprimido, siendo consultor de dicha compañía, diseñó un método enteramente nuevo para la construcción del viaducto 1, debido a su altura y gran longitud, que consistía en ir vaciando el concreto a medida que se iban levantando las cimbras de los arcos. Existen imágenes espectaculares en la citada *Mecánica Popular*, la *Revista Shell* (nº 3, junio de 1952) y en varios números de la *Revista del Colegio de Ingenieros* de la época, donde la empresa Campeon Bernard hacía anuncios de páginas completas, colocando al viaducto 1 como ejemplo de sus obras.

25. Es un consenso en la ingeniería vial que las autopistas deben tener pendientes menores al 4 % para que resulten eficaces en su cometido. Mientras tanto, las vías comunes pueden contar hasta con un 10 %. La carretera ofrecía un promedio del 15 %. El 6 % que presenta la autopista implica que su recorrido de 17 kilómetros entre el nivel del mar y la altura del valle de Caracas se hace con un esfuerzo muy costoso para los vehículos automotores.



con los códigos cambiantes de la democracia. Las nuevas tramas que se van a construir en torno a las vías de comunicación entre la capital y el litoral central, se verán ahora determinadas por los medios de transporte, y no por la vía en sí, con lo cual la autopista como referente material sólo será un fantasma casi inadvertido, una mole que representa otros códigos y otras formas de interpretar a la realidad que ya no hallan lugar en el nuevo modelo de desarrollo.

Crónica de un colapso anunciado

El perfil del modelo militar-nacionalista que desplegó Pérez Jiménez se vio materializado por imponentes construcciones, en donde destacan las vías de comunicación, precisamente, por su extensión, contundencia y por representar la modernización de lo urbano para una ciudad como Caracas que se asomaba destellante en la América Latina de mitad de siglo XX. El desgaste de ese modelo dio paso a nuevas formas de relaciones de poder, fundadas en estrategias que pronto se convirtieron en estructura de la sociedad venezolana: el clientelismo, el bipartidismo excluyente y la corrupción. Sobre esta última característica, Coronil [2005, p. 88], dice que en América Latina se “ha convertido en un fenómeno endémicamente estructural y culturalmente aceptado como parte de la cotidiana normalidad”. En complemento y en especial relación a Venezuela, puede agregarse que en una sociedad donde la corrupción ha sido parte de lo cotidiano, el clientelismo ha contado con dos resultados histórico-sociales claramente observables: mientras por un lado (desde el poder político del Estado) exhibe su función práctica en el manejo ideológico de la realidad, por el otro (en el mundo de las representaciones sociales) se asienta como una forma de interpretar a esa realidad. Esto construye una relación de dependencia entre sociedad y Estado, donde la sensación alucinante de que se está participando en el poder se muestra como un elemento estructurante del mundo de las representaciones.

Con la cuarta república que nació de las ruinas de la dictadura perezjimenista, lo urbano se desarrolló hacia la marginalidad, mientras la pobreza se convirtió en una característica más de lo cotidiano, profundizada por el crecimiento económico de la burguesía y la nueva clase política, las cuales vivieron cómodamente de esas estrategias antes mencionadas. Para fines de siglo XX, el resultado de esa desproporción entre el poder y el resto de la sociedad construyó un escenario con un 80 % de pobreza, donde las inversiones privadas y del Estado se concentraron en el desarrollo del capital especulativo y del poder político, desatendiendo el crecimiento económico social y tornando la mirada hacia un tipo de urbanismo que olvidó aquellos proyectos megalíticos de Pérez Jiménez. Entre esos “olvidos” (expresiones de la voluntad afirmada de sustituir a los modelos del pasado), se hallaba la Autopista Caracas-La Guaira.

La vida de la autopista en medio de un modelo que no le reconoció como referente material, pues no fue su obra, también se vio afectada por los fenó-

menos naturales de siempre, además del impacto lento pero igualmente destructor que significó su pésimo mantenimiento. Con el sismo de 1967, un inmenso deslizamiento situado al inicio del tramo que parte desde Caracas se vio reactivado por el fuerte temblor, descubriendo que su movimiento estaba afectando severamente esa zona de la autopista. Las obras acometidas para el caso fueron simplemente un maquillaje superficial. Cuando, a principios de la década de los ochenta, fuertes lluvias reactivaran ese deslizamiento, una concesión a una empresa constructora indicó la necesidad de un muro de contención que tardó seis años en culminarse y que acabó por ser un maquillaje más en el caso²⁶. Con estas lluvias se observó por primera vez (al menos públicamente), que el estribo sur del viaducto 1 (el que se apoyaba en el tramo que conectaba a Caracas con el puente), estaba siendo empujado por otro deslizamiento. Esta fue una alarma atendida espasmódicamente, al igual que todo el mantenimiento de la colosal autopista.

El deslizamiento en cuestión que afectaba al viaducto, estaba siendo acelerado por la presencia de asentamientos marginales, surgidos en pleno apogeo de la democracia burguesa. Ciertamente, con el cambio de modelo de desar-

FIGURA 6 : EL VIADUCTO CAIDO



A la izquierda se aprecian las ruinas de la otrora maravilla de la ingeniería latinoamericana, en una toma de estribo a estribo. En la panorámica de la derecha se observa al viaducto caído, donde la flecha señala al barrio Nueva Esparta, ya desalojado y en ruinas también, asentado sobre el deslizamiento geológico que acabó por desplazar la estructura del puente. (Fotografías cortesía de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas).

26. La misma empresa tenía como deber el mantenimiento del asfaltado del tramo desde la entrada a la autopista en Caracas y el viaducto 1, y su labor al respecto fue una prueba irrefutable de corrupción públicamente permitida, pues mientras desmontaba el asfalto para aparentemente sustituirle, le volvía a derretir *in situ* y lo aplicaba nuevamente. Esta práctica, a la vista de todos, fue repetida por años, generando con ello un fenómeno químico en el propio asfalto (por tanto abuso de su material), con el cual se formó una película plástica que se desprendía de la capa asfáltica, a lo que se llamó popularmente como “mancha negra”. Esta mancha sólo pudo desaparecer cuando finalmente se sustituyó de manera definitiva ese asfalto.



rollo y poder experimentado desde 1958 en adelante, el crecimiento de la marginalidad urbana (representado por las viviendas precarias e informales) fue notorio y abrumador. Buena parte de ese crecimiento se situó en las laderas inestables de las elevaciones que rodean al valle de Caracas, como un recurso popular de ocupación del espacio frente a la falta de soluciones sobre el problema de la vivienda y del poder adquisitivo para la misma que se había originado en este proceso político. Cuando las faldas de esas laderas ya casi no prestaban espacios para el indetenible crecimiento de la marginalidad urbana, estas construcciones precarias avanzaron hacia las montañas que se extienden a las afueras de Caracas, colmando con ello casi toda la serranía circundante.

Es significativo que la presencia, la vida y el destino de la autopista se hayan visto acompañados de este proceso de crecimiento y profundización de la marginalidad, pues la reinstauración del sistema monomodal de las vías de comunicación entre Caracas y La Guaira contribuyó otorgando espacios para ello. En efecto, la desaparición del ferrocarril (desde comienzos de los años sesenta, justo cuando se inicia la cuarta república), permitió que la avanzada de viviendas informales aprovechara la firme terraza construida a finales del siglo XIX como una base para el desarrollo de ranchos de ladrillos y techos de zinc. Así, la carretera, su variante y la vía del tren, se vieron sepultados bajo el signo característico de la pobreza en la democracia burguesa: los ranchos, los cuales harían desaparecer al antiguo referente material del desarrollo capitalista de principios de siglo XX y su noción de progreso sobre rieles. Más tarde, esa misma pobreza contribuiría determinantemente al colapso del viaducto 1, cuando se articulara con fenómenos y condiciones naturales para ello.

La falta de mantenimiento de la autopista fue un indicador claro de la desatención y la inadvertencia sobre el significado de un sistema monomodal de vías de comunicación. Esa falta de redundancia se vio profundizada en la forma en la que se olvidaron las alternativas y en la confianza en el modelo megalítico de un pasado también sepultado. Mientras el Estado evidenció desidia frente al mantenimiento de la autopista, sólo se hizo una concesión privada para ello²⁷, la cual resultó igual de ineficiente. En 1987 se detectó una deformación de 17 centímetros en la estructura del viaducto y una nueva alarma tuvo lugar, dando la oportunidad a la democracia para que demostrara su pasmosa forma de atender los problemas estructurales, pues su velocidad para ejecutar las decisiones en este caso fue lo suficientemente lenta como para dejar actuar por sí mismos a todos los factores que se combinaron para derrumbar al viaducto²⁸.

27. En los últimos años de la década de los noventa se concedió el peaje de la autopista a la empresa mexicana Maxipistas, a cambio del mantenimiento de la misma. En 1999 se le retiró la concesión por el incumplimiento de ese mantenimiento.

28. "En 1993 se inició un proyecto de refuerzo, apuntalamiento y estabilización del viaducto 1 elaborado por el ingeniero estructural Rosendo Camargo. Las obras incluyeron apuntalamiento de la estructura en el tramo comprendido entre el estribo Caracas y la pilastra situada al sur del arco.

Las lluvias extraordinarias de diciembre de 1999, coadyuvantes en el desastre del estado Vargas, marcaron algunos aspectos que daban cuenta de las características de un corto pero vertiginoso proceso histórico de ocupación territorial y crecimiento demográfico, en una zona que no permite más espacio para el desarrollo urbano que las terrazas aluvionales conformadas por eventos similares a lo largo del proceso geológico de la región. Con esas mismas lluvias, el deslizamiento que empujaba al viaducto 1 se vio severamente acelerado. Sobre ese deslizamiento se había formado pocas décadas antes el barrio Nueva Esparta, el cual, junto a los otros que allí se ubican, permeabiliza la ladera con la filtración permanente de aguas servidas y cloacas, para fragilizar aún más la masa que se estaba moviendo bajo sus pies. Luego de esas lluvias de 1999, el magnífico puente ya se observaba claramente deformado, levantando sobre su cota un arco de casi 60 centímetros. Cuando en febrero de 2005 tuvieron lugar nuevas lluvias extraordinarias, la deformación alcanzó los 70 centímetros y ya se observaban las fracturas en sus bases.

Un súbito movimiento en la madrugada del 5 de enero de 2006 hizo que se derrumbaran decenas de viviendas del barrio Nueva Esparta y que la pista del viaducto se fracturara definitivamente. Se ordenó la prohibición del paso y el desalojo del barrio; sin embargo, el resto de los barrios ubicados en el mismo deslizamiento no fueron desalojados... Con el cierre del puente, la carretera vieja revivió su uso, demostrando la necesidad de contar con vías alternativas frente a las contingencias cotidianas que retornan eventualmente cuando las variables de siempre vuelven a articularse. También fue evidente que estas alternativas con las que se contaba, formaban parte de un pasado enterrado, ya ideológica o alucinatoriamente, ya materialmente, toda vez que las viviendas marginales le habían sepultado, incluso al desarrollarse sobre la propia vía. La alternativa que se desplegó al respecto fue una vía paralela construida de emergencia ante la inminente caída del viaducto, la cual es una cornisa estrecha de sólo dos canales que se inicia en el estribo La Guaira del puente, y desemboca en el tramo de la autopista que se halla unos 200 metros más allá del viaducto. Son 2 kilómetros de vía, al estilo de la olvidada carretera decimonónica.

El domingo 19 de marzo de 2006, pasadas las 11 de la mañana, el viaducto 1 se desplomó, colapsando la estructura y dejando como testigo silente y derrotado de su presencia apenas un pedazo del estribo Caracas, el cual tuvo que ser dinamitado hasta en dos oportunidades para derrumbarle definitivamente. La crisis generada por el colapso de la otrora maravilla de la ingeniería, generó una situación dramática para la economía litoralense, e incluso para la eco-

(Suite note n° 28) Dichos trabajos estuvieron prácticamente paralizados entre 1998 y finales del 1999, debido a la falta de presupuesto y cambio de gobierno. Entre 2000 y 2004 se le colocaron cerchas y unos patines para reforzar el puente y se construyeron nuevas pilotes que daban como un hecho que duraría 30 años más. A final del 2004 y principio del 2005 comienza la agonía del viaducto, por el aumento acelerado de los movimientos de la masa de tierra que terminó con la decisión de su cierre definitivo." (Nota de *El Universal* del 5 de febrero de 2006). Tres licitaciones se otorgaron (1988, 1993 y 1995) para reparar el viaducto y ninguna de ellas tuvo lugar.



nomía nacional también²⁹. Al mismo tiempo, esta crisis volvió a evidenciar las condiciones conflictivas del proceso de transformación política, social e institucional que vive el país desde que se instauró la quinta república, y el desgaste de las relaciones de poder fundadas en la democracia bipartidista. El colapso del viaducto coincidió con el colapso del modelo de la cuarta república, pues las condiciones materiales de su deterioro son su entera responsabilidad. El fantasma del pérezjimenismo, sólo prolongado en la vida de sus vencedores, ya no poseía ningún tipo de referente ni eficacia en un modelo que se levantó promulgando las ruinas de la burguesía liberal, y que sólo parece poseer sentido en tanto se apoya en esas ruinas.

Fue ilustrativo el presidente Chávez cuando dijo que el colapso del viaducto significaba el haber “enterrado a la cuarta república”; sin embargo, admitió que eso “no significa que hemos enterrado definitivamente los vicios de la cuarta república y las amenazas que se siguen cerniendo sobre nosotros”³⁰. Igualmente significativas fueron las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Baltasar Porras, quien dijo respecto a la situación que se trataba de un “patético ejemplo de una cultura de imprevisión que hay en el país”, y que para mejorar esto había que crear “la educación para una cultura del trabajo, de la eficiencia y de la búsqueda racional de soluciones que mejoren la calidad de vida de todos, como un campo en que debemos empeñarnos personal y comunitariamente”³¹. Es sorprendente la coincidencia de estas declaraciones con el sentido del discurso de la Sociedad Económica de Amigos del País de principios del siglo XIX. Entre esta episcopal idea de una “cultura para el trabajo” y aquella decimonónica de “extinguir el ocio”, parecen repetirse las mismas interpretaciones sobre la misma sociedad, a pesar de las distancias temporales y contextuales, pues se asoma una cierta continuidad en la mirada que los sectores más conservadores han desplegado como su reflejo de diferencia social.

La destrucción de los referentes del pasado derrotado por nuevos modelos de poder se torna característica en procesos políticos e ideológicos que buscan construir sus propias bases para la dominación y la reproducción del nuevo orden que han levantado, promoviéndole, en consecuencia, como el orden legítimo, justo y necesario, tal como si se tratase de una naturaleza

29. Según una nota en el periódico *El Universal* (11 de febrero de 2006), los restaurantes del litoral experimentaron pérdidas entre el 50 % y el 60 %, el sector turismo las sufrió hasta el 70 % y el comercio informal asentado en las ventas de los balnearios se vio afectado en un 90 %. Asimismo, los costos del transporte pesado se incrementaron en un 40 %, inflando parcialmente el precio de algunos productos. Por otro lado, el presidente del Banco Central de Venezuela declaró que el PIB se vio impactado en un 1,5 % por el cierre del viaducto (reseñado en *El Universal* del 20 de enero de 2006). Hasta la vida escolar se vio sacudida por esta situación, ya que unas 200.000 personas (entre estudiantes y trabajadores del sector), vieron comprometida su cotidianidad al respecto (cálculos también publicados en *El Universal* el 12 de enero).

30. Declaraciones publicadas en *El Universal* del 13 de enero de 2006.

31. Publicado en *El Universal* del 7 de enero de 2006.

inevitable³². Esto es así, y con mayor contundencia, toda vez que se trata de una revolución, y las revoluciones (que no son otra cosa que un proyecto político de clase) operan destruyendo el modelo al que se enfrentan, puesto que la clase que las proyecta no forma parte de aquella estructura de poder que les ha excluido. Para permanecer en el poder debe, por consiguiente, destruir las estructuras del poder anterior, y crear una forma institucional en la que sí se vean reflejados sus intereses. De lo contrario, no puede ostentar el título de revolución.

Allí, en las ruinas del viaducto 1, junto a las desdibujadas huellas del Nuevo Ideal Nacional de mitad de siglo XX, descansa también el modelo liberal burgués del excluyente bipartidismo cuarto-republicano. Y sobre todo este escenario de abatimientos históricos, se levanta la propuesta de unas nuevas relaciones de poder, de la mano de nuevos procesos de ideologización y convocatoria, pero apoyándose en las mismas estructuras arruinadas de su predecesor : el clientelismo y la corrupción, pues esas son sus raíces. Aun así, cuenta con un apoyo masivo y “encantado”, siguiendo a Coronill :

“[...] plagada de frustraciones, fragmentada por la pobreza y atravesada por profundas heterogeneidades sociales y culturales, el espectral desencanto con el capitalismo se transfigura cada vez con mayor frecuencia en el viejo fantasma del socialismo”. [2005, p. 89].

Breves conclusiones

Las conexiones históricamente construidas en torno a las vías de comunicación entre Caracas y La Guaira han estado evidentemente determinadas por los intereses que cada contexto ha logrado cristalizar en la práctica. No han sido la ilustración de “progresos” coherentemente desplegados con los niveles de desarrollo de los tiempos, sino el resultado material de esos intereses y su relación con otros procesos históricos y económicos con los que se articula y convive. En este sentido, esos resultados materiales transformados en vías de comunicación, han sido eficientes mientras esos intereses se mantienen contextual, material y simbólicamente eficaces. Cuando estos intereses ya no hallan reflejo en su contexto, otros intereses advienen y con ellos otros referentes y recursos se despliegan en correspondencia. Esto ha sido evidente en el proceso histórico en el que se han desenvuelto los caminos, rutas y estrategias de comunicación entre la capital de Venezuela y su zona portuaria y aeroportuaria.

32. “Si un grupo tiene una relación dominante con respecto a otros grupos, las ideologías tienen la doble función de mantener o confirmar el statu quo y, al mismo tiempo, brindar el marco cognitivo básico para los argumentos que se utilizan con el objeto de persuadir a los propios miembros del grupo, como a otros, de que esta situación es ‘justa’, ‘natural’, dada por Dios o legitimada de alguna otra manera.” [Teun Van Dijk, 1998, p. 208]. En ese esfuerzo por naturalizar su lugar y su proceso en el poder, el Estado venezolano (en tanto revolución manifiesta) ha construido su propio relato sobre el pasado y desplegado su propia apropiación ideológica del mismo, reconstituyendo los sentidos de la historia en relación con sus necesidades políticas. “Lo que está en juego no es el control del aparato productivo, sino la capacidad de conferirle un sentido particular, de construir un relato acerca del mundo y naturalizarlo.” [Bourdieu, 1990, p. 38].



El colapso de esos modelos de poder y sus relaciones no sólo ha podido advertirse en cuanto se desgastan política, social y económicamente, sino que también esto puede observarse a través del colapso de sus referentes materiales, sobre todo en una sociedad como la venezolana, en donde el pasado es sólo un reflejo alucinatorio con conveniencias ideológicas de turno. Las huellas materiales de ese pasado sufren, igualmente, de un olvido tendenciosamente construido desde las relaciones de poder, de manera que su eficiencia material y su eficacia simbólica (en tanto referentes), ha dependido exclusivamente del uso ideológico del pasado y del reflejo concreto que hallen en cada contexto al que sobrevivan.

Las alternativas que se ponen en práctica para generar medios de comunicación y transporte han estado históricamente determinadas y tecnológicamente condicionadas por los recursos existentes. En este sentido, se ha comprobado que la tecnología utilizada en las vías de comunicación entre Caracas y La Guaira ha contado con una relación inversamente proporcional a su tiempo de vida útil. Esto es, cuanto más tecnología, menor es la vida útil del recurso. La relación es clara : el Camino Real, con la más escasa inversión tecnológica, aún permanece allí luego de más de cuatrocientos años de construcción, aunque en desuso ; el camino carretero del siglo XIX, convertido luego en carretera con variantes a la vuelta de haber invertido un poco más de tecnología en su construcción, cuenta con doscientos años de vida útil y cincuenta de deterioro ; el ferrocarril, de mayor tecnología y despliegue de construcción, contó con apenas ochenta años; la autopista “más costosa del mundo” sólo pudo resistir medio siglo. No obstante, ninguna de estas alternativas se desgasta, desaparece o colapsa por su tecnología, sino por su falta de reflejo y eficacia con los contextos a los que deben enfrentar luego de que desaparecen las relaciones de poder que les construyeron. En relación a la tecnología, una última relación de proporciones debe destacarse : a mayor tecnología, más dependiente de las riquezas del contexto se vuelve la obra en cuestión.

En el colapso o desgaste de todas estas alternativas de comunicación, han jugado un papel determinante las variables naturales, las cuales, convertidas en una desatendida cotidianidad, han contribuido a demostrar históricamente que no se debe a su dinámica el resultado fatal de estas vías, rutas o caminos, sino a la combinación de esa dinámica con el proceso social e histórico que construye condiciones vulnerables de vida. Sin un contexto vulnerable, los fenómenos naturales no resultan una amenaza.

Actualmente, sobre las ruinas del modelo democrático liberal burgués, se levanta un nuevo modelo de relaciones de poder e ideologización que se refuerza políticamente a partir de un ciclo permanente de enfrentamientos con los restos del modelo anterior. A esas ruinas políticas deben agregarse las ruinas del viaducto 1, al lado de las cuales, y casi como un mecanismo de repetición, el

nuevo poder levanta su propia vía de comunicación con el litoral central. Se trata de un próximo viaducto que tendrá 900 metros de largo con una altura que rondará los 60 metros, el cual está fundado desde el antiguo estribo La Guaira del desplomado viaducto y desembocará en el mismo lugar en donde hoy lo hace la vía de contingencia construida a la sazón para solventar la falta de un puente. Cuando esta obra haya culminado, surgirá insoslayable una duda sobre su tiempo de vida, su proporción con el uso de la tecnología y su convivencia con la vida útil de las nuevas relaciones de poder que hoy se yerguen victoriosas sobre las ruinas de sus predecesores.

BIBLIOGRAPHIE

- ALEGRETT José Raúl, "Caminos y carreteras" in *Diccionario de Historia de Venezuela*, tomo I, Caracas, Fundación Polar Editor, 1988, p. 505-508.
- ALTEZ Rogelio, "El terremoto de 1812 en la ciudad de Caracas: un intento de microzonificación histórica", *Revista Geográfica Venezolana*, Volumen Especial, 2005, p. 171-198.
- ALTEZ Rogelio, "Historia sin memoria: la cotidiana recurrencia de eventos desastrosos en el estado Vargas, Venezuela", *Revista Geográfica Venezolana*, Volumen Especial, 2005b, p. 313-342.
- AMODIO Emanuele, NAVARRETE Rodrigo, RODRÍGUEZ Ana Cristina, *El camino de los españoles*, Caracas, Instituto del Patrimonio Cultural, 1997.
- AUGÉ Marc, *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*, Barcelona, Editorial Gedisa, 1996.
- BALANDIER Georges, *Antropología Política*, Barcelona, Ediciones Península, 1969.
- BOURDIEU Pierre, *Espacio social y génesis de las clases*, México, Ediciones Grijalbo, 1990.
- CASTILLO Ocarina, *Los años del bulldózer, ideología y política, 1948-1958*, Caracas, Ediciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela y Fondo Editorial Tropykos, 2003.
- CORONILL Fernando, "Estado y nación durante el golpe contra Hugo Chávez" in *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 62, nº 1, 2005, p. 87-112.
- CRUXENT José María, *La ruta de Losada*, Caracas, Gobernación del Distrito Federal, 1971.
- CUNILL GRAU Pedro, *Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIX*, 3 tomos, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 1987.
- DE SOLA Ricardo, *Contribución al Estudio de los Planos de Caracas*, Caracas, Ediciones del Cuatricentenario de Caracas, Irma, 1967.
- *Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana*, tomo 31, Madrid-Barcelona, Editorial Espasa-Calpe, 1921.
- FOUCAULT Michel, *Historia de la sexualidad I. La voluntad del saber*, México, Siglo XXI Editores, 1977.
- GARNER H. F., "Stratigraphic sedimentary significance of contemporary climate and relief in four regions of the Andes Mountains", *Bulletin of the Geological Society of America*, vol. 70, 1959, p. 1327-1368.
- GODELIER Maurice, *Lo ideal y lo material*, Madrid, Taurus Humanidades, 1989.
- GONZÁLEZ DE JUANA Clemente, ITURRALDE DE AROZENA J. M., PICARD CADILLAT X., *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*, 2 tomos, Caracas, Ediciones Foninves, 1980.
- GRASES José, ALTEZ Rogelio, LUGO Miguel, *Catálogo de Sismos Sentidos o*



Destructores, Venezuela 1530-1998, Caracas, Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales-Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, Editorial Innovación Tecnológica, 1999.

- HARWICH VALENILLA Nikita, "Ferrocarriles" in *Diccionario de Historia de Venezuela*, tomo II, Caracas, Fundación Polar (Editor), 1988, p. 345-349.
- HARWICH VALLENILLA Nikita, "El modelo económico del Liberalismo Amarillo. Historia de un fracaso" in *Política y economía en Venezuela. 1810-1991*, Caracas, Fundación John Boulton (Editor), 1992, p. 204-246.
- HURTADO Samuel, *Ferrocarriles y proyecto nacional en Venezuela: 1870-1925*, Caracas, Ediciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, 1990.
- KOGAN Jorge H., *Rieles con futuro: desafío para los ferrocarriles de América del Sur*, Caracas, Unidad de Publicaciones de la Corporación Andina de Fomento, 2004.

MANHEIM Karl, *Ideología y Utopía*, Madrid, Editorial Aguilar, 1966.

- MARCANO Frank, BARRIOS Sonia, *Estado Vargas, aspectos socioeconómicos, función urbana y opciones de desarrollo; Litoral Vargas, corredor urbano y red vial estructurante*, Caracas, Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitectura, Universidad Central de Venezuela-Centro de Estudios del Desarrollo, 2001.
- MARTIN Karl von, *Bericht über eine reise nach Niederländisch West-Indien und darauf gegründete studien*, tomo I, Leiden, Brill, 1888.
- POULANTZAS Nicos, *Poder político y clases sociales en el estado capitalista*, México, Siglo XXI Editores, 1986.
- *Sociedad Económica de Amigos del País, 1829-1839, memorias y estudios*, 2 tomos, Caracas, Banco Central de Venezuela, 1958.
- VALERY Rafael, *Los caminos de Venezuela*, Caracas, Cuadernos Lagoven, 1978.
- VAN DIJK Teun, *Ideología*, Gedisa Editorial, 1998.
- WEBER Max, *Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, México, Fondo de Cultura Económica, 1964.
- WOLF Eric, *Europa y la gente sin historia*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

RÉSUMÉ/RESUMEN/ABSTRACT

Ce travail traite de la crise provoquée par l'effondrement du viaduc numéro 1 de l'autoroute Caracas-La Guaira en janvier 2006, à partir d'une perspective méthodologique multiple qui permet de prendre en compte non seulement les variables qui se combinent et participent à la crise, mais aussi le processus historique de la construction, des usages et des abus de cette autoroute. De cette façon, on reconstitue les situations similaires qui ont vu le jour par le passé dans la société vénézuélienne, en remontant jusqu'au modèle colonial. On peut alors observer la présence permanente de deux aspects qui sont re-signifiés dans chaque contexte historique et social, mais qui sont toujours associés au développement de voies de

communication terrestres : les intérêts de pouvoir et les phénomènes naturels. Ainsi, le travail propose d'aborder l'histoire critique des chemins entre Caracas et La Guaira depuis les routes coloniales jusqu'au dénouement final de l'autoroute, qui sera l'occasion d'observer la confrontation de deux modèles différents de pouvoir (l'un en perte de vitesse, l'autre en pleine croissance) qui luttent pour la conduite idéologique et politique du pays.

Este trabajo aborda la crisis generada por el colapso del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira el pasado 6 de enero, desde una perspectiva metodológica múltiple, a través de la cual se puedan apreciar no sólo las variables conjugadas en esta coyuntura como co-participes de

la mencionada crisis, sino también el proceso histórico vinculado a la construcción, uso y abuso de la propia autopista. Asimismo, se recrearán coyunturas semejantes en el pasado de la sociedad venezolana, remontando la mirada hasta el modelo colonial, inclusive. En ese sentido, podrá observarse la presencia permanente de dos aspectos re-significados en cada contexto histórico-social, pero siempre asociados al desarrollo de vías de comunicación terrestres: intereses de poder y fenómenos naturales. Así, el trabajo propone abordar la historia crítica de los caminos entre Caracas y La Guaira, desde las vías coloniales hasta el desenlace final de la autopista, observando allí el actual enfrentamiento de dos modelos distintos de poder (uno en pleno desgaste y otro en ascenso) en pugna por la conducción ideológica y política del país.

This work approaches the crisis generated by the collapse of the viaduct 1 of the highway Caracas-La Guaira in January 6-

2006, from a methodological multiple perspective, across which they could appreciate not only the variables brought together in this conjuncture as copartners of the mentioned crisis, but also the historical process linked to the construction, use and abuse of this highway. Likewise, similar conjunctures will show themselves in the past of the Venezuelan society, mending the look up to the colonial model, inclusive. In this sense, will be able to be observed the permanent presence of two aspects re-meant in every historical-social context, but always associated with the development of terrestrial routes of communication: power interests and natural phenomena. This way, the work proposes to approach the critical history of the ways between Caracas and La Guaira, from the colonial routes up to the final conclusion of the highway, observing there the current clash of two models different from power (one in plenary session wear and other one in ascent) in struggle for the ideological and political conduction of the country.

MOTS-CLÉS

- Venezuela
- Viaduc 1
- Relations de pouvoir
- Voies de communication

PALABRAS CLAVES

- Venezuela
- Viaducto 1
- Relaciones de poder
- Vías de comunicación

KEYWORDS

- Venezuela
- Viaduct 1
- Power relationships
- Communication land ways

La République bolivarienne du Venezuela et le droit

Commencée alors que les effets du quatrième Sommet des Amériques de Mar del Plata ne s'étaient pas encore estompés¹, l'année 2006 aura été pour le Venezuela une période clé, ponctuée par une série de décisions et de prises de position de la part de ses dirigeants qui ont causé un émoi certain dans le landerneau géopolitique. On relèvera ainsi pêle-mêle la signature du Traité de Commerce des Peuples (TCP, entre le Venezuela, Cuba et la Bolivie), le retrait de la Communauté andine des Nations (CAN), la prise de contrôle des multinationales pétrolières, l'entrée du Venezuela dans le Mercosur à titre de membre à part entière, sans oublier les efforts dispensés lors de la campagne pour le siège non permanent au Secrétariat de l'ONU ni, bien sûr, l'échéance électorale de fin d'année.

Par delà les effets d'annonce, on peut s'interroger sur la signification véritable de ces comportements : sommes-nous en présence d'une réelle volonté de rupture avec les principes du libre-échange au bénéfice d'un nouveau concept de développement fondé sur la solidarité, l'entraide et la coopération. Ou bien devons-nous réduire ces velléités diverses et variées à des considérations de simple opportunité et de pragmatisme ? L'analyse des phénomènes juridiques et leur évolution constitue, en l'espèce, un excellent outil de lisibilité. Il faut pour cela se situer tout à la fois au niveau international et à l'échelle interne, comme nous y invitent les problématiques énergétiques et, plus récemment, les enjeux électoraux.

* CNRS – CREDAL, UMR 7169.

1. Organisé les 4 et 5 novembre 2005, le sommet de Mar del Plata a marqué l'arrêt du processus d'édification de la zone de libre-échange des Amériques souhaitée par les États-Unis qui, à l'heure actuelle, montrent une nette préférence pour la signature de traités bilatéraux de libre-échange. Ce sommet a été aussi la scène d'affrontements entre divers dirigeants, notamment les présidents Chávez, Kirchner et Fox.

Le Venezuela et le droit international

Le 19 avril 2006 à Asunción, le Président Chávez déclarait : « la Communauté andine des Nations est morte. Ils l'ont tué. Le Venezuela s'en retire. » Estimant que les traités de libre-échange signés avec les États-Unis par la Colombie (27 février) et par le Pérou (12 avril) avaient donné le coup de grâce à la CAN, il annonçait son retrait et affirmait dans le même temps qu'il misait désormais sur le Mercosur, même si ce dernier devait selon lui être restructuré. Ce faisant, il ne se souciait pas du fait qu'un État abandonnant la Communauté andine restait tenu – selon les termes du traité – de maintenir pendant cinq ans avec les pays membres les avantages du libre-échange intra-communautaire. Ce qui était en complète contradiction avec une éventuelle adhésion au Mercosur, entité éligible à d'autres règles. Apparemment, cette incompatibilité juridique n'a nullement incommodé Chávez, qui avait probablement déjà à l'esprit la signature du TCP le 29 avril 2006. Un traité qui, ainsi que nous l'analyserons plus loin, ne se limite pas à un accord commercial : il s'agit de relations politiques et économiques très différentes de celles prévues par les traités de libre-échange classique.

Le 4 juillet 2006, l'entrée du Venezuela dans le Mercosur, avant même les négociations sur les conditions d'adhésion, participe davantage de l'effet d'annonce que de l'orthodoxie juridique internationale. Ce sera un tour de force que de concilier la qualité de membre à part entière du Mercosur, avec ses obligations inhérentes, et les engagements souscrits par la République bolivarienne. La lecture du Protocole d'adhésion signé à Caracas atteste des difficultés présentes et à venir : le mécanisme de solution de controverses établi par le Protocole d'Olivos s'appliquera au Venezuela dans les litiges relatifs aux règles juridiques du Mercosur antérieurs à la mise en vigueur du Protocole d'adhésion (art. 2) ; le Venezuela adoptera l'ensemble des règles juridiques du Mercosur progressivement et cette adoption s'achèvera au plus tard quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole (art. 3), soit en 2010. Dans le même délai, en matière d'Union douanière, le Venezuela adoptera la nomenclature commune du Mercosur ainsi que son tarif extérieur commun, exception faite pour les produits sensibles (art. 4). Au cours de la période de transition et jusqu'à ce que le Venezuela adopte le régime d'origine du Mercosur, c'est le régime d'origine de l'Accord de Complémentation économique n° 59 qui s'appliquera (art. 5). Un groupe de travail définira les conditions et les actions à négocier avec les pays tiers impliqués par l'adhésion du Venezuela à d'autres traités (art. 7). Le Venezuela acquiert la condition d'État membre du Mercosur avec tous les droits et obligations afférents conformément à l'article 2 du Traité d'Asunción et dans les termes du présent Protocole (art. 10). On peut légitimement se demander comment concilier cette association avec les nombreux autres accords souscrits par le Venezuela, par exemple le TCP.



Le TCP, dernier avatar de l'Alternative bolivarienne pour les Peuples de Notre Amérique (ALBA) s'avère un instrument d'échange solidaire et complémentaire entre pays, visant à favoriser les peuples en claire opposition avec les traités de libre-échange dont l'objectif est de renforcer le pouvoir et la mainmise des sociétés multinationales. Le maître mot de ce nouvel instrument du droit international réside dans la solidarité, qui fonde la seule véritable intégration en répondant aux aspirations de justice sociale, d'équité et de droit au développement. La conception de cette intégration repose donc sur des relations politiques, juridiques et économiques très différentes de celles que fixent le projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA) et les traités de libre-échange. Le terme d'alternative prend dès lors tout son sens et c'est d'ailleurs l'esprit et la lettre du traité du 29 avril si l'on en juge, par exemple, l'article 2 du chapitre consacré aux actions conjointes de Cuba et du Venezuela envers la Bolivie :

« Les gouvernements cubains et vénézuéliens garantissent à la Bolivie l'achat des produits de la chaîne oléagineuse et des autres produits agricoles et industriels qui pourraient se retrouver sans marché par suite de l'application de traités de libre-échange impulsés par le gouvernement des États-Unis ou des gouvernements européens. »

L'essentiel, toutefois, réside dans la nouvelle orientation des principes du commerce régional. Désormais, l'entraide et l'équité prévaudront et tiendront lieu de règles ; en somme, l'éthique plutôt que la « *lex mercatoria* » pour un projet qui n'a plus rien à voir avec le développement productif – au sens de politique de croissance. L'analyse des clauses du TCP en atteste et le ton est donné d'emblée :

« Les pays décident de réaliser des investissements d'intérêt mutuel qui pourraient prendre la forme de sociétés publiques, binationales, mixtes, coopératives ou de gestion [...]. En ce qui concerne les sociétés bi-nationales ou tri-nationales à connotation stratégique, les Parties feront leur possible afin que, si la nature et le coût de l'investissement le permettent, le pays d'accueil [de l'investissement] détienne au moins 51 % des actions »².

On trouve ici la manifestation de la soumission de Chávez à la doctrine Ceresole³ : l'État, pouvoir concentré et centralisé, doit être partout présent. Ensuite vient la traduction juridique des principes d'entraide et de solidarité : les gouvernements décident de conclure des accords de crédit réciproques (synallagmatiques) entre les institutions bancaires nommées à cette fin (art. 8, dispositions générales) et mettront en place des mécanismes de compensation commerciale de biens et de services dans la mesure où ils seront mutuellement bénéfiques ; c'est donc l'institutionnalisation du troc. Dans cette logique, on entre ensuite dans le détail des actions prévues par le Venezuela en faveur de la Bolivie : celui-ci engagera une vaste collaboration dans les secteurs énergé-

2. Art. 5 et 6 des dispositions générales du TCP.

3. Du nom d'un sociologue argentin, ancien des *Montoneros*, exerçant une grande influence sur Chávez. Pour lui, l'union de l'armée et du peuple justifie la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul hiérarque.

tiques et miniers, prévoyant notamment l'accroissement des livraisons de pétrole brut, de produits raffinés, de GPL et d'asphalte visés à l'Accord de coopération énergétique de Caracas jusqu'aux volumes requis pour satisfaire la demande interne, en établissant des mécanismes de compensation par des produits boliviens en vue de l'annulation totale de la facture à ce titre. Suit la manne : tout investissement au Venezuela, public ou de sociétés mixtes boliviennes, sera exonéré d'impôts sur le bénéfice durant la période d'amortissement (art. 2) ; le Venezuela offrira cinq mille bourses d'études pour le développement productif et social de la Bolivie (art. 3) ; le Venezuela créera pour la Bolivie un fonds spécial de cent millions de dollars en vue du financement de projets productifs et d'infrastructures connexes (art. 4) ; le Venezuela fera don à la Bolivie de 30 millions de dollars en vue de satisfaire à des besoins de nature sociale ou productive du peuple bolivien selon ce que déterminera son gouvernement (art. 5) ; le Venezuela fera don d'asphalte et d'une usine de mélange d'asphalte pour contribuer à la construction et à l'entretien des chaussées (art. 6) ; le Venezuela accroîtra sensiblement ses importations de produit boliviens (art. 7) ; le Venezuela concèdera des avantages fiscaux sur son territoire à des projets représentant un intérêt stratégique pour la Bolivie (art. 8) ; etc. On est loin des clauses usuelles des traités d'investissements classiques, où la seule éventualité de la baisse des bénéfices espérés dans le pays d'accueil est qualifiée d'expropriation ! L'ALBA, à travers son application par les TCP, est décidément en rupture avec l'orthodoxie libre-échangiste. Le quatrième Sommet entre l'Union européenne et l'Amérique latine confirmera, quelques semaines plus tard, cette tendance.

En effet, le président Chávez arrive à Vienne en mai 2006 accompagné de son homologue bolivien Evo Morales, lesté du récent accord commercial entre les Peuples, mais aussi de mesures très peu en harmonie avec l'esprit de négociation censé présider à cette assemblée. Quelques jours auparavant, le 1^{er} avril, le gouvernement vénézuélien, via la société publique *Petróleos de Venezuela SA* (PDVSA), avait pris le contrôle de 17 sociétés pétrolières privées étrangères et nationales. Il s'agissait là de l'aboutissement d'un processus engagé depuis la promulgation de la Constitution bolivarienne de 1999, qui consacrait le monopole de PDVSA dans le secteur pétrolier, qui avait été confirmé par la loi sur les hydrocarbures de 2001 puis réaffirmée par différentes mesures telles que le relèvement du niveau de redevance de 1 à 16,66 % en octobre 2004. Il faut dire que le principe d'équité avait été mis à mal depuis longtemps : au lieu des 16,66 % de royalties prévues par la vieille loi nationale sur les hydrocarbures de 1943, les multinationales et leurs alliés vénézuéliens se voyaient quasiment exemptés de façon régaliennne, puisque le prélèvement fiscal était plafonné à 1 % de la valeur du précieux liquide. Ainsi, sur chaque baril produit à 20 dollars, Caracas ne percevait que 20 cents au lieu de 3,3 dollars. « Le temps du pétrole gratuit est terminé », décréta Chávez le 13 octobre 2004. S'ensuivirent toute une série



d'actions aux termes desquelles les groupes pétroliers (Shell, Eni, Total, etc.) devaient s'acquitter d'arriérés d'impôts impressionnants. Le gouvernement vénézuélien décida également d'augmenter l'impôt sur les bénéfices pétroliers de 34 % à 50 %, après avoir constaté que plusieurs firmes internationales avaient recours à l'évasion fiscale. Certaines ont vu leurs bureaux temporairement fermés. Total, qui n'avait pas payé ses impôts s'élevant à près de 110 millions de dollars depuis 2001 malgré des bénéfices s'élevant à 12 milliards de dollars en 2005, fut l'objet d'une enquête qui confirma les soupçons de fraude fiscale pour l'année 2001. La multinationale fut donc condamnée à une amende de 443 000 dollars pour fausse déclaration de revenus : Total avait déclaré une perte fiscale de 23,5 millions de dollars, alors que la perte réelle n'excédait pas les 6 millions de dollars. L'entreprise avait également annoncé de nouveaux investissements à hauteur de 20 millions de dollars en vue d'obtenir des réductions d'impôts, alors qu'en réalité ceux-ci ne dépassaient pas les 12 millions de dollars⁴. En outre, les autorités boliviennes ne se limitèrent pas au recouvrement de taxes impayées : Chávez a également annoncé, le 7 mai 2006, la création d'un nouvel impôt sur l'extraction du brut de 33,3 %, auquel s'ajoutera une taxe nouvelle sur l'exportation de brut de 0,1 %.

Dès lors, on pouvait dès lors craindre une certaine fraîcheur dans l'accueil réservé au président vénézuélien lors du quatrième Sommet. Cela se concrétisa dans le texte de la déclaration finale de Vienne :

« Nous rejetons fermement toutes les mesures de contrainte présentant un caractère unilatéral et un effet extraterritorial, contraires au droit international et aux règles du libre-échange communément admises. Nous convenons que ce type de pratiques représente une sérieuse menace pour le multilatéralisme » (point 12) ;

« Nous continuerons d'œuvrer au respect du droit international et de conforter les engagements pris en faveur d'un ordre international fondé sur des règles ; aujourd'hui, plus que jamais, la primauté du droit et la confiance dans la capacité du système (*sic*) à prévenir ou à punir toutes atteintes aux règles apparaissent comme les conditions préalables de paix et de sécurité inscrites dans la durée » (point 14) ;

« Tout en reconnaissant le droit souverain des pays à gérer leurs ressources naturelles, nous poursuivrons et renforcerons notre coopération en vue d'établir un cadre commercial équilibré et des régimes réglementaires plus compatibles » (point 30).

Enfin, le point 33 affirmait un « soutien sans réserve au système commercial multilatéral », plantant le décor de l'affrontement entre l'orthodoxie néolibérale et les velléités chavistes.

Début avril 2006, le gouvernement vénézuélien reprit donc son entreprise de récupération de souveraineté énergétique : 17 compagnies nationales et étrangères sont sommées de transformer les contrats conclus lors des années

4. Salim Lamrani, « Le Venezuela retrouve sa souveraineté énergétique », RISAL (www.risal.collectifs.net).

1990, déclarés illégaux, en « coentreprises » ou « entreprises mixtes » dans lesquelles la compagnie pétrolière publique PDVSA détiendra 60 %. L'opération, qui n'est autre qu'une rupture unilatérale des contrats de partage de production⁵, prend l'appellation de migration des contrats opératoires au modèle d'entreprises mixtes, par un doux euphémisme.

On a souligné plus haut le caractère léonin de ces contrats, dont l'exécution assurait aux sociétés pétrolières des profits ahurissants et dont le principe est relativement simple. Les compagnies pétrolières sont appelées à financer les investissements permettant le forage et l'exploitation des ressources en hydrocarbures d'une zone moyennant une part de la production future. En général, le pays producteur ne dispose pas des moyens techniques et financiers pour prendre les risques inhérents à l'exploration et l'exploitation ; l'entreprise est prestataire de services et l'État est le maître d'œuvre ; le partage de l'huile est négocié pour chaque contrat entre le contractant et l'État à un taux fixe. En principe, on l'a vu, les sociétés sont exemptées d'impôts et de taxes – hormis celles expressément prévues –, mais doivent s'acquitter de certaines redevances ; la société contractante exécute les travaux d'exploration et de production en apportant ses propres techniques et moyens financiers et supporte 100 % des risques d'exploration. En contrepartie, une fois la production démarrée, la compagnie reçoit une quote-part de celle-ci divisée en deux : le *cost oil recovery*, qui est la part d'huile destinée au recouvrement des dépenses d'exploration et développement de l'exploitation. La récupération de ces coûts est limitée et varie entre 40 et 70 % de la production nette d'hydrocarbures, soit la production totale disponible diminuée de la redevance minière proportionnelle. Le *profit oil*, pourcentage de production restante après déduction du *cost oil*, est partagé entre la compagnie et l'État, selon une cote prédéfinie contractuellement dans le PSA et dont le montant varie selon les conditions du gisement, son ampleur et le pouvoir de négociation de l'État. Tel est le modèle d'« accord » que Chávez a dénoncé pour imposer sa propre conception du patriotisme énergétique au moyen des nouvelles entreprises mixtes.

Rapportée à l'esprit des contrats PSA susvisés, le principe de la mixité reconnaît l'utilité des multinationales dans les activités pétrolières au Venezuela. Pour motiver les investisseurs étrangers, Chávez affirme que 235 milliards de barils dorment dans la ceinture de l'Orénoque. Comme il faudrait investir 70 milliards de dollars pour exploiter ce gisement, il leur demande donc, au moyen de la formule de l'entreprise mixte, de contribuer à cette colossale mise de fonds. Mais la formule est-elle viable ?⁶

5. *Production sharing agreements* (PSA), mode d'exploitation le plus répandu depuis les années 1960.

6. Chávez table alors sur un baril à 65 dollars. Pour stabiliser le cours à ce niveau à long terme, il faudrait que l'OPEP reconnaisse comme réserves officielles du Venezuela ses réserves gigantesques de brut lourd (de moins bonne qualité, car à forte teneur en soufre), exclues pour le moment du calcul. En réalité, le Venezuela produit beaucoup de brut très lourd que les États-Unis pourraient traiter, mais il est plus cher à raffiner que les autres produits.



Le nouveau droit énergétique bolivarien

C'est la loi sur les hydrocarbures du 13 novembre 2001⁷, modifiée par la loi de réforme partielle du décret loi sur les hydrocarbures publiée dans la *Gaceta Oficial* du 4 août 2006, qui réglemente les nouvelles entreprises mixtes. Le ton était donné par l'article 12 de la Constitution :

« Les gisements d'hydrocarbures, quelle que soit leur nature, existant sur le territoire national, sous le niveau de la mer territoriale, dans la zone économique exclusive et sur la plateforme continentale, appartiennent à la République, sont biens du domaine public et, partant, inaliénables et imprescriptibles. »

Donc le transfert de propriété des gisements pétroliers est prohibé et la participation des investisseurs privés à l'exploitation des réserves doit respecter scrupuleusement le cadre prévu par la loi organique sur les hydrocarbures. Celle-ci distingue fondamentalement les activités primaires – réservées de manière absolue à l'État, associé exceptionnellement aux particuliers, qui concernent l'exploration, l'extraction, le transport et le stockage initial – des activités industrielles comme le raffinage et la commercialisation – qui peuvent être réalisées par l'État ou des particuliers, ensemble ou séparément, ces derniers devant obtenir un permis.

La participation déterminante de l'État est réservée aux activités primaires dans lesquelles la participation du capital privé se limite à une association minoritaire : ce sont là les entreprises mixtes. Pour bien comprendre l'esprit de la loi, il convient de préciser ce concept d'« entreprise ». La loi organique fait expressément référence à trois types d'entreprises : l'entreprise opératrice, l'entreprise d'État et l'entreprise mixte. Les entreprises opératrices constituent le genre par rapport à l'espèce ; ce sont celles qui sont dédiées aux activités primaires, déclare l'article 27, qui précise aussitôt :

« Les activités primaires visées à l'article 9 seront réalisées par l'État, soit directement par le gouvernement, soit par des entreprises dont il est exclusivement le propriétaire ; il pourra également les réaliser au moyen d'entreprises dont il a le contrôle de décision pour avoir une participation supérieure à 50 % du capital social, lesquelles se dénomment entreprises mixtes. »

Ici, il semble que le terme d'entreprise soit employé dans son acception synonyme de société ; ce n'est toutefois qu'une apparence et il faut distinguer selon qu'il s'agit d'une entreprise d'État ou d'une entreprise mixte. Pour les premières, selon l'article 27, le choix est libre : « le gouvernement pourra créer des entreprises de la propriété exclusive de l'État et pourra adopter pour celles-ci les formes juridiques lui paraissant les plus conformes, y compris celle de la société anonyme avec associé unique. » L'entreprise d'État n'est donc pas une personne juridique, une catégorie juridique distincte. S'agissant

7. Plus exactement, un décret ayant force de loi. La nuance a son importance : émanant de l'exécutif, il n'est pas formellement une loi d'un point de vue juridique, dès lors qu'on ne peut accéder aux discussions de l'Assemblée nationale ni à l'exposition des motifs.

des entreprises mixtes, le problème est plus complexe puisque celles-ci se caractérisent par le contrôle de décision issu d'une participation de l'État supérieure à 50 % du capital social. Ici, il semble que ce soit une forme de société de capital qui soit visée, particulièrement celle de société anonyme, mais ce n'est pas une obligation expresse ; en revanche, l'expression de « capital social » paraît impliquer la notion de société par actions.

Cette interprétation peut être abusive : le capital signifie tantôt les biens de capital, tantôt les biens d'investissement. En ce sens, le capital, du point de vue économique, se réfère aux biens physiques et non au capital financier, l'argent n'étant pas un moyen productif. Si, comme nous le croyons, la volonté du législateur vénézuélien a été de permettre à l'État d'avoir une participation économique majoritaire dans les entreprises mixtes – non seulement pour avoir le contrôle de décision mais aussi et surtout pour recevoir une participation majoritaire dans les bénéfices –, alors c'est l'acception économique de la notion de capital qui doit être retenue. Par suite, l'entreprise mixte peut être organisée sous quelque forme juridique que ce soit, pourvu que soit assurée à l'État une participation majoritaire dans le capital. Elle pourra adopter une forme sociétaire, associative voire contractuelle, à travers des figures telles que le pacte quasi sociétaire proche du consortium. L'unique contrainte sera que, sur le plan politique, l'État jouisse du contrôle de décision et que, sur le plan économique, lui soit octroyé une participation majoritaire dans les bénéfices.

Cette participation majoritaire va entraîner d'autres conséquences dérivant du fait que ces entreprises vont être éligibles à l'application de dispositions légales contenues dans d'autres lois spécifiques. Tel est le cas de la loi organique d'administration financière : celle-ci vise les entreprises mixtes en tant que personnes juridiques publiques assujetties, pour les devises étrangères obtenues via les opérations de crédit public ou les exportations de biens ou services, à l'autorisation de la Banque centrale du Venezuela. Surtout, en application de la loi sur l'Arbitrage commercial du 7 avril 1998, les contrats établissant une entreprise mixte devront bannir toute référence à une clause d'arbitrage commercial ou clause compromissoire qui auraient pour effet de « délocaliser » la solution du litige, sauf autorisation écrite du ministère de Tutelle. Les controverses impliquant une entreprise mixte seront de la compétence exclusive des tribunaux nationaux et jouiront du bénéfice de compétence « *rationae-personae* » en vertu duquel elles seront traitées devant la salle politico-administrative du Tribunal Suprême selon une procédure de dernier ressort. L'entrée en vigueur de la loi sur les hydrocarbures limite donc considérablement la participation des entreprises privées dans les activités primaires dont on aura compris le caractère essentiel.

Il semble toutefois que PDVSA soit actuellement dans l'incapacité financière d'assumer les coûts des investissements nécessaires pour maintenir et



développer l'industrie pétrolière, cela même en ayant recours aux entreprises mixtes. Après de rudes négociations, la majorité des sociétés multinationales ont adopté – non sans prudence ou éclats – le nouveau régime. Ce dernier, malgré une certaine rigidité de rédaction de la loi, est voué à une certaine évolution, en ce sens qu'il ne restera probablement pas enfermé dans les limites d'une forme sociétaire, mais que les entreprises mixtes connaîtront une organisation plus proche du contrat. Quoi qu'il en soit, voilà bientôt un an et demi que le ministère de l'Énergie et du Pétrole a ordonné à PDVSA la transformation des contrats existants en entreprises mixtes, selon un schéma transitoire qui n'est pas terminé pour certains des acteurs. Cette période transitoire, au cours de laquelle il n'y a pas eu d'investissements importants, a été marquée par une chute de la production des entreprises mixtes d'au moins 26 000 barils par jour : la production des dix-huit champs pétrolifères en cause est passée de 224 354 barils quotidiens en octobre 2005 à 211 889 barils en mars 2006, alors qu'une chute supplémentaire de 13 500 barils par jour a été enregistrée en août passé. 11 des 18 champs d'exploitation ont connu une réduction soutenue de la moyenne d'exploitation, quatre ont noté des tendances à la baisse et seulement trois ont pu élever les chiffres de l'extraction⁸. Ces chiffres sont à eux seuls édifiants alors que, selon Eulogio del Pino, président de la Corporation vénézuélienne du Pétrole, l'objectif de production des 21 entreprises mixtes existant était de 359 000 barils par jour pour 2006.

Le droit interne

Cela nous amène à examiner la situation au plan intérieur du pays. D'aucuns craignent en effet que le processus de démantèlement n'affecte les institutions juridiques antérieures, le pouvoir judiciaire et ses organes. Là encore, l'équivoque n'est pas levée et l'on prendra pour exemple la réforme agraire et l'arbitrage commercial.

La loi des Terres et du Développement agricole, publiée le 13 novembre 2001, constitue l'exemple topique de l'ambiguïté instaurée par le régime, dès lors que l'on ne sait trop si l'on est en présence de l'expression d'une volonté politique ou d'une carence technique en droit. La Constitution de 1999 consacre et garantit le droit de propriété dans son article 115 affirmant que « toute personne a droit à l'usage, la jouissance et la disposition de ses biens ». Le droit de propriété de la terre est précisé dans l'article 307, qui stipule : « le régime latifundiste est contraire à l'intérêt social. Les paysans ont droit à la propriété de la terre dans les cas et formes précisés par la loi s'y rapportant. » Or, en l'espèce, le texte spécifique est la loi des Terres et du Développement agricole, qui déclare dans son article 12 : « [...] dans l'exercice de son droit de propriété agricole, le paysan pourra user, jouir et percevoir les fruits de la

8. *El Universal*, 2 octobre 2006.

terre ; le droit de propriété agricole se transmet par succession aux héritiers légaux⁹ mais ne peut être l'objet d'une quelconque aliénation ». En d'autres termes ce droit de propriété ne peut être cédé, ou, plus prosaïquement, le paysan, soi-disant propriétaire de ses terres, ne peut les vendre... Curieuse acception du droit de propriété dont on sait qu'il se caractérise, en droit civil traditionnel reçu jusqu'ici dans toute l'Amérique latine via le bon vieux Code Napoléon, par les attributs d'usus, fructus et abusus, hérités du droit romain. La loi agraire vénézuélienne inventerait-elle un droit de propriété *sui generis* amputé du droit de disposition ? Impossible : ou bien nous nous trouvons en présence d'un droit de seul usufruit (et en ce cas, les paysans sont grugés) ou bien le droit de propriété octroyé aux paysans, visé dans la loi sur les Terres et le Développement agricole, est inconstitutionnel comme contraire aux principes énoncés dans les articles 115 et 307 constitutionnels et ne peut être exercé... Cette analyse est confirmée par l'article 11 de la même loi qui précise que les parcelles adjudiquées par l'Institut national des Terres – celles octroyées aux paysans dont il est ici question – peuvent faire l'objet de garanties en vue de l'obtention de crédit, sauf que ces garanties ne peuvent porter que sur la récolte et non pas sur la parcelle elle-même. Mais la récolte ne constitue qu'un bien meuble par nature et non un bien immeuble par incorporation ; autrement dit, il s'agit seulement d'un gage, contrat par lequel le débiteur donne une chose meuble en garantie du crédit accordé ; d'ailleurs l'article 11 dispose expressément que l'on ne pourra constituer d'hypothèques ou autres sûretés sur les parcelles. Qu'en est-il d'un propriétaire qui ne peut hypothéquer son bien ? L'affirmation selon laquelle la réforme agraire serait une grande victoire de la révolution bolivarienne doit donc être nuancée... Cette dernière prévention pourrait aussi bien être étendue aux nationalisations d'entreprises, processus non exempts eux aussi de contradictions et de désillusions : que ce soit dans le cas des entreprises INVEPAL ou INVEVAL, le rôle des syndicats ou des travailleurs dans les processus de cogestion prévus lors des décrets d'expropriation, en mai 2005, n'a pas été respecté.

D'une manière générale, le système judiciaire vénézuélien n'est pas au mieux de sa forme. L'encombrement des tribunaux en constitue l'une des caractéristiques à telle enseigne que le Tribunal supérieur de Justice vient de créer, pour tenter d'absorber le retard des procédures, un corps de juges itinérants chargés de pourvoir aux dossiers les plus urgents ; cette initiative s'inscrit parfaitement dans l'esprit des « missions » utilisées en matière de santé pour pallier certaines carences. Cet expédient a eu peu d'impact : la sous-commission de Justice de l'Assemblée nationale a soumis au président du Tribunal supérieur de Justice une liste de 110 litiges d'importance en attente

9. Sur ce point, voir Alfredo De Jesús, « le concept de propriété agraire », in *1^{er} Congrès national d'Études de sciences juridique et politiques*, Barquisimeto, Universidad Fermin Toro, coll. « Memorias de Eventos », 2002.

de solutions pour retard de procédure¹⁰. On pourrait également avoir recours pour décongestionner la justice à des mécanismes alternatifs de solution des conflits tels que l'arbitrage, la médiation ou la conciliation. Mais on a vu, à propos de la loi sur les hydrocarbures, l'ostracisme dans lequel l'arbitrage était maintenu : l'arbitrage international est perçu comme une cession de souveraineté juridique. Rappelons que l'arbitrage est un mode de règlement des conflits qui tient son autorité, non d'une délégation permanente de l'État ou d'une institution internationale, mais de la convention des parties.

Au Venezuela, au plan interne, l'arbitrage a donné lieu à une loi, la loi d'Arbitrage commercial, en date du 7 avril 1998 et donc quasi contemporaine de l'avènement de Chávez puisqu'elle a huit ans d'âge, mais qui continue d'être l'objet de méfiance, contrairement à l'évolution constatée dans d'autres pays d'Amérique latine tels que le Brésil, le Mexique ou encore la Colombie. Constitutionnellement parlant, l'arbitrage ne fait pas partie du système judiciaire mais il est consacré, en pratique, par la justice du pays. Encore un paradoxe qui s'ajoute à d'autres contradictions ! Il reste que les autorités judiciaires officielles font preuve d'une certaine résistance dans l'admission de l'institution et de ses principes recteurs ; cela se traduit par la non-reconnaissance des accords d'arbitrage, l'intervention dans les procédures en cours et parfois par des recours en nullité contre des sentences arbitrales ; les praticiens comme les avocats adoptent un parallélisme de forme entre arbitrage et procédure judiciaire qui, sans participer à l'hostilité, confine à l'indifférence ; quant aux arbitres eux-mêmes, ils ne contribuent pas exactement à donner une image d'autonomie vis-à-vis des parties, des centres d'arbitrage et surtout du pouvoir judiciaire. On aura une idée du statut de l'arbitrage, en sachant, par exemple, que certains tribunaux continuent à ne pas reconnaître le principe – consacré par la loi – selon lequel les arbitres sont habilités à se prononcer sur leur propre compétence et sur la validité des accords d'arbitrage et, par suite, les organes judiciaires ne sont pas aptes à se prononcer sur ces points, ce qu'ils font cependant, contribuant ainsi à enrayer l'essor de l'arbitrage. Au passage, on notera que cette intrusion est tout à fait illégale, sinon inconstitutionnelle... Sur le plan interne donc, l'arbitrage rencontre des difficultés à se développer : la majeure partie des affaires concerne le bail ou la location et ne représente que des enjeux financiers modestes ; les cas qualifiés d'importants financièrement concernent les secteurs des infrastructures et de l'énergie et, là, bien souvent, les « grands arbitrages », du fait de l'importance des intérêts en conflit, émigrent vers les centres étrangers de Paris ou New York : tel fut le cas des arbitrages Autopistas concesionadas de Venezuela contre la République bolivarienne et de Vanessa Ventures Ltd contre la même République, qui furent soumis et résolus par le CIRDI (Centre international de Résolution des Différends en matière d'Investissements) créé par la Convention de Washington de 1965. Enfin, pour bien comprendre l'attitude

10. *El Universal*, 5 février 2007.

hostile du pouvoir judiciaire à l'endroit de l'arbitrage, il faut savoir que la loi n'a pas vocation à s'appliquer seulement aux affaires commerciales, mais aussi à la matière civile ; autrement dit la loi sur l'arbitrage commercial peut s'appliquer à un litige relatif à un contrat de vente opposant des parties toutes deux non commerçantes. Dès lors, l'arbitrage constituerait-il un possible vecteur d'indépendance aux yeux de l'officialisme du système d'administration de justice ?

L'enfant de Marx et du maté

Le 3 décembre 2006, Hugo Chávez est réélu Président de la République bolivarienne du Venezuela avec 63 % des suffrages. Peu prolix pendant la campagne électorale sur ses intentions, il va pouvoir s'adonner à la réalisation du socialisme du XXI^e siècle. De quoi s'agit-il ? Selon Chávez lui-même « le socialisme du XXI^e siècle est basé sur la solidarité, la fraternité, l'amour, la justice, la liberté et l'égalité »¹¹. Pas moins ! En réalité, il s'agit d'abord de mettre en œuvre l'anticapitalisme, le capitalisme se définissant à travers plusieurs éléments fondamentaux : la propriété privée des moyens de production, un marché régulé par la concurrence et une autorité régulatrice, un État, confinée dans un rôle de correction des dysfonctionnements. Effectivement, une des priorités du gouvernement a été de développer des formes non privées de propriété et de contrôle, telles que les coopératives, la cogestion et autre propriété publique. Sous la présidence de Chávez, le chiffre des coopératives est passé de 800 en 1998 à plus de 100 000 en 2005 ! Cela signifie que plus d'un million et demi de Vénézuéliens font partie d'une coopérative, soit 10 % de la population adulte¹². S'agissant de la cogestion, le gouvernement mène des expériences dans diverses entreprises publiques, comme par exemple ALCASA pour la production d'aluminium ; mais c'est une cogestion faite de nuances... La cogestion est instaurée avec contrôle ouvrier et conseil d'usine, en vue de donner aux travailleurs tout le pouvoir sur la production, la distribution et la commercialisation ; mais la propriété de l'entreprise reste à l'État... Ce n'est donc pas une cogestion qui distribue le capital aux travailleurs ou qui les associe au capital en répartissant des actions. Par suite le seul changement opéré est celui de propriétaire mais l'objectif demeure la maximisation des profits ; il fallait donc conforter l'esprit socialiste. Pour ce faire, on a créé un nouveau type d'unité de production, les « entreprises de production sociale » (EPS). Pour être ainsi qualifiée, l'entreprise, coopérative, cogérée ou gérée par l'État¹³, doit remplir certains critères, comme privilégier les valeurs de solidarité, de coopération, de complémentarité, de réciprocité, d'équité et de durabilité, plutôt que la valeur de rentabilité (article 3, décret du 13 septembre 2005) ; à ces conditions, l'EPS pourra briguer des crédits à faible taux d'intérêt et des contrats publics.

11. Conférence Enlaces Alternativos, Vienne, 13 mai 2006 (www.gobiernoenlinea.gob.ve).

12. SUNACOOOP, www.sunacoop.gob.ve

13. *El Universal*, 31 janvier 2007, www.eluniversal.com/2007/01/31/pol_art_162853.shtml



On a vu comment le gouvernement Chávez s'est efforcé de s'éloigner des lois du marché notamment au plan du commerce extérieur en proposant des solutions de substitution au libre-échange à travers des accords commerciaux novateurs fondés sur la solidarité. Mais ce type d'accord non marchand peut-il fonctionner à grande échelle dès lors que la solidarité ou la complémentarité se traduisent nécessairement par une convention d'échange ou une compensation qui peuvent ne pas être satisfaisantes. Preuve en est le dernier contrat passé avec la Bolivie : foin du Traité de Commerce entre les Peuples ! Le Venezuela achètera pour un million de dollars tous les produits issus de l'industrialisation de la coca, notamment le maté et les médicaments.

Enfin le socialisme du XXI^e siècle se caractérise par l'introduction de la démocratie participative. Instaurée en 2001 via les conseils de planification locale, elle a été renforcée en 2006 avec la loi des conseils communaux qui basent les conseils sur des unités regroupant de deux cents à quatre cents familles et pratiquent une démocratie directe dans les communautés ; les fameuses « missions » qui fournissent éducation, santé, alimentation, services locaux et protection de l'environnement, participent aussi de ce mouvement. Et bien sûr on ne saurait oublier les différents types de référendum d'initiative citoyenne (révocatoire, d'approbation, d'abrogation et consultatif). C'est indéniable, la démocratie participative a un pays : le Venezuela ! Sauf que ce même pays s'est choisi un président qui, sitôt réélu, vient de demander et d'obtenir les pleins pouvoirs, c'est-à-dire le droit de légiférer seul, par décrets, pour une durée d'un an et demi... Ces prérogatives exorbitantes, outre qu'elles ramènent la prétendue démocratie représentative au rang de velléité, n'ont que l'apparence de la légalité.

Un sérieux problème de droit constitutionnel se pose en effet. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que Chávez se fait octroyer des pouvoirs spéciaux : déjà, en avril 1999, il les avait obtenus et il avait récidivé en novembre 2000. Mais la différence avec la période actuelle réside dans la composition du Parlement d'alors, partagée entre opposition et majorité officielle. Tel n'est pas le cas aujourd'hui où l'Assemblée nationale – en raison de l'attitude négative de l'opposition – est toute acquise au gouvernement.

Il reste que depuis 1999 Chávez a promulgué cent un décrets ayant force de loi (parmi lesquels des textes aussi importants que la loi de la Terre et du Développement agricole), soit 30 % de la législation nationale ! Et selon « les milieux autorisés » – notamment le vice-président de la République Jorge Rodríguez –, l'Exécutif envisage la promulgation de quarante à soixante décrets-lois¹⁴ en application de la nouvelle loi d'Habilitation (« *La Habilitante* »). C'est précisément celle-ci qui pose problème, non pas sur le plan de la lettre – car les articles 203 et 236 de la Constitution prévoient expressément l'habilitation – mais sur le plan de l'esprit : la délégation, car il s'agit bien

14. *El Universal*, 24 janvier 2007.

de cela, doit s'opérer dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, consacré par l'article 136 constitutionnel ; à cet effet, le pouvoir législatif concédé à l'Exécutif doit être restreint à certaines matières bien définies, pour une période courte et correspondant à une situation d'urgence. Rien de tout cela dans la loi d'Habilitation du 1^{er} février 2007 (publiée dans la *Gaceta Oficial*, n° 38 617) : l'objet de la loi est démesuré ; distribué en onze matières – dont certaines, comme l'économique et social ou l'énergie, sont quasiment stratégiques –, il confine au discrétionnaire¹⁵. La durée de l'exception est de dix-huit mois et rien n'établit l'urgence.

Alors, quels sont les risques ? Il faut se garder des procès d'intention. Évidemment, si l'on s'en tient au premier décret loi promulgué¹⁶, on n'a pas trop de soucis à se faire : il concerne la création d'une décoration intitulée « Ordre du 4 février », reconnaissance octroyée aux révolutionnaires militaires et civils (c'est la matière de la fonction publique) qui ont semé les bases d'une société juste et tournée vers la paix... Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que la disposition manque totalement de base légale car la loi n'autorise pas le président à créer des décorations ! Elle confère seulement, dans son article 3, le pouvoir de légiférer pour éradiquer la corruption, réformer le régime de la fonction publique et de responsabilité personnelle des fonctionnaires, promouvoir l'éthique et la formation continue des agents publics. Nous sommes en présence d'un cas très rare de détournement de pouvoirs exceptionnels !

Plus sérieusement, certaines matières susceptibles « d'interventions » peuvent nous interpeller : il s'agit par exemple de la matière pénale, visée par l'article 6 de la loi, relatif au fonctionnement et à l'organisation du système de sécurité, du système policier et du système pénitentiaire. Ici, des dérives sont à craindre, toujours issues d'une possible confusion des pouvoirs ; selon le principe de légalité « pas de délit, pas de peine sans loi », seule une loi formelle, émanant du pouvoir législatif peut créer des délits et des peines ; c'est ce que l'on appelle la réserve de la loi. Il n'appartient pas à l'Exécutif de légiférer dans ces domaines malgré l'habilitation. De la même façon, il ne peut inférer dans le domaine des libertés fondamentales, comme la liberté personnelle : ainsi de la possibilité d'une personne d'être arrêtée uniquement en vertu d'un mandat d'arrêt sauf exception du flagrant délit, concept qui ne saurait être interprété de façon extensive par décret.

Quant au secteur énergétique, puisque la loi d'Habilitation l'y autorise, Hugo Chávez annonce début février qu'il va adopter un décret d'ici le 1^{er} mai 2007 afin de prendre le contrôle de 60 % du capital des infrastructures pétro-

15. Les matières concernées sont les suivantes : institutions de l'État, participation populaire, fonction publique, économique et sociale, finances et fiscalité, sécurité citoyenne et juridique, science et technologie, aménagement du territoire, sécurité et défense nationale, transports et services, énergie.

16. Décret 5161, *Gaceta Oficial*, n° 38 618, 2 février 2007.



lières du bassin de l'Orénoque. Et pour chasser tout malentendu, il a précisé que les compagnies étrangères qui s'opposeraient à la nationalisation pouvaient quitter le pays. Dans le même temps, le président de PDVSA, Diego González Cruz, affirmait lors d'une réunion consacrée à la politique énergétique et à la promotion du plan « Siembra Petrolera » : « Sans la participation du secteur privé, nous ne pourrions développer ce plan. »

Conclusion

Analysée à l'aune de l'évolution juridique, la République bolivarienne du Venezuela apparaît marquée au coin du paradoxe et de la contradiction, même si le président Chávez aime à la parer des atours de la Révolution¹⁷. Prétendant rompre avec les pratiques du libre-échange, il érige l'usage international du troc et de la donation en piliers des nouveaux traités de commerce. Dans le même temps, il souscrit avec des partenaires tels que l'Iran et la Chine des traités d'investissement calqués sur les accords néolibéraux les plus orthodoxes. Révolutionnaire mais pas trop, il entre comme membre à part entière dans l'archétype du modèle libre-échangiste, le Mercosur, tout en proposant à l'Uruguay, membre comme lui de ce même ensemble, un échange de maisons préfabriquées contre du pétrole. S'exhibant comme chantre de l'anti-impérialisme américain, il n'empêche pas le Venezuela d'intensifier les échanges avec les États-Unis : les exportations sont passées de 15 milliards de dollars en 2001 à 34 milliards de dollars en 2005 ; les importations ont augmenté de 5,6 à 6,4 milliards de dollars. En réalité, si « la rupture dure »¹⁸, c'est parce que nous sommes en Amérique latine – terre de pragmatisme s'il en est – et que Chávez exerce des pratiques autoritaires et changeantes dans le temps, comme tout *caudillo* qui se respecte.

17. « L'Amérique latine en proie à la division », *Le Monde*, 12 mai 2006, p. 2.

18. Olivier Compagnon et Sandrine Revet, « Chávez : la rupture qui dure », *Libération*, 17 novembre 2006, p. 28.

BIBLIOGRAPHIE

- **ADRIAN HERNANDEZ Tomas**, « El nuevo regimen legal de la participación de los particulares en las actividades primarias petroleras en las empresas mixta », *Libre homenaje a Jorge Enrique Núñez*, Caracas, Ed. Fernando Parra Aranguren, 2004.
- « **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela** », *Gaceta Oficial* (Caracas), n° 5453, 24 mars 2000.
- **DE JESUS Alfredo**, « Hacia un regimen racional del control judicial del laudo arbitral en el derecho venezolano », *Revista peruana de Arbitraje* (Lima), n° 3, Ed. Grijley, 2006.
- **DE JESUS Alfredo**, « Crónica de arbitraje comercial », *Revista de Derecho del Tribunal Superior de Justicia* (Caracas), n° 23, 2006.
- **GOMEZ BUERA Hernán**, « Los pasos del Caudillo », *Nexos* (Mexico), n° 339, mars 2006.
- **LEMOINE Maurice**, *Chávez Presidente*, Paris, Flammarion, 2005.
- **LEMOINE Maurice**, *Le Venezuela de Chávez*, Paris, Ed. Alternatives, 2006.
- **PARAMIO Ludolfo**, « La izquierda y el populismo », *Nexos* (Mexico), n° 339, mars 2006.

RÉSUMÉ/RESUMEN/ABSTRACT

Quel est l'état du droit dans la République bolivarienne du Venezuela à la lumière des événements récents ? Le socialisme du XXI^e siècle, cher au Président Chávez, est-il compatible avec l'État de droit ? Durant ces derniers mois, on a en effet assisté à nombre de péripéties, tant au plan international qu'interne, qui nous conviennent à la réflexion : que signifie le retrait de la Communauté andine des Nations concomitant à l'entrée dans le Mercosur, la signature du Traité de Commerce entre les Peuples avec Cuba et la Bolivie et le traité multimillionnaire d'investissements avec l'Iran ? Quel est le sens véritable de la politique énergétique : nationalisation ou étatisation, soit changement de propriétaire ? Quelles sont les chances d'une intégration économique régionale fondée, non plus sur les principes du libre-échange mais sur la solidarité, l'équité et la réciprocité ? Comment fêter l'avènement de la démocratie participative lorsque, au lendemain des élections, les pleins pouvoirs sont accordés au Président ? Quelle est la situation du système judiciaire, quelle est la sémantique juridique de la réforme agraire ? Autant d'interrogations qui

nous conduisent à la conclusion que le pragmatisme mâtiné d'autoritarisme pratiqué par Chávez porte un nom en Amérique latine : le caudillisme.

¿Cuál es el estado del derecho en la República Bolivariana de Venezuela a la luz de los recientes acontecimientos ? ¿Es el socialismo del siglo XXI del Presidente Chávez compatible con el Estado de Derecho ? La verdad es que, en el transcurso de los últimos meses, asistimos tanto a nivel internacional como a nivel interno a varias peripecias que nos han llamado la atención y nos invita a la reflexión : ¿qué significa la salida de la CAN simultáneamente con la entrada en el Mercosur, la celebración del Tratado de Comercio entre los Pueblos con Cuba y Bolivia y la del tratado multimillonario de inversiones con Irán ? ¿Cuál es el verdadero significado de la política energética : nacionalización o estatización, es decir sólo un mero cambio de dueño ? ¿Cuál puede ser el porvenir de una integración a escala regional sustentada, no en los principios del libre comercio sino en la solidaridad, equidad y reciprocidad ? ¿Cómo festejar el advenimiento de la democracia participativa cuando en el mismo



momento de la votación presidencial el titular de la Suprema Carga pide y obtiene los poderes especiales para gobernar mediante decretos leyes? ¿Cuál es el estado del sistema judicial? ¿Cuál es la semántica jurídica de la ley de las tierras para los campesinos? Tantos interrogantes nos llevan a la conclusión de que el pragmatismo matizado de autoritarismo del Presidente Chávez tiene un nombre en América Latina: se llama caudillismo.

According to recent facts, what about law in Bolivarian Republic of Venezuela? Is the 21st century's socialism of President Chávez compatible with law-based state? Actually, during the last months, different events occurred and made us wonder at both international and national level: what is the meaning of the ending of the partnership with the NAC and

simultaneously the entering to the *Southern Common Market* (MERCOSUR), of the inauguration of the Trade Agreement between Peoples with Cuba and Bolivia and the multimillionaire agreement for investments with the Republic of Iran? What is the real meaning of the energetic policy: nationalization or state control... merely changes the owner? What can be the future of regional integration not based on free trade principles but on solidarity, equity and reciprocity? How could we be delighted that participative democracy is emerging while the President ask for special powers and obtain them to govern by law decrees? What are the conditions of legal system? What is the judicial meaning of the agrarian reform? So many questions make us conclude that pragmatism and authoritarianism of the President Chávez have a name in Latin-America: it is called *caudillismo*.

MOTS-CLÉS

- Droit
- Système judiciaire
- Relations commerciales
- Politique économique

PALABRAS CLAVES

- Derecho
- Sistema judicial
- Relaciones comerciales
- Política económica

KEYWORDS

- Laws
- Legal system
- Commercial relationship
- Economic policy

Venezuela, espacio urbano y globalización

Hoy, la movilidad de los capitales en el mundo globalizado hace del mapa mundial el mapa potencial para las inversiones. La selectividad espacial del capital contempla ahora la posibilidad de seleccionar nuevos lugares que en este contexto asomen ventajas comparativas y competitivas para asegurar su ampliación. Espacialmente, estas variaciones revelan, en la dinámica urbana, tendencias diferentes a las registradas hasta hace una época relativamente reciente (década de los sesenta), las cuales estuvieran caracterizadas por el predominio de las ciudades más grandes sobre el resto del conjunto urbano, bajo una fuerte estructura piramidal. Esto se manifiesta con la emergencia, al lado de las ya dinámicas grandes metrópolis, de nuevos espacios urbanos, esta vez de menores dimensiones poblacionales y areales. En particular, en América Latina, ciertas ciudades medias se han convertido en espacios atractivos para el emplazamiento y desarrollo de nuevas actividades económicas con las exigencias que imponen los mercados actuales. De tal selectividad, estas ciudades derivan un mayor dinamismo, tanto demográfico como funcional y una mayor capacidad para integrarse a las redes que sobrepasan el cerco nacional, obteniendo así un rol protagónico en la organización de los espacios nacionales; su diferenciación la establecemos con el nombre de ciudades “intermedias”¹.

* Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de los Andes (Mérida). Una versión preliminar de este trabajo fue presentado en el IX Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII), celebrado en Bahía Blanca, Argentina, del 16 al 19 de mayo de 2006.

1. Denominación que surgió en el marco del proyecto conjunto GRAL/CREDAL – Proyecto *PIR-Villes* – en Francia, para diferenciar a un tipo particularmente dinámico de ciudades medias.

Es necesario aclarar que la noción de *ciudad media* hace alusión a aspectos estáticos : peso, población, mientras que la noción de *intermedia* pretende, por el contrario, señalar la importancia de elementos dinámicos : la noción de estrategia, de lugar a conquistar, de espacio a construir, de posicionamiento a ocupar, de mediaciones a suscitar entre los hombres, los capitales, de sinergias a desarrollar [Gault, 1989]².

La etapa actual se caracteriza entonces por la inserción directa de algunas ciudades en las redes globales sin que sea necesaria la escala jerárquica previamente existente, en la cual la capital del país o la ciudad que concentraba el poder económico actuaba como centro de enlace obligado entre el resto de los centros o ciudades con el sistema internacional. Así, mientras se consolida la nueva lógica territorial, en la que la importancia de cada ámbito se mide por su grado de articulación al espacio de las redes, se desdibujan los rasgos del modelo anterior y ciertos territorios pierden su papel hegemónico, llegando a entrar a veces en decadencia, mientras que otros, antes secundarios o marginales, se convierten en protagonistas [Caravaca, 1999], siendo ésta la dinámica en la que emergen las ciudades intermedias.

Incluso el Programa MOST (*Management of Social Transformations*) de la UNESCO reconoce esas transformaciones :

“Las *ciudades intermedias* constituyen nodos de la red territorial que configura el sistema urbano mundial, hoy en día fuertemente dirigido por la dinámica de la globalización económica. En una red territorial consolidada, éstas pueden ser centros regionales de equilibrio y de regulación, tanto desde el punto de vista demográfico como desde el económico, lo que puede tener un impacto sobre la reducción de la pobreza, la violencia y los perjuicios ecológicos en las grandes ciudades” [UNESCO, 1999, p. 11].

Ciudades “intermedias” emergentes en Venezuela

En Venezuela, a partir de inicios de los años ochenta y hasta finales de la década pasada (años noventa), cuatro ciudades : Maracay³, Puerto Cabello⁴, Barquisimeto⁵ y Ciudad Guayana⁶, de entre las veintitrés áreas metropolitanas (así denominadas por el Instituto Nacional de Estadística), consideradas a estos efectos ciudades medias (con un tamaño entre 100 000 y un millón de habitantes), han sido objeto principal de las grandes inversiones públicas, lo que aunado a los efectos multiplicadores esto ha generado, las han convertido en

2. Hay que aclarar que, en francés, ciudades medias e intermedias no son utilizadas como sinónimos. Se habla de ciudades medias (*villes moyennes*) en relación con la talla mediana, y de intermedias (*villes intermédiaires*) en tanto que enlace entre dos categorías distintas.
3. Ciudad industrial por excelencia, capital administrativa del estado Aragua.
4. Principal puerto marítimo del país, centro industrial con la actividad petroquímica.
5. Centro de intercambio comercial mayorista, capital administrativa del estado Lara.
6. Polo de desarrollo industrial, creado a partir de las ideas de F. Perroux y J. Friedmann - 1960 -, ciudad más importante del sur de Venezuela.



importantes centros económicos del país. Ellas aparecen, conjuntamente con la capital (Caracas) y las dos ciudades grandes (Maracaibo y Valencia), como los centros privilegiados para el establecimiento de las inversiones, sobre todo de origen extranjero, constituyendo los principales puntos de anclaje dentro del vasto tejido urbano, canalizando los mayores intercambios de inversiones, mercancías y población. Estas cuatro ciudades medias lucen como los centros urbanos de mayor autonomía relativa financiera y política, con respecto a la capital del país, para tomar decisiones que conciernen a su desarrollo. Por último, ellas muestran una gran capacidad para polarizar el espacio y erigirse en líderes de sus regiones [Pulido, 1999]. Es decir, se han erigido como ciudades “intermedias”.

En esta investigación, la tipología de las ciudades venezolanas superiores a 100 000 habitantes fue establecida según el comportamiento de tres parámetros considerados básicos para definir ciudades intermedias, a saber: *capacidad de intercambio*, *autonomía* (financiera y política) y *liderazgo* (cuadro 1, figura 1).

Estos factores resumen un conjunto de variables y sub-variables tratadas en un índice compuesto, al que se ha llamado “*indicador de intermedia*”. Los detalles metodológicos seguidos a tales efectos han sido ampliamente expuestos [Pulido, 2001]. La emergencia de ciudades “intermedias” constituía entonces una de las tendencias más resaltante de la urbanización en Venezuela, según la referida investigación, desde inicios de los años ochenta y hasta finales de los años noventa.

Desde finales de los años noventa, Venezuela confronta otros cambios

Al iniciarse la primera década del siglo XXI, Venezuela entra en un proceso de transformación político, social y económico (con la instauración de una nueva hegemonía política en la estructura de poder, tanto en el ejercicio político como en la administración de gobierno, a partir del liderazgo del presidente Hugo Chávez y del principal partido de gobierno, el Movimiento V República) que pudiera alterar la economía de las diferentes localidades y, con ello, el panorama que prevalecía hasta finales de los años noventa. Este proceso está vinculado a : 1) orientaciones políticas de retorno a viejas formas de excesiva centralización en la administración pública ; 2) amplia intervención estatista en la economía (paralización y reversión del proceso de privatización de las empresas públicas y un excesivo e improductivo gasto público) ; 3) cambios y cuestionamientos a la política económica externa que inciden en una contracción de las Inversiones Extranjeras Directas (IED) y en el desestímulo a las inversiones privadas ; y, 4) en materia territorial, el intento del Estado, al menos teóricamente, por generar una situación contraria a la tendencia histórica,

CUADRO 1 : TIPOLOGÍA DE CIUDADES VENEZOLANAS DE MÁS DE 100 000 HABITANTES

Ciudades	Indicador de “intermedia”	Calificación
Caracas	10,49	Ciudad grande
Valencia	7,29	Metrópolis incompletas
Maracaibo	8,58	
Maracay	8,42	Ciudades “intermedias”
Puerto Cabello	7,59	
Barquisimeto	6,98	
Ciudad Guayana	6,81	
Barcelona-Puerto La Cruz	6,22	Ciudades en transición
Punto Fijo	5,69	
San Cristóbal	5,35	Ciudades medias
Ciudad Bolívar	5,26	
Lagunillas	5,19	
La Victoria	5,15	
Guarenas-Guatire	4,93	
Los Teques	4,90	
Cabimas	4,85	
Porlamar-Pampatar	4,61	
Mérida	4,59	
Ciudad Lozada	4,50	
El Tigre	4,46	
Coro	3,80	
Valera	3,51	
Cumaná	3,13	
Acarigua-Araure	3,12	
Maturín	2,30	
Barinas	2,28	

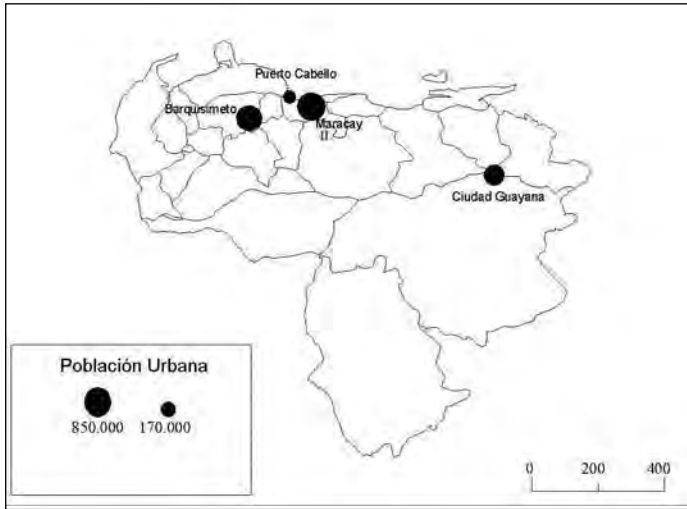
Fuente : Pulido [1999, p. 57].

respecto a la ubicación tanto de la población como de las inversiones. Estas transformaciones ocurren simultáneamente con unos aumentos excepcionales en los precios internacionales del petróleo, lo cual significa importantes ingresos fiscales adicionales al Estado venezolano y, con ello, nuevos esquemas de reparto de la renta petrolera.

La tesis que aquí se sostiene es que esos cambios pudieran alterar el panorama bajo el cual emergían las ciudades “intermedias” y amenazar el rol de líderes regionales que bajo las condiciones precedentes habían alcanzado, o que,



FIGURA 1 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS CIUDADES “INTERMEDIAS” EN VENEZUELA



pese a conservar cierta ascendencia respecto al resto del conjunto urbano, éstas pudieran frenar el fuerte impulso que mostraban en los diferentes parámetros y que les aseguraran el papel de privilegio relativo en el contexto urbano nacional. A tales efectos se propone hacer una revisión de esos cambios a fin de analizar sus posibles efectos en el contexto socio-espacial en el que se conformaban las “ciudades intermedias”.

La capacidad de intercambio

Uno de los parámetros fundamentales para definir a las ciudades “intermedias” es la *capacidad de intercambio*, entendida como la posibilidad que tienen las ciudades para situarse como centros privilegiados para los intercambios en el vasto tejido mundial (o puntos de apertura hacia la internacionalización de los territorios de los cuales son motores). En Venezuela, la misma ha sido inferida a través de : 1) los montos y el comportamiento espacial de las inversiones extranjeras y el lugar de importancia que, como lugar de recepción, le concede la localización de dichas inversiones a una determinada ciudad ; 2) la capacidad que tienen dichas ciudades para acoger a las empresas exportadoras ; 3) el avance de la privatización en las empresas locales y la participación que en ello tuviera el capital de origen extranjero ; y 4) así como el grado de atracción que ejercen las ciudades sobre las inversiones privadas.

Al respecto, en los últimos siete años, una serie de cambios con tendencias inversas a las hasta entonces registradas, en el comportamiento de estas variables, permite suponer la direccionalidad de los mismos : el proceso de

CUADRO 2 : INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS

Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Millones de dólares	1551	516	585	728	297	295	492	915*
% del PIB	2,79	1,35	0,90	1,10	0,43	0,31	0,44	—

* Cifras provisionales

Fuente : SIEEX, publicado por venamcham.org

privatización de las empresas públicas en Venezuela, que se implementara con mayor fuerza en la década de los noventa, fue detenido dándose una vuelta a la intervención estatista en la economía. En este período los ingresos por concepto de exportaciones petroleras, con una tendencia marcada al alza de los precios del petróleo, está permitiendo un crecimiento apreciable de la economía, concediendo al gobierno la posibilidad de intervenir en la economía nacional por la vía del gasto público.

Las inversiones extranjeras directas, por su parte, han tendido a bajar a lo largo de ese período (cuadro 2). A partir del año 2004 vuelven a mostrar un alza sin que las mismas se equiparen, sin embargo, con los montos iniciales.

Es necesario tomar en cuenta el alto riesgo político e institucional que Venezuela supone para los inversionistas extranjeros (riesgo país), lo cual incide negativamente en su capacidad para atraer nuevas inversiones. El riesgo-país se mide por la diferencia entre el interés que pagaría Venezuela por un bono de deuda pública y el que ofrecería uno similar emitido por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos [Rojas, 2001]. Éste, si bien se mantiene por debajo del de Brasil y Argentina, no obstante presenta valores por encima de los de Colombia, Perú, México y Chile, entre los países latinoamericanos. Y es que la vigorosa posición de las reservas internacionales mostrada por el país desde 2004 se ha traducido en una importante disminución de los niveles de riesgo país desde 951 puntos básicos (pb) entre 1998-2001 hasta 215 pb en el 2006. Por lo que, mientras los precios internacionales del petróleo y el nivel de reservas internacionales se mantengan en los niveles actuales, el riesgo país no debería variar hacia una alza sustancial [Conapri, 2006].

El Índice de Libertad Económica es otro indicador de desempeño⁷, el cual, a partir del análisis de ciertos factores (entre los que se incluyen el impacto de las leyes impositivas, las regulaciones, la intervención del gobierno en la economía, el respeto por el derecho de propiedad, la apertura a la inversión extranjera), permite medir el grado de libertad económica en los países o economías del mundo [Temas Públicos, 2006]. Según este indi-

7. Elaborado por el *Heritage Foundation* y *Wall Street Journal* desde el año 1995.



cador, Venezuela resultó uno de los países más reprimidos del planeta, junto con Cuba y Libia [The Heritage Foundation y Dow Jones, 2006].

Es probable que los indicadores anteriores estén en la base de la explicación del bajo nivel de competitividad de Venezuela en el contexto mundial. Ciertamente, Venezuela ocupó el puesto 82 entre 102 países en el ranking global para el período 2003-2004, debido a claras desventajas en sus políticas macroeconómicas e institucionales [Competitividad Andina, 2003]. Y el último puesto (lugar 61) en el ámbito latinoamericano en el año 2006 [República de Colombia, 2006].

Por otra parte, las exportaciones no petroleras mantienen un comportamiento casi constante, en tanto que las importaciones no cesan de aumentar, sobre todo en el sector correspondiente a los bienes intermedios (cuadro 3). Paralelo al discurso oficial de “desarrollo endógeno”, las importaciones directas del sector público se han incrementado de manera importante, principalmente a través de la Misión Mercal, concebida como una red de abastecimiento que ofrece alimentos de la cesta básica a precios bajos y sin intermediarios, sin cancelar aranceles, ni impuesto al valor agregado, sobre el precio de importación. Esto, por supuesto, actúa en desmedro de las industrias locales del sector privado.

CUADRO 3 – INTERCAMBIO COMERCIAL NO PETROLERO EN MILLONES DE DÓLARES

Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005*	2006*
Exportaciones	5.442	4.122	5.114	5.152	4.908	4.919	6.754	6.600	4.581
Importaciones	12.873	11.565	13.732	15.244	10.948	9.321	15.788	23.955	20.562

* Cifras provisionales

Fuente : BCV, publicado por venamcham.org

Este escenario se desenvuelve en un entorno energético nacional caracterizado por un alza continua de los precios internacionales del petróleo: el precio del barril alcanza en este período su máximo record histórico, habiendo ascendido desde 18 dólares/barril, hace apenas cinco años hasta acercarse hoy a los 60 dólares (cuadro 4).

Respecto a la selectividad espacial de las inversiones, los resultados del estudio que realizara el Consejo Nacional de Promoción de Inversiones para el año 2005, a fin de evaluar el potencial de las ciudades más importantes del país como polos de atracción de capitales, a través del Índice de Atracción de Inversiones (IAI), muestra en su última edición que Caracas resultó la ciudad más atractiva para las inversiones, ubicándose a la cabeza del ranking, relegando a Valencia, capital regional, la cual, en sus tres estudios anteriores, había descollado como la urbe nacional más competitiva [CONAPRI, 2005].

CUADRO 4 : PRECIOS DEL PETRÓLEO, 1998-2006

Año	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Venezuela Promedio	10,57	16,04	25,91	20,21	21,95	25,65	33,25	54,42	50,47
Promedio OPEP	12,33	14,47	27,55	23,12	26,06	28,10	35,51	58,19	55,24
BRENT	12,76	17,87	28,38	24,46	24,93	28,84	37,30	63,96	59,12

Fuente : venamcham.org y veneconomía.com

Esto no significa que Caracas haya mejorado su nivel de competitividad en el escenario internacional, sino que las ciudades medias venezolanas se han debilitado. Esto parece confirmarse si se atiende a la evaluación realizada a cuarenta ciudades latinoamericanas en términos de competitividad del sector privado y atracción para los negocios [América Economía, 2005], en donde Caracas ocupa uno de los últimos lugares debido, entre otros aspectos, a sus altos índices de criminalidad y su posicionamiento débil en el mundo de los negocios.

Esto revela que los cambios en la vida económica del país han afectado a todas las ciudades de manera general, más aún, ello ha significado una reversión del proceso de valorización de las áreas urbanas, distintas a la metrópoli. En concreto, esto se traduce en una pérdida de competitividad de las ciudades intermedias emergentes.

Capacidad de autonomía

La *autonomía* es otro de los parámetros que definen la condición “intermedia” de una ciudad. Es entendida como la mayor capacidad que tienen las ciudades para producir y gerenciar sus propios recursos financieros (dependiendo cada vez menos de la administración central), en la búsqueda de un desarrollo autónomo y consensual que de prioridad a la satisfacción de las necesidades de sus comunidades. En el estudio de las ciudades intermedias [Pulido, 1999], la *autonomía* ha sido evaluada a través de un análisis de las cuentas de los municipios capitales⁸, y de las expresiones políticas que se deducen del comportamiento electoral en los diferentes períodos electorales.

La descentralización también concede mayor autonomía a las ciudades. Por eso, el análisis de este parámetro exige revisar los avances de ese proceso. Hasta mediados de la década de los noventa, la descentralización facilitó, a

8. Entre otros: el peso de los recursos producidos por el municipio y sus tendencias, el de los devenidos en la descentralización, la capacidad de inversión del gobierno local, la importancia relativa de los gastos en servicios sociales, etc.



las diferentes unidades territoriales, iniciar un camino hacia la búsqueda de su desarrollo en función de sus ventajas comparativas y de una mayor autonomía relativa financiera, administrativa y política, lo cual les permitiría posicionarse mejor en el contexto nacional.

Pero, con la paralización por parte de la actual administración, tanto del avance de la descentralización como de la búsqueda de crecimiento sin inflación y de la racionalización del gasto público, así como ante el fracaso del intento de apertura y de liberalización, esas tendencias parecen revertirse o sencillamente sobrevivir sin bases sólidas. En efecto, en el año 2000, el gobierno modificó dos de las leyes que rigen la asignación de recursos públicos a las unidades territoriales: la Ley de Asignaciones Especiales⁹ (LAE) y la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización¹⁰ (FIDES), sin que se incrementaran los porcentajes del presupuesto concedidos a través de esas asignaciones. En posteriores modificaciones a estas leyes, se estableció la reducción de estas asignaciones presupuestarias: se intentó disminuir a una cuarta parte los aportes al FIDES y dejar a discreción de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo la porción de lo asignado para los años siguientes. Un año después (abril, 2001), se discutió una ley de Hacienda Pública Estatal (ANC) y una para el Fondo de Compensación Interterritorial, que sustituyeron a toda la legislación anterior en materia de distribución territorial.

La actual administración modificó la ley del Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica¹¹ (FIEM) para no hacer más aportes a partir de octubre del 2002. Contrario a lo anteriormente establecido en la Ley, fueron gastados todos los recursos represados hasta el 2003, exceptuando los de Petróleos de Venezuela (PDVSA), aún cuando el período ha sido de incremento de los precios del petróleo y su consecuente ingreso, y no de caída de los mismos. Junto a esto tenemos entonces que, por un lado, el gobierno ha limitado los mecanismos tanto del Situado Constitucional¹², como el de la LAE, la FIEM, y el FIDES y por el otro, hace permanente e imprevisible los

9. Esta asignación se financia con 20 % de la regalía que retiene el gobierno central luego de los aportes para el Situado Constitucional; un 70 % va para los estados petroleros y un 30 % para los no petroleros, se asigna a proyectos evaluables y se otorga según un rango de prioridades.

10. Entre los estados y municipios se distribuye el 15 % de lo que se recauda por Impuesto al Valor Agregado (IVA), en proporción a indicadores poblacionales y de pobreza que incluyen un Fondo de Compensación Interterritorial.

11. Fondo creado con los montos adicionales de ingreso petrolero, más allá de un cierto valor previsto para el barril de petróleo en el presupuesto nacional (15 dólares/barril en el 2002). Una parte se asigna al gobierno central, otra a las gobernaciones y alcaldías y otra a PDVSA. Se prevé que se acumule en períodos de bonanza, represándolos para ser utilizados en períodos de caída del ingreso.

12. El Situado Constitucional es una partida incluida anualmente en el Presupuesto Nacional de Gastos Públicos equivalente a un porcentaje de los ingresos ordinarios (20 %), se distribuye de acuerdo a un porcentaje fijo (30 %) para los estados y un porcentaje proporcional a su tamaño poblacional.

retardos en la entrega de las asignaciones a los estados y municipios [Rojas, 2004]. Todo esto evidentemente afecta el desempeño de las diferentes unidades territoriales y en consecuencia sus posibilidades de desarrollo.

La trayectoria de los aportes a las regiones desde 1998 hasta 2005 (cuadro 5), permite apreciar la evolución de dicho proceso.

CUADRO 5 : PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL GASTO TOTAL
(MILLONES DE BOLÍVARES)

Años Concepto	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Situado Constitucional	13,1	12,7	12,6	11,3	12,2	13,0	12,4	14,9
Fondo intergubernamental Descentralización	3,5	3,2	2,5	2,1	1,6	2,3	2,2	2,9
Ley de Asignaciones Especiales	2,7	1,9	2,9	2,1	2,7	3,1	2,9	2,3
Total Descentralizado	19,3	17,8	18,0	15,5	16,5	18,4	17,5	20,1

Fuente : Rojas [2004]; OCEPRE. Ley de Presupuesto, 1992-1997 ; INAPRE [2006].

La otra dimensión del componente *autonomía* aquí considerada está vinculada con el comportamiento político de las diferentes unidades territoriales. En la medida en que la orientación política de los gobiernos locales les conceda manifestaciones de nuevas formas de poder, en oposición al poder central, se supone que se traduciría en una mayor autonomía de estas áreas y en formas representativas del poder más plurales, es decir, más democráticas.

El avance de la descentralización y la dinámica política que hasta finales de la década de los años noventa prevalecía en el país, hacía suponer que se transitaba desde una sociedad caracterizada por la concentración del poder político a otra de amplia distribución de este poder. Bajo este esquema, las ciudades intermedias acusaban un comportamiento político caracterizado por la predominancia de actores y agrupaciones con una mayor heterogeneidad y diversidad de intereses políticos y sociales, como lo reflejaron los resultados de las elecciones regionales [Pulido, 1999].

Sin embargo, la dinámica petrolera en Venezuela introduce un elemento paradójico: los períodos más democráticos se corresponden con aquellos de crecimiento moderado o decrecimiento del ingreso petrolero, mientras que por el contrario, los menos democráticos, o de mayor concentración de poder, se asocian con períodos de mayor crecimiento de ese ingreso [Rojas, 2003].

Hoy, ante el aumento del ingreso petrolero, debido a los incrementos en los precios internacionales, la tendencia parece repetirse, respondiendo al



comportamiento cíclico, que vincula la renta petrolera con la concentración del poder. Esta concentración se traduce en el predominio del partido de gobierno en la mayoría de las diferentes unidades administrativas como resultara en los últimos comicios regionales (octubre de 2004).

Este examen hace suponer que las ciudades intermedias encuentran hoy disminuido el abanico de posibilidades políticas y de negociaciones que habrían ganado con el avance de la descentralización, lo cual podría restarles dinamismo (haciéndolas menos autónomas, en todo caso, y más dependientes del poder central) para posicionarse en el nuevo contexto competitivo de la globalización.

Capacidad de liderazgo

El último parámetro considerado para definir a las ciudades “intermedias” es *el liderazgo*, entendido como la capacidad que tendrían las ciudades para polarizar el espacio. Ello es evaluado a través de la existencia de ciertas actividades claves para el movimiento global de concentración urbana, tales como la industria, la investigación y la enseñanza superior, las cuales no sólo simbolizan la inserción de una ciudad dentro de una sociedad moderna, sino que le conceden también un poder económico cultural y político adicional que se traduciría por una más vasta influencia territorial. Pero a su vez, la educación e investigación incide en otro componente esencial de la competitividad, referido a los recursos humanos disponibles tanto en calidad de formación como en su capacidad de innovación y adaptación a los nuevos requerimientos de la producción globalizada.

Con respecto a la dinámica experimentada por la actividad industrial venezolana, los efectos negativos de las actuales políticas económicas se pueden inferir a partir de los siguientes indicadores :

Caída progresiva del índice de producción industrial [Boletín de Coyuntura Económica e Industrial, Febrero 2004] ; este descenso ayuda a explicar porque el 58 % de las industrias venezolanas cerrara sus puertas entre 1998 y 2003 [CONINDUSTRIA, 2004].

Por esta misma razón, el empleo industrial se contrajo en 42 % en el mismo lapso [Globovision, 15 de octubre de 2003].

El nivel total de desempleo después de haber alcanzado una tasa de 19,2 %, en mayo de 2003 [DATANALISIS, 2004], disminuyó a 13,9 % al final del 2004. Al respecto, es necesario señalar que el descenso de esas cifras parece responder a la incorporación de desempleados como beneficiarios de las llamadas misiones, incrementando de esta manera la población inactiva que no busca empleo porque está recibiendo alguna beca de las misiones, y a las cooperativas que adelanta la actual administración (cuadro 6)¹³.

13. Los miembros de cooperativas se incrementaron de 100 342 en 1996 a 177 052 en el 2005, lo que significa un incremento de 76,5 %, porción que se sumara al empleo en el sector privado.

CUADRO 6 : TASA DE DESEMPLEO SEMESTRAL, 1998-2005

Año	1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006	
Semestre	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Total	11,3	11,0	15,3	14,5	14,6	13,2	13,7	12,8	15,5	16,2	19,2	16,8	16,6	13,9	15,0	13,0	10,6	9,5

Fuente : BCV y INE.

Las ventas globales realizadas por el 55 % de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), sufrieron una disminución apreciable en el 2003 y el 2004 [CONINDUSTRIA, 2004]. El índice de precios al consumidor ha variado en 225 % entre 1998 y 2003, mientras que las remuneraciones sólo habían crecido en promedio un 99 % en el mismo período [DATANALISIS, 2004]. El PIB per cápita, a precios constantes de 1984, ha descendido en un 15 % entre 1998 y 2002 (Banco Central de Venezuela). En consecuencia, se observa una profunda expansión de las actividades informales de la economía; en efecto, el empleo informal asciende a 53,60 % de la Población Económicamente Activa (PEA) en el 2003 [CONINDUSTRIA, 2004]. El empleo informal se incrementó de 49 %, al cierre del 98, a 55 % para finales del 2004 [VENAMCHAM, Febrero 2004].

De manera general, después del 2004, los resultados económicos de Venezuela parecieran mostrar una recuperación que pudiera estar asociada a varias razones de peso : los elevados precios del petróleo por la coyuntura internacional, los cuales han impulsado un gasto público desmedido, el cambio en la base de comparación de los indicadores económicos y por último el cambio, en algunas categorías conceptuales, decididas por el gobierno central, a fin de que evidenciaran los efectos de las misiones u otras formas de reparto de la renta.

Con respecto al cambio en la base de comparación, las cifras de crecimiento económico del período 1998-2004 han variado considerablemente luego de que el Banco Central de Venezuela cambiara el período de base para la medición del Producto Interno Bruto. El año considerado base para medir el valor constante de la producción de bienes y servicios del país era 1984, pero el BCV lo cambió a 1997 como nueva base de la comparación. Si bien estos cambios no producen grandes diferencias en materia de PIB petrolero (-2,4 % para 2004), sí lo hacen en el PIB no petrolero (8,3 %), alterando lo que hasta hace poco se pensaba era el desempeño económico de Venezuela [Santos, 2004].

Estos indicadores, junto con los considerados en el parámetro de *intercambio*, permiten suponer un efecto negativo en las ciudades cuya actividad industrial les generaba dinamismo.

Pero además, en el desarrollo de las economías actuales cobra una gran importancia la innovación. La ciencia y la tecnología se han constituido en el



motor de aceleración del desarrollo y de las transformaciones económicas, convirtiéndose en una política central prioritaria. Esto ha llevado a que las inversiones en infraestructura para la innovación se focalicen en universidades, centros de investigación, incubadoras de empresas e infraestructuras de tecnología. Por ello, algunas ciudades intermedias se proponen como estrategia de desarrollo ser centros de innovación y desarrollo tecnológico, proporcionando ambientes que incentiven la creatividad y el intercambio, a través de equipamiento e infraestructura para desarrollar eventos de carácter internacional: culturales, científicos y deportivos, entre otros.

Respecto a las actividades de investigación y de enseñanza superior, es necesario considerar que en el nuevo contexto de la globalización, la noción tradicional de formación universitaria parece cambiar bajo el influjo de la sociedad del conocimiento. No se trata ya solamente de un mayor acceso de los individuos a la formación superior, como un objetivo de democratización de la sociedad, sino sobre todo, de una herramienta más eficiente y globalizada para enfrentar la competitividad económica a través de la calificación profesional y la renovación tecnológica. Uno de los componentes esenciales de la competitividad de las ciudades está referido entonces a la disponibilidad de recursos humanos, tanto en calidad de su formación como en su capacidad de innovación y adaptación a los requerimientos de la producción globalizada. Ello depende, en una buena medida, de la acción estatal en materia de educación y de investigación pero también del rol del sector privado en cuanto a los mecanismos de formación de recursos e investigación y desarrollo de nuevos productos así como nuevas tecnologías y creación de empresas en los sectores dinámicos del modelo productivo actual [Blanco y Gurevich, 2002].

En Venezuela, los cambios políticos recientes también han afectado la formación de recursos humanos. Tradicionalmente en el país han existido varios tipos de universidades: las autónomas, las experimentales y las privadas, a las que se agregan los institutos universitarios, politécnicos, pedagógicos, tecnológicos, eclesiásticos, militares, colegios e institutos universitarios, así como reconocidos centros de investigación tales como el Centro de Desarrollo Tecnológico de Petróleos de Venezuela (CIED), asociado al Instituto Tecnológico Venezolano de Petróleos (INTEVEP) y el Instituto Venezolano de Investigación Científica (IVIC), entre otros.

En las universidades autónomas, recientemente se han manifestado unos elementos anti-autonomía vinculados al centralismo del actual régimen. Un ejemplo de ello lo constituyen algunas solicitudes, de parte de algunos miembros universitarios, para la intervención de éstas por parte del gobierno central. Esto se ha acompañado de otro hecho, muy concreto, vinculado con su presupuesto. Estas instituciones dependen, en más del 90 %, de asignaciones presupuestarias periódicas provenientes del gobierno central. En los últimos

años, estas asignaciones están siendo más irregulares de lo que alguna vez lo fueran en el pasado, lo cual atenta contra su normal desempeño.

De otro lado, las universidades experimentales poseían autoridades escogidas mediante un proceso de selección interna. En algunos casos, las comunidades universitarias de estas organizaciones elevaban al ministerio de Educación, de entre sus miembros, una lista de candidatos designables para que el Ejecutivo Nacional, a través de este ministerio, escogiera las autoridades. En su lugar, la actual administración intervino administrativamente a la mayoría de ellas, y ahora sus autoridades son designadas desde el gobierno central, en función de intereses meramente políticos. Estas universidades, que habían sido diseñadas para actuar en tanto que factores de desarrollo regional (por ejemplo Universidad Ezequiel Zamora, en Los Llanos Altos Occidentales ; Rómulo Gallegos en Los Llanos Centrales, Francisco de Miranda en la región semi-árida del Occidente venezolano, UNISUR en el Sur del Lago de Maracaibo ; la de Guayana con influencia al Sur del Orinoco), pierden tanto calidad académica como el rol protagónico en sus respectivas regiones para convertirse en instituciones politizadas.

Las universidades privadas, por el contrario, están jugando un rol fundamental en la formación profesional de nivel superior, sobre todo en las grandes ciudades : Universidad Católica Andrés Bello, Metropolitana, Tecnológica del Centro y Rafael Bellosó, son algunos ejemplos.

Por otro lado, el INTEVEP constituía uno de los más importantes centros de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico de Venezuela y de América Latina. Después de la participación de la mayoría de su personal en el paro petrolero general del 2002, sufrió las represalias del gobierno, el cual, bajo un supuesto programa de reestructuración, desmanteló este importante centro de investigación, así como a la filial de educación : Centro Internacional de Estudios y Desarrollo, CIED [Requena, 2003].

Un destino incierto también es el que conoce el Instituto Venezolano de Investigación Científica (IVIC), ya que el componente político cobra un peso importante en las decisiones que le conciernen a esta organización, pudiendo prevalecer por encima de los criterios científicos y de excelencia. El recorte presupuestario es uno de los mecanismos implementados por el gobierno para intervenir tales instituciones, según declaraciones del investigador López Padrino, premio de la Sociedad Internacional de Neurología y Premio Fundación Polar¹⁴.

Paralelamente, el gobierno crea, a mediados del 2003, la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), la cual pretende ser una alternativa para los estudiantes excluidos de los sistemas de admisión de las universidades autóno-

14. <http://www.vivavenezuela.nl>



mas, experimentales y privadas. Ésta acoge a los estudiantes, sin mayores exigencias académicas, bajo un nuevo esquema de aprendizaje en carreras no tradicionales, orientadas hacia el trabajo con las comunidades, por lo que esta universidad no pretende formar élites profesionales, sino cuadros comunitarios.

Pudiera decirse que la orientación general que se le pretende dar a la educación superior en Venezuela hoy se resume en la paradoja : masificación versus excelencia. Bajo esta premisa, el sector de la educación superior y de la investigación se encuentra lejos de constituir la plataforma desde la cual se gesticione un proceso de innovación y modernización de las áreas que les permita a las ciudades ampliar sus influencias territoriales y enfrentar los retos económicos que plantea la globalización.

El entorno socioeconómico, cultural y ambiental es considerado por las empresas como un elemento importante para tomar decisiones de inversión. Sin duda, los entornos con mejores niveles de vida resultan recíprocamente más atractivos para el desarrollo de las actividades productivas, es una especie de círculo virtuoso [Castells, 1994]. En Venezuela, sin embargo, la pobreza urbana continúa incrementándose, a pesar de los gastos en materia social. Si se atiende a las cifras que arrojan los indicadores convencionales (Líneas de pobreza¹⁵, Necesidades Básicas Insatisfechas¹⁶), tradicionalmente utilizados por los organismos oficiales, esa tendencia signa esta etapa de la historia del país, lo que sugiere una disminución progresiva de la calidad de vida de la población. Ante esta situación, la actual administración planteó la necesidad de generar indicadores que mostraran tanto los avances en la gestión pública social, como el impacto de las misiones que adelanta, los cuales no eran ponderados por los métodos tradicionales. Es así como una comisión interinstitucional propuso un indicador denominado Índice de Bienestar Social, el cual, según fuera anunciado, presentaría de manera más armónica los resultados de los esfuerzos que adelanta el gobierno en materia de inclusión social [VENAMCHAM, Julio 2005]. Esta nueva modalidad de medición sí refleja una disminución significativa de la pobreza, en los valores presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir del 2005 (cuadro 7). Si atendemos a las estadísticas publicadas por los organismos internacionales, éstos usan información nacional, es decir, también utilizan cifras “oficiales” y las presentan de manera homogénea para comparar los países. En razón de ello, el “velo de imparcialidad” que en ocasiones se le quiere endosar a estas cifras o métodos internacionales (por ejemplo al Índice de Desarrollo Humano del PNUD) no van más allá de la validez que tienen

15. Establece parámetros basados en la posibilidad de consumo de alimentos, bienes y servicios, por parte de la población, de acuerdo a su capacidad adquisitiva.

16. Evalúa la presencia en los hogares de variables como: niños en edad escolar que no asisten a las escuelas, hacinamiento crítico, viviendas inadecuadas, viviendas sin servicios básicos y con alta dependencia económica.

CUADRO 7 : INDICADORES DE POBREZA SEGÚN UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

Fuente	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
INE	55,6	49,0	43,9	41,6	39,1	41,5	54,0	53,1	38,5	—
UCAB	58,0	49,0	49,9	49,5	48,2	41,5	60,2	59,6	57,9	54,3
Diferencia	-2,4	0,0	-6,0	-7,9	-9,1	0,0	-6,2	-6,5	-19,4	—

* Fuente: Venancham.

las propias cifras nacionales y, por otro lado, su utilidad específica suele ser más para comparar la situación entre países que para evaluar la situación interna de cada uno [España, 2006].

La búsqueda del equilibrio territorial

Desde la época precolombina, en un proceso que abarca ya casi seis siglos, el emplazamiento de la población y de las actividades económicas, en lo que posteriormente sería Venezuela, ocurrió en el área de mayor concentración actual de la población (proceso ampliamente estudiado : López, 1968 ; Chaves, 1974 ; Papail y Picouet, 1987 ; Amaya, 1999 ; Ríos, 2000). Ese proceso de configuración territorial privilegió la concentración de la población y las inversiones en las costas, en particular en la llamada zona centro-norte-costera. Es aquí donde se localizan las principales ciudades del país, incluido un corredor urbano de dimensiones megalopolitanas alrededor de la capital.

Hasta los años noventa, la urbanización en Venezuela ponía de relieve no solamente la emergencia de cuatro ciudades intermedias, ante la pérdida de importancia relativa de la ciudad capital, sino la formación de un área de dimensiones megalopolitanas, que engloba e integra a dos de dichas ciudades junto con Caracas, capital administrativa, y a Valencia. Esto hacía que, además de servir a sus respectivas áreas de influencia y revitalizar de manera creciente sus economías, las ciudades “intermedias” de Maracay, Puerto Cabello (y, aun cuando un tanto más alejada físicamente, Barquisimeto), fueran llamadas a jugar un rol de complementariedad a la escala de la unidad espacial de la cual forman parte, la megalópolis centro-norte-costera [Pulido, 2004].

Las actuales orientaciones de política territorial en Venezuela pretenden, al menos en el discurso, revertir este panorama bajo el cual el país se preparaba para insertarse en el contexto globalizado de la economía.



¿ Nuevas propuestas territoriales ?

El Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001-2007 generó un diagnóstico que atribuye al patrón de distribución concentrada de la población sobre el territorio la causa fundamental de los problemas del país en materia territorial [Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2001], así como la gravedad de problemas tales como el estancamiento económico, las migraciones, la marginalidad, la pobreza y el deterioro ambiental. Todo lo cual afectaría sensiblemente el desarrollo del país.

Este plan (2001: 9) propone como objetivo general : *“Ocupar y consolidar el territorio de forma más equilibrada”* mediante una estrategia de descentralización desconcentrada, la cual se apoya en los siguientes elementos :

- Desarrollo de las Fachadas de Integración.
- Fortalecimiento y desarrollo de Ejes de Desconcentración.
- Fortalecimiento de la Dinámica Regional.
- El Proyecto PAIS (Pueblos Agroindustriales Sostenibles) y SARAOS (Sistema de Aldeas Auto-Organizadas Sustentables).
- Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (ZEDES).

¿ Hacia dónde conducen las “nuevas” propuestas territoriales ?

La evaluación que se hace en este plan, sobre desequilibrio territorial y excesiva concentración de actividad económica y población, no es nueva, en planes precedentes ya se hacía referencia a esto. El nuevo plan, por tanto, no sugiere nada novedoso; sólo ratifica diagnósticos anteriores, atribuyéndole una causa (el neoliberalismo) que, a lo sumo, sólo puede haber reforzado la tendencia precedente [Rojas, 2001].

Las estrategias socioterritoriales contenidas en el nuevo plan proyectan activar nuevos ejes de desarrollo en función de enormes inversiones públicas en áreas poco pobladas, mientras se desatienden aquellas que más lo requieren. Ello revela el desconocimiento de las fuerzas de la dinámica distributiva del ingreso petrolero y del poblamiento, las cuales continuarán atrayendo los recursos y la población hacia el centro.

De los tres ejes de desconcentración definidos, el Orinoco-Apure, considerado el proyecto bandera por la actual administración, es quizás el más cuestionable, ya que su base territorial se sustenta en el desarrollo del sur del país, en las áreas menos pobladas, lo que implica la movilización de enormes recursos financieros y el desarrollo de nuevos sistemas de transporte, para intentar, sin garantía alguna, movilizar población e inversiones. Este proyecto ya había sido formulado y abandonado a mediados de los años ochenta, a raíz de la caída del ingreso petrolero, luego de constatar la imposibilidad de man-

tener la navegabilidad por los cauces de los ríos por más de seis meses al año. Con el nuevo plan, el gobierno pareciera ignorar los fracasos de proyectos precedentes y con una orientación similar. Ejemplo de esto serían los programas de la Conquista del Sur del Orinoco, Áreas de Desarrollo Rural Integrado (ARDI), el Integral de los Llanos Altos Occidentales (PIALLO), Ciudad Sucre (en la frontera) y el eje fluvial Orinoco-Apure.

En definitiva lo que Venezuela, un país con más del 87 % de la población viviendo en ciudades requiere, de manera urgente y por esta misma razón, es equipar a sus ciudades para asegurar una mayor calidad de vida a sus habitantes, viabilizar sus economías y concederles la posibilidad de una mayor autonomía, y no pretender bajo un esfuerzo voluntarista trasladar la población a lugares menos poblados, pues en su trayectoria histórica ésa nunca ha sido la tendencia, lo que conllevaría probablemente al fracaso inminente de tal política.

De todo esto se desprende además que las actuales políticas territoriales, en Venezuela, están signadas por una carga ideológica antiurbana, donde las ciudades son vistas como centro de los males de la sociedad y, en contrapartida, se acaricia la idea romántica, nostálgica, hartamente idealizada, de la vida armónica en los pueblos y villas.

El mito de una distribución de la población “equilibrada” sobre el territorio, creado a imagen de los modelos teóricos espaciales, ha sido abandonado hace largo tiempo por los ordenadores del territorio, incluso en los países que lo promovieran, ante la constatación de que ello no repercutía diferencialmente en el desarrollo económico y bienestar de la población. Estados Unidos es un buen ejemplo de ello con el 80 % de la población en sus costas. En Venezuela, sin embargo, y pese a que no se especifique cuál es el precepto teórico que lo orienta, aún se insiste en tal equilibrio.

Lo que se debiera lograr, en definitiva, es que junto con los planes de desarrollo regional, se le de prioridad a lo que reclaman las áreas a través del peso de sus habitantes, y en Venezuela, éstos se encuentran asentados en las ciudades, las cuales tienen una concentración espacial importante en el área centro-norte-costera.

Más aún, se le debe conceder un tratamiento especial a aquellas ciudades más dinámicas, del sistema urbano, pues ellas constituyen los vehículos de integración del país en el contexto globalizado de la sociedad. Las ciudades “intermedias” venezolanas merecerían una consideración y tratamiento particular.

Como conclusión: nuevos acomodos espaciales

Al ser afectadas, como lo evidencian los indicadores aquí expuestos, las actividades y dinámicas que en el pasado reciente estimularan y valorizaran de



manera importante a las ciudades venezolanas, y particularmente a las ciudades “intermedias”, se puede inferir que éstas últimas resultan perturbadas en sus capacidades competitivas, es decir en sus capacidades de *intercambio*, *autonomía*, y *liderazgo*, o en su condición de “intermedias”, transformando así su situación de privilegio relativo de que gozaban en el contexto globalizado; con ello se redefinen, a su vez, nuevas tendencias en la organización del espacio y en la dinámica urbana en Venezuela, la cual apunta hacia viejas formas ya conocidas de predominio de la capital sobre el resto del conjunto urbano.

BIBLIOGRAPHIE

- **AMAYA Carlos**, “Desarrollo Histórico del Sistema Urbano Venezolano: Modelos de Organización”, *Revista Geográfica Venezolana*, 40(2), 1999, p. 167-199.
- **BLANCO Jorge, GUREVICH Raquel**, “Una Geografía de las ciudades contemporáneas: nuevas relaciones entre actores y territorios” in **ALDEROQUI Silvia, PENCHANSKY Pompei (comp.)**, *Ciudad y Ciudadanos. Aportes para la enseñanza del mundo urbano*, Buenos Aires, Paidós, col. “Cuestiones de Educación”, 2002, p. 67-93.
- **CARAVACA BARROSO Inmaculada**, “Efectos de la globalización en el sistema urbano andaluz”, *Estudios Regionales*, nº 54, 1999, p. 291-307.
- **CASTELLS Manuel, HALL Peter**, *Las tecnologías del mundo. La formación de los complejos industriales del Siglo xx*, Madrid, Alianza Editorial, 1994.
- **CHAVES VARGAS Luis Fernando**, *Proceso y patrón espacial de la urbanización en Venezuela durante el periodo 1961-1971*, Mérida, ULA, IGCRN, 1974.
- **CONAPRI**, *Las ciudades más atractivas para invertir*, Caracas, Gerencia de Comunicación de CONAPRI, 2005.
- **CONAPRI**, *Informe de inversiones*, Caracas, Venezuela, 2006. Edición electrónica publicada en el sitio web: http://www.conapri.org/download/Informe_Inversiones_2006.pdf
- **ESPAÑA Luis Pedro**, *Las cifras de la pobreza en Venezuela. De las medias verdades a la utilidad verdadera*, Caracas, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, Universidad Católica Andrés Bello, “Documento de trabajo”, 2006. Edición electrónica publicada en el sitio web: http://www.acuerdosocial.com/download/cdt_256.rtf
- **GAULT Michel**, *Villes intermédiaires pour l'Europe?*, France, Syros Alternatives, 1989, 191 p.
- **LÓPEZ José Eliseo**, *Tendencias Recientes de la Población Venezolana*, Mérida, IGCRN, Universidad de Los Andes, 1968.
- **PAPAIL Jean, PICOUE Michel**, *Des villes et du pétrole. Aspects historiques et prospectives des populations urbaines au Venezuela*, France, Éditions de l'Orstom, 1987.
- **PULIDO Nubis**, *Les Tendances récentes de l'urbanisation au Venezuela : le rôle des villes moyennes*, Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail, Thèse de doctorat de géographie et aménagement (Inédit), 1999.
- **PULIDO Nubis**, “Emergencia de Ciudades ‘Intermedias’. Rasgo más resaltante de la Urbanización Venezolana actual. Procedimiento Metodológico para su Identificación”, *Octavo Encuentro de Geógrafos de América Latina*, Santiago de Chile, Marzo 2001.
- **PULIDO Nubis**, “Globalización y surgimiento de ciudades ‘intermedias’ en América Latina y en Venezuela”, *Revista Geográfica Venezolana*, vol. 45 (1), Mérida, Instituto de Geografía, ULA, 2004, p. 91-121.
- **República bolivariana de Venezuela, Ministerio de Planificación y Desarrollo**. *Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001-2007*, Caracas, diciembre 2001.

- **República de Colombia, Dirección de Productividad y Competitividad y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD). Informe sobre el Anuario Mundial de Competitividad 2006, 2006.**
 - **REQUENA Jaime, "Desmantelamiento tecnológico en Venezuela", *Interciencia*, vol. 28, n° 2, Caracas, febrero 2003, p. 65-67.**
 - **Ríos Josefina, CARVALLO Gastón, *Análisis histórico de la organización del espacio en Venezuela*, Caracas, UCV-CDCH, 2000.**
 - **ROJAS Andrés, "Contraste entre las tendencias de la dinámica político-territorial de Venezuela, sus planes de ordenamiento y el ingreso petrolero", *IV Congreso Venezolano de Geografía*. Caracas, 30 de mayo-1 de junio de 2001.**
 - **ROJAS Andrés, "Influencias la péndula concentración-desconcentración del poder y el ingreso petrolero en las tendencias de la dinámica espacial de la Venezuela actual" in MANERO Fernando, PASTOR Antolín (Coord.), *El Espacio Latinoamericano. Cambio económico y gestión urbana en la era de la globalización*, Valladolid, Universidad de Valladolid, Editorial Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio, 2003, p. 307-315.**
 - **ROJAS Andrés, "Venezuela, una sociedad distributiva y sus particularidades", *Revista Geográfica Venezolana*, vol. 45 (2), Mérida, ULA, 2004, p. 221-245.**
 - **ROJAS Andrés, "Riesgo país sin revertir", *Dinero*, 161, Edición XIII Aniversario, octubre 2001 [ed. electrónica: <http://www.dinero.com.ve>].**
 - **SANTOS Miguel Ángel, "Unidad para el Análisis Económico", *Reporte Trimestral*. Dirección de Análisis e Información, VENAMCHAM, 2004.**
 - **The Heritage Foundation y Dow Jones, *Índice de Libertad Económica 2006*, 2006 [ed. electrónica: http://www.consulta.com.mx/interiores/99_pdfs/14_entorno_i_pdf/20060110_IndLibEco_ExecutiveSummary.pdf].**
 - **UNESCO, *Ciudades Intermedias y Urbanización Mundial*, Ajuntament de Lleida, UNESCO, UIA, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1999 [ed. electrónica: <http://www.uia-architectes.org/image/PDF/CIUDADES.PDF>].**
- Prensa electrónica y estadísticas diversas extraídas de sitios web**
- **América Economía**, n° 299, 2005. Especial Ciudades, Mayo 2005. <http://www.americaeconomia.com/>
 - **Competitividad Andina**, n° 10, Nov. 2003. <http://www.caf.com/>
 - <http://www.Globovision.com/>
 - <http://www.analitica.com/>
 - <http://www.vivavenezuela.nl/>
 - **Temas Públicos**, n° 757, Enero 2006, <http://www.lyd.org/>
 - **CONINDUSTRIA**, Confederación Venezolana de Industriales, 2004. Encuesta de Coyuntura Industrial; Boletín de Coyuntura Económica e Industrial, Febrero 2004, y otras estadísticas <http://www.conindustria.org/>
 - **VENAMCHAM**, Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria. <http://www.venamcham.org/>
 - **DATANALISIS**, Empresa de Investigación de mercados. <http://www.datanalisis.com/>
 - **CONAPRI**, Consejo Nacional de promoción de inversiones. <http://www.conapri.org/>



RÉSUMÉ/RESUMEN/ABSTRACT

Depuis le début des années 1980 et jusqu'à la fin des années 1990, la dynamique urbaine vénézuélienne a montré une diminution de l'importance relative de Caracas, et l'émergence de quatre villes « intermédiaires », lesquelles se profilaient en tant que centres les plus dynamiques de l'ensemble urbain ; elles recevaient les principaux investissements, devenaient aussi les plus autonomes du point de vue financier et politique, et elles avaient, en plus, une grande capacité pour s'établir en tant que leaders régionales, on les a appelées « villes intermédiaires ».

Depuis, le Venezuela subit de nouvelles transformations : 1) une centralisation démesurée ainsi que l'intervention de l'État dans toutes les affaires économiques ; 2) des changements dans la politique extérieure et son rôle au niveau international ; 3) la tentative de l'État de changer le patron de distribution de la population et des investissements du territoire ; 4) enfin, la mise en place d'une politique, à l'orientation « socialiste », visant à transformer les dynamiques qui prévalaient dans tous les domaines de la société vénézuélienne.

Desde inicios de la década de los años ochenta y hasta finales de los noventa, la dinámica urbana venezolana reflejaba disminución de la importancia relativa de Caracas, junto con la irrupción de cuatro ciudades medias, apuntalándose como los centros más dinámicos del conjunto urbano. Receptores de las principales

inversiones, dotados de autonomía financiera-política, y conferidos de gran capacidad para liderar sus regiones, las denominamos "ciudades intermedias". Desde entonces, Venezuela sufre estas transformaciones : 1) excesiva centralización e intervención estatista en la economía ; 2) cambios en política económica externa y su rol en el ámbito internacional ; 3) intento por revertir la distribución de población e inversiones en el territorio ; 4) implementación de una orientación "socialista", para cambiar las dinámicas prevaletientes en los diferentes ámbitos de la sociedad.

From the beginning of the 1980's and until the end of the 1990's, the Venezuelan urban dynamic showed a clear reduction of the relative importance of Caracas, together with the inroads of four middle cities, becoming the most dynamic centres of the urban ensemble, receptors of the main investments, endowed of financial and politic autonomy, and with a great capacity to lead their respective regions, we name them "intermediate cities". Since that time, Venezuela had undergone the following transformations: 1) excessive centralization and state intervention in the economy; 2) changes in the foreign economic policy and its role in the international forum; 3) intent of changing the spatial distribution of the population and the investment in the territory; 4) implementation of a "socialist" orientation, in order to change the prevalent dynamics in the different ambits of society.

MOTS-CLÉS

- Mondialisation
- Système urbain
- Compétitivité
- Politiques publiques

PALABRAS CLAVES

- Globalización
- Sistema urbano
- Competitividad
- Políticas públicas

KEYWORDS

- Globalization
- Urban system
- Competitiveness
- Public policy

Services et développement urbains au Venezuela.

Le cas du service de l'eau potable

Au même titre que le service électrique et de façon complémentaire aux services reliés à la mobilité que sont les transports urbains, l'analyse de l'accessibilité aux réseaux d'eau et d'assainissement donne un éclairage utile sur la réalité socio-économique de la population urbaine et sur les enjeux des choix de développement urbain. L'approche de chercheurs tels que Dominique Lorrain sur cette question souligne que, « parmi tous les besoins en infrastructures, l'eau à domicile est l'un des plus indispensables – élément de base de la vie domestique », et que « les solutions qui seront adoptées dans ce secteur auront un rôle d'entraînement pour le développement d'autres infrastructures urbaines » [Lorrain, 2000, p. 2]. C'est en nous fondant sur cette réflexion, ainsi que sur des travaux proposant des perspectives similaires¹, que nous avons choisi de nous intéresser aux services urbains de l'eau et de l'assainissement dans les villes en développement, en particulier au Venezuela.

Ce pays fortement urbanisé constitue un cas intéressant avec la mise en place d'une nouvelle politique de gestion des services urbains depuis les débuts de la révolution bolivarienne. Depuis 1999, le gouvernement national affirme clairement sa volonté de réduire les inégalités sociales et d'améliorer les conditions de vie des populations, dans le cadre de la mise en œuvre du « socialisme pour le

* Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines / CREDAL – UMR 7169.

1. Nombreux sont les travaux réalisés dans le cadre des instances internationales, comme la Banque mondiale ou la Banque interaméricaine de Développement, et dans le cadre de recherches sur les villes « en développement » depuis les années 1980. Du point de vue de la recherche en France, parmi les travaux les plus récents, nous pouvons notamment faire référence à ceux de V. Verdeil pour le cas philippin, de S. Jaglin pour les villes subsahariennes ou de B. de Gouvello pour les coopératives d'eau en Argentine.

XXI^e siècle »². Parallèlement, dans le cadre de la décentralisation depuis 1989, les municipalités, en accord ou non avec les orientations de leur gouvernement régional, définissent des choix de développement urbain. Dans ce contexte, est-il possible d'observer au Venezuela des changements notoires dans la politique de la ville en faveur d'un « accès pour tous » aux réseaux de base ? La société civile, majoritairement constituée en associations de quartier depuis les années 1960 au moins, est-elle davantage actrice de ces améliorations de la qualité de vie urbaine à partir de 1999 ?

Afin de répondre à ces questions, nous présenterons dans un premier temps quelques éléments de réflexion concernant la dernière loi sur l'eau et l'assainissement pour en évaluer les conséquences en matière de gestion de l'eau en milieu urbain. Nous montrerons ensuite que cette gestion, en partie dans un souci de renforcement de la gestion participative, se traduit notamment par la création de coopératives d'eau et d'assainissement. À partir de l'exemple de Puerto-La Cruz, ville moyenne du littoral oriental vénézuélien située dans l'État Anzoátegui [Pulido, 1999], nous nous proposons ainsi de mettre en valeur les enjeux de l'évolution de la politique de gestion de l'eau et de l'assainissement, en lien avec la décentralisation et la politique de développement endogène³ du « socialisme pour le XXI^e siècle ».

Les implications territoriales et urbaines de la loi sur l'eau

Promulguée en 2001, la nouvelle loi sur l'eau et l'assainissement – la LOPSAPS⁴ – est un texte important pour l'évolution de la politique de l'eau et ses conséquences sur la gestion de ses services à l'échelle urbaine. Il y est stipulé que le Venezuela est officiellement entré dans une période de « transition »⁵ – et ce jusqu'en 2006 – destinée à réaliser le transfert de la gestion de l'eau et de l'assainissement des entreprises régionales aux municipalités.

Tout d'abord, la LOPSAPS poursuit au niveau national et régional le projet lancé par la décentralisation mise en place depuis 1989⁶. Dans le même temps, cette loi présente une ambiguïté car, tout en affirmant le processus de décentralisation, elle perpétue aussi la légitimité du contrôle de l'État central. Pour cela, elle fait en partie la synthèse de textes juridiques adoptés entre 1992

2. Nous choisissons de mettre cette expression entre guillemets pour souligner l'originalité d'un projet dont il est encore difficile de mesurer la portée politique et sociale. Il n'en est pas moins porteur de changements dont nous avons pu observer les débuts lors des dernières missions sur le terrain en 2005.

3. La politique de développement endogène est un axe prioritaire du gouvernement vénézuélien depuis 1999 et se fonde sur la théorie d'un développement territorial mû par une dynamique interne. Dans la pratique, au cours des dernières années, cette politique repose sur une plus grande utilisation de la rente pétrolière dans des programmes sociaux (par exemple les « missions »).

4. Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento (*Gaceta Oficial*, n° 5 568, « Extraordinario », 31 décembre 2001).

5. Articles 126 à 128 de la LOPSAPS.

6. Ley orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (*Gaceta Oficial*, n° 1 453, 28 décembre 1989).



et 1999, qui étaient les textes de référence de l'entreprise publique nationale de gestion de l'eau et de l'assainissement HIDROVEN et de ses filiales régionales, dont HIDROCARIBE⁷ pour le cas que nous développerons ultérieurement. Dans ce cadre juridique, la nouvelle politique de l'eau développe les aspects de la régulation, de la prestation et de la tarification. La régulation du service passe par la reconnaissance d'une coordination nécessaire entre les instances qui assurent la captation de la ressource, sa distribution, sa potabilisation ainsi que son évacuation. La prestation est encouragée dans le cadre d'un transfert de compétences aux municipalités. Enfin, la tarification a pour but de rendre les tarifs accessibles à tous les usagers, dans le cadre d'affirmation de justice sociale.

La période de « transition » proposée par la LOPSAPS n'est pas une nouveauté : dès 1989 s'est développée l'implantation d'un « modèle transitoire » correspondant au début d'une politique de libéralisation économique et d'une privatisation des services publics, sous la présidence de Carlos Andrés Pérez. Depuis 1993 et la loi de suppression de l'INOS⁸, ce projet de transfert de la prestation du service de l'eau aux municipalités a été exposé plus clairement : l'État est censé garder le contrôle de la régulation du service ; le transfert de compétences annoncé se réaliserait dans une période propice à la poursuite d'une décentralisation, en s'adaptant à une décentralisation déconcentrée. Or, depuis 1989, dans la plupart des cas, la gestion continue d'être assumée par les entreprises hydrologiques régionales affiliées à l'entreprise nationale HIDROVEN, sans implication des municipalités⁹. Dans le même temps, la LOPSAPS réaffirme le projet de transfert de la gestion de l'eau et de l'assainissement aux municipalités qui apparaissait dans les textes juridiques depuis 1989. HIDROVEN et ses filiales régionales avaient donc pour mission d'accompagner ce processus de transfert jusqu'en 2006, année où devait être réalisée la majorité de ces transferts. Dans la réalité, en 2007, les entreprises régionales continuaient de gérer l'essentiel des services d'eau et d'assainissement des municipalités.

7. HIDROCARIBE est l'entreprise hydrologique de la région caraïbe (États Anzoátegui, Sucre et Nueva Esparta).
8. Instituto Nacional de Obras Sanitarias, entreprise hydrologique nationale créée en 1943. La loi de suppression de l'INOS de 1993, précisant le transfert aux municipes de compétences liées à l'eau, autorise le gouvernement national à procéder à la suppression de l'INOS (Ley que Autoriza al Ejecutivo Nacional a Proceder a la Supresión del INOS, *Gaceta Oficial*, n° 4 365, « Extraordinario », 28 septembre 1993).
9. Il existe des exceptions à ce fonctionnement, chacune avec son mode de gestion particulier. Par exemple, Aguas de Monagas CA a été créée en 1994 et les actionnaires sont constitués par un groupement de municipalités (pour 49 %) et le gouvernement de l'État Monagas (pour 51 %). Les municipalités, par un contrat de prestation des services, délèguent à l'entreprise la gestion de l'eau et de l'assainissement. À l'autre extrémité de mode de gestion, il existe la CVG-GOSH (Corporation vénézuélienne de Guyane-Gestion des opérations des systèmes hydrauliques) qui, depuis 1985, est l'organisme de gestion des États Bolívar, Delta Amacuro et Amazonas – CVG étant l'organisme de planification régionale de la Guyane, directement relié au gouvernement central. Depuis 2005, CVG-GOSH est en cours de remplacement par l'entreprise régionale Hidrobolivar, appelée aussi CVG-Hidrobolivar en raison de la prégnance du contrôle de la CVG.

Pour réaliser ce transfert, une campagne de sensibilisation et d'information en faveur de cette réforme a été opérée auprès des usagers et des employés des entreprises. Ainsi, la revue institutionnelle *Vital*, publiée par HIDROVEN, présente une enquête réalisée en 2003 auprès des employés d'HIDROVEN et des entreprises régionales¹⁰. À travers les réponses des personnes interrogées, la transition opérée depuis 2001 apparaît davantage réussie que celle qui avait été opérée après la dissolution de l'INOS. Cependant, comme pour la plupart des documents publiés par des revues d'entreprises, il est difficile de faire la part des données empiriques et des éléments développant à outrance les aspects positifs d'une réforme en cours d'expérimentation.

En parallèle, l'État garde un rôle fondamental dans la régulation et le contrôle de la politique de l'eau au niveau national à partir de deux institutions nationales nouvellement créées. À partir de 2003, l'Office national pour le développement des services d'eau potable et d'assainissement¹¹ doit fixer des politiques, des stratégies qui donnent les orientations de la prestation du service et l'assistance technique et financière aux prestataires de services. Par ailleurs, la Superintendencia des services de l'eau potable et de l'assainissement¹² a pour rôle de réguler et contrôler les activités en relation avec la prestation de service. Ainsi, l'organisation mise en place avec la LOPSAPS essaie de faire le compromis entre gestion centralisée et gestion participative dans un État national à forte tradition centralisatrice, même si la décentralisation depuis 1989 essaie de remettre en cause ce modèle. Quelles conséquences pouvons-nous dès lors observer à l'échelle urbaine ?

Croissance urbaine et évolution du service urbain de l'eau à Puerto La Cruz

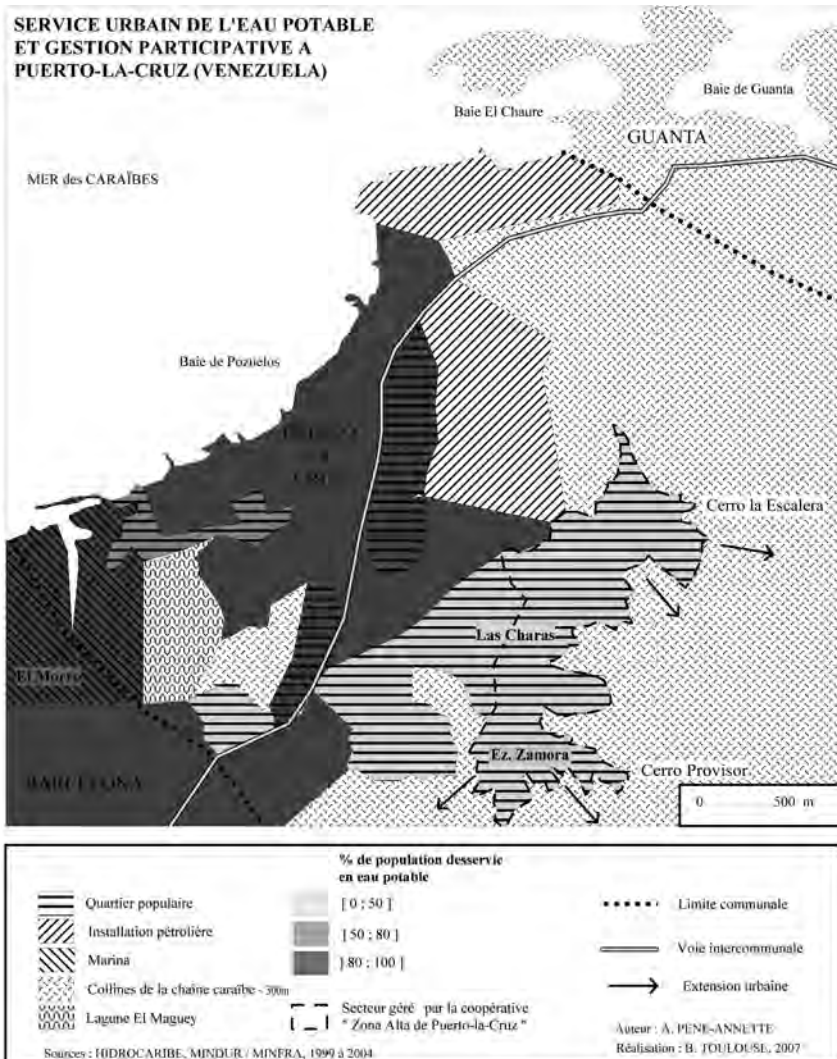
Nous retrouvons dans le Venezuela actuel des réalités urbaines décrites dans des travaux des années 1960 ou observées lors de nos premiers séjours sur place en 1986-1987, à savoir la non-existence ou le dysfonctionnement des infrastructures de base dans la ville [Brisseau, 1963 ; Peattie, 1968]. Outre notre immersion sur le terrain¹³, les documents techniques ou la presse locale mettant en exergue les problèmes de distribution de l'eau, les plaintes répétitives des habitants de tel ou tel quartier qui n'ont pas accès à l'eau ou qui ne sont pas raccordés au réseau d'égouts depuis des années, nous ont apporté des éclairages complémentaires pour évaluer la qualité des services urbains.

10. « Transformación a pulso », *Vital*, n° 10, 2003, p. 3-11.

11. Oficina Nacional para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ONDSAPS).

12. Superintendencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento.

13. Depuis plus de 20 ans, l'immersion dans des quartiers variés, populaires ou aisés, nous a permis de multiplier les expériences et de vivre au quotidien en compagnie des habitants.



À Puerto La Cruz, les quartiers populaires consolidés depuis une vingtaine d'années¹⁴ se caractérisent par un service d'eau très déficient en termes de couverture en réseaux d'eau potable et inexistant en matière de réseaux d'assainissement. La pression de l'eau au robinet est très faible dans le cas des logements possédant l'eau à domicile ; l'eau n'arrive même pas dans les secteurs les plus élevés des versants de collines, même si le réseau existe. Les parties urbanisées

14. Ces quartiers populaires correspondent aux quartiers dont les indicateurs socio-économiques et d'accès aux services urbains ont les valeurs les plus faibles. Au sein de la municipalité de Puerto La Cruz, ils constituent environ les deux tiers de la population.

les plus récentes couvrent en effet les versants des premiers contreforts de la chaîne côtière caraïbe. La croissance urbaine s'est en partie réalisée dans des zones considérées comme non urbanisables selon les normes en vigueur, par la construction d'habitats précaires de *ranchos* au statut illégal¹⁵. Puerto La Cruz a en effet connu l'explosion urbaine que l'on retrouve dans tout le Venezuela et en Amérique latine à partir des années 1970 [Marchand, 1971]. Cette croissance, surtout due alors à un exode rural soutenu, s'est traduite par l'arrivée massive de migrants, majoritairement originaires des zones rurales les plus proches des états Anzoátegui et Sucre. La croissance urbaine s'est effectuée rapidement, par extension successive de quartiers résidentiels péricentraux puis périphériques à partir du noyau urbain initial de front de mer et de Pozuelos. L'agglomération est schématiquement linéaire, avec une artère routière majeure constituant une frontière entre la « ville » et la majorité des quartiers populaires. Ces derniers ont été créés par occupation illégale de terrains, réalisée sans contrôle des pouvoirs publics qui se sont retrouvés rapidement dépassés.

La gestion participative dans le service de l'eau

Dans un contexte de déficience du service public de l'eau au Venezuela, notamment dans les quartiers les plus pauvres, la ville de Puerto La Cruz constitue par conséquent un exemple intéressant. C'est en effet dans cette ville qu'une des premières coopératives de gestion de l'eau potable a été créée à partir de décembre 2002, dans la lignée des initiatives de gestion participative proposées par la LOPSAPS. Nous souhaitons ici présenter cet exemple pilote en essayant de dégager les raisons de sa création et les réussites de sa mise en place, mais aussi ses limites.

Les habitants se trouvant à l'origine de cette initiative, les femmes en tête, jouent en fait un rôle moteur depuis une vingtaine d'années, au sein des associations de quartier qui interviennent auprès des pouvoirs publics – qu'il s'agisse de la municipalité de Puerto La Cruz ou du gouvernement de l'État Anzoátegui. Ces personnes justifient leur décision d'avoir créé la coopérative en se fondant sur la LOPSAPS et, avant tout, sur la Constitution bolivarienne. Elles font notamment référence au fait qu'il y est stipulé que la société civile doit prendre la responsabilité des services de base. Ainsi l'article 184 de cette constitution souligne-t-il que :

« La loi créera des mécanismes ouverts et flexibles pour que les États et les municipalités décentralisent et transfèrent les services aux communautés et aux associations de quartier organisées [...] en promouvant le transfert de services en matière [...] de services publics [...], en stimulant les expressions de l'économie sociale, comme les coopé-

15. Le *ranchito* désigne au Venezuela une forme d'habitat précaire. À l'origine, il s'agit d'un terme rural utilisé pour décrire un habitat avec une armature en bambous recouverte de torchis. Par extension, il désigne surtout désormais l'habitat d'un bidonville, en général construit à partir de matériaux de récupération comme la tôle ondulée.



ratives, les caisses d'épargne, les mutuelles et autres formes associatives [...] afin de garantir le principe de coresponsabilité dans la gestion publique des gouvernements locaux et des États et de développer des processus autogestionnaires et co-gestionnaires dans l'administration et le contrôle des services des États et des municipalités »¹⁶.

Dans ce cadre, la société civile peut prendre en charge le transfert de compétences à la place des instances administratives, quel que soit l'échelon. Quant à la LOPSAPS, elle précise dans les articles 75, 76 et 77 les fonctions des « ateliers techniques de l'eau »¹⁷ qui légitiment la participation de la société civile, même s'il s'agit d'une responsabilité d'observation :

« Les souscripteurs des services pourront constituer des associations [...] afin de connaître la gestion des services, donner leur avis sur les propositions d'investissement auprès des autorités nationales, des États et des autorités municipales [...] »¹⁸.

Pour arriver à la création de la coopérative de gestion de l'eau Zona Alta de Puerto La Cruz, les habitants des quartiers périurbains ont donc organisé au départ des « ateliers techniques de l'eau ». Les premiers ateliers ont commencé à partir de 2002 à développer un programme de sensibilisation auprès des habitants, pour susciter l'idée d'être plus responsables de la qualité du service de l'eau. En parallèle, ces ateliers ont permis de favoriser des relations de confiance entre les différentes instances concernées par le service de l'eau, que ce soit l'entreprise HIDROCARIBE, l'organisme de formation INCE¹⁹, l'Université publique régionale²⁰, l'organisme FUNDACOMUN²¹, le bureau régional du MARN²² ou les représentants des quartiers concernés. Pionnière, cette coopérative constitue un modèle à l'échelle régionale et nationale à partir duquel d'autres initiatives ont vu le jour depuis.

Dans ce contexte, la coopérative Zona Alta de Puerto La Cruz prend en charge le service de l'eau potable d'une population d'environ 50 000 habitants²³, dans des *barrios*²⁴ de la partie sud-est de la municipalité de Puerto La Cruz. Si une première phase non institutionnelle a démarré dès 1999, ce pro-

16. *Gaceta Oficial*, n° 5 453, 24 mars 2000.

17. Traduction que nous donnons à « *mesas técnicas de agua* ».

18. Article 75 de la LOPSAPS. Dans de nombreux cas, cela signifie en fait une façon de contourner les dissensions qui peuvent exister dans la gestion des services entre pouvoir de l'État, pouvoir régional et pouvoir municipal.

19. Instituto de Capacitación Educativa.

20. Universidad de Oriente (UDO).

21. La Fundación para la comunidad est un organisme public géré par l'État fédéral, qui compte des bureaux dans chaque État fédéré et qui est destiné à la promotion des quartiers les plus défavorisés. Cet organisme existe depuis plus de 30 ans.

22. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Renovables.

23. Soit environ le quart de la population : au recensement de 2001, la population de Puerto La Cruz (*parroquia* Puerto La Cruz et *parroquia* Pozuelos) s'élevait à 222 202 habitants (source : Instituto Nacional de Estadística).

24. Le *barrio* désigne le quartier populaire. Les quartiers concernés sont notamment les *barrios* de Las Charas, Valle Lindo, Valle Verde, Colinas de Valle Verde, Chuparin Arriba, Ezequiel Zamora et Colinas de El Limón.

jet acquiert en décembre 2002 le statut officiel de coopérative de gestion de l'eau, et plus précisément de tarification et de recouvrement des factures. En 2003, la coopérative compte 25 membres actifs, originaires du secteur, et un groupe d'environ 150 personnes soutenant l'initiative. Son siège est intégré à des locaux gérés par l'organisme FUNDACOMUN dans le *barrio* Las Charas, également utilisés pour des ateliers de formation des « missions ». Cette coopérative apparaît donc intimement liée aux dynamiques sociales du quartier dans leur ensemble. À partir du 1^{er} juillet 2003, un contrat est signé avec l'entreprise régionale HIDROCARIBE pour la rénovation²⁵ et la surveillance des stations de pompage, ainsi que pour la maintenance des canalisations.

La tarification et la facturation sont à la charge de la coopérative, qui emploie deux jeunes personnes diplômées en comptabilité et résidant dans la zone. En 2003, le tarif fixé est de 4 370 Bs²⁶ par mois pour les familles qui reçoivent de l'eau plus de deux jours par semaine et de 1 870 Bs par mois pour celles qui ont de l'eau à domicile deux jours ou moins de deux jours par semaine. Ces tarifs ne sont pas bas si l'on se réfère au tarif moyen en vigueur en 1999 : 332 Bs par m³ pour une consommation moyenne de 500 litres par jour par habitant²⁷. Le tableau suivant propose une comparaison entre le tarif proposé par la coopérative et celui de l'entreprise HIDROCARIBE.

CALCUL D'UNE FACTURE D'EAU FICTIVE À PUERTO LA CRUZ²⁸

Tarif de la coopérative Zona Alta de Puerto La Cruz		Tarif
HIDROCARBURE		
Tarif A (en Bs par mois)	4 370	2 656
Tarif B (en Bs par mois)	1 870	1 328

Le tarif A concerne le cas d'un domicile où l'eau coule au robinet plus de deux jours par semaine. Si nous prenons l'hypothèse de quatre jours par semaine, on obtient – sur la base d'une consommation de 500 litres par jour – une consommation de 8 000 litres (8 m³) pour 16 jours dans le mois. Le tarif B concerne le cas d'un domicile où l'eau coule au robinet deux jours ou moins de

25. En juin 2004, nous avons visité une de ces stations de pompage rénovées.

26. Bolívares. En 2003, le salaire minimum était de 210 000 Bs. Mais pour l'ensemble de la population des *barrios* gérés par la coopérative, le revenu para famille est inférieur.

27. Ces données sont disproportionnées par rapport à la moyenne communément évaluée pour une consommation d'eau domestique ; elle est par exemple de 250 litres par jour et par habitant à Paris. L'ordre de grandeur de 1999 établi par HIDROCARIBE peut en partie être expliqué par le taux de perte très élevé, en raison de la vétusté des canalisations et de l'absence de la maintenance.

28. Sources : Coopérative Zona Alta de Puerto La Cruz et HIDROCARIBE. Ces calculs personnels ont été réalisés à partir de données de 2003 et, pour être actualisés, devraient prendre en compte l'inflation.



deux jours par semaine. Si nous prenons l'hypothèse de deux jours par semaine, on obtient une consommation de 4 000 litres (4 m³) pour 8 jours dans le mois. Même si cet exemple fictif n'a pas de valeur démonstrative d'où l'on pourrait tirer des généralités, il indique quand même qu'il serait plus onéreux de payer sa facture à la coopérative qu'à HIDROCARIBE. Cette approche nous permet de souligner les limites de la gestion participative en terme de coût.

À partir de 2004, une nouvelle phase du développement de la coopérative s'est caractérisée par le transfert de compétences à la coopérative pour les réparations et la maintenance du réseau primaire de canalisations. Comme le soulignent alors les responsables de la coopérative²⁹, leur souhait est d'arriver à une gestion totale du service d'eau potable, en accord avec l'article 184 de la Constitution bolivarienne.

En guise de conclusion

À travers de cette étude de cas, il ressort que la participation active de la société civile dans la prise en charge de la gestion de l'eau durant « *el proceso* »³⁰ n'est pas seulement issue des décideurs politiques ou de ses représentants à l'échelle du quartier comme les cercles boliviariens³¹. En raison de notre connaissance de ce terrain urbain avant même l'enclenchement des programmes-phares du « socialisme pour le XXI^e siècle », par l'intermédiaire d'acteurs de la politique de la ville et des habitants eux-mêmes qui ont, depuis les années 1980, déployé des efforts persévérants et acharnés pour avoir des conditions de vie plus dignes, nous souhaitons souligner la complexité de l'évolution en cours et la relative inopérance des notions de rupture ou de continuité. En outre, la gestion de l'eau et de l'assainissement renvoie à des éléments de confort de base qui ne sont pas encore réalisés pour la majorité de la population de la ville étudiée. Cette réalité touche d'ailleurs encore plus la population rurale du Venezuela, sept ans après les débuts du régime de Hugo Chávez Frias.

Dans ce contexte, un des éléments les plus alarmants est la quasi-absence de la prise en compte de l'assainissement, qui nécessiterait pourtant des moyens à l'échelle urbaine et métropolitaine, mais aussi nationale. Or, rares sont les villes au Venezuela qui possèdent les infrastructures adaptées au traitement des eaux usées³². À Puerto La Cruz, la quasi-totalité des eaux usées est rejetée directement dans la lagune El Maguey et dans la baie de Pozuelos.

29. Entretien réalisé en juin 2004.

30. Terme employé par les partisans du gouvernement pour désigner la révolution bolivarienne.

31. Les cercles boliviariens sont des petits groupes de militants généralement constitués en comité de quartier. Leur principale fonction est de répondre aux besoins de la population et servir d'intermédiaire avec les représentants des collectivités locales et des organismes publics. Les cercles boliviariens ont été promus en 2001 par le président Chávez afin de consolider le processus révolutionnaire dans les quartiers.

32. Ciudad Guayana est l'une des rares villes à posséder une station d'épuration en état de marche correct (que nous avons pu visiter en mai 2004) même si elle est en sous-capacité.

Dans un *Alo Presidente*³³ antérieur aux élections du 3 décembre 2006³⁴, le président Chávez a insisté sur l'importance de la préservation de l'eau. Il nous incombe, en tant que géographe, de nous demander si ce discours marque les débuts d'une nouvelle étape de la qualité de vie urbaine au Venezuela.

BIBLIOGRAPHIE

- « Développement urbain : l'enjeu urbain », *Urbanisme*, n° 324, mai-juin 2002, p. 37-65.
- « Services en réseaux, services sans réseaux dans les villes du Sud », *Flux*, n° 56-57, 2004.
- BENITEZ-ESLAVA Edgardo, *Réformer le service de l'eau : Histoire, système technique et régulation de firmes. Le cas du District Fédéral du Mexique (1992-2003)*, thèse de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, 2005.
- BRISSEAU Jeanine, « Les barrios de Petare : faubourgs populaires d'une banlieue de Caracas », *Cahiers d'Outre-Mer*, 1963, p. 5-42.
- COING Henri, DORIER-APRILL Elisabeth, JAGLIN Sylvie (éd.), « Régulation et gouvernance : la création d'une capacité régulatrice du service électrique au Venezuela », in *Gérer la ville entre le global et le local*, Autrepart, n° 21, 2002, p. 55-68.
- FOURNIER Jean-Marc, *L'eau dans les villes d'Amérique latine*, Paris, L'Harmattan, coll. « Géographie sociale », 2001.
- FOURNIER Jean-Marc, GOUËSET Vincent, « L'eau : objet privilégié pour le croisement des recherches Nord-Sud ? À propos du FIG de Saint Dié-des-Vosges et de quelques publications récentes sur le thème de l'eau potable », *Autrement*, 2004, p. 151-166.
- GIORDANI Jorge, « Cuatro décadas de planificación nacional en Venezuela, ¿ justicia social vs retórica política ? », *Cuadernos del Cendes*, n° 31, 1996.
- LORRAIN Dominique, *Gestions urbaines de l'eau*, Paris, Économica, 1995.
- MARCHAND Bernard, *Venezuela, travailleurs et villes du pétrole*, Paris, Éd. de l'IHEAL, 1971.
- MAUCO Carlos, *Marginalité sociale : les agents publics et les quartiers populaires – le cas de Barcelona-Puerto La Cruz*, thèse de doctorat, Université de Lyon II, 1989.
- PEATTIE Lisa, *The view from the barrio*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1968.
- PENE-ANNETTE Anne, « Concurrence sur les usages de l'eau dans les pôles d'industrie lourde de l'est du Venezuela », *Bulletin de l'Association de Géographes Français*, déc. 2003.
- PENE-ANNETTE Anne, *L'eau convoitée de la Guyane vénézuélienne*, *Cybergéo*, 2004 (www.cybergeo.presse.fr/EAUVILLE/Pene.htm).
- POLESE Mario, SHEARMUR Richard, *Économie régionale et urbaine, introduction à la géographie économique*, Paris, Economica, 2^e éd., 2005 [1995].
- PULIDO NUBIS Miriam, *Les tendances récentes de l'urbanisation au Venezuela : le rôle des villes moyennes*, thèse de doctorat, Université de Toulouse II – Le Mirail, 1999.
- RAMOUSSE Didier, *Stratégies d'industrialisation, organisation de*

33. *Alo Presidente* est une émission de la chaîne de télévision nationale (VTV) qui retransmet un discours du président Chávez chaque dimanche ou presque. Ce discours peut durer plusieurs heures et est réalisé dans des endroits différents du pays, selon les circonstances, pour valoriser les réalisations du gouvernement et de la société civile. Ce programme hebdomadaire a été interrompu de septembre 2006 au 21 janvier 2007, afin de protéger la période pré-électorale du 3 décembre 2006.

34. Dans l'émission du 10 avril 2005, le président Chávez a souligné l'urgence d'assainir le lac de Valencia.



l'espace et insertion du Venezuela dans l'économie-monde des pôles de développement à la reconversion du système technico-industriel, thèse de doctorat, Université de Paris III, 1997.

- SANDIA DE SEGNINI Maria Elena, *Ley orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento*, Caracas, Ed. Jurídica Venezolana, 2002.

- SCHNEIER-MADANES Graciela, DE GOUVELLO Bernard, *Eaux et réseaux : les défis de la mondialisation*, Paris, Éd. de l'IHEAL, 2003.
- ZUINDEAU Bertrand, *Développement durable et territoire*, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2000.

RÉSUMÉ/RESUMEN/ABSTRACT

L'accès aux services urbains de base, et plus précisément à ceux de l'eau et de l'assainissement, constitue un angle d'approche intéressant pour rendre compte des conditions de vie urbaine au Venezuela et des réalités des réformes participatives. Nous partons d'une analyse des points de la loi sur l'eau et l'assainissement LOPSAPS concernant la gestion du service de l'eau en milieu urbain et la prise en compte de mesures en faveur d'une justice sociale. Puis nous nous penchons sur les implications de cette loi dans le développement urbain. Nous l'illustrons à partir du cas de la ville de Puerto La Cruz, sur le littoral nord oriental. Celle-ci se caractérise en particulier par une gestion participative dans le service de l'eau, à partir de la création d'une coopérative de gestion de l'eau.

El acceso a los servicios urbanos básicos constituye un eje de acercamiento interesante para darse cuenta de las condiciones de la vida urbana en

Venezuela y de las realidades de las reformas participativas. Partimos del análisis de los puntos de la ley del agua y saneamiento LOPSAPS a propósito del servicio del agua en zonas urbanas y en pro de la justicia social. Además intentamos trazar un balance provisorio de la aplicación de esta política del agua a la escala urbana tomando en cuenta un caso piloto de gestión participativa del servicio urbano de agua potable en Puerto La Cruz, en el litoral oriental.

The access to urban basic utilities, particularly water supply is one of the most interesting ways to realize the urban life conditions in Venezuela and examine the participative reforms. First, we begin with LOPSAPS water and sanitation law analysis. Then, we focus to water supply management and we wonder how social justice is applied in urban areas. We take the case of Puerto La Cruz city located on eastern coast. In this town, an inventive politics is realized by a dynamical social participation in water supply.

MOTS-CLÉS

- Développement urbain
- Gestion de l'eau
- Services urbains
- Venezuela

PALABRAS CLAVES

- Desarrollo urbano
- Gestión del agua
- Servicios urbanos
- Venezuela

KEYWORDS

- Urban development
- Water supply
- Urban services
- Venezuela

Mathilde Gauvain*

Les territoires de l'informel.

Étude du commerce de rue à Caracas

Impossible de parcourir les rues de Caracas ou d'ouvrir un quotidien vénézuélien sans voir et entendre parler des *buhoneros*, ces vendeurs de rue qui tirent leur nom d'un ancien mot espagnol désignant celui qui transporte et vend des choses de *buhonería*, de peu de valeur. Ils occupent les rues, les trottoirs et souvent une partie de la chaussée, les *esquinas*¹, les places, les abords des stations de métro. On les retrouve aussi sur les autoroutes, ambulants marchant entre les files de voitures : ce sont ceux que l'on appelle les *buhoneros* « à haut risque »², pour qui les accidents du travail mortels ou gravement handicapants sont extrêmement fréquents.

La question du commerce informel en Amérique latine a commencé à être étudiée dans les années 1980, principalement dans deux perspectives : l'une économique, étudiant la question du secteur informel, de ses modalités et raisons d'être. C'est dans ce cadre que se situent les travaux de Hernando de Soto, qui a fondé l'institut Liberté et Démocratie au Pérou, et analyse le secteur informel comme une conséquence du coût, en temps et en argent trop élevé de la formalisation lors de la création d'entreprise. Cet institut a notamment publié des études concernant le problème spécifique des vendeurs ambulants [Alonso, Iwasaki, Ghersi, 1989], qui intègrent également les problématiques de politiques publiques. Les travaux de François Roubaud sur l'économie informelle

* École des Hautes Études en Sciences sociales/GGSEU.

1. Coins de rue, croisements. Les noms étaient attribués aux *esquinas* et non aux rues lors de la fondation de la ville.

2. Entretien avec la responsable de l'économie populaire à la Alcaldía Libertador du 22 avril 2005.

au Mexique [Roubaud, 1994] s'inscrivent de même dans une double perspective économique et sociologique, concernant les conditions d'existence du secteur informel et de ceux qui en vivent. La seconde perspective est davantage reliée aux problèmes de politiques publiques de la ville qu'aux questions macro-économiques de définition du secteur informel. Les travaux de John Cross [Cross, 1998] sur les vendeurs ambulants au Mexique cherchent ainsi à analyser les rapports entre ceux-ci et le pouvoir politique, les questions de clientélisme, et par là les raisons des politiques décidées à leur rencontre, comme les politiques de relogement. Les travaux de Jérôme Monnet sur la ville de Mexico [Monnet, 1993] se situent dans cette perspective.

Ces vendeurs de rue sont la partie émergée de l'économie informelle urbaine, qui comprend par ailleurs tout un ensemble de petits artisans (réparateurs en tout genre, cuisinières dont les plats préparés sont vendus dans la rue, cireurs de chaussures ou manucures), de propriétaires de véhicules qui produisent un service de taxi, et d'ateliers de textile qui fabriquent une bonne partie des vêtements qui seront vendus ensuite dans les rues de la ville. En ce sens, et alors même que l'étymologie du nom donné aux commerçants ambulants au Venezuela renvoie à une terminologie castillane médiévale et tendrait donc à inscrire cette pratique dans une histoire continue, bien que géographiquement déplacée depuis l'Espagne, dans laquelle le commerce de rue comporterait une composante folklorique et traditionnelle essentielle, on peut voir que le commerce ambulant tel qu'il est pratiqué aujourd'hui à Caracas n'est pas qu'une survivance folklorique héritée. Il représente au contraire toute une économie dont vit un nombre important de ménages à Caracas, et en ce sens fait pleinement partie de la ville « moderne ». Ce commerce est l'élément principal et le plus emblématique de ce qui est appelé le « secteur informel urbain » [Lacabana, 1993 ; Chávez O'Brien, 1993], c'est-à-dire la composante urbaine de cette économie qui ne respecte pas toutes les règles légales et administratives pour pouvoir être déclarée « formelle ». L'importance des liens entre crise économique et économie informelle peut être mise en lien au niveau du continent, puisque c'est à l'occasion des crises socio-économiques engendrées par les Programmes d'Ajustement Structurel que la croissance du secteur informel est la plus élevée (80 % des emplois créés dans les années 1990 le sont au sein du secteur informel). Ces liens peuvent également être mis au jour au Venezuela particulièrement, puisque d'une part le développement massif du secteur informel a lieu dans les années 1980, suite à l'austérité budgétaire de la fin des années 1970, à la chute des prix du pétrole en 1982 et à la crise de la dette extérieure de 1983 qui fait abandonner le régime de change fixe et provoque une crise économique généralisée. D'autre part, le taux d'informalité de la population active occupée dépasse les 50 % dès janvier 2003 (lors de la grève patronale qui a provoqué des difficultés économiques importantes et des pertes d'emploi massives), et ne redevient inférieur au taux de formalité qu'en janvier 2005. Ces variations ne



sont pas dues uniquement à une hausse automatique de l'importance relative du secteur informel du fait de la destruction d'emplois formels, car plusieurs enquêtes ont confirmé leur passage vers le travail informel au début de 2003. Le lien entre secteur informel et activité économique formelle mesurée par exemple par le Produit Intérieur Brut, est alors de type « contra cyclique », le secteur informel représentant un secteur refuge, de relégation pour toute une partie des travailleurs. L'aire métropolitaine de Caracas compterait 48 675 vendeurs de rue, dont 38 458 dans le municipe Libertador [Censo 2001 ; Censo Alcaldía Mayor 2002-2003]. Il semble qu'il faille en réalité multiplier ce chiffre au moins par deux, sinon par trois. En effet ces chiffres datent de quelques années et, pour les raisons évoquées ci-dessus, le nombre de vendeurs de rue a augmenté depuis le début de 2003. D'autre part, le recensement effectué par la mairie comptabilisait les tenants d'un *puesto*, c'est-à-dire qu'il ne prenait pas en compte les relations de salariat, qu'on pourrait plutôt d'ailleurs nommer sous-traitance puisqu'il n'y a précisément pas de lien salarial, au sens de lien durable, contractuel, mais bien plus souvent des échanges de services entre membres d'un même réseau, familial ou communautaire.

En se fondant sur une étude ethnographique des vendeurs de rue dans le municipe de Libertador, principalement dans les trois quartiers du centre historique, autour de la Plaza Bolívar, (place centrale de la construction en damier de la ville historique), de Sabana Grande (un boulevard piéton qui comptait 2 000 vendeurs de rue jusqu'en janvier 2007, où le gouvernement et la mairie ont décidé de les déloger de la rue), et du terminal de bus Nuevo Circo, cet article cherche à interroger les constructions mentales autour de l'informalité. Si le concept est économique et juridique dans la mesure où il est compris comme « manque » de respect des règles formelles, l'informalité comporte aussi une dimension de vécu socio-spatial, qui s'articule avec les lieux d'habitation (les *barrios* étant aussi considérés comme de l'habitat informel) et les espaces publics. Les principales critiques émises par les média concernant les vendeurs de rue rejoignent des préoccupations d'urbanisme plus que de respect des lois sur le travail et l'entrepreneuriat. En ce sens, l'informalité est considérée comme la caractéristique d'une partie de la ville, et on peut se demander alors s'il y a réellement un dualisme de Caracas, fondé sur un clivage qui pourrait s'articuler comme formel/informel. Pour tenter de répondre à cette problématique, cet article se fonde sur une enquête menée au sein d'une recherche doctorale, qui consiste en une série d'entretiens semi-directifs réalisés en 2005 et 2006 auprès de vendeurs de rue dans les quartiers de Sabana Grande, du centre historique, du terminal de bus Nuevo Circo et de l'avenue Baralt. Ces entretiens, réalisés sur le lieu de travail des enquêtés, concernent l'organisation territoriale des vendeurs de rue, leur mobilité quotidienne et les relations sociales qu'ils entretiennent avec les autres vendeurs de rue et avec les travailleurs « formels », dans une optique d'analyse sociologique des réseaux.

L'informalité : une notion construite

Avant d'être un concept théorique économique, l'informalité est le revers d'une formalité, d'une « légalité » ou d'une « officialité », qui se retrouve dans de multiples domaines, notamment l'urbanisme du fait de ses liaisons avec la loi concernant les titres de propriété. Le terme même d'informel est nécessairement à questionner car son inscription dans une opposition au « formel » comme « officiel », « procédurier », « respectueux des règles », voire « protocolaire » renvoie à une part du monde social désignée comme déviante par rapport aux normes sociales construites par ceux qui détiennent une position dominante dans le champ social. Cependant, l'économie dite « informelle » a des formes, elle ne s'oppose pas au champ commercial par son absence de structures constituées en formes récurrentes [Lautier, 2004]. Les définitions du secteur informel sont nécessairement idéal-typiques, au sens où on ne peut penser en même temps toutes les formes (précisément) que peut prendre l'économie informelle.

Selon une étude du Bureau international du Travail (BIT) de 1976 [Sethuraman, 1976], les caractéristiques principales de l'informalité sont les suivantes : petite taille des unités de production et caractère familial de ces dernières, absence d'observation de la réglementation, faible niveau technologique. Ces caractéristiques se retrouvent dans l'opposition bipolaire d'économie urbaine structurée entre le circuit supérieur, dans lequel on retrouve des activités comme la banque, le commerce d'exportation, l'industrie d'exportation, l'industrie urbaine moderne, le commerce moderne, les services modernes, les grossistes, les transporteurs, d'une part, et le circuit inférieur, caractérisé par des formes de fabrication qui ne sont pas « *capital intensive* », par les services non modernes généralement fournis au détail et par le commerce de petite dimension [Santos, 1975]. Cette bipolarisation entre deux circuits économiques est donc une sorte d'avatar de l'opposition entre la production « *capital intensive* » et la production « *labour intensive* ». L'économie informelle, de par son faible niveau technologique et les faibles effectifs des entreprises qui la composent et la construisent, appartient pleinement à ce circuit inférieur, qui compense ses très faibles capacités de financement par un recours accru au travail, et par une productivité du travail qui ne s'élève que par une exploitation intensifiée, non par une innovation technologique. L'informalité de leurs revenus empêche les vendeurs de rue d'accéder au crédit bancaire pour financer un investissement et les contraint à avoir recours aux usuriers, prêteurs informels qui imposent des taux d'intérêt mensuels de 20 % à 30 %.

Les caractéristiques de la production ne sont pas les seules à nous inciter à penser le secteur informel comme « part sombre » de l'économie, comme constitutif d'un circuit « secondaire », pour reprendre une terminologie appliquée au dualisme du marché du travail [Doeringer et Piore, 1971]. En effet, si le type d'organisation productive, favorisant la main-d'œuvre sur le capital, est



un élément essentiel de compréhension de ce qui constitue le secteur informel, les relations de travail et le type d'emplois en sont un autre, tout aussi essentiel. Les multiples critères qui définissent le secteur informel selon le classique Rapport Kenya [BIT, 1972] ne facilitent pas nécessairement l'identification d'une activité précise à l'informalité. Pour le cas des vendeurs de rue, par exemple, et alors que leur appartenance au secteur informel ne fait apparemment aucun doute, le critère de « facilité d'accès à l'activité » n'est pas rempli de façon évidente, en raison des multiples barrières qui existent à l'entrée du marché, notamment la nécessité d'appartenir à un réseau. En effet, les vendeurs de rue sont organisés, de façon certes « informelle » au sens où cette organisation échappe aux cadres légaux et administratifs, ce qu'on peut considérer comme une organisation extralégale. Ainsi qui veut pouvoir occuper un morceau de trottoir pour vendre des produits se doit de négocier avec les vendeurs en place et notamment avec les *líderes*³ locaux, les *coordinadoras* (coordinateurs). Ces coordinateurs, par *cuadra* (espace de rue entre deux *esquinas* ou coins de rue), sont en charge de répartir les *puestos* et de vérifier que les vendeurs de rue leur versent bien le « loyer » mensuel pour l'espace qu'ils occupent. Ils sont nommés, de façon consensuelle, par tacite acceptation des vendeurs de rue, des autres coordinateurs, et entretiennent des liens privilégiés avec la police et la mairie qui les reconnaît comme responsables locaux et interlocuteurs privilégiés.

À l'inverse, on peut considérer que nombre d'entreprises « formelles » ne respectent pas la légalité juridique, administrative et fiscale, en ne déclarant pas des employés, notamment auprès des registres de sécurité sociale, ou en pratiquant la fraude fiscale. On peut avoir une idée de l'importance de la fraude fiscale des entreprises en se référant au plan Évasion Zéro lancé en 2003 par le SENIAT⁴ vénézuélien, visant à organiser de grandes opérations de vérification du respect du Règlement de Loi de l'IVA⁵. Si l'informalité se définit comme la non-inscription à certains registres (commerciaux, de sécurité sociale, administratifs...) [Lautier, 2004], peut-on alors définir comme « informelles » des entreprises « officielles » mais qui ont des pratiques illégales ?

Au regard de ces questions, il faut peut-être s'en remettre aux discours et aux pratiques des acteurs, au sens où une entreprise « informelle » est une entreprise simplement « reconnue comme telle ». L'institutionnalisation du label [Becker, 1985] « informel » s'opère dans l'interaction entre les individus et le monde social, et cette dénomination, issue du BIT et de l'analyse économique, a été non seulement utilisée par les institutions de politiques publiques, par les médias, mais également récupérée à leur compte par les acteurs. Le commerce de rue est

3. Leaders. Il s'agit du terme anglais hispanisé, utilisé à Mexico pour désigner les responsables locaux des organisations de commerçants de rue. Cf. notamment les études de John Cross.

4. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (administration fiscale vénézuélienne).

5. Impuesto al Valor Agregado (taxe sur la valeur ajoutée).

associé à l'économie informelle par la mairie de Caracas-Libertador. Le lien affiché est dans une certaine mesure bijectif, puisque lorsque la mairie cherche à réglementer (Ordonnance du 1^{er} septembre 1998 et Décret n° 105-1 du 29 janvier 2004 du Municipio Libertador) et à faire appliquer sa réglementation (affichage public sur les bâtiments officiels restaurés ou en voie de restauration, exposant : « *Prohibido la economía informal* »⁶), elle utilise le terme de « commerce informel ». Les vendeurs de rue mêmes se définissent de cette façon, à part une petite minorité cherchant à se faire reconnaître comme « entrepreneurs ».

Cette dernière catégorie représente une minorité d'individus pour qui l'économie informelle est une opportunité d'entrepreneuriat libéral, au sein de laquelle les contraintes administratives, fiscales et de droit du travail n'existent pas. Le seul de nos enquêtés⁷ correspondant à ce profil est José Chauran, le secrétaire d'un syndicat de commerçants informels Sintrainor (Sindicato de Trabajadores Independientes Organizados), une organisation représentant plusieurs centaines de vendeurs du boulevard de Sabana Grande qui se charge de promouvoir les intérêts des commerçants, notamment en négociant avec la police métropolitaine (dépendant de la *Alcaldía Mayor*) et Policaracas (dépendant de la *Alcaldía Libertador*)⁸, et en organisant le principe des *coordinadoras* chargés de répartir les *puestos* notamment en réattribuant ceux dont les locataires ne se sont pas présentés un jour. Pour José Chauran, c'est une erreur de nommer informel des travailleurs qui cherchent simplement à développer leur entreprise, qui sont souvent diplômés mais contraints à rester dans le secteur informel en raison de l'insuffisance de la demande de travail. Dans la lignée des écrits de Hernando de Soto [1986] pour qui le secteur informel est en réalité un vivier de petits entrepreneurs extralégaux opprimés à qui il faudrait fournir des droits de propriété pour leur commerce, et qui montre la nécessité de la dérégulation des contraintes étatiques puisque hors de ces contraintes les chômeurs du secteur formel trouvent en fait à s'employer ou à se faire employer, les chercheurs du CEDICE⁹ considèrent que les inégalités existant au sein du secteur informel, qui opposent les « entrepreneurs » aux « *survivors* » [Zanoni Lopez, 2005], sont en fait à attribuer à d'inégales capacités innées pour l'entrepreneuriat.

Il nous faut comprendre que le secteur informel n'est bien évidemment pas homogène, et que l'ensemble des vendeurs de rue ne constitue pas non plus un regroupement égalitaire. Le secteur informel comprend un secteur primaire,

6. Interdit à l'économie informelle.

7. Entretien réalisé en juillet 2006, faisant partie d'une série d'entretiens auprès de vendeurs de rue, en 2005 et 2006.

8. La ville de Caracas est divisée en cinq municipalités (Libertador, Chacao, Baruta, Sucre et El Hatillo), chapeautées par une mairie de l'aire métropolitaine. Chaque municipalité possède sa propre police, ainsi que la mairie métropolitaine.

9. Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, fondation privée pour le développement des théories économiques et politiques libérales, qui possède un département consacré à la question de l'économie informelle et qui a organisé une enquête sur les vendeurs de rue de Sabana Grande en 2004.



regroupant une « bourgeoisie » de l'informel, composée des propriétaires de micro-entreprises ou encore des techniciens à leur propre compte, et un secteur secondaire qui forme le prolétariat informel, agrégation de sous-employés qui n'ont d'autre choix que de se faire employer dans des micro-entreprises, sans contrat, sans garanties de respect du droit du travail, sans assurances sociales, ou de s'auto-employer pour des tâches non professionnelles. Au sein même des vendeurs de rue, la différence est grande entre le propriétaire d'un ou plusieurs *puestos* bien situés, qui emploient d'autres personnes, souvent issues de leurs réseaux de connaissances, voire de leur réseau familial, et l'employé sans *puesto* qui n'a pas les moyens d'acheter lui-même la marchandise qu'il vend.

L'informalité est donc bien une notion construite, qui a aussi comme fonction collatérale la négation des inégalités internes au secteur formel qui se creusent du fait de l'exploitation engendrée par l'absence de contrats officiels et formels, par la dimension *labour intensive* des activités et par l'inexistence de pouvoir de négociation de travailleurs surnuméraires hors des cadres réglementés. De la même manière qu'il existe une grande disparité des conditions objectives de vie au sein de ce qu'on nomme globalement les *barrios*, les zones informelles d'habitat, il existe de grandes différences de niveaux de vie, de revenus, de capacités d'expansion de l'activité entre les vendeurs de rue, malgré l'apparente homogénéité des stands et de la marchandise proposée.

Le vécu socio-spatial des vendeurs de rue

Angelina est une jeune femme de vingt-quatre ans, qui travaille sur un *puesto* du boulevard de Sabana Grande, situé dans le *Punto 4*. Ainsi, à Sabana Grande, le boulevard est découpé en 5 *puntos*¹⁰, numérotés de 1 à 5, du métro Plaza Venezuela au le métro Chacaito, gérés par cinq coordinateurs/trices (trois des cinq sont des femmes), qui se chargent de répartir les postes de vente (*puestos*) sur leur site, et de protéger ces *puestos* contre d'éventuels *invasores*¹¹, à savoir des individus cherchant à s'installer comme *buhoneros* sans passer par le coordinateur, sur un espace déjà occupé ou hors des espaces délimités par le coordinateur. Angelina loue des téléphones (activité qui s'est développée de façon considérable à Caracas au cours des quatre dernières années, en raison des barrières financières et administratives à l'installation d'une ligne fixe et du prix élevé des communications téléphoniques mobiles) et vend des sous-vêtements. Elle vivait au *barrio* de La Vega, chez sa mère, avec son fils, puis a déménagé chez une cousine à Petare, pour réduire le temps de transport, largement supérieur à une heure, réparti entre le trajet à pied et le transport en *camioneta*. Depuis Petare, le trajet est moins long et moins pénible pour elle, élément essentiel à l'accessibilité. Environ 60 % des vendeurs de rue sont des

10. Points, entendus ici comme sites de deux ou trois *cuadras* chacun.

11. Ceux qui viennent « envahir » les *puestos* des autres, sans avoir obtenu l'accord des coordinateurs, ni avoir payé pour la location.

femmes qui, en raison de leurs horaires – notamment de fin de travail – incompatibles avec les horaires scolaires, et en raison des difficultés et du coût des frais de garde des jeunes enfants, travaillent bien souvent avec leur(s) enfant(s) à côté d'elles, comme Angelina. Lorsqu'elle arrive à Sabana Grande, il lui faut retirer du dépôt, situé dans une boutique d'une des rues parallèles au boulevard, les éléments de son *puesto* et sa marchandise. Les vendeurs de rue doivent donc non seulement payer le coordinateur tous les mois pour leur emplacement, mais également payer le dépôt et les manutentionnaires qui aident à sortir et rentrer la marchandise dans le dépôt, ce qui ampute largement leurs revenus, d'environ 100 000 à 500 000 bolivars, en fonction des emplacements, soit environ un tiers de ce qu'ils gagnent. La journée est fatigante, et toutes les femmes enquêtées ont confié souffrir du travail à l'extérieur, sous le soleil, la pluie, au milieu du bruit des autres vendeurs, des piétons et des automobiles, ce dont aucun homme n'a parlé au cours des entretiens. Aucune structure n'est aménagée pour les centaines de personnes travaillant ainsi à l'extérieur. On peut citer l'exemple de l'accès aux toilettes, particulièrement important pour les femmes, puisque les *buhoneros* doivent déboursier chaque fois 200 bolivars pour utiliser les toilettes des restaurants avoisinants, les commerçants ayant saisi l'occasion de cette captation de clientèle pour faire payer ce service.

L'organisation du commerce de rue est gérée par l'Ordonnance municipale du 1^{er} septembre 1998 de Libertador, modifiée par le décret de 2004 et par le décret de 2006. D'après ces textes, le commerce de rue est interdit dans toute une série de lieux urbains (abords de monuments officiels, abords des stations de métro, places, boulevards, autoroutes, zones situées à moins de 20 mètres d'une *esquina*, etc.) et limite la taille des *puestos* à 0,75 m de large pour 1,50 m de long. Ces règles, qui limiteraient de façon très importante le nombre maximal de *puestos* dans la ville, ne sont bien évidemment pas respectées. Dans le municipe Libertador les rues dépourvues de *buhoneros* sont rares et toutes les zones les plus fréquentées de la ville regorgent de *puestos* : la Candelaria, Catia, le Centre historique autour de la Plaza Bolívar, la Avenida Baralt, le terminal de bus de Nuevo Circo et celui de la Bandera, etc. Depuis janvier 2007 cependant, les vendeurs de rue se sont vu interdire l'accès à Sabana Grande, après qu'ils ont quitté les lieux suite aux fêtes de fin d'année, conformément à l'accord passé avec la mairie de Libertador afin que celle-ci organise le nettoyage des lieux après la période de décembre, qui constitue la saison la plus haute de l'année pour le commerce. Le 28 février, ce sont les vendeurs de rue de la place Diego Ibarra, près du centre El Silencio, qui ont été délogés parce qu'ils ne respectaient pas les règlements de la mairie. Celle-ci semble adopter depuis le début de 2007 une politique publique plus répressive face à la question du commerce de rue, ou tout au moins plus active, puisque les vendeurs de rue délogés doivent être relogés rapidement dans des édifices particuliers, comme cela avait été le cas en 2005



dans les centres commerciaux de El Cementerio, Quinta Crespo et San Martín, ce qui n'avait cependant pas empêché l'arrivée de nouveaux vendeurs autour de ces centres.

Le seul texte réglementant le commerce informel et les seuls projets de « résolution » de ce qui est considéré comme un problème (lié notamment à la congestion des rues, à la pollution automobile qu'elle génère, aux dégradations dues aux déchets engendrés par cette occupation) sont donc une prise en charge spatiale de la question (espaces autorisés ou interdits, projets de relocalisation des vendeurs de rue dans des centres commerciaux populaires) et non une prise en charge économique et sociale. Entre les deux traitements possibles du pouvoir politico-administratif, direct sur les activités et donc indirect sur l'espace ou direct sur l'espace et donc indirect sur les activités [Coing, 1979], c'est donc l'aspect spatial qui est toujours privilégié, sans doute en raison d'un manque de leviers efficaces concernant les politiques publiques économiques et fiscales. On le retrouve dans les cas des vendeurs de Sabana Grande, qui doivent être relogés depuis le 23 février sur un espace délimité, un parking clos sur l'avenue Casanova aménagé pour accueillir les stands, en attendant que la tour construite au bord même du boulevard de Sabana Grande et supposée accueillir les vendeurs soit terminée. Cependant, les 700 places de cet espace sont insuffisantes pour accueillir les 2 000 vendeurs de rue recensés, et la méthode d'attribution de ces places n'ayant pas encore fait l'objet d'un accord, le relogement n'est, au 2 mars, pas encore effectif.

Néanmoins cette organisation spatiale est aussi l'occasion d'une tentative de contrôle réglementaire puisque, pour attribuer les espaces sur la zone de parking, la mairie a opéré un recensement des vendeurs de rue qui travaillaient à Sabana Grande, a éliminé ceux qui se présentaient alors qu'ils n'avaient pas de *puestos* sur le boulevard auparavant (ce qui représente environ 400 personnes), les sans-papiers (68 personnes) et des enfants dont le travail est contraire à la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna)¹², d'après la conférence de presse de Freddy Bernal (maire de Libertador) du 20 février 2007. Mais on peut également considérer que cette approche politique est révélatrice du lien essentiel entre économie informelle et territoire, et se pose alors la question de la dimension territoriale de la ville informelle, articulée entre les espaces d'habitat et de travail.

Si l'approche ethnographique adoptée lors de nos enquêtes réalisées principalement dans les quartiers du centre historique (Capitolio), de Sabana Grande et du terminal de bus de Nuevo Circo ne nous autorise pas à émettre des hypothèses quant au taux de travailleurs du commerce informel qui vivent dans les zones informelles (qu'on peut globalement assimiler aux *barrios* de la ville, sachant cependant que ces zones ne sont en rien homogènes, aussi bien

12. Loi organique de protection de l'enfance.

en termes de précarité du bâti, de droit de propriété du terrain, d'équipement des logements et des quartiers, que d'accessibilité à la ville formelle), on peut cependant noter que sur les 32 personnes interrogées, une seule vivait dans la ville formelle, un homme de vingt-cinq ans habitant chez ses parents. L'immense majorité des commerçants de rue résident ainsi dans les *barrios* qui accueillent 40 % de la population urbaine [Baby-Collin, 2000]. À l'inverse, la majorité de la population des *barrios* travaille dans la « ville formelle », c'est-à-dire dans les territoires de l'habitat formel, que ce soit dans l'économie informelle ou dans l'économie formelle. La présence des vendeurs de rue dans les zones formelles de la ville contribue donc à une forme d'intégration des *barrios* dans la ville formelle, et tend donc à réduire l'importance de la marginalité des quartiers informels.

La situation de territoires de l'économie informelle dans la ville formelle contribue à une forme de « mixité » temporaire, qui fait se rencontrer habitants des zones formelles et informelles, les clients des vendeurs de rue pouvant être résidents des unes ou des autres, comme l'expliquent les enquêtés :

« Les clients viennent de partout, il y a des gens d'ici, de Petare, ils marchent pour venir acheter à prix modique ici, il y a même des gens qui viennent du littoral pour acheter ici et faire des économies. »¹³ (Yuly, Sabana Grande)

« Ils viennent ici pour acheter, aussi bien des Vénézuéliens, des étrangers, la classe moyenne, la classe populaire... parce qu'on vend des livres chers, et d'autres bon marché, pour les gens qui ont de faibles ressources... pour les étudiants de la mission¹⁴ par exemple. »¹⁵ (Erman, Plaza Bolívar)

Selon les enquêtés, les clients viennent d'un peu partout : employés dans les entreprises proches, élèves des écoles voisines, habitants du quartier ou de tout Caracas. De ce fait, les *buhoneros* peuvent représenter une forme de lien symbolique et objectif entre les territoires formels et informels. Sans aller jusqu'à avancer l'hypothèse d'une « mixité » sociale des espaces publics qui nous semble sinon utopique du moins improbable, la mixité entraînant un mélange qui ne se produit pas, on peut envisager ces interstices informels dans l'espace économique urbain comme des interfaces entre deux territoires sociaux. Les habitants de ces deux mondes urbains opèrent symétriquement un découpage entre « eux » et « nous » mais seule la ville formelle a le pouvoir, de par sa position dans le champ social, de stigmatiser [Goffman, 1977] les zones informelles, opérant ainsi une réduction de l'autre à son territoire d'habitation. Des entretiens avec des résidents de la ville formelle, membres de la petite bourgeoisie ou de la bourgeoisie plus aisée, ont été l'occasion de nous rendre compte de la mise à distance effec-

13. « *Es que vienen de todas las zonas, hay vecinos de aquí, de Petare, caminan para comprar aquí económico, hay gente que vienen del litoral para comprar aquí económico.* »

14. Il est ici fait référence aux missions d'éducation initiées par le gouvernement.

15. « *Aquí vienen a comprarlos, los compran lo mismo : venezolanos, extranjeros, clase media, clase baja... porque hay libros baratos y libros caros, para las personas de bajo recurso... estudiantes de la misión...* ».



tuée par rapport aux habitants des *barrios*, qui ne sont pas seulement discriminés économiquement comme pauvres, mais également désignés comme population déviante : délinquants, alcooliques, incestueux. La figure du « bon pauvre » existe cependant, incarnée principalement par la domesticité, c'est-à-dire ceux qui vivent dans les quartiers formels, chez leurs employeurs, ou en tout cas qui leur sont familiers. Dans ce discours, on peut comprendre que les lieux formels et la proximité avec ceux qui y résident sont pour ces enquêtés – les entretiens ont été principalement effectués dans le secteur de Caurimare, à l'occasion d'une recherche sur la privatisation des rues, les habitants installant une barrière contrôlée par un vigile à l'entrée de la rue, exclusivement résidentielle – un facteur de « civilisation », au sens de Norbert Elias, pour ceux qui sont issus des milieux populaires.

Les *barrios* ne sont pas des ghettos au sens propre du terme [Wacquant, 2006] et les politiques actuelles d'implantation de structures paraétatiques dans les communautés et de constitution et dynamisation d'instances de décision locales tendent à réduire les processus de relégation sociale. Le repli sur soi des quartiers informels, dû notamment au chômage massif qui diminue les occasions pour les habitants des *barrios* de fréquenter la ville formelle, n'est que partiel, notamment grâce aux formes d'emploi informelles qui occupent largement l'espace public de la ville formelle.

Les espaces économiques mêmes contiennent des liens entre formel et informel : si les vendeurs de rue se fournissent de façon quasi exclusive chez des grossistes revendant des produits fabriqués par les ateliers informels du pays ou importés par voie de contrebande, il est en revanche fréquent que les commerçants formels se fournissent aux mêmes endroits. Encore une fois, le secteur informel n'est pas homogène, mais au contraire segmenté entre un secteur aux revenus et aux capacités d'accumulation comparables à ceux du secteur formel (et qui parfois lui sont préférables) et un secteur de relégation et de subsistance. Cependant, y compris dans ce dernier cas, la nécessité d'aller travailler au milieu de la ville formelle participe d'un décloisonnement des habitants des zones informelles, même si celui-ci est relatif.

La Caracas formelle, la Caracas informelle : interdépendance objective et rupture symbolique

La population des *barrios* représente quasiment la moitié de la population de Caracas, dans des secteurs situés autour de la ville formelle, mais également dans d'autres imbriqués dans celle-ci. Cependant, de la même façon que l'économie informelle ne constitue pas un secteur homogène, la totalité de ce qui peut être reconnu socialement comme *barrio* ne forme pas un « mégabidonville » [Davis, 2006] unifié, tant pour la pérennité des constructions que pour l'accessibilité aux services essentiels (eau) ou pour l'accessibilité à la ville for-

melle. Si les habitants des *barrios* doivent effectuer en moyenne trente minutes de marche pour atteindre un transport [Urban Planning Studio, 2001 : 25], la grande majorité de ce déplacement ayant lieu dans les escaliers qui servent de rue aux quartiers construits sur les pentes des *cerros* atteignant jusqu'à 40 %, l'écart type de cette moyenne est relativement élevé, du fait de la grande disparité d'accessibilité des quartiers informels. Entre les habitations situées au bas des collines, à l'entrée des *barrios* pour lesquelles les transports en commun sont très aisément accessibles, qui bénéficient souvent d'une arrivée d'eau et sont à l'abri des risques générés par les éboulements de terrain, et celles qui nécessitent de longs trajets en jeep collective et à pied – seuls 5 % des *barrios* sont accessibles directement par des routes carrossables [Baby-Collin, 2000] –, qui n'ont un accès à l'eau que collectif et dont la situation sur les collines est un obstacle à la pérennisation du cadre bâti, il y a une différence qui n'est pas que de l'ordre du degré. Les phénomènes de marginalisation sociale ne sont pas uniquement dus à la situation physique puisque de nombreuses zones informelles sont situées dans l'« enceinte » de la ville formelle, et parfois à proximité de quartiers de la classe moyenne-supérieure.

Les quartiers informels sont dépendants de la ville formelle, non seulement en termes théoriques puisque les deux notions se construisent nécessairement en négatif l'une de l'autre, mais également de façon concrète dans la mesure où leurs ressources proviennent pour une large part de la ville formelle, soit que les habitants travaillent dans l'économie formelle, soit que leurs ressources comme travailleurs informels dépendent de celle-ci. La ville formelle dépend également de ces zones informelles, réservoirs de main-d'œuvre pour l'industrie dans les années 1960-1970, pour la domesticité et pour la vente informelle dont les classes moyennes sont clientes.

Malgré cette interdépendance, malgré les différentes modalités d'intégration, les quartiers informels continuent à faire l'objet d'une marginalisation qui atteint leurs habitants par capillarisation. Alors que les contacts interpersonnels entre habitants des *barrios* et habitants de la ville formelle de classe moyenne sont fréquents, les territoires des premiers restent souvent inconnus des seconds. Ainsi, au cours des entretiens réalisés sur la vision qu'ils ont des vendeurs de rue, les habitants des propriétés de Caurimare m'ont appris être clients des vendeurs de rue, via leurs domestiques, et ont confirmé qu'ils n'allaient jamais dans les *barrios* ou dans les lieux où l'on pourrait rencontrer leurs habitants, avançant généralement le double argument de l'absence d'intérêt pour eux d'aller dans le centre-ville et de l'insécurité qu'ils attachent à ces quartiers.

La politique de l'État vénézuélien à l'égard des vendeurs de rue, entre laisser-faire et répression, laisse de plus en plus place à la négociation. Cependant, hormis les réglementations municipales qui ne sont pas respectées par les vendeurs de rue, à part lorsque des opérations de démonstration de la force de la



puissance publique les y contraignent, les seules tentatives d'organisation de l'économie informelle consistent à délocaliser le commerce informel dans des « centres commerciaux populaires ». Trois centres ont été construits à cet effet, à Quinta Crespo, à El Cementerio et à San Martín, offrant un total d'à peine 2 000 places, bien éloigné du nombre de *puestos* existant à Caracas. Le même type de mesures a été mis en place dans les centres historiques de Lima et Mexico, avec une certaine réussite dans le premier cas. Cependant, si ce processus de sortie des vendeurs informels du centre-ville ou de la ville formelle permet un meilleur contrôle du respect des lois et règlements, il est aussi révélateur du désir de sortir l'informel du formel. Les critiques émises à l'égard du commerce informel de rue concernent principalement l'occupation des espaces publics et la pollution générée par les déchets et par les embouteillages automobiles qu'il engendre, comme en témoignent les entretiens avec des passants, ainsi que les articles de presse consacrés aux *buhoneros*. Le relogement actuel des vendeurs de Sabana Grande participe d'une logique différente, puisque l'immeuble qui leur est destiné se trouve en bordure du boulevard qu'ils occupaient, correspondant ainsi à un compromis entre le souhait du voisinage et des commerçants formels de voir les *buhoneros* quitter la rue, et le souhait de ceux-ci de rester dans les endroits de passage afin de conserver une visibilité pour garantir leur chiffre d'affaires.

Conclusion

Ainsi, par l'intermédiaire des vendeurs de rue, c'est bien la ville informelle qui entre dans la ville formelle et se donne à voir en plein jour. Si les liens entre travail informel et pauvreté sont statistiquement établis, ils sont également socialement reconnus et identifiés. Les travailleurs pauvres du centre-ville, pour plus de la moitié des femmes, souvent accompagnées de leurs enfants, sont autant de pauvres qui ne restent pas dans leurs quartiers et donnent à voir publiquement la situation économique du pays et leur propre situation. L'idée de pollution de l'espace public est à mettre en lien avec son acception anthropologique. En posant un élément important de l'économie informelle au sein de la ville formelle, les vendeurs de rue « polluent » l'espace public, au sens où ils s'infiltrant dans un ordre sans pouvoir être classifié dans cet ordre [Douglas, 1962]. Cette pollution renvoie au danger encouru lorsqu'on franchit les frontières internes du système socioculturel. À cet égard, l'intrusion des marges dans le centre remet en cause la vision ségrégative mais stabilisée de l'ordre social. Les discours actuels des Vénézuéliens de la classe moyenne sur le paradis perdu des années économiquement fastes du pays sont à mettre en lien avec ces nouveaux franchissements des divisions internes qu'ose le prolétariat sous-employé de la capitale. Mary Douglas parle de souillure pour exprimer cette pollution rituelle qui met en danger le système socioculturel. Cette idée peut être reliée aux débats concernant le commerce informel, comme celui ayant eu

lieu lors de la convocation des vendeurs de rue de Sabana Grande, désirant créer un « conseil communal populaire de rue » regroupant habitants du secteur et vendeurs de rue, dans l'idée qu'ils participent d'une même communauté. Face au droit au travail (inscrit dans l'article 112 de la Constitution)¹⁶ revendiqué par les vendeurs de rue, les habitants opposaient notamment leur droit à la santé (article 127 de la Constitution)¹⁷, dans lequel on retrouve l'idée d'une pollution générée par le commerce de rue. En identifiant l'origine de cette souillure, on désigne ceux qui mettent en danger l'équilibre du système social. Expulser les vendeurs de rue peut alors participer de l'idée d'un rite de purification destiné à rétablir un ordre social menacé par autre chose qu'une simple privatisation, c'est-à-dire ici accaparement, à des fins individuelles, de la rue comme bien public spatial.

Les territoires de l'informel débordent les espaces informels. Les espaces économiques nous invitent à repenser les notions de marginalité, en sortant les *barrios* hors du concept du ghetto et de la rupture spatiale. Si l'informalité est souvent synonyme de pauvreté, elle n'est pas synonyme de marginalisation dans un pays où elle organise les structures d'habitat et de travail de la moitié de la population. Dans une telle configuration socio-économique, il est intéressant de constater que les efforts politiques actuels visent précisément à essayer de constituer un pan « participatif » à la démocratie, autrement dit à s'extraire de la démocratie « formelle » caractérisée par la prédominance du seul suffrage universel et de la seule représentation. Si l'informalité a des formes, il peut être alors envisageable de donner à ceux qui la vivent et la subissent au quotidien les possibilités de les choisir. En laissant de côté les solutions traditionnelles d'éradication de l'informalité par la force – délogement des bidonvilles et chasse aux vendeurs de rue –, Caracas peut chercher une solution à sa propre intégration socio-économique.

16. « L'État encouragera l'initiative privée, garantissant la création et la juste distribution de la richesse, ainsi que la production de biens et services qui satisfassent les besoins de la population, la liberté de travail, d'entreprise, de commerce, d'industrie [...] ».

17. « Toute personne détient le droit individuel et collectif de profiter d'une vie et d'un environnement sûr, sain et écologiquement équilibré. »



BIBLIOGRAPHIE

- ALONSO Iván, IWASAKI Fernando, GHERSI Enrique, *El comercio ambulatorio en Lima*, Instituto Libertad y Democracia, Lima, 1989, 233 p.
- BABY-COLLIN Virginie, *Marginaux et citadins. Construire une urbanité métisse en Amérique latine. Étude comparée des villas d'El Alto de La Paz – Bolivie- et des barrios de Caracas – Venezuela*, Université Toulouse II, Thèse de géographie, 2000, 620 p.
- BECKER Howard Saul, *Outsiders. Études de sociologie de la déviance*, Paris, Métailié, 1985 (1963), 247 p.
- BIT, *Employment, Incomes and equality. A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya*, Genève, OIT, 1972.
- CHÁVEZ O'BRIEN Eliana, « El sector informal urbano. Estrategias de vida e identidad », in *Nueva Sociedad*, n° 124, Caracas, 1993, p. 82-93.
- COING Henri, LAMICQ Hélène, MALDONADO Carlos, MEUNIER Christine, *Approches du « secteur informel » de l'économie des villes du tiers-monde*, Créteil, IUP, Université Paris – Val-de-Marne, 1979, 159 p.
- CROSS John, *Informal Politics. Street Vendors and the State in Mexico City*, Stanford University Press, Stanford (Ca), 1998, 284 p.
- DAVIS Mike, *Le pire des mondes possibles. De l'explosion urbaine au bidonville global*, Paris, La Découverte, 2006, 249 p.
- DOERINGER Peter, PIORE Michael, *Internal labor market and manpower analysis*, Heath Lexington Books, Lexington, 1971, 214 p.
- DOUGLAS Mary, *De la souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou*, Paris, Maspero, 1971, 194 p.
- GOFFMAN Erving, *Stigmaté. Les usages sociaux des handicaps*, Paris, Minuit, 1977, 175 p.
- LACABANA Miguel, « La calle como puesto de trabajo : reflexiones acerca de la relación Estado-Sector informal urbano », in *Cuadernos del CENDES*, vol. 10, n° 22, Caracas, 1993.
- LAUTIER Bruno, *L'économie informelle dans le tiers-monde*, Paris, La découverte, coll. « Repères », 2004, 121 p.
- MARQUEZ Patricia, *The street is my home: youth and violence in Caracas*, Stanford, Stanford University Press, 1999, 276 p.
- MONNET Jérôme, *La ville et son double. La parabole de Mexico*, Paris, Nathan, 1993, 224 p.
- SANTOS Milton, *L'espace partagé : les deux circuits de l'économie urbaine des pays sous-développés*, Paris, Éd. M. Th. Génin, 1975, 405 p.
- SETHURAMAN V. Salem, « Le secteur urbain non structuré: concept, mesure et action », *Revue internationale du travail*, vol. 114, n° 1, Genève, BIT, 1976, p. 79-92.
- SOTO Hernando de, *El otro sendero*, Lima, El Barranco, 1986, 317 p.
- URBAN PLANNING STUDIO, *Disaster-Resistant Caracas*, New York, Columbia University, 2001, 126 p.
- ZANONI LÓPEZ Wladimir, *Buhoneros en Caracas : un estudio exploratorio y algunas propuestas de políticas públicas*, Caracas, Cedice, 2005, 86 p.

RÉSUMÉ/RESUMEN/ABSTRACT

Environ 100 000 personnes vivent du commerce informel de rue à Caracas, sur les trottoirs, les chaussées, les places, ou les autoroutes urbaines. Si le travail informel n'est pas une nouveauté au Venezuela, en revanche sa dénonciation comme une « occupation des espaces publics » est inédite. La critique de cette occupation se situe aux jonctions d'un discours sur la pollution socio-spatiale et d'une mythification d'un « âge d'or » vénézuélien révolu. Fondé sur une enquête ethnographique – observation in situ et entretiens semi-directifs auprès de vendeurs de rue –, cet article s'attache à analyser les structures économique et sociale du commerce informel pour comprendre comment la construction de cette notion d'informalité œuvre pour les représentations sociales de la ville.

Alrededor de 100 000 personas trabajan en el comercio informal en las calles de Caracas, en las aceras, las calzadas, las plazas o las autopistas. El trabajo informal no es una novedad en Venezuela, pero lo que está criticado como “ocupación de los espacios públicos” parece nuevo. La crítica de esta ocupación se pone al cruce del discurso sobre la polución social y espacial, y del mito de

una “edad de oro” venezolana pasada. Basado en una encuesta etnográfica, con observaciones y entrevistas con vendedores de calle, este artículo trata de analizar las estructuras económicas y sociales del comercio informal, para entender cómo la construcción de la noción de informalidad actúa en las representaciones mentales de la ciudad.

Almost 100.000 people work in informal business in the streets of Caracas. They do their job on sidewalks, roadways, places or urban highways. Informal work is not a recent phenomenon in Venezuela. Nevertheless the stigmatization of this “occupancy of public spaces” is new. By criticizing this “occupancy”, the Venezuelan public opinion is at the crossroad of a theory on social and spatial pollution, and of a myth of the past golden age. Based on an ethnographic investigation, made of observations and half-directive interviews with street vendors, this article aims at analysing the economic and social structures of informal business, and thus understand the role the construction of this concept of informality plays in the social representations of the city.

MOTS-CLÉS

- Économie informelle
- Territorialités
- Vendeurs de rue
- Espaces publics

PALABRAS CLAVES

- Economía informal
- Territorialidades
- Buhoneros
- Espacios públicos

KEYWORDS

- Informal business
- Territorialities
- Street vendors
- Public spaces

Leopoldo Tablante*

La pobreza como objeto mediático en Venezuela

La pobreza como tema político y mediático en Venezuela

El estallido social que fue el “sacudón” o “Caracazo” del 27 y el 28 de febrero de 1989 convirtió el tema de la pobreza en la principal causa de movilización política en Venezuela a lo largo de los años noventa. El Caracazo fue producto de las tensiones socioeconómicas sufridas por la sociedad venezolana a partir de la primera gran devaluación de la moneda, el viernes 18 de febrero de 1983. Esta circunstancia, comienzo de una corriente recesiva que implicó reestructuraciones macroeconómicas que atentaron contra la calidad de vida de los estratos sociales medios y bajos, fue también el primer síntoma del agotamiento del sistema bipartidista venezolano, que había regido el destino del país desde 1959.

El bipartidismo fue la manifestación política del llamado “Pacto de Punto Fijo”, acuerdo suscrito el 31 de octubre de 1958 entre el partido socialdemócrata Acción Democrática (AD, fundado por Rómulo Betancourt), el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei, fundado por Rafael Caldera) y la Unión Republicana Democrática (URD, fundada por Jóvito Villalba). El acuerdo – firmado en la entonces residencia caraqueña de Rafael Caldera, llamada “Punto Fijo” – implicaba, entre otras cosas, la formación de un gobierno de unidad nacional en el cual cada uno de los partidos signatarios

* Centro de Investigación de la Comunicación, Universidad Católica Andrés Bello (CIC-UCAB).

tendría representación equitativa en el gabinete ejecutivo. Debido al éxito de las dos primeras taldas en crear militancias masivas y activas, el pacto dio paso a la instauración de una lógica de alternancia de poder entre AD y Copei que prácticamente absorbió la figuración de URD y opacó la del resto de los partidos políticos.

Aunque el Pacto de Punto Fijo congregó líderes y seguidores altamente movilizados contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), no incluyó al Partido Comunista de Venezuela, cuerpo político opuesto a Pérez Jiménez fundado en 1931 y miembro de la Junta Patriótica, entidad formada en 1956 con el propósito de favorecer la lucha popular y fomentar la agitación política con miras a instalar la democracia. Los errores políticos y administrativos en que incurrieron los diversos gobiernos desde 1959 – entre ellos la persecución y, luego, la marginación sistemática de la izquierda y las inconsistencias en la planificación económica y en el control de los recursos – contribuyeron a alimentar el descontento popular en contra del liderazgo puntofijista, sobre todo a partir del momento en que la economía ya no pudo seguir asegurando un ambiente de convivencia ciudadana.

En esta lógica, la década de los ochenta puede considerarse como un período clave “de desencanto” que absorbió en sus propios tropiezos las inconsistencias sociales, políticas y económicas de las décadas anteriores. La lucha armada contra la insurrección de izquierda que caracterizó los años sesenta venezolanos fue remplazada en los setenta – tras el proceso de pacificación acometido por Rafael Caldera en su primer gestión de gobierno, entre 1968 y 1973 – por un clima de aparente estabilidad política, de prosperidad económica y de alto consumo que, a grandes rasgos, alcanzó todos los sectores sociales y bastó para cebar los primeros escándalos de corrupción. En el intervalo comprendido entre 1974 y 1978, siendo Presidente de la República Carlos Andrés Pérez, el Producto Territorial Bruto (PTB) no petrolero creció a razón de una tasa interanual de 7,4 %, mientras que el crecimiento *per capita* era de 3,4 % y la inflación promediaba apenas 1,7 % anual. Por su parte, el salario real creció sin cese en una proporción de 4,5 % y el desempleo fluctuó de 6,9 % en 1974 a 4,3 % en 1978 [Spiritto, 1989, p. 237].

El año 1979 marcó, por el contrario, el comienzo de una pendiente negativa. Desde ese año hasta 2000, el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela por habitante ha caído sin parar. En 1979 se situaba por encima de 30 000 bolívares por año y en 2000 por encima de 25 000 bolívares [España, 2001, p. 11] ; en el mismo intervalo, el ingreso real medio de los hogares venezolanos ha disminuido en una proporción de 59 %, el número de hogares pobres se ha incrementado en 156 % y el número de hogares en pobreza crítica ha progresado en 337 % mientras que el ingreso real por persona ocupada ha caído en 63 % [Balza y Riutort, 2001, p. 10]. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, entre



1980 y 2000 el empleo informal aumentó en el país del 35 % a más del 60 %, lo que contribuyó a atenuar el aumento del desempleo en general, que en el mismo tiempo pasó de 5 % a 14 % [World Bank, 2001, p. i-ii].

Este proceso de deterioro es el producto de una combinación de factores : la caída de los precios del petróleo durante la segunda mitad de los años ochenta, el endeudamiento externo y la aplicación de criterios administrativos erráticos. Entre 1984 y 1988, el gobierno del presidente Jaime Lusinchi (AD) optó por un régimen económico concentrado en el pago de la deuda externa a pesar de los bajos precios del petróleo, lo que absorbió la mitad entera de los ingresos (alrededor de 30 000 millones de dólares) [Spiritto, *op. cit.*, p. 242]. Este régimen entrañó la reducción de gastos de capital por parte del sector público, devaluaciones sucesivas del bolívar y la introducción de controles cambiarios, de importaciones y de precios. Si bien es cierto que estas medidas lograron que la cuenta corriente de la balanza de pagos conociera un superávit de 4 200 millones de dólares y que, al cierre de 1985, el país dispusiera de reservas internacionales por el orden de 15 500 millones de dólares, el costo, económico y social, fue alto : la productividad del sector no petrolero decreció entre 1982 y 1985 en 7 % y el desempleo progresó de 7 % a 13 % [Cendes, 1989, p. 140].

Las medidas adoptadas para reactivar el sector no petrolero y combatir el desempleo (aumento de la inversión pública durante tres años, flexibilización de las políticas crediticias, aumento del salario de los empleados del sector público en una proporción de 12,5 % y control de importaciones y precios para reactivar la productividad y el empleo) surtieron varios efectos colaterales adversos : la reducción del superávit del sector público de 5 % del PIB en 1985 a un déficit de 3,8 % del PIB en 1986, mientras que la cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de un superávit de 3.500 millones de dólares (6 % del PIB) a un déficit de 1 500 millones de dólares. También las reservas internacionales venezolanas sufrieron una fuerte contracción : de los 15 500 millones de dólares antes mencionados llegaron a 11 500 millones de dólares [*Ibid.*, p. 140-141].

De nuevo, a finales de 1986, la administración de Lusinchi adoptó un correctivo categórico : devaluar el bolívar. Frente a la expansión del gasto público, la operación aceleró la inflación y obligó al país a mantener el equilibrio entre sus gastos ordinarios, los precios petroleros y los créditos contratados.

No obstante los compromisos de austeridad del Estado venezolano, 1988 presentó dos dificultades mayores: una nueva caída de los precios del petróleo y el inicio de una campaña política en la cual el aspirante con mayores posibilidades era Carlos Andrés Pérez, candidato de AD y presidente durante los años de la Gran Venezuela de los años setenta. Las elecciones motivaron a Lusinchi a expandir el gasto público y a ejecutar grandes proyectos de inversión para crear un clima que favoreciera la candidatura de su compañero de

partido (cuya sola personalidad evocaba la bonanza de su primer período en la presidencia), lo que trajo como secuelas el aumento de 35 % del índice de precios al consumidor (ya en 1987 había sido de 40 %) y el incremento a 8 % del PIB del déficit de la cuenta corriente. En suma, electo presidente en los comicios de diciembre de 1988 con el 52,75 % de los votos válidos, Pérez recibió de su predecesor un país que disponía de apenas 4 500 millones de dólares en reservas internacionales (monto equivalente al déficit de la cuenta corriente), con dólares que se cotizaban en el mercado paralelo a 40 bolívares cuando el cambio oficial era de 14,50 bolívares y dependiente de líneas de crédito a corto plazo emitidas por la banca privada [*Ibid.*, p. 141-142]. El retorno optimista a los años de la Venezuela Saudita era improbable y el descontento popular sólo esperaba una medida de ajuste para manifestarse.

Como lo explica el economista Fernando Spiritto, “ante la magnitud de los desequilibrios económicos heredados de la administración anterior, el nuevo gobierno de Carlos Andrés Pérez se vio en la necesidad de ejecutar un severo programa de ajustes destinado a corregirlos. La utilización de las reservas internacionales logró contener hasta el último momento la obligación de tomar las medidas correctivas, acumulando imprudentemente tensiones que pronto serían liberadas” [*Op. cit.*, p. 246]. El liberador de las tensiones sociales fue, en efecto, el llamado “paquete económico” que anunció Carlos Andrés Pérez el 16 de febrero de 1989, apenas dos semanas después de haber asumido funciones como Jefe de Estado. La nueva administración se acogió a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional a través de una carta de intención con la que solicitó un préstamo de 4 500 millones de dólares, dinero a ser invertido en gasto público en el transcurso de los próximos tres años. El “paquete” implicó una serie de ajustes que sensibilizaron a la población, entre ellos la eliminación de la tasa de cambio preferencial, el abandono de la paridad bolívar-dólar a flotamiento libre y el aumento promedio de 100 % del precio del combustible, todos con repercusiones directas sobre las tarifas del transporte público y de la economía en general.

El aumento del combustible se hizo efectivo el 26 de febrero de 1989 y, con el propósito de amortiguar el impacto social, el gobierno propuso al gremio de los transportistas aplicar aumentos escalonados. El primer incremento debía ser de 30 % y válido por tres meses, al cabo de los cuales podrían aplicarse aumentos progresivos que completaran el 70 % restante. Sin embargo, los transportistas, alegando que el aumento no cubría los costos derivados del aumento del combustible, de los repuestos automotores y del costo de la vida, exigieron un incremento mínimo de 70 % y la Cámara del Transporte convocó a un paro para el día 27 de febrero. Ese día, los choferes de las rutas interurbanas (como los del trayecto Caracas-Guarenas) desconocieron el aumento de 30 % autorizado por el ministro de Transporte y

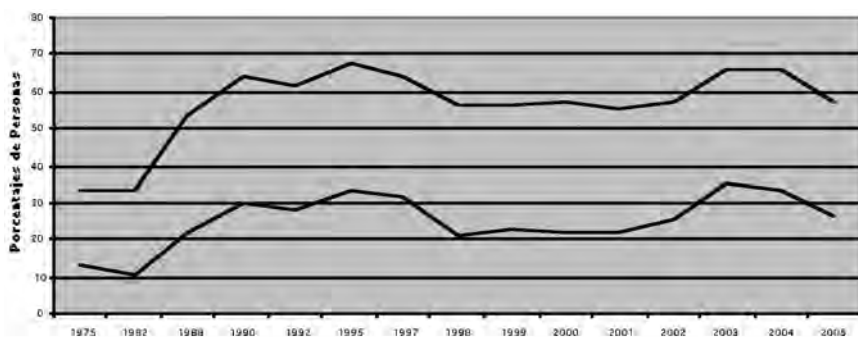


Comunicaciones así como el pasaje estudiantil. Los usuarios reaccionaron indignados en medio de un clima de crispación que ya había venido definiéndose debido a la escasez de productos alimentarios de primera necesidad.

Los disturbios comenzaron en la población de Guarenas, encendieron Caracas y tuvieron eco en Barquisimeto, Ciudad Guayana, Maracay, Mérida y Valencia. Incluyó violencia de calle y saqueo de negocios, entre ellos expendios de víveres en los que los manifestantes encontraron numerosos productos acaparados. La revuelta, que superó las fuerzas policiales, fue reprimida por las Fuerzas Armadas a partir del martes 28 de febrero. Se decretó el toque de queda. Las cifras oficiales hablan de 300 muertos y un millar de heridos, cifras con tendencia al alza y que se volatilizan con la especulación¹.

La violencia y magnitud del estallido social del 27 de febrero dieron cuenta de la frustración concentrada en la población venezolana de menores recursos. Venezuela sufrió un proceso paulatino de descomposición social que fue particularmente perceptible desde el “viernes negro” de 1983. Este proceso se acompañó de la falta de credibilidad de los sectores populares y medios en una clase política que, más que representar los intereses de la mayoría, parecía guarecerse en sus privilegios sociales, económicos y políticos. El Caracazo puede ser visto entonces como un punto de quiebre dentro del declive socioeconómico venezolano, evidente en el siguiente gráfico.

FIGURA 1 : PORCENTAJE DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN VENEZUELA, 1975-2005



Fuente : Matías Riutort, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, 2005.

Desde luego, una manifestación de la magnitud de la ocurrida el 27 y el 28 de febrero de 1989 encontró en los medios de comunicación un importante

1. La información de los últimos cuatro párrafos ha sido extraída del sitio web www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional/insurr/27febr89.html, que reproduce el mismo artículo contenido en el *Diccionario de Historia de Venezuela* de la Fundación Polar en su edición de 1997 [tomo IV, p. 207-209] redactado por la socióloga Miriam Kornblith.

vehículo de diseminación colectiva. Este fenómeno ayudó a socavar la creencia ciudadana de que Venezuela era un país rico y a definir causas y retóricas políticas que han ido transformando en contenido simbólico y en insumo de representaciones sociales. En suma, la politización de la pobreza ha sido simultánea a su mediatización. Sin embargo, ¿ha sido la representación mediática de la pobreza a partir de El Caracazo congruente con líneas editoriales deliberadamente trazadas o, más bien, no ha sido ella la amplificación natural de una retórica política exógena ?

La prensa bajo observación

Los medios de comunicación social fueron uno de los principales flancos analizados tras los sucesos de febrero de 1989. Sin embargo, estos análisis comenzaron siendo observaciones puntuales sobre el funcionamiento de los medios de comunicación social y sobre la retórica que desplegaron en torno de El Caracazo sin que la pobreza figurara necesariamente como tópico predominante. En este sentido, la edición número 70 de la revista *Comunicación*, titulada “Periodismo en tiempos de crisis”, a un año de los sucesos de febrero de 1989, publicó una investigación sobre la cobertura que los medios de comunicación de masas venezolanos dieron a El Caracazo. El periodista y profesor universitario Federico Álvarez, en un artículo titulado “Y de aquellas furias sólo quedan palabras”, observó entonces que los medios de comunicación venezolanos explicaron los sucesos de febrero a través de las siguientes simplificaciones :

- 1) que los saqueos fueron una respuesta instantánea al “paquete” de medidas económicas negociadas por la administración de Carlos Andrés Pérez con el Fondo Monetario Internacional ;
 - 2) que, por fin, el pueblo (es decir, el conjunto de personas pertenecientes a las clases más pobres) había asumido un rol protagónico que desbordó la capacidad de reacción de los liderazgos políticos tradicionales ;
 - 3) que, en principio, el pueblo pudo gozar de una “noche buena” con el producto de los saqueos aunque después sufrió la “mala noche” de una brutal represión militar y policial ;
 - 4) que El Caracazo fue la expresión de un movimiento político en ciernes que, si hubiera contado con un liderazgo y con objetivos claros, habría podido desarticular el sistema político imperante ;
- y
- 5) que fue un movimiento de clase que, a pesar de que debía estremecer a los más poderosos, se limitó a impactar a los más pobres [Álvarez, 1990, p. 4-5].

A las razones mediáticas que Álvarez compendia en los puntos recién mencionados, el autor opone las suyas propias, a saber :



- 1) que la violencia de El Caracazo permitió evacuar una saturación de frustraciones sociales ;
 - 2) que, aun cuando los saqueos no contaron con un liderazgo claro, el movimiento dio cuenta de que el bipartidismo no logró “derechizar” a los sectores populares ;
 - 3) que los niveles de violencia fueron imprevistos tanto para las autoridades como para los sectores populares ;
 - 4) que los destinatarios de los saqueos no fueron necesariamente las clases más ricas, puesto que las víctimas económicas principales fueron los pequeños comerciantes instalados en los barrios ;
- y
- 5) que, a pesar de lo espontáneo, este estallido social fue un precedente para acercar el liderazgo y la vanguardia política a las masas populares, “de las cuales [*ambas*] se divorciaron desde los tiempos de la lucha armada” [*Ibid.*, p. 10].

En términos generales, Federico Álvarez objeta la versión mediática de El Caracazo y propone una explicación de carácter global : El Caracazo marca el despertar político de los sectores sociales de base, que deben aprovechar el descontento socioeconómico para establecer liderazgos y líneas de acción que posibiliten un cambio sociopolítico en Venezuela.

Si Federico Álvarez reprocha en términos generales la poca disposición “revolucionaria” del periodismo venezolano, Ángel E. Álvarez, autor del artículo “Versiones políticas del ‘sacudón’ en los diarios capitalinos” [1990, p. 11-16], propone una matriz de análisis que sistematiza los modos en que seis diarios caraqueños reflejaron tanto las motivaciones como los presuntos destinatarios de los saqueos del 27 y el 28 de febrero de 1989. Los diarios tomados en cuenta por Ángel E. Álvarez en su análisis son :

- *2001* : diario de información general, de circulación matutina y corte popular con factura sensacionalista e ideología conservadora. Pertenece al grupo de publicaciones De Armas. Su fundador fue Armando de Armas. El periódico, primero de su género en imprimir en formato estándar, con gráficas y títulos a color, salió a la calle el 2 de julio de 1973 con el lema “el diario del siglo XXI”. Más de la mitad de sus lectores pertenecen a la clase media, tienen edades comprendidas entre 25 y 44 años con una distribución casi equivalente entre hombres y mujeres. Actualmente, con el propósito de alcanzar lectores de mayor poder adquisitivo, *2001* ha ganado en sobriedad y ha apostado por un tono más factual y menos sensacionalista ;
- *El Diario de Caracas* : diario de información general con énfasis en el análisis y la opinión. Fue creado por Diego Arria, ministro de Información y Turismo del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, Rodolfo Terragno, asesor del

- mencionado ministerio, y el periodista Tomás Eloy Martínez. Comenzó operaciones el 2 de mayo de 1979. Con una marcada vocación intelectual, este diario buscó en sus comienzos erigirse en creador de opinión y de reflexión entre los sectores de clase media y alta venezolanos. Por problemas económicos, fue absorbido por el grupo económico 1BC casi desde sus comienzos. Cultivó una línea editorial de centro. Desaparecido en 1995, su nombre y su logo han sido retomados recientemente para lanzar un periódico gratuito ;
- *El Mundo* : diario de información general cuyo énfasis recae en el análisis, la investigación y las entrevistas en profundidad. Tiene circulación vespertina y fue fundado por Miguel Ángel Capriles en febrero de 1958, apenas salido de prisión tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Tiene vocación democrática y su público lector pertenece mayoritariamente a la clase media, dentro de la franja de edad de entre 25 y 50 años y con énfasis en la población masculina. Sus ventas superan los 50 000 ejemplares ;
 - *El Nacional* : diario de información general. Tiene circulación matutina y su tendencia política es de centro. Es de formato estándar, factura sobria y énfasis en la información, dirigido principalmente a lectores de clase media y media alta. Fue fundado en 1942 por Henrique Otero Vizcarrondo y tuvo como primer jefe de redacción al escritor Miguel Otero Silva. Se ha caracterizado por el empleo de titulares apoyados en grandes fotografías, la incorporación de la mancheta (frase contundente incluida en la sección de opinión con que se editorializa la principal información del día) y la colaboración de los más influyentes columnistas del periodismo venezolano. Actualmente emprende un proceso de reestructuración que implica su cambio de formato de estándar a tabloide. Sus ventas promedian 130 000 ejemplares ;
 - *El Universal* : se trata del periódico comercial más antiguo del país, fundado por el poeta Andrés Mata. Salió el 1 de abril de 1909. De información general, posee el diseño más sobrio de todos los diarios que se publican en Venezuela. En sus páginas alternan contenidos de política nacional, comunidad, información internacional, deportes y espectáculos, aparte de contener el más importante repertorio de anuncios clasificados de la prensa venezolana. Se lectoría corresponde en su mayor parte a las clases medias y altas Venezuela. Se lo considera un periódico de élite y, en este sentido, cultiva una línea editorial de centro derecha. Sus ventas promedian los 110 000 ejemplares ;
 - y *Últimas Noticias* : fundado el 16 de septiembre de 1941, es el diario de información general más popular y de mayor circulación en Venezuela (los domingos se tiran entre 280 000 y 320 000 ejemplares con un porcentaje de devolución de 4 %). Más del 96 % de sus lectores se sitúan entre la clase media y los estratos más pobres de la sociedad venezolana. Políticamente, es un diario de centro-izquierda cuyo personal, en sus comienzos, militaba



en el Partido Comunista de Venezuela. Se caracteriza por el cultivo de un lenguaje vernáculo compatible con el perfil de su lectoría.

Para trazar diferencias con respecto a las versiones privilegiadas por los seis periódicos mencionados, Ángel E. Álvarez diferencia entre los protagonistas de la protesta violenta (población común o agitadores) y los destinatarios de sus acciones (transportistas especuladores, gobierno nacional o régimen político). De acuerdo con los análisis del autor, el diario *2001* arguye que El Caracazo habría sido producido por agitadores que actuaban en contra de los transportistas; *El Nacional* privilegia la tesis de que fue una expresión violenta de la población común contra el gobierno nacional; por su parte, *El Universal* explica El Caracazo como una expresión de la indignación de la población común ante las especulaciones del gremio de los transportistas; *Últimas Noticias* afirma que el sacudón fue obra de agitadores infiltrados que, alternativamente, pretendían atacar al gremio de transportistas “especuladores” o al gobierno nacional; según *El Mundo* el protagonismo de las acciones recae en la población común, rebelada ya fuera contra los transportistas o contra el gobierno nacional; y por último, *El Diario de Caracas* sostiene la tesis de que los disturbios habrían sido suscitados por agitadores opuestos al régimen político [Álvarez, 1990, p. 11-16].

Protagonista de la protesta violenta	Destinatario de la protesta violenta		
	Transportistas especuladores	Gobierno nacional	Régimen político
Población común	<i>El Universal</i> <i>El Mundo</i> [27/02/1989]	<i>El Nacional</i> <i>El Mundo</i> [27/02/1989]	***
Agitadores	<i>2001</i> <i>Últimas Noticias</i>	<i>Últimas Noticias</i>	<i>El Diario de Caracas</i>

Fuente : Ángel Álvarez (1990).

De estas lecturas, Álvarez logra determinar la existencia de cinco versiones principales: la “economicista”, privilegiada por *El Universal*; la “oposicionista”, sostenida por *El Nacional* e insinuada por *El Mundo*; la “conspirativa”, expuesta por el antiguo *Diario de Caracas*; y la “infiltracionista”, difundida fundamentalmente por *2001* y *Últimas Noticias*.

En todo caso, por más que cada uno de los periódicos considerados por Álvarez proponga una lectura más o menos congruente con su respectiva línea editorial, existe un hecho que a nuestro entender trasciende toda manipulación posible dentro de sus criterios de representación: El Caracazo fue un movimiento masivo motivado por la insatisfacción de unas bases popula-

res cada día más empobrecidas, opuestas al poder económico o a la autoridad política. El carácter masivo de esta manifestación se insertó “por fuerza” entre los contenidos de los medios de comunicación social, que han articulado los símbolos representativos de la pobreza en Venezuela así como de los quiebres económicos, políticos y sociales del país.

La pobreza atmosférica. El caso de *Por estas calles*²

Lo que aquí calificamos como “atmosférico” tiene que ver con el hecho de que, después de la insurrección popular de 1989, y a raíz de la proliferación en los medios de comunicación de masas de informaciones que insistían en los temas de la pobreza y del empobrecimiento, éstos intervinieron el clima de la opinión pública, la agenda temática de los medios y las representaciones sociales de los ciudadanos comunes en sus interacciones cotidianas cara a cara. La palabra pobreza se hizo indisociable del espíritu del tiempo y esto creó un consenso colectivo: la pobreza es el más importante problema venezolano y es el estado de la nación.

Esta realidad fue el germen del primer gran espectáculo mediático “sintético” del ambiente venezolano post-Caracazo: la telenovela *Por estas calles*, original del escritor y dramaturgo Ibsen Martínez. Esta telenovela se inscribe entre los géneros “cultural” (o “de ruptura”) y “realista”. El primero de ellos se caracteriza por “la incorporación de narradores y dramaturgos nacionales” y por la elaboración “de un discurso amoroso de una protagonista o pareja protagonista son entes sociales que construyen su propio destino e interactúan en un complejo contexto sociocultural” [Aguilera en Rondón, 2006, p. 26] ; el segundo tiene que ver con “la utilización de un medio comunicacional a partir de la función periodística de información inmediata que éste posee, acentuando lo que ya el cine realista y neo-realista y otros de formato libre habían planteado a partir de una estética informal y retratista” [Guerra, *ibid.*, p. 27].

Por el solo hecho de ser una telenovela, la pobreza y el empobrecimiento plasmados en *Por estas calles* merecen ser observados con atención. La telenovela es una tradición mediática típicamente latinoamericana nacida del reciclaje de la radionovela (folletín radiofónico) a las particularidades técnicas de un nuevo medio, audiovisual y remoto, la televisión, que comenzó a operar en América Latina a comienzos de los años cincuenta. La sensibilidad *telenovelesca* de los latinoamericanos se ha formado entre melodramas tradicionales y otras historias apegadas a las nuevas realidades que, siempre transmitidas en horario estelar (en Venezuela a las nueve de la noche), sólo tienen razón de ser en la medida en que sus capítulos conmuevan y atrapen a una audiencia de millones de personas. Aunque el público de la telenovela incluye espectadores de todas las cla-

2. Agradezco encarecidamente a la profesora Carolina Acosta-Alzuru, profesora del Grady College de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, y especialista renombrada en el tema de la telenovela latinoamericana, el haberme aclarado términos y haberme proporcionado datos que componen esta parte.



ses sociales, su máximo arraigo se encuentra en las mujeres de clase popular, como bien lo apunta Cabrujas [2002] :

“Las estadísticas revelan que el 73 % de [la audiencia] promedio [de las telenovelas] son mujeres. Los jóvenes no las ven, en los ranchos las ven de todas las edades, incluyendo un alto porcentaje relativo de hombres. La gran audiencia está ubicada en los niveles C, D y E y el 80 % de este público caen dentro de la categoría de ‘pobres’ [p. 56].

La apreciación de Cabrujas concuerda con la de Aguirre *et al.* [1998], quien a través de una encuesta aplicada a 517 personas (48 % de género masculino, 52 % de género femenino, residentes de barrios pobres y de urbanizaciones), encontró que 45 % de las mujeres prefería la telenovela a los otros diez tipos de contenido televisivo (películas, espectáculos musicales, programación deportiva, teleseries, programas de opinión, programas cómicos, programas infantiles, noticieros, videoclips y dibujos animados). Los espectadores mayoritarios de la telenovela pertenecen a los grupos socioeconómicos D y E y suman 59 % [p. 191]. En términos generales, este estudio halló también que el 64 % de todos sus encuestados veían telenovelas todos o casi todos los días [Aguirre *et al.*, 1998, p. 187-188].

El éxito de una telenovela siempre se manifiesta en cifras gruesas. Por ejemplo, durante dos años y dos meses (desde junio de 1992 hasta agosto de 1994), *Por estas calle* mantuvo un *rating*³ que gravitó en torno del 70 %. Esto garantizó a la planta privada Radio Caracas Televisión (RCTV) ingresos publicitarios seguros durante más de dos años en horario estelar.

Un criterio mercadotécnico recurrente entre las plantas de televisión de América Latina es la alternancia de tres tipos de contenido inevitables : telenovelas, noticieros y programas de variedades. El carácter narrativo y melodramático de la telenovela hace sin embargo que los niveles de implicación emocional de los espectadores sean más sostenidos que los que corresponden a otros formatos programáticos, por lo cual a menudo los programadores tienen tendencia a forzar las estructuras previstas de la trama en función de las reacciones del público con el propósito de prolongar la fruición de los espectadores y el desembolso de los anunciantes. Tal fue el caso de *Por estas calles*, que debido a su carácter coyuntural (en su curso de preproducción y realización se suscitaron dos intentos de golpe de Estado, uno de ellos protagonizado por el actual presidente de Venezuela, Hugo Chávez ; el antejuicio de mérito a Carlos Andrés Pérez ; la llegada al poder del socialcristiano Rafael Caldera luego de distanciarse del partido Copei y formar la coalición Convergencia⁴; y la intervención del sistema bancario nacional por parte del

3. Tasa de receptores de televisión sintonizados en la señal de un canal de televisión.

4. Coalición formada por actores políticos y por ciudadanos que, luego de sufrir el impacto de los intentos de golpes de Estado ya mencionados y decepcionados de los partidos políticos, se convirtieron en una masa dispersa, sin liderazgo definido. Caldera se convirtió en el líder unificador de este grupo, cuyo perfil y morfología caóticos le mereció el coloquial apelativo de “chiripero”.

Estado), rebasó la planificación original de su historia. La telenovela se convirtió así en un enjambre de personajes incidentales creados *en tiempo real*. El dramaturgo José Ignacio Cabrujas explica de este modo la estrategia adoptada por Ibsen Martínez para hilvanar esta telenovela del caos :

“[Ibsen Martínez] escogió inicialmente un tema bueno, una buena historia, pero cuando estalló el intento de golpe de Estado del 4 de febrero y pasaron unos meses, el escritor – que es un intelectual al que le apasiona mucho la política y que vibra mucho con ella –, se percató de un nuevo fenómeno en la sociedad venezolana, que él interpretó con mucho genio. Se dio cuenta de que el ambiente del país es una sola protesta, que el Estado venezolano necesita perentoriamente al pueblo que está bravo (por algo el himno nacional dice ‘Gloria al bravo pueblo’). Después del 4 de febrero los venezolanos se irritaron y ahora hay una sensación, una necesidad de la gente de hablar pestes [...]. El libreto de *Por estas calles* interpreta esta protesta y crea personajes que se quejan, que chocan, que son irreverentes, que agraden a las instituciones y la telenovela se lanza con la cámara al barrio de una manera muy brutal y descarnada, por ejemplo cuando capta al tipo aquel que hace campaña política en el barrio pero al mismo tiempo quiere oler a agua de colonia y aparece echándose perfume a cada rato [...]. Se imaginarán que los televidentes de *Por estas calles*, dada la peculiar estructura de esa telenovela, no tienen mucho interés en el relato en sí. Éste ya no tiene un gran significado, y si nos guiáramos por el ‘librito’ teórico del guión debería ser un escalofriante fracaso. Pero el escritor muy hábilmente colocó una cantidad de personajes secundarios de un inmenso encanto [...], son gentes que operan en la ciudad como el malandro o el médico y que dismantelan el patrón convencional que siempre hemos visto”. [Cabrujas, *op. cit.*, p. 221-222].

En efecto, en esta telenovela se alternaban una serie de personajes que ilustraban la decadencia moral y política venezolana y las repercusiones socioeconómicas de semejante estado de cosas : un empresario inescrupuloso y corrupto que de pronto se hace político (Don Chepe Orellana) ; un médico ávido de dinero que extrae los insumos del hospital público donde trabaja para trasladarlos a su clínica privada (Aristides Valerio) ; un padre que, debido al asesinato de su hijo en una calle de Caracas, decide tomarse la justicia por su propia mano (Natalio Vega o, en su rol de vengador, “El hombre de la etiqueta”) ; una maestra de escuela honesta y consciente que trata de organizar políticamente a la gente de su vecindario (Eva Marina Díaz) ; un mujeriego simpático e informal, encomendado al muy venezolano espíritu de improvisación, cuyo lema era “como vaya viniendo vamos viendo” (Eudomar Santos) ; o una enfermera soltera y con sueños de progreso, trabajadora del hospital privado del doctor Valerio (Eloína Rangel). Sin embargo, quizás el personaje más inquietante de *Por estas calles* fue un niño endurecido y convertido en malandro por las circunstancias de su vida : “Rodilla ‘e chivo”, producto directo de la Venezuela de la hostilidad urbana y de la exclusión social.

Aunque difícilmente una telenovela realista y coyuntural como *Por estas calles* pueda tener un formato estricto, diremos no obstante que en la industria de la telenovela de América latina – bajo las directrices de la producción de



Miami, que no la brasileña – existe una definición convencional : la telenovela es una historia con una duración estándar de 120 capítulos (equivalentes a cuatro meses en el aire) que suele alargarse de acuerdo con la empatía que brinde a los telespectadores. Ninguna de las últimas telenovelas de éxito en Venezuela (*Cosita rica*, *Ciudad bendita*, *Voltea pa' que te enamores*, todas tributarias del estilo realista de *Por estas calles*) ha durado menos de 200 capítulos. Fue esta misma presión creativa y de producción lo que provocó la renuncia de Ibsen Martínez, a finales de 1993, del proyecto *Por estas calles*, que pudo llegar a término a finales de 1993 gracias al trabajo de un equipo de guionistas.

En suma, si bien esta telenovela plasmó en su discurso el país que fue tras el sacudón de 1989, también amalgamó el imaginario de un fracaso nacional que aún no toca fondo.

En lo que sigue quisiéramos adelantar algunos hallazgos de dos investigaciones que, con el importante aporte de estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, hemos realizado desde el Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello (CIC-UCAB).

Dos casos de representación mediática de la pobreza en Venezuela

Los resultados y análisis que se presentan a continuación conciernen a un programa de periodismo sensacionalista antes y después de El Caracazo (*Alerta*, RCTV) y a dos noticieros de televisión durante una semana de diciembre del año 2003: *El Observador*, RCTV ; y *La Noticia*, Venezolana de Televisión, VTV, canal del Estado.

Este último caso es interesante puesto que ambos noticieros definieron una dinámica de confrontación en un momento de alta polarización política. RCTV, canal de televisión privado perteneciente al grupo de empresas 1BC, conglomerado capitalista emblemático de Venezuela fundado a comienzos del siglo XX por la familia Phelps, representa la proactividad empresarial y económica deplorada por el gobierno bolivariano, encabezado por el presidente Hugo Chávez. Desde luego, *El Observador*, lo veremos más adelante, desplegó durante la semana analizada una pauta informativa tendiente a difundir la ineficacia del gobierno en materia social y a comprometerlo moralmente con los sectores más pobres, que apoyan políticamente a Hugo Chávez y a la Revolución Bolivariana. Por el contrario, *La Noticia* desplegó una pauta informativa llena de contenidos que realizaron los logros del gobierno bolivariano en materia social.

La guerra informativa entre RCTV y VTV a finales de 2003 constituye un precedente indicativo de la lucha verbal del presidente Hugo Chávez con-

tra los grandes capitales mediáticos venezolanos. La actualización de esta pugna es la inquietante decisión del presidente de la República, anunciada el 28 de diciembre de 2006, de revocar la concesión de uso del espectro radio-eléctrico a RCTV, canal que tiene una tradición televisiva de 53 años.

Tanto en el caso del programa *Alerta* como en el del análisis comparativo de *El Observador* y *La Noticia* se aplicó el análisis de contenido con el propósito de describir objetiva, sistemática y cuantitativamente [Berelson cp. Krippendorff, 1990, p. 29] los elementos manifiestos de pobreza presentes en los casos audiovisuales considerados. El corpus de investigación (“el conjunto de los documentos tenidos en cuenta para ser sometidos a los procedimientos analísticos”) [Bardin, 1986, p. 72] fue constituido intencionalmente de acuerdo con la presencia de texto o de imagen alusivo a la pobreza.

Si bien es cierto que tanto los límites impuestos a la muestra como la intencionalidad de la selección permite evaluar los criterios de representación de la pobreza en momentos puntuales, el estudio es útil para esclarecer 1) los rasgos privilegiados por los programadores para representar la pobreza en ejemplos escogidos ; y 2) los recursos técnicos por medio de los cuales se construyen las lecturas preferenciales sobre la pobreza. Puesto que es difícil en Venezuela emprender análisis sistemáticos de las programaciones de los canales de televisión debido a la ausencia de archivos audiovisuales y a la reticencia propia a los programadores, estimamos que la realización de estos estudios ayudará a constituir resultados parciales que, por efecto de acumulación, permitirán a la postre articular conclusiones de mayor alcance. Es útil llamar la atención sobre el hecho de que los criterios metodológicos empleados en todos estos análisis se han asentado en la medida en que más estudiantes han trabajado de acuerdo con los lineamientos de nuestro programa de investigación en representaciones sociales e industrias culturales.

Para proceder a levantar la información, se desarrollaron cuatro matrices de análisis. En el caso de *Alerta*, éstas cubrieron el contenido de ocho emisiones (cuatro anteriores al 27 y 28 de febrero de 1989 y cuatro posteriores, de las que se retuvieron 81 unidades de registro) y abarcaron cuatro dimensiones relativas a las personas entrevistadas, a su situación de pobreza con respecto a su propio testimonio, a la puesta en escena y al ambiente. En el caso de *El Observador* y *La Noticia* durante el 15 y 20 de diciembre de 2003, se aplicó una sola matriz a seis emisiones de ambos noticieros desglosados en 39 noticias que contenían aspectos relacionados con la pobreza. Estas 39 noticias fueron desmontadas a su vez en unidades de registro, de texto y de imagen (115 para el caso de *La Noticia*; 129 para el caso de *El Observador*), siendo el texto el punto de referencia principal. Esto permitió analizar el texto alusivo a pobreza, el actor que lo pronunciaba y el tema principal y el secundario de pobreza. La aplicación de la misma matriz a los dos noticieros permitió establecer comparaciones entre ellos.



Alerta : antes y después de El Caracazo

Para *Alerta* la pobreza venezolana es encarnada por una mujer-madre mestiza (“morena”), adulta, desasistida y librada a los aleas de una entidad externa (una autoridad) que, debiendo ocuparse de ella, no lo hace.

Este programa periodístico de corte sensacionalista se transmitió por RCTV desde 1973 – por lo general un viernes de cada mes a las 20 00 – y su creador y primer conductor fue el abogado y periodista Eladio Lárez, hoy alto ejecutivo de RCTV. Comenzó siendo el segmento de un programa de variedades llamado *Pantalla de plata*, dirigido por el mismo Lárez, pero luego se convirtió en un espacio independiente de periodismo documental y de denuncia social realizado mayormente en exteriores. Eladio Lárez, asesorado por Iván Valdez y César Bolívar, se ocupó personalmente del programa hasta 1980, cuando *Alerta* fue suspendido a raíz de una emisión que mostraba la crítica situación del hospital psiquiátrico de Catia la Mar, localidad ubicada en la costa del estado Vargas, a media hora de Caracas.

El posicionamiento de *Alerta*, derivado tanto de su enfoque periodístico como de su estética audiovisual (caracterizada por la manera detallista de mostrar los contrastes socioeconómicos y culturales de Venezuela) hizo que la planta lo retomara ocho años más tarde. Se recuerda este programa a través de cuatro ciclos definidos según su periodista-conductor. Primer ciclo (1973-1980): Eladio Lárez; segundo ciclo (1988-1989): Marieta Santana ; tercer ciclo (1990-1992): Leda Santodomingo ; y cuarto ciclo (1993-1996): Anna Vaccarella.

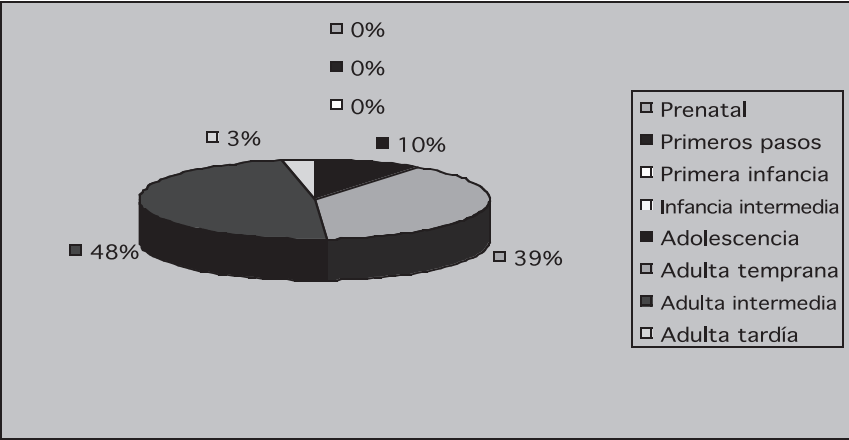
Para determinar cómo El Caracazo influyó en la producción de *Alerta*, dos estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB, Alaysa Pereira y Elisa Ruiz, analizaron bajo nuestra dirección una serie de programas de los últimos tres ciclos, que cubren el período del 21 de octubre de 1988 al 7 de abril de 1995. El análisis se llevó a cabo a través de cuatro matrices que permitieron sistematizar la información extraída de 81 segmentos de video. Esas matrices toman como punto de referencia principal el parlamento de los entrevistados sobre su situación de pobreza, aunque no desdeñan el rol significativo de las imágenes.

La pobreza, una cuestión de mujeres adultas con tendencia a alcanzar a las jóvenes

En los programas anteriores al sacudón de 1989, 48 % de los entrevistados eran adultos intermedios (entre 40 y 65 años), 39 % adultos tempranos (entre 20 y 40 años), 10 % adolescentes (de 12 a 20 años), 3 % adultos tardíos (desde 65 años en adelante), 0 % prenatales, 0 % primeros pasos, 0 % primera infancia y 0 % infancia intermedia. Los niños no aparecían. Después de El Caracazo, la dis-

tribución de actores testimoniales se diversificó: 34 % de los entrevistados eran adultos tempranos, 28 % adultos intermedios, 20 % adolescentes, 16 % infancia intermedia, 2 % adultos tardíos, 0 % prenatales, 0 % primeros pasos y 0 % primera infancia. Sin embargo, tanto antes como después, la pobreza correspondió mayoritariamente a las mujeres, aunque antes de El Caracazo éstas sumaran el 71 % de los testimonios y después el 58 %, los hombres pasando de 29 % (antes) a 42 % (después). Esto permite redondear una relación de siete mujeres por cada diez entrevistados antes y seis mujeres por cada diez después de El Caracazo.

FIGURA 2 : EDAD DE LOS ACTORES DE LA POBREZA REPRESENTADA POR EL PROGRAMA *ALERTA* ANTES DE FEBRERO DE 1989



La pobreza es “morena”

Si la pobreza tiene en *Alerta* un marcado sesgo de edad (coincidente con la edad adulta sexualmente activa y con tendencia a incorporar la adolescencia) y un sesgo indiscutible de género (lo femenino prevaleciente), también acusa un sesgo de raza, matizado por la naturaleza mestiza (que aquí se simplifica con el adjetivo “moreno”) de la población venezolana. Antes de El Caracazo, 68 % de los entrevistados de *Alerta* eran morenos, 19 % negros, 10 % blancos más un 3 % de entrevistados de quienes no se pudo distinguir este rasgo fenotípico. Después, 66 % de los entrevistados eran morenos, 18 % negros y 16 % blancos. En fin, la representación de la pobreza en este caso sigue la corriente de una población mayoritariamente mestiza cuya mayor vulnerabilidad social se asocia con un fenotipo predominantemente negroide, o aun, indígena.

Vale la pena recordar aquí que, a pesar de que Venezuela se ha jactado tradicionalmente de su relativa tolerancia étnica, existe desde luego una importante relación entre la cercanía a lo negro o a lo aborígen y la pobreza. La antropóloga Angelina Pollak (1993) sostiene que los prejuicios racistas coloniales han per-



FIGURA 3 : EDAD DE LOS ACTORES DE LA POBREZA REPRESENTADA POR EL PROGRAMA *ALERTA* DESPUÉS DE FEBRERO DE 1989

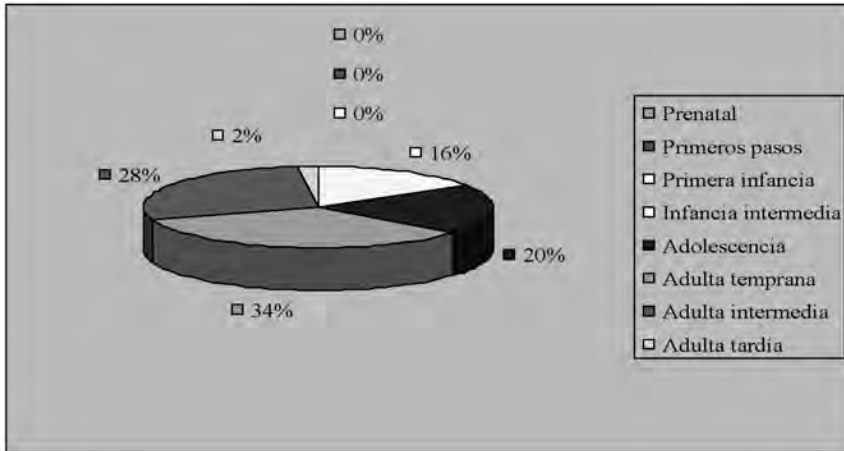
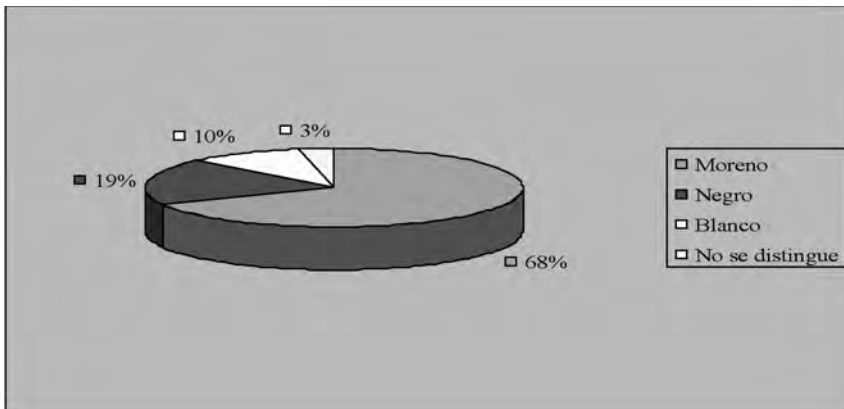


FIGURA 4 : TEZ DE LOS ACTORES DE LA POBREZA REPRESENTADA POR EL PROGRAMA *ALERTA* ANTES DE FEBRERO DE 1989

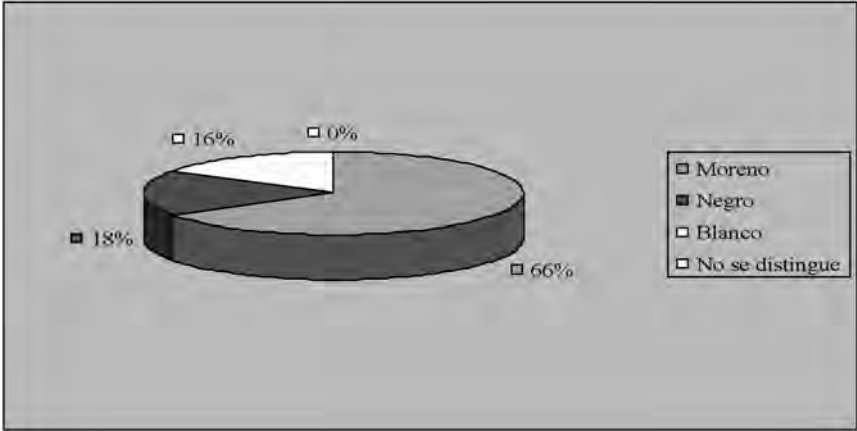


manecido en Venezuela pero de una manera superficial que ella asocia con “una falta de conciencia racial” lo que mitiga la “discriminación racial abierta”:

“[...] no cabe duda de que bajo la superficie sí hay prejuicios raciales hacia las minorías de piel oscura, pero sólo saltan a la vista en ciertas situaciones sociales bien determinadas y nunca son expresados abiertamente. Oficialmente se acepta la tesis de la ‘democracia racial’, que ya fue promulgada en el siglo pasado por el presidente Guzmán Blanco. En la lucha de clases los políticos nunca se sirven de ‘armas raciales’ y no hay conflictos raciales. En el curso del tiempo, el segmento negro de la población se ha integrado en la sociedad multiétnica de nuestro país. No existen castas raciales, fracciones políticas de ‘gente de color’ o instituciones sociales propias de negros” [p. 4].

Este escenario, indiscutible para la fecha en que Pollak redactó el documento recién citado, ha variado sensiblemente desde entonces, sobre todo a partir de la victoria de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, quien ha articulado un discurso sobre la exclusión social que a menudo incorpora elementos alusivos a la discriminación racial existente en Venezuela. Y, efectivamente, lo negro y lo aborigen parecen ser rasgos de referencia de la situación de pobreza que siempre han generado reticencia pública [Colmenares, 2005, p. 219].

FIGURA 5 : TEZ DE LOS ACTORES DE LA POBREZA REPRESENTADA POR EL PROGRAMA ALERTA DESPUÉS DE FEBRERO DE 1989



A pesar de un mejoramiento, todavía las poblaciones indígenas hispanohablantes venezolanas registran una tasa de analfabetismo de 32 %, sólo entre el 20 y el 30 % de los niños llega a cuarto grado de educación primaria, la informalidad laboral se encuentra 12 % por encima del promedio nacional, idéntica ventaja que la población indígena le lleva al resto de la población venezolana con respecto a la condición de pobreza en general [Ibid., p. 234-236]. Por su parte, las poblaciones afrovenezolanas, a pesar de que no muestren un índice de analfabetismo o de acceso a la educación primaria que contrasten con los valores nacionales, sí se distancian de éstos en la franja de edad de 15 a 19 años. La tasa de exclusión es equivalente al 56,16 % entre los municipios de mayor concentración de población afrodescendiente y el nivel de informalidad laboral supera al promedio nacional en 10 %. Los valores de pobreza permanecen parejos con respecto al promedio nacional aunque en la franja de la pobreza extrema los afrodescendientes se despeguen 2 % [Ibid., p. 238-240]. Adicionalmente, una indagación cualitativa aplicada a una muestra del área metropolitana de Caracas por investigadores del Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela revela que el 99 % de los encuestados afirma



que Venezuela es un país mestizo⁵. 71 % de los encuestados afirma que el color de la piel afecta las oportunidades de trabajo y 49 % dice haber vivido personalmente una manifestación de intolerancia étnica [Montañez *et al.*, 1999, cp *ibid.*, p. 241]. Una de las investigadoras asociadas a esta investigación, la antropóloga y escritora Michaelle Ascencio, ha señalado por su parte:

“En Venezuela siempre ha habido racismo, contra los indios y contra los negros, fundamentalmente [...]. Pero el caso es que los venezolanos estamos empeñados en repetir que somos un país mestizo – que lo somos, biológicamente hablando – y por eso no hay conflicto entre las razas, que somos armoniosos y no tenemos racismo. Y no vemos que, como toda sociedad (más las caribeñas, donde los índices de pobreza son mayores), tenemos una serie de contradicciones que no hemos resuelto ni tampoco hemos querido ver. Estamos mezclados, sí, pero eso no quiere decir que esa mezcla haya sido consentida por las dos partes ni mucho menos idílica; el mestizaje puede ser un indicador de violencia. El racismo es una actitud ante ciertas personas por sus características físicas; y en Venezuela, muchas veces, esa actitud es de rechazo. Pero ha habido desde el siglo diecinueve un discurso empeñado en negar las tensiones entre los diversos grupos que conforman la sociedad venezolana”⁶.

Ni dónde vivir ni qué comer

Ahora bien, ¿cuáles son los temas qué más interpelan a esa mujer morena y de edad adulta intermedia que, según *Alerta*, encarna la pobreza en Venezuela? Nuevamente las proporciones cambian antes y después de febrero de 1989. Antes, el punto de referencia con que se afirmaba la situación de pobreza era la vivienda (57 %) y se le subordinaban la economía – empleo o falta de dinero – (24 %), la salud (7 %), la educación (5 %), la alimentación (5 %), la seguridad (2 %) y la infancia (0 %). Sin embargo, después de febrero de 1989, el panorama se torna más fragmentario: nutrición (25 %), vivienda (23 %), infancia (20 %), salud (17 %), economía (6 %), educación (6 %) y seguridad ciudadana (3 %) son, en ese orden, las variables que ilustran la situación de pobreza. En suma, si antes de febrero de 1989 la imagen emblemática de la pobreza en Venezuela podía ser una mujer morena y adulta con problemas de vivienda, después será la misma persona con el mismo problema pero también con dificultades para alimentarse y para alimentar a sus hijos, detalle que es particularmente perceptible a través del importante aumento de la categoría “infancia”.

La pobreza es depresiva

Las circunstancias en que vive esa persona pueden llegar a definir el tono con que manifiesta su condición. Tanto antes como después de El Caracazo, los entrevistados de *Alerta* cumplieron en su mayoría el rol de proveedores de información

5. Estos valores coinciden con la distribución étnica convencional de Venezuela, a saber: 69 % de mestizos, 20 % de blancos y 2 % de amerindios. Recuperado el 1 de febrero de 2007 de: <http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Castellano/Areas/sociedad/diversidad/composicionetnicaporpaíses.htm>.

6. Michelle Ascencio entrevistada por Milagros Socorro, “El racismo aquí es tan sutil que sólo lo siente el agraviado”, *El Nacional*, p. B12, 27 de junio de 2005.

FIGURA 6 : TEMAS CARACTERÍSTICOS DE LA POBREZA REPRESENTADA POR EL PROGRAMA
ALERTA ANTES DE FEBRERO DE 1989

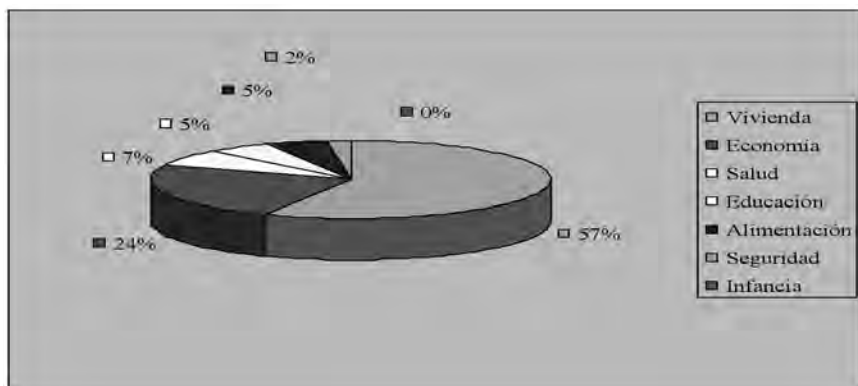
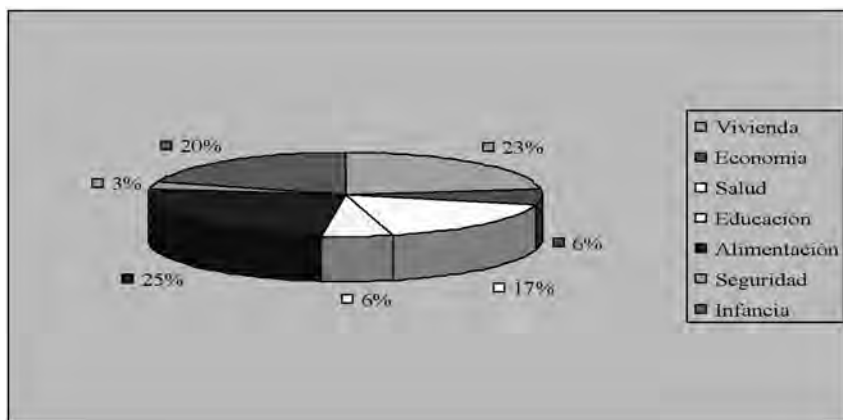


FIGURA 7 : TEMAS CARACTERÍSTICOS DE LA POBREZA REPRESENTADA POR EL PROGRAMA
ALERTA DESPUÉS DE FEBRERO DE 1989



sobre sus propias circunstancias de vida (43 % antes; 28 % después). No obstante, es posible declinar su discurso en otro tipo de inflexiones. Antes de los acontecimientos de febrero de 1989, y fuera del porcentaje de testimonios informativos, los entrevistados del programa se manifestaron con tono autovictimizante (16 %), de queja (13 %), autocompasivo (13 %), desafiante (3 %), triste (0 %), resignado (3 %), desganado (3 %), jocoso (3 %), triste (0 %) o desganado (0 %). Después, tras la declaración informativa (28 %), la queja se convirtió en la principal característica del discurso enunciado por los entrevistados (20 %), siguiéndole la autocompasión (18 %), el reflejo autovictimizante (12 %), la tristeza (10 %), el desafío (6 %), la resignación (2 %), el propósito proactivo (2 %), el comentario jocoso (2 %) y el desganado (0 %). La persona pobre descrita por *Alerta* tiene además tendencia a explicar



FIGURA 8 : TONO CON QUE LOS ACTORES DE LA POBREZA REPRESENTADA POR EL PROGRAMA ALERTA VERBALIZAN SU CONDICIÓN DE VIDA ANTES DE FEBRERO DE 1989

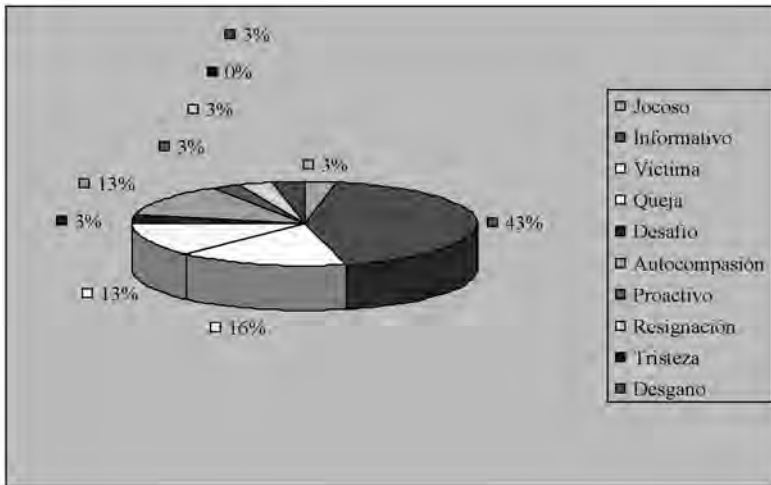
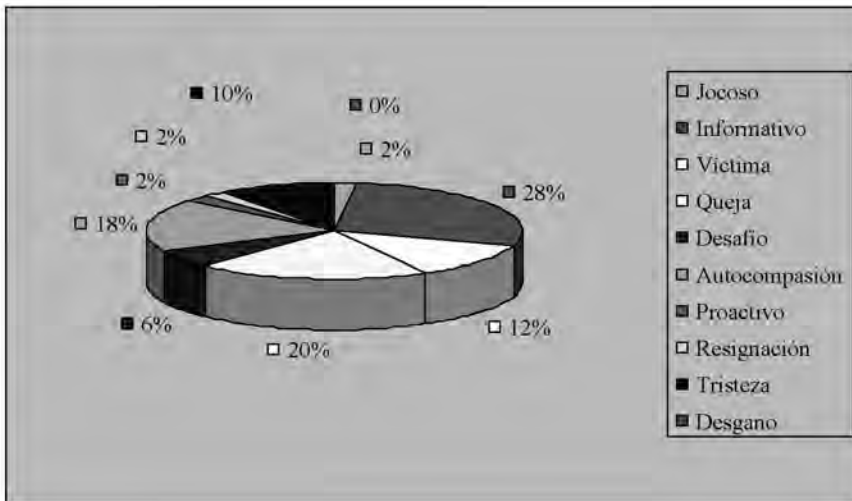
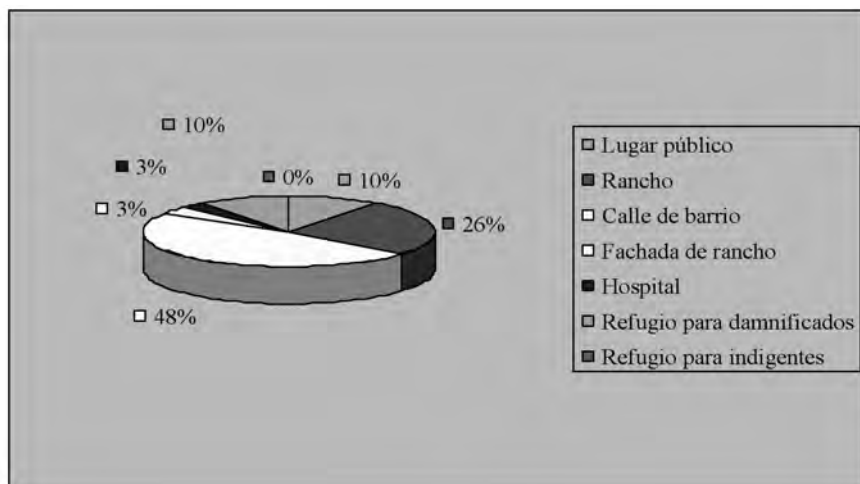


FIGURA 9 – TONO CON QUE LOS ACTORES DE LA POBREZA REPRESENTADA POR EL PROGRAMA ALERTA VERBALIZAN SU CONDICIÓN ANTES DE FEBRERO DE 1989



su situación atribuyéndole a una instancia externa (locus de control externo) las razones de su precariedad. Antes de El Caracazo, 52 % de los entrevistados no manifestó ninguna causa sobre su situación de pobreza, 48 % se refirió a un locus de control externo y sólo 3 % evocó un locus de control interno. Después de febrero de 1989, 58 % de los entrevistados no atribuyó a ninguna causa su situación, 42 % evocó un locus de control externo y 8 % un locus de control interno.

FIGURA 10 : LUGAR DONDE EL PROGRAMA *ALERTA* RECOGE EL TESTIMONIO DE POBREZA ANTES DE FEBRERO DE 1989



Barrio, refugio y hospital

¿ Desde dónde habla esa mujer morena, adulta intermedia, abrumada y sin control sobre su propia realidad ? Antes de El Caracazo su lugar más frecuente era la calle de un barrio (48 %), a la que le seguían el rancho (26 %), algún sitio público (10 %), el refugio para damnificados (10 %), el refugio para indigentes (0 %), el hospital (3 %) y la fachada de un rancho (3 %). Esta distribución se fragmentó sensiblemente después de los sucesos de febrero de 1989, cuando, en orden decreciente, el testimonio de las personas pobres fue captado directamente dentro del rancho donde vivía (26 %), en algún lugar público (24 %), frente a la fachada de un rancho (20 %), en el hospital (14 %), en el refugio de indigentes (6 %), en el refugio para damnificados (2 %) o en la calle de algún barrio (0 %).

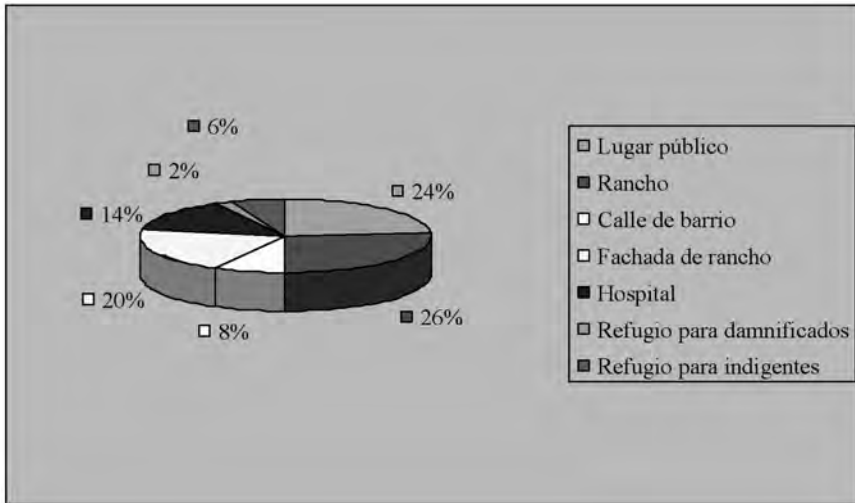
A continuación, quisiéramos complementar las consideraciones anteriores con los hallazgos de otro trabajo de investigación que contrasta la representación de la pobreza producida por dos noticieros de televisión venezolanos.

La Noticia (Venezolana de Televisión, VTV) y El Observador (RCTV): denuncias y soluciones

Entre 1988 y 1995, el programa *Alerta* concentró en su formato los cambios ocurridos en Venezuela antes y después de El Caracazo de 1989 y, a raíz de este acontecimiento, dio cuenta de la complejidad alcanzada por el tema de la pobreza. Vale la pena observar ahora cómo dos noticieros de televisión



FIGURA 11 : LUGAR DONDE EL PROGRAMA *ALERTA* RECOGE EL TESTIMONIO DE POBREZA DESPUÉS DE FEBRERO DE 1989



venezolanos, *La Noticia* (Venezolana de Televisión, VTV) y *El Observador* (RCTV), representaron la pobreza durante la semana del 15 al 20 de diciembre de 2003 y cómo tales representaciones difieren según la línea editorial de ambas empresas de comunicación en un contexto de confrontación política.

Para finales de 2003 el mapa político de Venezuela era muy diferente al de 1995, último año de análisis de *Alerta*. La pobreza, próxima al 66 %, y la pobreza extrema, cercana al 35 % (ver figura 1), se había agudizado debido al paro petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003, lo que obstaculizó la percepción de recursos monetarios derivados de la venta petrolera y debilitó el sistema económico nacional. Sin embargo, esta coyuntura le permitió al presidente cohesionar lealtades durante la lucha que libró contra la oposición, de la que no sólo salió victorioso sino que le permitió congregarse una densa base popular para enfrentar el referéndum de agosto de 2004. Ratificado en su puesto, Chávez continuó descalificando las esferas vinculadas con el capitalismo (a los empresarios privados y a las clases sociales *aventajadas*) y predicando su lucha contra la pobreza a partir de un modelo socialista a la venezolana (Socialismo del siglo XXI, opuesto al capitalismo y al bipartidismo del pasado) que halagaba la condición de la pobreza y las características étnicas de la población más desposeída, en la que se encuentra la mayor parte de sus electores. Así llegó a las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006, en las que de nuevo los votos le fueron favorables, sobre todo gracias a las esperanzas de los venezolanos de bajos recursos. En efecto, un estudio reciente, elaborado por el equipo Departamento de Estudios Sociopolíticos

del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (2007) arroja que el triunfo de Chávez en los municipios venezolanos más pobres fue, en líneas generales, superior al 60 %.

La condición de vida de la mayoría de los venezolanos aunada al carisma de Chávez aglutinó un denso cuerpo de electores al tiempo que excluyó a otro: la clase media “moderna” y liberal y la clase capitalista, que interpretan el proyecto revolucionario como un atentado contra la calidad de vida y como un retroceso en la ruta hacia el desarrollo.

En este contexto, un análisis elaborado por Maryorie Dugaro y Lía Lezama esclareció el desempeño de los dos noticieros de televisión antes mencionados en cuanto a la manera de representar la pobreza y permitió apreciar como ambas representaciones fundan sistemas de símbolos que erigen dos países paralelos. Sus observaciones principales se concentraron en los temas a través de los cuales los dos noticieros representaron la pobreza entre el 15 y el 20 de diciembre (economía, educación, indigencia, infancia, infraestructura, salud, seguridad, nutrición y vivienda) y en los actores que se refirieron a ella (narrador ancla, reportero, testimonio o autoridad).

La Noticia presenta un Estado providencia que soluciona problemas sociales (ofrece alimentos a bajo precio, promueve una mejor educación y una atención médica óptima, gracias a las relaciones de Venezuela con Cuba y a las misiones); *El Observador*, en cambio, muestra un gobierno ausente, desentendido de las necesidades de los sectores más necesitados. Estos contrastes no sólo se evidencian en el cariz de las informaciones transmitidas por ambos noticieros (institucionales en el caso de *La Noticia*, de denuncia ante la incompetencia de las instituciones gubernamentales en el caso de *El Observador*), sino en la distribución de los temas a través de los cuales cada noticiero aborda el tema de la pobreza.

Salud y seguridad

Si en *La Noticia* el tema al que se aludió con mayor frecuencia para referirse a la pobreza fue “salud”, con 32,12 % de todas las menciones, *El Observador* privilegió el tema “seguridad”, que registró 40,29 % de todas las menciones. “Salud” traduce principalmente los esfuerzos oficiales para garantizar alimentación a los venezolanos de menores recursos; “seguridad”, por el contrario, se refiere a inseguridad, es decir, notas de sucesos (principalmente delitos como tráfico de drogas, robos a mano armada y homicidios) que suelen escenificarse en los barrios más pobres de Venezuela, principalmente en las aglomeraciones urbanas. Resulta notable que el tema “seguridad” ni siquiera haya merecido una mención en la agenda informativa de *La Noticia*, lo que sugeriría la existencia de una línea editorial oficial que, queriendo



mostrar la diligencia de un Estado que atiende las necesidades de las poblaciones más pobres, evita exhibir tópicos que pongan en duda ese esfuerzo. Esta estrategia contrastaría con una realidad abrumadora de inseguridad ciudadana que, entre 1999 y el 31 de diciembre de 2005, sumó 62 544 homicidios, 1 147 secuestros y 207 491 lesiones personales, según cifras emanadas de la División de Estadísticas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela⁷.

A continuación se presentan un cuadro resumen de los temas aludidos por ambos noticieros y sus jerarquías de acuerdo con sus frecuencias. Se presenta también un gráfico comparativo que permite visualizar la mayor o menor incidencia de uno u otro tema por noticiero.

Simetría y asimetría

La Noticia mostró mayor equilibrio que *El Observador* en cuanto a las intervenciones del narrador ancla, el reportero, el testimonio o la autoridad. A pesar de que el reportero es el enunciador más frecuente, la tríada ancla-reportero-testimonio-autoridad suman frecuencias promedio equivalentes al 24 %. Llama sin embargo la atención la congruencia existente entre el tono de las noticias transmitidas y los discursos pronunciados por los cuatro actores arriba señalados. El entrevistado que ofrece su testimonio no emite quejas con respecto a su situación de pobreza sino que, por el contrario, da fe de las mejoras de su condición de vida gracias a las gestiones del Estado.

En contraste, *El Observador* opta por una distribución más asimétrica en cuanto a la participación de los actores. El reportero asume el mayor peso en los discursos alusivos a la pobreza (50,79 %) puesto que recoge información sobre la condición de vida de sus entrevistados y desempeña el papel de testigo del abandono en el que viven. Con frecuencia se permite articular denuncias que apelan directamente a la “conciencia” de las instituciones de Estado e, incluso, clama justicia en nombre de las personas que le ofrecen sus testimonios.

A continuación se presentan un cuadro resumen sobre la participación de los diversos actores en los materiales alusivos a la pobreza de ambos noticieros así como un gráfico comparativo que permite visualizar la mayor o menor intervención de uno u otro actor por noticiero.

La discrepancia existente entre las representaciones mediáticas de ambos noticieros escamotea el problema central : la pobreza y las formas como afecta las condiciones de vida de amplios sectores sociales de Venezuela. Esta tenden-

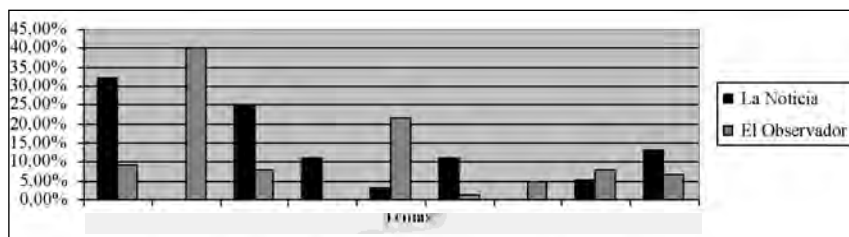
7. Comentadas por el especialista en temas de seguridad personal Marcos Tarre Briceño en su columna “No sea usted la próxima víctima. Balance de seguridad 1999-2006”, *El Nacional*, 19 de septiembre de 2006, p. B23.

TABLA 1 : RESUMEN TEMÁTICO COMPARATIVO
 LA NOTICIA Y EL OBSERVADOR, 15/12/2003 – 20/12/2003

TEMA	LA NOTICIA			EL OBSERVADOR		
	FRECUENCIA	%	JERARQUIA*	FRECUENCIA	%	JERARQUIA ^a
Salud	44	32,12	1	13	9,35	3
Nutrición	34	24,82	2	11	7,91	4
Infraestructura	18	13,14	3	9	6,47	5
Infancia	15	10,95	4	2	1,44	7
Educación	15	10,95	4	0	0,00	8
Economía	7	5,11	5	11	7,91	4
Vivienda	4	2,92	6	30	21,58	2
Indigencia	0	0,00	7	7	5,04	6
Seguridad	0	0,00	7	56	40,29	1
TOTALES	137	100,00		139	100,00	

* El número 1 representa la mayor cantidad de registros seleccionados.

FIGURA 12 : RESUMEN TEMÁTICO COMPARATIVO: FRECUENCIA



a El número 1 representa la mayor cantidad de registros seleccionados.

b Actor sin identificación

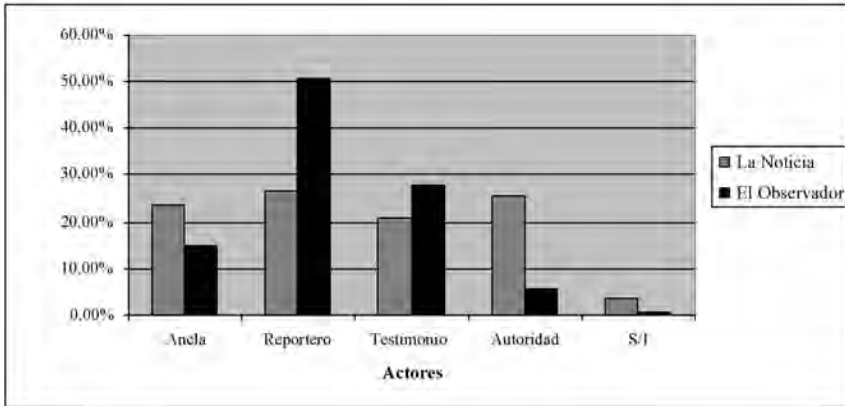
cia a opacar un problema real exhibe en los casos aquí señalados dos “técnicas” igualmente contraproducentes: en el caso de *La Noticia*, el drama de la pobreza se diluye en la neutralidad de la información institucional (de propaganda política) y, en el caso de *El Observador*, el drama –penetrado por los códigos expresivos del melodrama televisivo–, en lugar de movilizar, banaliza el problema. En tiempos de confrontación política, los extremos de la representación se anulan mientras que el fenómeno de la pobreza permanece idéntico.

Conclusión

Entre el símbolo femenino de pobreza que se desprende de los análisis anteriores y los discursos informativos que aluden o se dirigen a los pobres, se evi-



FIGURA 13 : RESUMEN COMPARATIVO DE ACTORES: FRECUENCIA



dencia una intensa dinámica de confrontación que va más allá de la pobreza misma. En lugar de contribuir a crear una conciencia colectiva sobre un problema apremiante, estos discursos construyen imágenes estigmatizadoras que pueden llegar a establecer relaciones erráticas entre género, raza, edad, condición y actitud ante la vida. Cada empresa retórica es congruente con líneas editoriales que persiguen objetivos políticos y económicos en apariencia irreconciliables.

Lo político y lo económico se valen de construcciones divergentes de lo social con el propósito de crear matrices de opinión favorables o adversas a los grupos que las auspician. Esa mujer abrumada por el peso de la realidad –lugar común de la pobreza latinoamericana– parece ceder a dos formas diversas de abordar el problema de la exclusión social : si en un caso la pobreza es el resultado de un Estado indolente, en el otro es una situación transitoria para las per-

TABLA 2 : RESUMEN COMPARATIVO DE ACTORES *LA NOTICIA* Y *EL OBSERVADOR*, 15/12/2003 – 20/12/2003

ACTORES	LA NOTICIA			EL OBSERVADOR		
	FRECUENCIA	%	JERARQUIA ^a	FRECUENCIA	%	JERARQUIA ^a
Ancla	26	23,64	3	19	15,08	3
Reportero	29	26,36	1	64	50,79	1
Testimonio	23	20,91	4	35	27,78	2
Autoridad	28	25,45	2	7	5,56	4
S/I ^b	4	3,64	5	1	0,79	5
TOTALES	110	100,00		126	100,00	

^a El número 1 representa la mayor cantidad de registros seleccionados.

^b Actor sin identificación.

sonas que la padecen gracias a un gobierno que ha cobrado conciencia de su responsabilidad. Las dos lecturas se persiguen mutuamente y convienen, al fin y al cabo, que la pobreza es la condición de grupos humanos disminuidos para los que sólo cabe la denuncia o la aclamación a un líder político.

Así, la pobreza como representación mediática es una construcción simbólica atribuida y distribuida “desde afuera”, un artificio semántico que adjudica lugares, actitudes, problemas y soluciones a unos telespectadores que, en situación de pobreza o no, encuentran en los medios un importante marco de referencia social. La construcción de “modelos de pobreza” en los casos audiovisuales estudiados acaba planteándola como un contenido instrumental, siempre disponible y casi estático. Esto contradice rigurosamente la versatilidad e ingenio de los grupos pobres venezolanos, cuyo rasgo principal, más que la tendencia a imaginar el tono de su propia queja, es su motivación para hacer su vida todos los días sin importar el peso de los imprevistos.

BIBLIOGRAPHIE

- AGUIRRE Jesús María *et al.*, *El consumo cultural del venezolano*. Caracas, Fundación Centro Gumilla/Consejo Nacional de la Cultura, 1998.
- ÁLVAREZ Ángel, “Noticias de sucesos, versiones y manipulaciones. Qué hizo, quién y por qué el 27 de febrero según la prensa”, *Politeia*, 13, 1989, p. 155-185.
- ÁLVAREZ Ángel, “Versiones políticas del ‘sacudón’ en los diarios capitalinos”, *Comunicación*, 70, 1990, p. 11-16.
- ÁLVAREZ Federico, “Y de aquellas furias sólo quedan palabras”, *Comunicación*, 70, 1990, p. 4-10.
- BALZA Ronald, RIUORT Matías, “Salario real, tipo de cambio real y pobreza en Venezuela: 1975-2000”, *Temas de coyuntura*, 44, 2001, p. 5-68.
- BARDIN Laurence, *Análisis de contenido*, Madrid, Akal, 1986.
- BISBAL Marcelino, *El consumo y el poder de la televisión como medio de comunicación*, Venezuela, 2001, mimeo.
- BISBAL Marcelino (coord.), *Televisión, pan nuestro de cada día*, Caracas, Alfadil, 2005.
- CABRUJAS José Ignacio, *Y Latinoamérica inventó la telenovela*, Caracas, Alfa Grupo Editorial, 2002.
- CENDES, “Carta intención al FMI”, *Cuadernos del Cendes*, 10, 1989, p. 140-149.
- COLMENARES María Magdalena, “Exclusión social y diversidad racial y étnica en Venezuela: Temas clave y acciones prioritarias para una sociedad visiblemente más justa” in *Cambio demográfico y desigualdad social en Venezuela al inicio del tercer milenio*, Caracas, Asociación Venezolana de Estudiosos de la Población, II Encuentro Nacional de Demógrafos y Estudiosos de la Población, 2005, p. 215-250.
- DUGARO Maryorie, LÍA Lezama, *La representación de la pobreza en los noticieros de televisión*: El Observador y La Noticia, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, tesis de grado presentada para optar al título de licenciadas en Comunicación Social (tutor: Leopoldo Tablante), 2004.
- ESPAÑA Luis, “Superar la pobreza en Venezuela: el camino por recorrer”,



Superar la pobreza. El camino por recorrer. Documentos del Proyecto Pobreza, 2, Caracas, Asociación Civil para la Promoción de Estudios Sociales/Universidad Católica Andrés Bello, 2001, p. 7-27.

- FUNDACIÓN POLAR, *Diccionario de Historia de Venezuela*, Caracas, Fundación Polar, 1999.
- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES (Departamento de Estudios Sociopolíticos), *La polarización electoral. Análisis de los resultados de las elecciones presidenciales de 2006* (à paraître).
- KRIPPENDORF Klaus, *Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica*, Barcelona, Paidós, 1990.
- MILAGROS Socorro, "El racismo aquí es tan sutil que sólo lo siente el agraviado", *El Nacional*, 27 de junio de 2007, p. B12.
- PEREIRA Aloysa, RUIZ Elisa, *Representación mediática de la pobreza en Alerta antes y*

después de El Caracazo, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, tesis de grado presentada para optar al título de licenciadas en Comunicación Social (tutor: Leopoldo Tablante), 2005.

- POLLAK Angelina, "¿ Hay o no hay racismo en Venezuela ?", *Encuentros*, 7 (17), Caracas, Asociación Cultural Humboldt, 1993, p. 4.
- RONDÓN Ali E., *Medio siglo de querellas y de besos, la telenovela nuestra de cada día*, Caracas, Alfadil, 2006.
- SPIRITTO Fernando, "Un nuevo proyecto político para Venezuela (qué pasó el 27 de febrero)", *Politeia*, 13, 1989, p. 231-253.
- TARRE BRICEÑO Marcos, "No sea usted la próxima víctima. Balance de seguridad 1999-2006", *El Nacional*, 19 de septiembre de 2006, p. B23.
- WORLD BANK, *Bolivarian Republic of Venezuela. Investing in Human Capital for Growth, Prosperity and Poverty Reduction*, report n°21833-VE, 30 de marzo de 2001, 110 p.

RÉSUMÉ/RESUMEN/ABSTRACT

Dans ce travail on observe comment à partir des émeutes qui eurent lieu au Venezuela en février 1989 (connues comme "El Caracazo") la pauvreté devient le principal sujet de mobilisation politique dans le pays et se transforme en objet médiatique. Les premières analyses sur le rôle des médias quant à la façon dont ils couvrirent les événements de février 1989 aident à identifier les versions journalistiques sur l'origine de cette explosion sociale et servent de préambule pour expliquer comment la pauvreté s'est incorporée à l'agenda des médias. On étudie deux cas concrets de représentation médiatique de la pauvreté au Venezuela : 1) les représentations de la pauvreté élaborées par le programme *Alerta* – de la chaîne privée Radio Caracas Televisión –, avant et après le "Caracazo" ; et 2) les représentations de la pauvreté élaborées par deux journaux télévisés : *La Noticia*, de la chaîne

publique Venezuelana de Televisión (VTV), et *El Observador*, de la chaîne privée RCTV. On conclut que les représentations médiatiques de la pauvreté au Venezuela ne visent pas nécessairement à faire comprendre les raisons de ce problème mais, au contraire, mettent en lumière un réflexe social qui se sert des symboles de la pauvreté diffusés par les médias pour entretenir une dynamique de confrontation politique.

En este trabajo se observa cómo a partir del estallido social que tuvo lugar en Venezuela a finales de febrero de 1989 (popularizado como "El Caracazo") la pobreza se ha convertido en el principal tema de movilización política del país y, consecuentemente, se ha transformado en objeto mediático. Las primeras consideraciones sobre el rol de los medios de comunicación social con respecto a la cobertura de los sucesos de febrero de 1989 ayudan a despejar las

versiones periodísticas sobre el origen de este estallido social y sirven de preámbulo para explicar cómo desde entonces la pobreza se ha incorporado a la agenda mediática. Se repasan tres casos concretos de representación mediática de la pobreza en Venezuela: 1) la representación de la pobreza, antes y después del llamado “Caracazo” de 1989, elaborada por el programa Alerta, de la planta privada Radio Caracas Televisión; y 2) las contrastantes representaciones de la pobreza elaboradas por dos noticieros: La Noticia, del canal oficial Venezolana de Televisión [VTV], y El Observador, del canal privado RCTV. Se concluye que la pobreza como objeto mediático en Venezuela no evidencia tanto la existencia de una disposición a entender el problema como la persistencia de un reflejo que lo transforma en el pretexto simbólico de una dinámica de confrontación política.

This paper studies how poverty has become a main political issue in Venezuela since February 1989. Studies on media coverage of February 1989 riots (known as “El Caracazo”) help to understand the journalistic points of view related to them. They are also useful to explain how poverty has become a content of media agenda. In this document two specific cases of media representation of poverty are studied: 1) journalistic TV program Alerta, which showed the features of Venezuelan poverty both before and after February 1989; 2) and the representation of poverty elaborated by two TV news shows: La Noticia, produced by public service TV station Venezolana de Televisión, and El Observador, produced by private channel Radio Caracas Televisión (RCTV). The conclusion is that poverty in Venezuelan media network is less a situation demanding to be resolved than a symbolic pretext triggering off a political confrontation.

MOTS-CLÉS

- Venezuela
- Représentation médiatique
- Pauvreté
- Politique
- “El Caracazo”

PALABRAS CLAVES

- Venezuela
- Representación mediática
- Pobreza
- Política
- “El Caracazo”

KEYWORDS

- Venezuela
- Media representation
- Poverty
- Politics
- “El Caracazo”

Armelle Racinoux* et Emiliano Zapata**

Luttes urbaines et démocratie à Caracas (2001-2004).

Vers la redéfinition de l'espace public vénézuélien

L'élection à la présidence du Venezuela d'Hugo Chávez Frias en 1998 a été renouvelée en 2000 et confirmée par le référendum de 2004. Cette période s'est accompagnée d'une crise politique d'envergure. Dans un contexte de tensions classistes, la Coordinadora Democrática¹ (dissoute en 2005) dénonce le mode autoritaire de gouvernement du président à l'agenda « socialiste révolutionnaire » et cherche à le pousser à la démission. Fin novembre 2001, les 49 décrets-lois passés par Hugo Chávez suscitent en effet un tollé politique : ils entérinent entre autres une réforme agraire qui permet la réquisition des terres non exploitées et leur redistribution à des fins productives et une restructuration du domaine clef de l'industrie pétrolière. Le conflit politique éclate en décembre 2001 lorsque le principal syndicat vénézuélien (la CTV) s'allie à la chambre de commerce Fedécamaras afin de protéger l'indépendance de la compagnie pétrolière PDVSA que le gouvernement souhaite remettre sous contrôle étatique afin d'en faire l'instrument de la régé-

* Bartlett Faculty of the Built Environment, UCL (Londres) / Université Paris X – Nanterre.

** École Doctorale « Ville et Environnement » – ED 448.

1. La Coordinadora Democrática fédère le leader de la Fédération des Chambres et Associations de Commerce et de Production (Fedécamaras) Pedro Carmona Estanga au patron de la Confédération des Travailleurs vénézuéliens Carlos Ortega ainsi que les représentants des divers partis opposants.

nération du système démocratique. Les deux organismes appellent à la tenue d'une grève civique nationale qui se solde le 7 avril 2002 par le limogeage des dirigeants de PDVSA. Le 11 avril, une manifestation de la « société civile » est déviée vers le palais présidentiel de Miraflores. Des tireurs non identifiés sont embusqués sur des bâtiments proches du pont Llaguno et ouvrent le feu sur la foule des manifestants : dans la confusion qui s'ensuit, dix-sept personnes meurent et quarante sont blessées. Accusé du carnage, Hugo Chávez est renversé dans la nuit à l'occasion d'un coup d'État orchestré par des militaires. Le gouvernement provisoire à la tête duquel opère le président de Fedecámaras Pedro Carmona Estanga est renversé dans la nuit du 13 au 14 avril sur fond de manifestations populaires.

Ces événements obscurs catalysent un phénomène politique et urbain tout à fait inédit à Caracas au cours de la période 2001-2004. La « société civile » vénézuélienne autoproclamée qui se fédère dans la CD et les partisans du chavisme s'affrontent, parfois violemment, en instrumentalisant sporadiquement ou de manière permanente des espaces publics à des fins de revendication politique. Il s'agit de places, d'avenues ou encore d'autoroutes fortement symboliques. Nous analyserons tout particulièrement les cas emblématiques que sont la Plaza Bolívar (la grand-place) devenue symbole de la lutte chaviste et la Plaza Altamira, place de la ville « bourgeoise » et fief de l'opposition. En février 1989, les réformes libérales imposées par le gouvernement (*Acción Democrática*) de Carlos Andrés Pérez s'étaient soldées par la répression dans le sang de la foule descendue des *barrios* pour protester et piller la ville riche. Cette fois-ci, et en dépit d'incidents meurtriers, la contestation au chavisme et son pendant « anti-oligarque » est organisée de manière stratégique par des structures institutionnalisées. L'« espace public » intermédiaire et inédit construit par les médias vient par ailleurs jouer un rôle primordial comme relais des directives des camps politiques en présence dans le cadre de ces mobilisations.

Nous montrerons au cours de cet article que les modalités d'occupation des espaces publics et leur géographie sociale découlent du processus historique de dualisation de Caracas et de la société vénézuélienne. La morphologie socio-spatiale urbaine reflète en effet l'évolution des conflits d'intérêts au sein de la sphère publique politique [Lefebvre, 1990]. Les temps de crise politique voient la contestation de l'ordre public qui y est codé par le biais de la manifestation [Castells, 1975 ; Low, 2000]. L'espace public est à la fois la sphère virtuelle du dialogue entre les citoyens d'une même communauté politique en vue du bien public [Habermas, 1962 ; Arendt, 1961] et le lieu spatialement délimitable et universellement accessible à la communauté des usagers de la ville qui se définit, se reconnaît et se partage par leur biais [Joseph, 1998]. Il y aurait ainsi une relation de cause à effet entre les forces qui travaillent les sphères publiques politiques, sociales, médiatiques et économiques vénézuéliennes et l'état de l'espace



public urbain, indicateur fondamental de l'urbanité caraquénienne marquée par l'incivilité et la violence. L'urbanité peut être définie comme la relation de détermination mutuelle qui lie les pratiques de la ville et ses représentations symboliques. Ce rapport influe sur un autre aspect de l'« urbanité » entendue comme les rapports quotidiens de civilité qui permet la coexistence des citoyens dans les espaces publics de la ville. Les manifestations urbaines et les affrontements qui ont lieu dans la ville pour le contrôle des espaces publics sont la manifestation de la lutte entre les projets chavistes et opposants qui impliquent pour l'un la redéfinition de l'ordre urbain inégalitaire et pour l'autre son maintien. Le socialisme chaviste trouve son public dans les *barrios* et les zones populaires du pays tandis que l'opposition libérale s'est longtemps adressée à une société d'élites. Les deux partis ont recours à des médias partisans qui instrumentalisent un discours sur la dualité urbaine et les différences de classe.

L'ambition de cet article n'est pas d'analyser dans le détail les processus par le biais desquels les territoires politiques urbains se sédimentent : ces derniers naissent de la combinaison de facteurs objectifs de fragmentation et de dualité sociales et urbaines, d'actions médiatiques et partisans organisées en faveur de l'appropriation des espaces publics de la ville, de la réduction des espaces de la démocratie et de l'instrumentalisation de symboles sociaux, historiques et culturels. Il s'agit plutôt de mettre séparément en évidence les grands axes autour desquels s'articule ce processus de territorialisation ainsi que ses implications en ce qui concerne la définition de l'espace public politique vénézuélien.

La dualisation de Caracas et la dissolution de l'espace public

La ville latino-américaine s'organise autour de ses espaces publics et en particulier de la Plaza Mayor dont la structure, qui est traditionnellement recréée à chaque nouvelle extension de la ville, symbolise la puissance publique [Gasparini, Posani, 1976]. Les tensions exprimées dans ces centres traditionnels d'expression politique et de contestation du pouvoir traduisent celles qui traversent la sphère publique politique comme lieu de négociation de la citoyenneté et de la démocratie.

À partir du XIX^e siècle, de nouveaux acteurs économiques s'impliquent dans la construction de Caracas qui croît au détriment de ses espaces publics traditionnels. Lors de la révolution d'indépendance de 1810, le Souverain espagnol cède ses pouvoirs planificateurs aux élites économiques créoles qui se soulèvent contre lui et deviennent ainsi le « public » qui fonde la « société civile » vénézuélienne naissante, élite dépositaire du pouvoir politique et de ses nouvelles institutions. Le terme de « peuple », qui se réfère alors à la foule métisse reléguée aux abords des villes, est soigneusement mis à l'écart du discours fondateur de la

nation [Durand, 2003]. L'évolution de la capitale reflète cette conception excluante du pouvoir. Dans les années 1930, Caracas jusqu'alors cantonnée autour de son noyau colonial engage une percée vers l'est et le sud. Sous la prospère pétro-dictature puis avec le retour de la démocratie à la fin des années 1950, la dualité de la ville se renforce. Les quartiers d'urbanisation planifiés autonomes (les *urbanizaciones*), développés à l'est et au sud par des entrepreneurs privés pour les élites puis pour les classes moyennes, reflètent le manque d'esprit « public » d'un idéal urbain qui réside alors dans le refus des contraintes de coexistence imposées par le modèle de la ville européenne bâtie autour de ses espaces publics. Le triomphe du paradigme de l'automobile imposé par Juan Vicente Gómez dans les années 1930 favorise encore l'éloignement des *urbanizaciones* de l'ancien centre. Les zones d'urbanisation informelles (les *barrios*), nourries par l'immigration des campagnes qui se vident, croissent parallèlement dans l'illégalité. Si certaines se greffent dans le centre-ville, l'installation spectaculaire à la périphérie des plus grosses d'entre elles participe d'une certaine dualisation symbolique de la ville [Gasparini, Posani, 1976].

La gestion clientéliste et sporadique des zones d'urbanisation spontanée par les partis politiques et la gestion privative des zones urbaines planifiées, symptômes de la désaffection de l'État, accentuent la dualité économique et sociale de la ville ainsi que la pénurie d'espaces publics communs tant au sein des *barrios* que des enclaves protégées de l'est et du sud de la ville. La réforme néolibérale des années 1990, qui pénalise les couches populaires, précipite ainsi le « *Caracazo* » du 27 février 1989 qui prend la forme d'une irruption violente des « hordes » venues des *barrios* au sein des espaces publics de la ville mise à sac.

Les formes prises par le conflit politique à travers l'histoire sont ainsi révélatrices de l'absence d'un espace public de dialogue social au Venezuela. Les deux camps politico-économiques en présence redessinent une géographie caricaturale de la ville par le biais de leur action militante et mettent ainsi en scène l'ordre hiérarchique urbain et politique ainsi que sa contestation. Les problématiques sociales et politiques sont ainsi indissociables et prennent leur racine dans l'organisation coloniale de la ville basée sur des inégalités de classe. Elle est perpétuée par un système politique d'abord autoritaire puis démocratique mais corrompu qui, en évitant de s'attaquer aux dysfonctionnements structurels d'une économie trop dépendante, se fait le relais du protectionnisme des élites et entérine le marquage des différences sociales. Le développement des *barrios* s'accompagne de l'attitude stigmatisante des autorités qui oscillent entre la répression des squatteurs lors des années de dictature et l'instrumentalisation électoraliste de leurs difficultés avec la démocratie. Cela entérine des modalités de gestion discriminantes et contribue à identifier des territoires urbains à la connotation sociale négative. Dans l'imaginaire citadin nourri par les fantasmes



médiatiques, les *barrios*, qui manquent des infrastructures et des services de base garantis ailleurs par l'État, sont des zones hors de la ville et de la civilisation. Cela est cependant contredit par la très grande mobilité de leurs habitants partiellement dépendants des services, commerces, aménités et opportunités de travail offertes par la ville formelle et par la certaine mobilité sociale de leurs habitants [Baby-Collin, 2000].

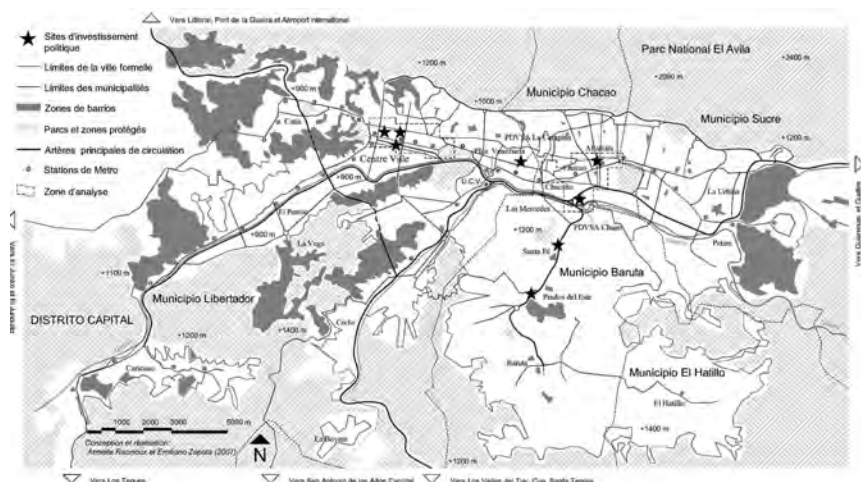
Les territoires dessinés par l'action politique sont ainsi issus de l'existence d'autres territoires politiques et sociaux qui s'appuient sur des éléments à la fois réels et fantasmés traduisant la paradoxale subordination d'une partie de la ville à une autre. Comprendre le rôle de leur interaction et de leur complémentarité dans la formation des territoires politiques disputés mériterait une plus longue analyse.

La revendication politique d'espaces publics centraux de la ville par les militants chavistes traduit ainsi autant le refus d'une exclusion de ces espaces qu'elle met à nu une appartenance *de facto* créée par la dépendance. Ce ne sont pas par ailleurs les espaces des quartiers d'urbanisation planifiés, lesquels sont dépourvus d'espaces véritablement publics, qui sont revendiqués et occupés, même par les opposants. S'ils structurent l'espace urbain, ces lieux de vie n'ont que peu de signification civique pour des manifestants. La signification profonde des espaces publics comme espaces de revendication communs de la citoyenneté ressurgit ainsi en période de crise politique et cela en dépit d'un urbanisme qui leur tourne le dos. Nous verrons que cette revendication est paradoxale en ce que les « publics » chavistes et leurs opposants détournent l'héritage symbolique commun de ces espaces afin de se poser en seuls détenteurs de la légitimité politique. Ce processus reflète le fait que l'urbanité privative et duale qui caractérise l'évolution de la capitale est recrée jusque dans les modalités territoriales du conflit et que la difficulté à penser la citoyenneté nationale ne parvient pas à être dépassée par le discours politique.

Les modalités d'investissement politique des espaces publics à Caracas en période de conflit politique (2001-2004)

Les espaces publics investis par les camps politiques en lutte entre 2001 et 2004 ont des centralités à la signification différente (fig. 1). Les places Bolívar (place fondatrice), Andrés Bello Blanco, El Venezolano, Caracas, Diego Ibarra et Miranda sont des espaces « chavistes » tous situés dans la *parroquia* Catedral du *municipio* Libertador, centre historique, symbolique et politique de la ville (fig. 2). Ils sont accessibles par le métro qui arrive aux pieds des grandes zones de bidonvilles de l'Est et de l'Ouest d'où viennent de nombreux militants. La Plaza Caracas est l'un des lieux de ralliement les plus importants. Elle se situe au pied du Centre Simon Bolívar qui concentre des ministères et des institutions publiques, en particulier le Conseil national électoral (CNE)

FIGURE 1 : DUALITÉ URBAINE ET INVESTISSEMENT POLITIQUE DES ESPACES PUBLICS
À CARACAS (DÉBUT 2004)



très contesté². De 2001 à 2004, la Plaza Andrés Bello est le quartier général de l'Unión Popular Venezolana, parti fondé par la militante chaviste Lina Ron.

Les espaces publics investis par l'opposition sont géographiquement plus excentrés, à l'exception de la Plaza Altamira (fig. 3), symbole de la lutte. C'est la seule place d'importance de l'est de Caracas et l'une des plus emblématiques de la ville. Située dans le riche et petit *municipio* de Chacao, au centre d'un quartier financier très ouvert vers l'international, sa centralité résulte de son accessibilité routière. Elle est desservie par quatre avenues et une autoroute. Plus à l'est, la dite « Plaza de la Meritocracia » (fig. 3) n'est pas une place mais un morceau d'un axe de circulation. Il se situe devant l'entrée de l'ancien siège de PDVSA, au cœur du district financier de Chuao, à proximité des deux centres commerciaux les plus importants de Caracas, le Sambil et le CCCT (Centro Ciudad Comercial Tamanaco). L'ensemble est enclavé par des autoroutes (Caracas-Baruta à l'ouest et Francisco Fajardo au nord) qui le relie à la place Altamira et aux quartiers résidentiels de l'Est où vivent les populations les plus aisées de la ville. Les distributeurs autoroutiers de Santa Fé et de Prado del Este, situés au sud-est de la ville (*municipio* Baruta) ont également servi de lieux de manifestations. Cet usage illustre l'importance de l'accessibilité routière pour les opposants au régime dont beaucoup proviennent des grandes *urbanizaciones* de la vallée de Caracas et circulent en voiture.

2. Organisme chargé du comptage des voies lors de la tenue d'élections.

FIGURE 2 – L'INVESTISSEMENT POLITIQUE DES ESPACES PUBLICS
DU CENTRE-VILLE DE CARACAS, MUNICIPIO LIBERTADOR (DÉBUT 2004)



Les hauts lieux de l'opposition sont moins accessibles à partir des grandes zones de bidonvilles de la capitale que les territoires « chavistes ». Si ces derniers sont centraux en raison de la présence des symboles atemporels de la suprématie politique nationale chère au gouvernement, les espaces opposants sont des bouts d'avenues et d'autoroutes accessibles en voiture. Leur centralité relève de leur connexion au système routier essentiel au fonctionnement de la riche ville étalée de la modernité et de leur proximité aux quartiers emblématiques du pouvoir financier et de l'économie internationale de marché au nom de laquelle la Coordinadora Democrática (CD) mène le combat. La forme même des manifestations de l'opposition – défilés à vélo ou en rollers, « caravanes » (manifestations en convoi de voitures) – y est adaptée.

Cette analyse dénote que le processus de territorialisation politique repose sur la combinaison d'éléments historiquement, politiquement, culturellement et économiquement symboliques, appuyés en partie sur des facteurs sociaux bien réels qui déterminent la géographie de la ville et son aspect « dual ». Cette « dualité » est liée à la hiérarchisation fonctionnelle du pouvoir au sein de la ville, laquelle s'ajoute aux inégalités économiques criantes qui se traduisent dans la morphologie urbaine par la concentration différenciée de grandes zones de bidonvilles et de quartiers d'urbanisation planifiés. Les habitants des zones d'urbanisation informelles sont en effet plus susceptibles de travailler pour l'économie informelle. Les lieux représentatifs du pouvoir financier et pétrolier et de la mobilité sont ainsi les plus significatifs de la lutte des opposants, quoique leur caractère « public » ne le soit parfois que du point de vue de leur

fonctionnalité. Ce choix reproduit le traditionnel modèle privatif et séparatiste caractéristique des lieux de villégiature de l'élite caraquénienne et reflète la philosophie économique libérale qui s'oppose à une intervention poussée de l'État dans l'économie et taxe de « démagogiques » les mesures prises par le gouvernement en faveur d'une redistribution de la richesse à l'échelle nationale. Il n'est pas anodin que le parvis de PDVSA Chuao ait été rebaptisé « Place de la Méritocratie ». *A contrario*, les chavistes, qui se prononcent en faveur d'une régulation de l'économie et d'une répartition des richesses nationales par l'État, et particulièrement celles produites par la compagnie pétrolière PDVSA, investissent tout particulièrement les espaces traditionnels du centre-ville (*municipio* Libertador), symboliques de sa puissance. Des groupements chavistes permanents se sont substitués en 2002 aux troupes opposantes qui avaient fait du siège de PDVSA La Campiña (cf. fig. 3) un lieu de ralliement opposant afin de revendiquer le statut de « bien public » de la compagnie pétrolière nationale remise sous contrôle de l'État par le nouveau gouvernement. De même, les *buboneros*³ sont invités à investir le centre-ville colonial par le gouvernement en 2001.

Les différences portant sur la conception du rôle de l'État dans l'économie ont largement été à l'origine du conflit qui a secoué la société vénézuélienne au cours des dernières années. Il serait intéressant d'analyser plus en profondeur la symbolique économique de l'appropriation des espaces publics à Caracas entre 2001 et 2004 : à la problématique existence de « territoires » socio-économiques objectifs répond la territorialisation politique de la ville qui exprime deux projets économiques et politiques antagonistes.

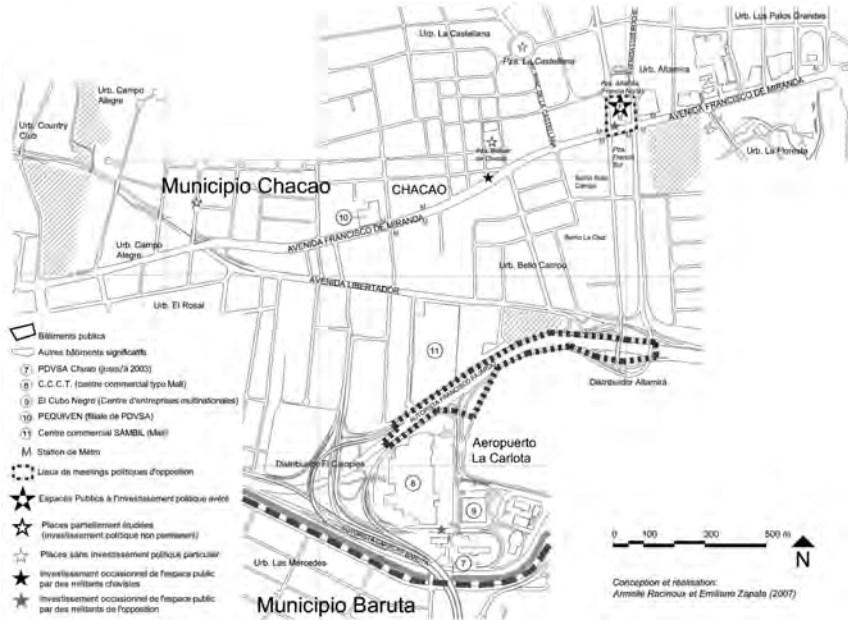
Le phénomène d'investissement politique des espaces publics est multidimensionnel et complexe. Il n'est pas possible ici de rendre compte au cas par cas des dispositifs politiques déployés dans chaque espace ayant fait l'objet de conflits. Afin d'approfondir notre analyse, nous nous attarderons sur l'exemple des deux places les plus représentatives de l'affrontement, les places Altamira et Bolívar, qui incarnent bien les deux territorialités rivales.

Deux places pour deux fiefs politiques : Plaza Bolívar et Plaza Altamira

Selon l'anthropologue Georges Balandier [1992], la mise en scène du pouvoir est consubstantielle à son existence. Dans les sociétés démocratiques, le pouvoir est d'autant plus soumis à dramatisation que son principe est discutable. L'occupation politique des espaces publics au Venezuela (2001-2004) est ainsi

3. Ces commerçants de l'économie informelle, ambulants sous les régimes politiques précédents, vendent des biens de consommation de toutes sortes. Avec l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chávez qui cherchait à rendre visible la pauvreté, ils ont installé leurs stands de manière permanente au sein des *municipios* chavistes de la capitale. Largement considérés comme une nuisance, ils en ont été délogés en 2005.

FIGURE 3 : LES PRINCIPAUX ESPACES PUBLICS INVESTIS PAR LES OPPOSANTS, MUNICIPIO CHACAO (DÉBUT 2004)



marquée par de nombreux dispositifs de propagande. La Plaza Bolívar est ainsi au centre d'une intense activité politique « révolutionnaire ». Placé au cœur de la cité, ce lieu fondateur est entouré des institutions politiques les plus représentatives de la colonie : le Commandement, la Présidence générale et le Palais du gouverneur, le Conseil municipal et l'Évêché, la cathédrale et la Casa Amarilla, aujourd'hui ministère des Affaires étrangères (fig. 2). Scène centrale de la révolution du 19 avril 1810 puis du processus de lutte populaire de 1936 en faveur de la démocratisation du pays, la place reste ancrée dans la mémoire collective comme un lieu de résistance à l'autoritarisme qui pour les chavistes est incarné par l'opposition. Entre 2001 et 2004, des « Cercles boliviariens » sympathisants de Chávez sont implantés aux alentours et montent symboliquement la garde. Appelés à création par le président le 11 juin 2001 lors de son émission dominicale « *Aló Presidente* », ces cercles boliviariens se font le relais exclusif dans un premier temps (jusqu'en 2002) de la parole et de l'action révolutionnaire du gouvernement. À l'Esquina de las Monjas, rebaptisée « *Esquina caliente* » (le coin chaud) des groupes de discussion politiques se forment régulièrement en face d'un mur peint aux couleurs du Venezuela sur lequel sont placardées des affiches de propagande.

À l'époque coloniale, l'élite espagnole et créole vit au plus proche de la place d'armes. Elle quitte cependant le centre-ville et la place Bolívar, d'abord vers le

sud dès les années 1900 avec la construction de l'*urbanización* El Paraíso puis vers l'est à partir des années 1930. En 1942, l'homme d'affaire Don Luis Roche décide de construire la « meilleure *urbanización* de Caracas », Altamira. La place Altamira concurrence très vite la Plaza Bolívar en tant que nouveau site de parade de la haute société. La symbolique de ce lieu reste ancrée dans les mémoires. De 2002 à 2004, la place Altamira demeure cernée de drapeaux vénézuéliens, symboles du patriotisme des opposants. Sous l'obélisque, une statue de la Vierge est montée sur une estrade aux côtés d'un compteur (retiré en 2004) qui égrène les jours restant jusqu'au référendum, sonnante ainsi le glas du départ souhaité de Chávez. Les autres hauts lieux de l'opposition n'arborent plus aucun signe distinctif permanent après 2004.

La présence de militants chavistes dans les espaces publics du centre-ville illustre la stratégie territoriale inédite du gouvernement qui en fait des supports de convocation politique ainsi que les symboles de la création d'une démocratie participative. Des mâts radiophoniques sont installés en 2003 aux quatre coins de la Plaza Bolívar et diffusent les bulletins de la mairie Libertador qui convoque les citoyens-militants à participer aux manifestations qui se déroulent. Les militants de l'*Esquina Caliente* se considèrent comme les vigiles de la destinée du pays qu'ils veulent être l'émanation de leur volonté politique. Ils exercent sur les lieux une surveillance qui renforce les liens de connaissance mutuelle.

La place Altamira devient également un lieu de convocation au cours du conflit. Les « militaires démocratiques » entrés en dissidence après le coup d'État manqué de 2002 en font leur quartier général politique. Ils l'utilisent comme un forum de protestation contre le « régime » afin d'inciter à la « désobéissance civile » et de forcer le président à la démission.

Il serait intéressant – ce que cette étude n'a pas permis de réaliser – d'approfondir et d'analyser la part de spontanéité des processus de lutte pour le contrôle des espaces disputés. Presque tous les espaces occupés font l'objet de disputes ayant trait à leur usage politique, support de légitimité symbolique. Dans les *esquinas* qui cernent la Plaza Bolívar, de violents affrontements éclatent en 2002 (août-novembre) et 2003. De part et d'autre de la place se font face la mairie du *municipio* Libertador, chaviste, et l'Alcaldía Mayor alors opposante qui estiment chacune avoir la responsabilité de sa gestion en dépit de l'absence de prérogative juridique claire. La place est finalement divisée en deux entités de gestion, militarisées, sous contrôle de la garde nationale côté chaviste, et de la police métropolitaine côté opposant. Sous couvert de conflit administratif, l'enjeu est en réalité de nature politique : la place incarne pour les militants les idéaux de la révolution bolivarienne, vision contestée par les forces de l'opposition.

La place Altamira est par ailleurs la scène de fusillades meurtrières le 6 décembre 2002 et les 11 mars et 17 août 2004⁴. Elles sont expliquées par l'op-

4. Bilans respectifs : trois morts et neuf blessés, un mort et sept blessés, un mort et neuf blessés.



LA PLACE ALTAMIRA EN DÉCEMBRE 2003 (CLICHÉ SANDRINE REVET)



position, non sans controverse, comme des actes terroristes chavistes. Pour ces derniers, les événements survenus place Altamira sont montés de toute pièce afin de pourvoir l'opposition en martyrs comme cela aurait été le cas à l'occasion du massacre de Puente Llaguno.

De manière générale, ce sont les espaces occupés par les chavistes qui sont convoités par l'opposition et non l'inverse. Si les chavistes « organisés » montent un simulacre de prise de la place le 23 décembre 2003, alors que la CD est moribonde, ils ne cherchent pas à en faire leur fief. Ce fait met en relief le rapport de forces entre les deux groupes, nettement en faveur des chavistes bien plus visibles dans le centre-ville.

La stratégie de l'opposition repose très nettement sur la scénarisation d'événements dramatiques. La quatrième semaine de février 2004, la place et le quartier Altamira sont ainsi le théâtre de la « Guarimba » qui tire son nom d'un jeu d'enfant américain, « watch your back » (gardez vos arrières). L'espace est fermé par les opposants au pouvoir qui construisent des barricades et affrontent la Guardia Nacional à coups de grenades lacrymogènes. Ils contestent ainsi l'annonce du CNE selon laquelle l'opposition n'a pas réuni le nombre de signatures nécessaires à la tenue d'un référendum constitutionnel qui permettrait de révoquer le président. Ce sont les habitants des alentours mêmes qui dégradent l'espace comme pour rendre physique l'attaque morale infligée par un gouvernement jugé illégitime. Ils ne touchent pas à la place, qui, en tant qu'icône de la lutte « pacifique », ne peut faire l'objet de profanation et incarne

cet « espace public » politique qui résiste au sein de la destruction. L'idée de guerre promue dans le discours de l'opposition et l'événement même tendent pourtant à annihiler l'idée d'espace public comme lieu de coexistence dans la ville. Une nouvelle opposition, porteuse d'une volonté d'action politique, a néanmoins compris qu'il fallait jouer le jeu institutionnel afin de se différencier de cette autre opposition qui continue à aspirer à ce que l'on « sorte de Chávez » comme d'un lieu. Après le coup d'État de 2002 et l'appel par la *Coordinadora Democrática* à la grève nationale en 2002-2003, elle a eu recours en 2004 au référendum révocatoire. Les forces opposantes apprennent de l'erreur du boycott des élections législatives de décembre 2005, qui permet au président de prendre le plein contrôle de l'assemblée nationale. La CD, tête de pont de l'opposition, est dissoute en 2005 et les élections présidentielles de 2007 se déroulent avec fair-play : le candidat Manuel Rosales, appuyé par la plupart des courants opposants, reconnaît sa défaite.

Des symboles récurrents aux teneurs sociales, culturelles, politiques et économiques marquent les fiefs chavistes et opposants. Ils forment des champs sémantiques qui se complètent et se renforcent mutuellement, dessinant ainsi les territoires politiques de la capitale. Ce processus mériterait une analyse plus en profondeur. Pour l'heure, nous pouvons dire que la symbolique chaviste renvoie partiellement à une tradition latino américaine du syncrétisme religieux et révolutionnaire : certains symboles de la lutte sont des icônes religieuses, comme par exemple Jésus-Christ (voir *infra*). A contrario, la mission politique de Chávez prend un caractère providentiel et divin. La sémantique opposante, qui présente également des éléments religieux, est quant à elle plus innovante : elle repose en effet sur une trame narrative télévisuelle. Par exemple, les péripéties de l'opposition, ainsi théâtralisées, s'inscrivent dans l'attente d'un dénouement dramatique dont témoigne le compteur de la Plaza Altamira, posé sous le regard des caméras de télévision.

Des espaces à la publicité problématique

Les espaces investis sont chacun ancrés de manière différente au sein du continuum public-privé. Leur « publicité », soit leur caractère « public » (accessible à tous), n'est jamais complètement contestée même si, dans certains cas, un mécanisme de filtrage du public « contre-révolutionnaire » est mis en place. La surveillance touche toute la zone chaviste du *municipio* Libertador. Seuls le MVR (*Movimiento Quinta República*, le parti chaviste) et ses partis amis sont désormais autorisés à y organiser des manifestations politiques. Si cette appropriation est politique, elle ne concerne pas la totalité de l'espace et laisse à ce titre subsister des activités apolitiques.

De même, lorsque les opposants occupent la Plaza Altamira en 2002, ils en interdisent l'accès aux forces politiques chavistes. Les accès routiers sont



fermés pendant quatre mois et une permanence politique est organisée. L'occupation de la place Altamira par les militaires ne reçoit pas l'aval du maire opposant du *municipio* Chacao Leopoldo López qui finit par exiger leur départ, poussé par les associations de riverains. L'occupation se transforme alors en appropriation politique. La place est tacitement surveillée mais les activités étrangères au conflit reprennent leur cours. Seul le lieu dédié à la Vierge demeure ponctuellement investi par les militants. Il est intéressant de constater que l'appropriation peut se plier aux exigences d'acteurs non militants. La société civile, quoique polarisée, continue à exister, la négociation reste possible et l'espace public politique comme l'espace public urbain demeurent l'expression de pouvoirs concurrents.

On peut dire que, si les espaces mentionnés ne sont pas privatisés, ils admettent néanmoins certaines formes de « publicité » au détriment d'autres. L'agressivité des militants envers leurs opposants empêche le déploiement de la publicité comme art de la civilité dans un contexte de politisation des manières.

Dans le contexte politique de l'époque, les espaces étudiés sont instrumentalisés par des groupes politiques qui en interdisent l'accès à ceux qui prétendraient représenter d'autres conceptions du « public » citoyen vénézuélien et de l'identité vénézuélienne que celles qu'ils cherchent à projeter. Ils perdent ainsi en parti leur caractère « public », soit « universellement accessible ». C'est à la filiation idéologique de ces sites à un ordre historique passé et présent idéalisé que les occupants font implicitement référence afin qu'un public national se reconnaisse dans les valeurs identitaires qu'ils leur font incarner. La présence des Cercles boliviariens dans les espaces historiques du *municipio* Libertador signifie la refondation de l'histoire : le « public » authentique issu des *barrios* fait une entrée en force dans des espaces qui représentent la sphère publique nationale léguée par Bolívar, longtemps verrouillée et restreinte dans les faits à la bourgeoisie créole, public considéré comme un usurpateur du pouvoir ayant perverti ses idéaux indépendantistes. Le chavisme a particulièrement besoin de démontrer sa filiation à un héritage politique national pour affirmer sa légitimité contestée.

Du côté opposant, seule résiste la place Altamira, présentée dans les discours comme le fief de la « vénézuélianité ». Cette concurrente de la place d'armes fait l'objet, nous l'avons vu, d'une mise en scène nationale très élaborée qui en affirme le statut d'exception. Pour les uns, elle est plus que jamais la place de l'« Est » corrompu, secteur géographique éminemment réputé être celui de l'« opposition » qui en fait sa Plaza Mayor après les tentatives échouées de contrôle de la Plaza Bolívar. Pour les autres, elle est le bastion de la « société civile », élite économique garante de la démocratie.

L'urbanité des espaces est ainsi redéfinie par le biais des discours dont ils sont le support et qui influent sur l'usage qu'en font les citoyens. La Plaza

Bolívar et la Plaza Altamira sont décrits dans les discours des militants présents comme exclusifs de deux « publics » particuliers caractérisés par leur couleur, leur appartenance sociale et leurs convictions politiques. Ils ont en réalité pour fonction de justifier le repli de ces « publics » qui se conçoivent paradoxalement l'un et l'autre comme le seul véritablement démocratique.

Il existe ainsi deux sphères politiques en concurrence incarnées par deux places dont la situation géographique exprime les transformations de l'ordre social et politique qui ont impulsé la croissance duale de la ville. Leur occupation respective, enjeu de représentations du pouvoir, n'en prend que plus de sens.

La territorialisation politique de la ville

La dynamique conflictuelle d'appropriation de l'espace nous incite à envisager l'existence de territoires politiques au sein de la ville. Nous abordons ici la territorialisation comme la construction sociale qui se traduit soit par un contrôle territorial, soit par un aménagement ou une structuration de l'espace. Le territoire est un espace géographique différencié. Il est approprié de manière consciente par des individus ou par une collectivité, par le biais de dispositifs symboliques ou concrets qui renforcent le sentiment d'appartenance et jouent sur les ressorts de l'identité [Jean, 2002 ; Levy, Lussault, 2003a]. À Caracas, la relation issue de l'affirmation identitaire se fait au détriment de l'« urbanité » en tant que « bonne relation à autrui » ce qui transforme le rapport des citoyens à leur ville. La rhétorique guerrière propre au conflit qui instrumentalise des fiefs urbains participe à l'élaboration de territoires politiques.

Le premier décembre 2001, la CD appelle à la grève civique nationale, qui consiste en l'arrêt de toute activité économique. Les classes moyennes constituent le moteur principal du mouvement. La grève générale de 2002 révèle une certaine géographie économique et politique : dans les zones de *barrios*, elle est financièrement intenable et par conséquent très peu suivie, d'autant plus que le gros des partisans du chavisme est d'origine socio-économique humble. Dans le *municipio* Libertador, le plus important en termes démographiques et le plus pauvre, la grève est à la fois peu suivie et contrée par le travail des *buhoneros*. Les *municipios* dans lesquels la grève a été la plus suivie sont ainsi les plus riches et les moins peuplés : Chacao, El Hatillo, et dans une moindre mesure Baruta et Sucre. Ces territoires sociaux-économiques dessinés par la grève démontrent une filiation avec la géographie de ceux qui le sont par les luttes politiques : les places Caracas, Bolívar, Andrés Bello Blanco (chavistes) se situent *municipio* Libertador, la place Altamira et PDVSA Chuao (opposants) à Chacao, les échangeurs routiers de Prado del Este et de Santa Fé (opposants) dans le *municipio* Baruta.



La dynamique conflictuelle d'appropriation de l'espace à Caracas en 2001-2004 favorise donc l'émergence de territoires politiques. Si le territoire des militants chavistes est aréolaire car balisé par des sites très rapprochés dans l'espace et dans le temps (fig. 2), celui des opposants est plutôt de nature réticulaire (fig. 1) : des sites éloignés les uns des autres dans l'espace sont reliés par un réseau routier performant caractéristique de la croissance de la ville moderne. L'une des stratégies de territorialisation de l'opposition a notamment été de bloquer les accès routiers de certains espaces. La dissymétrie des territorialités traduit le rapport de pouvoir qui les subordonnent. Le territoire chaviste bénéficie d'une double centralité, celle créée par l'appropriation politique chaviste, toujours vivante, et celle que représente la richesse patrimoniale de ses alentours. Si le territoire opposant possède un centre symboliquement fort, la place Altamira, il n'est plus proclamé en tant que tel en 2004 en raison notamment de l'essoufflement des activités militantes de l'opposition dans la ville.

Cette différence contribue à alimenter le discours sur la partition spatiale de la ville en deux zones. Les zones de *barrios* de la ville sont en effet pour la plupart concentrées dans le *municipio* Libertador. Pourtant, ni l'ouest ni l'est de la ville ne sont homogènes du point de vue social puisque par exemple, les grandes zones de *barrios* de Petare sont à l'est de la ville et que l'Ouest (et surtout le Sud-Ouest) accueille également des urbanisations cossues telles que Vista Alegre ou El Paraíso. La territorialisation sous cet angle-là est plus une construction résultant des discours des partisans des deux courants politiques, discours largement relayés et construits, comme nous le soulignerons plus tard, par les médias, que le produit du processus de dualisation urbaine.

Nous ne disposons pas ici de l'espace pour aborder en détail la manière dont les territoires urbains prennent forme par le biais de la combinaison de symboliques sociales, culturelles, économiques, historiques et politiques. Ces éléments, qui sont abordés séparément au cours de cet article, mériteraient pourtant de faire l'objet d'une étude complète explorant leur complémentarité.

Division conceptuelle du public et « territorialisation »

À Caracas, la territorialisation de l'espace public urbain paraît idéologiquement fondée par la pensée dichotomique du « public », imposée par les chavistes et leurs opposants. La *Coordinadora Democrática*, qui organise les manifestations des sites de l'« opposition » par l'intermédiaire du « Comité action de rue », le fait au nom de la « société civile organisée » pensée comme l'élite, seule dépositaire de la pensée politique. La terminologie chaviste donne au « peuple » un sens révolutionnaire. Dans cette perspective, le « peuple » inclut en effet le nouveau prolétariat, la « populace » issue du système colonialiste puis capitaliste. Si, pour les chavistes, c'est le « peuple » qui doit gouverner, c'est pour la CD la prérogative de la « société civile ». Les « élites » vénézué-

liennes sont exclues du projet chaviste de démocratie participative. L'idéologie chaviste appelle à la présence du « peuple » dans la rue, au plus près des instances du pouvoir, afin qu'il exerce un pouvoir qui lui aurait toujours été refusé par l'« oligarchie », assimilée aujourd'hui à la société civile.

Ces deux termes sont mis en relation avec les espaces urbains politiquement connotés de l'« Est » et de l'« Ouest » dont la hiérarchisation tacite évoque l'héritage, dilué depuis, qui pèse sur la citoyenneté vénézuélienne depuis la colonie. Les créoles habitant au centre de la ville, autour de la Plaza Bolívar, bénéficiaient en effet du statut de « *vecinos* » (voisins), soit de « citoyens », tandis que les métis étaient relégués à la périphérie à la fois de la ville comme de la citoyenneté. À l'époque, le gouvernement justifie ainsi l'occupation des espaces publics par les *buhoneros*, les cercles boliviariens et autres militants, en mettant en avant leur « droit à la ville » [Lefebvre, 2000] et à la citoyenneté.

L'ordre public colonial puis capitaliste à l'origine de la marginalisation d'une partie des citadins et citoyens conditionnerait ainsi la volonté de redéfinition du « public » revendiquée par le biais de la territorialisation.

Le terme de « société civile » est ambigu. Il implique en effet la hiérarchisation de plusieurs sociétés et la définition restreinte du public et de la citoyenneté. Une fraction de la CD a tendance en effet à considérer de façon rhétorique le « peuple » en tant que « populace ». Cela peut traduire le désir de garder la masse des pauvres sans éducation, culture ou propriété, hors du « public » citoyen qui semble lui contester sa seule souveraineté [Habermas, 1962]. Il est intéressant de souligner que le libéralisme concevait originellement la société civile comme le support des institutions nécessaires à la garantie de mécanismes de redistribution des ressources au fondement d'une citoyenneté universellement accessible, telles que l'éducation [Habermas, 1962]. Le glissement de la position libérale vers un système de reproduction des forces monopolistiques est accompagné par la restriction du sens de la « société civile » comme élite dépositaire de ces ressources. Le procédé rhétorique simplificateur qui distingue entre « peuple » et « société civile » reflète et renforce une certaine désunion de la société qui va de pair avec une dualisation spatiale et économique de la métropole.

La définition d'ordres urbains rivaux par le biais de la territorialisation politique et la prise d'espaces publics par deux « publics » politiques distincts traduit ainsi symboliquement les programmes politiques des belligérants qui prennent leurs racines dans l'histoire d'une société caractérisée par une forte dualité économique ravivée par les réformes néolibérales des années 1990 et entérinée par des discours d'exclusion. Les deux « publics politiques » prétendent représenter la volonté populaire en tant qu'elle est avalisée par les institutions démocratiques légitimes tout en défendant finalement deux



conceptions antagonistes de la démocratie. Ce processus passe par la référence à une « vénézuélianité » (une identité vénézuélienne essentialisée) idéalisée.

Vers une redéfinition de l'espace public au Venezuela

On assiste à l'éclosion d'une nouvelle forme d'urbanité au Venezuela : cette dernière ne se définit plus seulement à l'interface de la ville matérielle et de la pratique, notamment politique, qu'en a le citoyen, mais ce rapport rétroactif est désormais médiatisé par la lecture que font les médias de la ville. Les journaux et les chaînes de télévision, pour la plupart privés et opposants, prennent entre 2001 et 2004 largement parti en faveur de l'un ou l'autre parti politique et mettent en place de véritables machines de propagande. Des chaînes de télévision privées financièrement proches des intérêts des États-Unis comme Venevisión adoptent par exemple une stratégie de théâtralisation des conflits dans la ville et appellent activement à la participation aux manifestations opposantes. La chaîne étatique VTV adopte une même contre-stratégie. Les médias insistent alors beaucoup sur la division Est/Ouest de la ville qu'ils associent largement à un antagonisme « peuple » / « société civile » [Bisbal, 2003]. La rapidité de la transmission des discours et des images rend possible la convocation et l'organisation très rapide de manifestations dans les espaces clefs, ce qui les rend plus fréquemment visibles et contribue à la formation des territoires politiques. En 2004, si les forces de l'opposition sont physiquement peu présentes dans la ville, elles sont virtuellement omniprésentes dans le conflit du fait du rôle clef joué par les chaînes privées en leur faveur.

Le rapport des militants aux espaces qu'ils occupent répond en conséquence aux positions des deux parties concernant les médias et leur présence se veut souvent une manière, soit de solliciter leur attention, soit de proposer une alternative à l'espace d'information qu'ils proposent. La disgrâce dans laquelle sont tombés les médias pour les chavistes en incite ainsi certains à renouer avec la fonction de circulation de l'information qu'avait auparavant l'espace public urbain situé à proximité des organes de pouvoir (afin de court-circuiter la propagande des intermédiaires, partis politiques ou médias). Certains militants se retrouvent par exemple dans l'*Esquina Caliente* de la Plaza Bolívar afin d'échanger des informations ayant trait à l'actualité chaviste et qui ne sont pas relayées par les grands médias opposants.

La territorialisation politique de la ville résulte ainsi de jeux d'acteurs (les médias, la CD, la « société civile organisée », les cercles bolivariens, les partis politiques, le syndicat patronal, etc.) qui définissent, par le biais de certaines pratiques et discours dissuasifs, une géographie symbolique de la ville qui influe sur les pratiques des citoyens et redéfinit l'urbanité de la ville. Cette géographie de la confrontation s'appuie sur l'exacerbation et l'idéalisation des caractères

sociaux et économiques supposés de l'« Est » et de l'« Ouest » auxquels est attribuée une essence sociale.

Il serait intéressant d'explorer la provenance des mythes politiques, sociaux, culturels et économiques sur lesquels s'appuient les discours souvent simplistes des médias vénézuéliens et d'identifier les « détonateurs » correspondants qui ont précipité leur théâtralisation. Cela d'autant plus que les médias, et avant cela le manuel de civilité de Carreño⁵, ont joué un rôle historique dans la stigmatisation des populations « barbares » et « incivilisées » issues des marges urbaines.

Personnalisme et mystique politique

Le chavisme semble être un personnalisme qui comporte un fort élément mystique (conçu comme une religiosité attachée au mythe révolutionnaire incarné dans un seul homme) dans sa forme de communication, signe du malaise d'un système démocratique plébiscité mais réputé corrompu. Le discours chaviste se veut pourtant ancré dans la démocratie puisqu'il en oppose deux conceptions : la démocratie chaviste serait le véritable gouvernement du « peuple » entendu comme la « majorité » composée par les déshérités du pays. Le « pseudo » système démocratique hérité est à l'inverse présenté comme celui d'oligarques, élites représentées pendant un temps par la *Coordinadora Democrática*. Le lien que Chávez prétend promouvoir avec son « peuple » est cependant de type personnaliste comme en témoignent les panneaux publicitaires sur lesquels s'étale le slogan « *Chávez es el pueblo* » (Chávez est le peuple). Ce dialogue consubstantiel tente d'évincer les intermédiaires essentiels au bon fonctionnement du système démocratique : partis politiques, médias et institutions. Pourtant, cette rhétorique traduit surtout la méfiance éprouvée par le chavisme envers la vision que l'opposition développe de ces contre-pouvoirs, qui vont jusqu'à se constituer en sphère publique alternative. Certaines chaînes de télévision opposantes privées sont par exemple allées jusqu'à appuyer et ouvertement célébrer la tentative de destitution forcée de Chávez en 2002. C'est le cas de RCTV (*Radio Caracas Televisión Consolidates*), dont la Commission nationale des Télécommunications vient récemment de refuser de renouveler la licence publique. On peut également citer PDVSA, dont la nationalisation de 1976 ne parvint pas à briser l'allégeance à des intérêts pétroliers étrangers. Le gouvernement en « renationalisant » la gestion de cet « État dans l'État » en 2002, précipita son implication dans le blocus national d'avril 2002. Les tentatives de contrôle de ces intermédiaires par le gouvernement ne remettent pas fondamentalement leur existence en question. L'opposition les présente cependant comme un signe du caractère arbitraire de l'exercice du pouvoir. Le personnalisme du pouvoir public incarné dans la personne du Souverain est selon Georges

5. Carreño M. A (1854), *Manual de urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud de ambos sexos*, Imprenta de Comercio Humano, Caracas.



Ballandier [1992] le propre des gouvernements totalitaires et autoritaires mais également des pouvoirs traditionnels dans lesquels il ne peut exister de « sphère publique politique ».

Dans un tel contexte, l'appropriation politique des espaces publics signifie souvent leur investissement mystique ce qui affecte l'urbanité de la ville. Le recours à des symboles religieux (qui font référence à la plus haute légitimité) par les deux partis en présence traduit leur volonté d'outrepasser les sources intermédiaires de légitimation qu'ils invoquent mutuellement. La place Bolivar fait ainsi l'objet de la révérence envers le « *Libertador* », censé pour les chavistes incarner la révolution. La Place de la Révolution a été mise sous la protection de Sainte Barbara, martyre chrétienne qui, selon Lina Rón, est la « patronne de tout le monde ». Sur les murs peints, aux côtés de Simon Bolivar, Jésus-Christ figure comme le père de tous les révolutionnaires et à travers lui, Dieu lui-même, ce qu'expriment ces mots peints « *Dios con nosotros* » (Dieu est avec nous). Côté opposants, au pied de l'obélisque de la Plaza Altamira, la Vierge a été installée sur une estrade recouverte du drapeau vénézuélien. Ces procédés traduisent un refus extrême de l'« autre », conçu comme ennemi politique et présenté comme mécréant, au sein des espaces publics politisés de la capitale comme de la sphère politique.

L'inféodation de la communication chaviste à une mystique personnaliste témoigne de la difficulté historique qu'a eu la démocratie à s'imposer au Venezuela. Les guerres fratricides qui suivent l'indépendance favorisent l'établissement de la dictature qui perdure jusqu'au renversement de Pérez Jiménez en 1958. Le système démocratique pâtit de la corruption endémique des partis qui noyautent la société civile en soutenant les revendications d'organisations de voisins à des fins partisans par exemple, que ce soit dans les zones de *barrios* ou les *urbanizaciones* de la ville. La faillite des partis culmine avec la crise économique de 1989 et la restructuration libérale de l'État. Le mécontentement populaire se traduit par le coup d'État de Chávez en 1992 et par son élection en 1998.

La pompe déployée à l'occasion des gigantesques messes politiques données par le président sur l'avenue Bolivar par exemple, la voie triomphale de la ville, reflète le manque de culture du dialogue politique. Le procédé de convocation utilisé par le régime pour traduire la suprématie de sa démocratie participative est paradoxal puisqu'il n'implique pas la « réflexion » de l'individu mais sa « réaction », ce qui présume de l'existence d'une « masse » plutôt que d'un « public ». Cela semble aller formellement à l'encontre du projet chaviste d'une démocratie participative pilotée par des citoyens actifs et conscients. L'autoritarisme exclut de son principe d'exercice du pouvoir l'existence d'une sphère publique politique puisque le souverain domine ses sujets. Il ressort pourtant des phénomènes d'investissement des espaces publics à Caracas que le gouvernement fortement contesté est en campagne perpétuelle, fait para-

doxal pour un gouvernement démocratiquement élu. De vives critiques, que nous ne pouvons analyser en profondeur ici, sont par ailleurs apparues depuis l'intérieur même du courant chaviste : Luis Miquelena, par exemple, ministre de l'Intérieur avant le coup d'État dont il se fait un relais, reproche à Chávez son manque de maturité politique et son style de gestion personnaliste. D'autres critiques émanent de mouvements de gauche radicaux qui souhaitent une accélération d'un processus révolutionnaire qui leur semble perverti par l'omniprésence de Chávez : c'est par exemple le cas du Comité de Relations anarchistes et du *Movimiento 13 de Enero* (Mouvement 13 Janvier).

Il est difficile de se prononcer sur la nature du gouvernement chaviste. Selon Georges Balandier [1992], les périodes de crise rapportent tout au Souverain alors transfiguré. Le dysfonctionnement de la sphère publique fondée sur le dialogue induit la réapparition du « public » comme fonction de représentation de l'unité du corps du peuple derrière celle du Souverain. Si cette puissance de la représentation est bien déployée dans les espaces urbains de Caracas, le principe de domination n'est pas défendu par Chávez, bien au contraire : il s'agit pour lui de rendre aux « citoyens de seconde zone » que sont les habitants des *barrios* une place au sein de la sphère publique du pays.

On peut interpréter ces contradictions de deux manières. D'une part, on peut avancer que les dispositifs d'adhésion déployés dans les espaces publics traduisent la nature autoritaire d'un gouvernement qui a sans cesse besoin de provoquer l'endoctrinement de la masse. L'autre thèse serait que deux sphères publiques politiques appuyées sur des conceptions divergentes de leur légitimité entrent aujourd'hui en concurrence au Venezuela et que la rivalité de ces deux sphères les pousse à avoir recours à des méthodes de représentation publique et de défense qui ressemblent à celle des régimes autoritaires. L'existence de cette confrontation peut cependant être interprétée au contraire comme l'indice de la bonne santé de la « démocratie », puisque deux conceptions de celle-ci sont visibles au sein de l'espace public vénézuélien physique comme discursif. C'est en effet parce que les protestations de tout bord trouvent, en dépit des craintes de bâillonnement exprimées par les médias opposants et officiels, l'espace public nécessaire à leur expression, que les processus spatiaux de propagande politique peuvent se déployer.

Cette hypothèse se conçoit si l'on prend en considération, comme le propose Jürgen Habermas [1962], qu'il existe toujours plusieurs publics en concurrence. C'est sans doute à une tentative qui ne trouve pas encore de forme cohérente de représentation, d'accomplissement d'une sphère publique plébéienne, que l'on assiste en ce moment au Venezuela. L'héritage politique du pays est autoritaire dans ses formes [García Sánchez, 1998]. La contestation de la légitimité du gouvernement élu est si forte que le candidat élu se voit contraint de faire de la « publicité » afin de sans cesse réaffirmer une légitimité qui lui est contestée au



nom d'une autre idée du « public politique ». C'est pourquoi les espaces contrôlés par les représentants chavistes au pouvoir sont marqués par des dispositifs de propagande qui se traduisent par le marquage territorial de la ville.

Conclusion

L'apport le plus significatif à la sphère publique politique vénézuélienne est celui que réalise le chavisme, qui se veut le porteur de la genèse d'une démocratie participative basée sur la rencontre entre le « peuple » et le « pouvoir » au sein des espaces publics institutionnels mobilisés dans le cadre d'une légitimation politique. Les élections législatives de 2005 ont été marquées par le boycott de l'opposition, ce qui a contribué à l'évincer du champ de la représentation démocratique. Les présidentielles de 2006 ont par contre été caractérisées par un taux de participation de 75 %, signe de l'enjeu brûlant que constitue la légitimité d'Hugo Chávez. Ce dernier a été réélu avec 62,84 % des voix pour un mandat de six ans contre le candidat de droite Manuel Rosales dont le discours électoral conciliant semble témoigner du changement de stratégie de l'opposition, désormais résolue à combattre Chávez sur le terrain du jeu démocratique. L'opposition de principe au chavisme a été abandonnée en faveur d'un programme humaniste empruntant aux programmes sociaux de Chávez : Manuel Rosales, le principal candidat opposant à la présidence de 2007 a ainsi proposé la création d'une carte de débit baptisée « *Mi Negra* ». Elle aurait permis aux classes populaires et aux classes moyennes appauvries d'accéder à un compte par le biais duquel 15 à 30 % des revenus produits par PDVSA auraient été redistribués afin de promouvoir l'entrepreneuriat, la culture et contribuer aux dépenses quotidiennes. La confrontation a donc quitté, sans doute provisoirement, le terrain de l'espace public urbain pour celui des idées et des médias. La légitimité du gouvernement étant de moins en moins contestée, les dispositifs publicitaires que celui-ci déploie dans la ville deviennent moins visiblement autoritaires. Cela témoigne de la consolidation de la sphère publique prolétaire proposée par Hugo Chávez. La question est de savoir si le nouvel espace public politique peut accomplir la fusion du « peuple » et de la « société civile ». De fait, c'est à travers une pratique des territoires urbains plus empreinte d'« inclusion », moins « symboliquement exclusive », que l'on pourrait déceler les premières traces d'une inflexion du climat sociopolitique conflictuel si familier à Caracas. Certains prônent un « chavisme sans Chávez » qui reprendrait les grandes orientations du gouvernement sans pour autant verser dans le personnalisme. On peut en effet douter du caractère démocratique du système tant qu'il sera fondé sur l'adhésion au discours d'un seul homme. Les tensions de la sphère publique vénézuélienne sont représentatives des dilemmes de nombreux pays latino américains confrontés à l'aggravation des polarisations sociales et spatiales. Le virement à gauche de l'Amérique latine s'accompagne ainsi de la volonté d'une redéfinition de la démocratie et de l'élargissement du « public politique » qui la fonde.

BIBLIOGRAPHIE

- **RACINOX Armelle**, *Les métamorphoses de l'espace public à Caracas. De l'influence des tensions de la sphère politique sur l'urbanité de la capitale vénézuélienne*, Paris X Nanterre, mémoire de DEA, Géographie et pratiques du développement dans les pays du Tiers Monde, 2005.
- **RACINOX Armelle**, *Les métamorphoses de l'espace public à Caracas. De l'influence des tensions de la sphère politique sur l'urbanité de la capitale vénézuélienne*, Paris X Nanterre, mémoire de DEA, Géographie et pratiques du développement dans les pays du Tiers Monde, 2005.
- **BALANDIER Georges**, *Le pouvoir sur scène*, Paris, Balland, 1992, 172 p.
- **BABY-COLLIN Virginie**, « Les barrios de Caracas ou le paradoxe de la métropole », *Cahiers des Amériques latines*, n° 35, Paris, 2000, p. 109-128.
- **BISBAL Manuel**, « Sociedad civil, comunicación y política en el contexto venezolano », in *Mediocracia-Crisis de representación, Comunicación*, n° 121, Centro Gumilla, Caracas, 2003.
- **CHEVALIER Frédérique**, « La Plaza mayor en Amérique espagnole », in *Forum et Plaza mayor dans le Monde hispanique*, Paris, Colloque interdisciplinaire, Éd. E. de Boccard, 1976, p. 107-117.
- **DURAND Guillermo**, « Pueblo, fidelidad y patriotismo: el 19 de Abril de 1810 », in *Crónica de Caracas*, n° 89, Caracas, janv.-Déc. 2003, p. 19-25.
- **GARCÍA SÁNCHEZ Pedro José**, « Política y culturas urbanas: la urbanidad en los espacios públicos de Caracas », *Cuadernos del CENDES*, An 15, n° 38, Caracas, 1998, p. 127-149.
- **GASPARINI Graciano, POSANI Juan Pedro**, *Caracas a través de su arquitectura*, Caracas, Fundación Fina Gómez, 1976, 571 p.
- **HABERMAS Jürgen**, *L'Espace public-Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise*, Paris, Payot, coll. « Critique de la politique », 1978, 324 p.
- **JEAN Yves**, « La notion de territoire : entre polysémie, analyses critiques et intérêts », in **JEAN Yves, CALENGE Christian (dir.)**, *Lire les territoires*, Tours, MSH, CNRS/UMS, 2002, 300 p., p. 9-22.
- **JOSEPH Isaac**, « L'espace public comme lieu de l'action », in *La ville sans qualités*, Paris, Éd. de l'Aube, 1998, 209 p., p. 41-49.
- **LEFEBVRE Henri**, *Espace et politique, Le droit à la ville II*, Paris, Éd. Economica, 2000, 174 p.
- **LÉVY Jacques, LUSSAULT Michel (dir.)**, « Territoire », in *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés*, Paris, Belin, 2003, 1033 p., p. 907-917.
- **LÉVY Jacques, LUSSAULT Michel (dir.)**, « Urbanité », in *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés*, Paris, Belin, 2003, 1033 p., p. 966-967.



RÉSUMÉ/RESUMEN/ABSTRACT

Caracas a connu entre 2001 et 2004 de nombreuses altercations politiques ayant pour enjeu le contrôle de certains des espaces publics les plus emblématiques de la ville ainsi que la redéfinition de leur fonction symbolique et du modèle d'urbanité dont ils sont porteurs. Cet article cherche à éclairer ces événements en relation avec le contexte politique de l'époque et s'attarde sur la signification qu'ils prennent eu égard à l'évolution historique de la morphologie urbaine et des valeurs incarnées par les espaces investis. Il cherche également à analyser la portée idéologique de cette appropriation territoriale différenciée de la ville qui fait référence à deux « pôles » artificiels de la vie démocratique (« peuple » et « société civile ») et le sens qu'elle prend vis-à-vis des mutations actuelles d'une sphère publique politique vénézuélienne de plus en plus investie par les médias et par une forme de personnalisme mystique.

Entre los años 2001 y 2004, Caracas conoció numerosos altercados políticos que tuvieron por objetivo el control de algunos de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, así como también la redefinición de las funciones simbólicas de dichos espacios y del modelo de urbanidad que ellos conllevaban. El presente artículo busca esclarecer estos altercados en relación con el contexto político de la época, insistiendo en el significado que dichos eventos toman en la evolución histórica de la morfología urbana, así como en los

valores que encarnan los espacios antes citados. Igualmente, este artículo intenta analizar el alcance ideológico de dicha singular apropiación territorial, la cual hace referencia a dos “polos” artificiales de la vida democrática (el “pueblo” y la “sociedad civil”). Del mismo modo, buscamos analizar el sentido de esta apropiación frente a las actuales mutaciones de una esfera pública venezolana que se encuentra asediada, cada vez más, por los medios de comunicación y por una forma de personalismo místico.

Between 2001 and 2004, political quarrels have taken place in Caracas for the control of some of the most emblematic public spaces in the capital with the purpose of redefining their symbolic function as well as the model of urbanity they represent. This article seeks to shed light on these events by looking at the political context of the moment. It links the meaning of the occupation of these public spaces to the values they embody as a result of the historical evolution of the urban morphology. It aims furthermore at analysing the ideological implications of this differentiated territorialization of the city which builds upon two artificial poles of democracy (the “People” and the “Civil Society”) as well as its significance regarding the present mutations of the Venezuelan public and political sphere which is increasingly defined through media-processing and mystic personalism.

MOTS-CLÉS

- Venezuela
- Caracas
- Espace public
- Sphère publique politique
- Urbanité
- Médias

PALABRAS CLAVES

- Venezuela
- Caracas
- Espacio público
- Esfera pública política
- Urbanidad
- Medios

KEYWORDS

- Venezuela
- Caracas
- Public spaces
- Political public sphere
- Urbanity
- Medias

ETUDES

Nathalie Gravel*

Les exclus du *boom* migratoire mexicain

Les histoires et les images de Mexicains tentant leur chance à la frontière entre États-Unis et Mexique abondent dans la littérature scientifique, de même que les études concernant les Chicanos et leur intégration socio-économique ou culturelle en terre états-unienne. En revanche l'attention se porte plus rarement sur l'envers du miroir, sur les non-migrants, tous ceux qui demeurent exclus du courant migratoire vers le nord. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Que font-ils pour survivre économiquement ? En somme, qui peut migrer et qui ne le peut pas ? Ce qui demeure du milieu rural mexicain semble ignoré du monde académique et apparaît comme un grand vide sur la carte cognitive des études culturelles nord-américaines.

L'argent des migrations provenant des Mexicains qui travaillent aux États-Unis est de plus en plus reconnu en tant que secteur d'activités économiques pour le Mexique ; depuis l'an 2000 il a dépassé l'entrée annuelle de devises du secteur touristique et même celui des investissements directs étrangers [ONU et CEPAL, 2000 ; Gravel et Patiño, 2003]. Cependant tous les groupes domestiques mexicains n'ont pas la chance de participer à ce boom économique.

Cette recherche, fondée sur des entrevues et une observation participante dans différentes régions du Mexique, a permis de révéler l'émergence d'un nouveau type d'exclusion sociale à l'intérieur des communautés rurales étudiées : les groupes domestiques ayant la possibilité de prendre part au courant migratoire vers les États-Unis affichent davantage de pouvoir d'achat et un éventail plus grand d'opportuni-

* Université Laval (Québec) / Département de géographie. Cette recherche a bénéficié d'une bourse postdoctorale du FQRSC (Fond québécois de la recherche en sciences et culture) du gouvernement du Québec (2003-2005).

tés de vie que les groupes domestiques contraints à demeurer sur place par manque de capitaux financiers ou humains. Malgré le peu de durabilité que présente un modèle de développement économique basé sur les migrations – sans compter les usages non productifs que font la plupart des familles de migrants de l'argent provenant des migrations (les « migradollars ») –, des conséquences directes de cette nouvelle différenciation sociale se font fortement sentir dans les communautés, venant exacerber d'anciennes inégalités de revenus. Parmi ces conséquences, dans le contexte politique économique du retrait de l'État de la vie sociale et du monde rural depuis le virage néolibéral de 1982 au Mexique [Esteve, 2003], les groupes d'individus que le manque de capitaux humains et financiers empêche de prendre part aux flux migratoires peinent à obtenir un revenu décent pour répondre aux besoins quotidiens essentiels et pallier le manque de protection de la part de l'État.

Alors qu'on pouvait penser à une répartition plus équitable de cette nouvelle richesse à l'intérieur des communautés, les nouvelles pratiques de consommation et le nouveau style de vie adopté par les familles de migrants, souvent calqués sur les habitudes des Américains, laissent peu de place à cette redistribution. L'engouement de la population mexicaine à l'égard des biens de consommation américains fait que les États-Unis sont doublement gagnants dans cette situation : d'une part, ils obtiennent les services d'une main-d'œuvre abondante et peu onéreuse pour occuper des postes de travail non pourvus par leurs citoyens, d'autre part, grâce à l'entremise des salaires versés qui seront dépensés au Mexique, ils créent un nouveau bassin de consommateurs pour leurs produits de l'autre côté de la frontière.

En outre, on peut se demander quelle part des revenus des migrations demeure dans l'économie mexicaine. S'il est difficile d'en juger, on observe toutefois que ces rentrées d'argent génèrent peu de nouveaux emplois, étant donné le faible investissement en projets productifs susceptibles d'offrir des possibilités durables de développement économique en milieu rural [Ramírez Juárez, 2005] et la concentration des « migradollars » vers des postes de dépense tels que la santé et l'alimentation, l'amélioration des conditions de logement et la consommation de biens divers [ONU et CEPAL, 2000].

De nouvelles exclusions sociales

Dans le contexte d'une réorganisation difficile de la vie domestique en milieu rural mexicain après le virage néolibéral de 1982, de nombreuses familles ont dû cesser de se fier au revenu agricole comme gagne-pain principal. Les revenus provenant des migrations internationales sont dès lors apparus comme la source d'argent la plus stable. Ces « migradollars » permettent d'assurer la continuité des activités domestiques, l'amélioration des conditions de vie (alimentation, logement) et, dans une moindre mesure, le développement de certains projets productifs [ONU et CEPAL, 2000 ; VanWey *et al.*, 2005 ; Hamilton, 2002].



Si l'on considère les unités domestiques qui n'entreprennent pas de migrations internationales et qui, par conséquent, n'ont pas accès à ces nouvelles sources de revenus, les principaux obstacles à la mobilité résident dans la petite taille des familles, le manque de ressources financières propres ou, en l'absence d'un bailleur de fonds, l'âge avancé de certains chefs de famille, les inaptitudes physiques ou les obligations familiales incontournables – notamment dans les familles monoparentales ou avec de jeunes enfants. Ainsi les anciennes catégories utilisées pour caractériser l'exclusion sociale sont de moins en moins adéquates : les nouveaux pauvres ne sont pas nécessairement issus des populations indigènes [Panagides, 1996] – catégorie traditionnellement la plus défavorisée au Mexique –, mais sont des individus affichant une mobilité réduite, un âge avancé et un capital humain limité. L'appauvrissement des économies domestiques est ressenti dans la majorité des classes sociales, touchant indifféremment populations métisses et populations indigènes.

Le concept d'exclusion sociale est préféré à celui de marginalité qui date des années 1960. P. Ward [Roberts, 2005, p. 196] explique bien la différence :

« La marginalité faisait en sorte que les gens se trouvaient en dehors des institutions formelles qui encourageaient les valeurs et aptitudes de la modernité – le système éducatif, le marché du travail formel et autres. L'exclusion sociale, quant à elle, est essentiellement une citoyenneté de deuxième classe dans laquelle les désavantages proviennent des différences produites par les institutions de l'État. »¹

Le concept de pauvreté de capacités (*capability poverty*) d'Amartya Sen² sera, quant à lui, utile pour comprendre la nouvelle vulnérabilité des groupes domestiques exclus du courant migratoire et les nouvelles exclusions et différenciations sociales qui apparaissent à l'intérieur des communautés rurales, brisant ainsi une ancienne homogénéité relative des familles métisses rurales, et, par ricochet, les valeurs d'entraide et de solidarité.

Si l'on suit le raisonnement du cercle vicieux de la pauvreté qui met en relation la faible préparation des travailleurs (incluant un régime alimentaire pauvre en protéines et un niveau d'éducation ne permettant pas d'être compétitif sur le marché de l'emploi), leur faible capacité à trouver un emploi décent [Macías Gamboa et Reyes Vergara, 2004], voire à migrer, on saisit l'importance du poids des contraintes quotidiennes telles que les vivent les groupes domestiques pour comprendre le processus décisionnel qui les conduit à migrer ou non. Selon les capacités fournies par la présence de capitaux humains et financiers, ou la pauvreté de capacités résultant de l'absence de ces capitaux, une différenciation des groupes domestiques se crée, mettant en évidence des sous-catégories sociales autres que la catégorisation sociale classique qui se fonde sur l'ethnie, les classes sociales ou le genre.

1. Traduction libre de l'anglais.

2. La pauvreté de capacités est définie par Amartya Sen [2000, p. 4] comme étant l'incapacité de mettre en œuvre des activités importantes qu'une personne a raison de choisir.

L'économiste Elizabeth Jelin [2005, p. 201] a souligné l'importance de porter au programme de recherche des sciences sociales les inégalités qui persistent, sous de multiples dimensions et à différentes échelles (de la micro-échelle du groupe domestique ou des relations interpersonnelles à l'échelle globale, transnationale) pour comprendre les nouvelles formes d'exclusion sociale en Amérique latine depuis le virage néolibéral (1980-1990).

Afin de remédier au manque de connaissances sur les groupes domestiques qui ne bougent pas – ces groupes demeurant de véritables boîtes noires, comme l'a signalé Enrique Mayer [2002, p. 5] –, cette étude tend à expliquer les différences fines existant entre les groupes domestiques ruraux mexicains. Afin de comprendre comment les décisions économiques sont prises à l'intérieur de ces groupes, des liens seront établis entre les caractéristiques partagées par certains groupes de maisonnées rurales et les choix résultant de processus décisionnels de gestion des ressources matérielles et humaines. Un fait important à garder à l'esprit est que, malgré la popularité des migrations internationales de travail auprès des Mexicains, tous les Mexicains ruraux ne songent pas à migrer vers les États-Unis : certains tentent d'atteindre leurs objectifs de vie en demeurant sur place, en administrant leur entreprise, tout en essayant de survivre à la crise de la « transition économique mexicaine ».

Après avoir suggéré une typologie des maisonnées rurales mexicaines, nous soulignerons les choix de vie qui se posent à eux, les stratégies économiques de survie mises en avant et les obstacles à la migration que rencontrent leurs membres hors du pays.

Méthodologie de collecte de données

Les résultats d'entrevues s'appuyant sur 30 questionnaires appliqués à autant de responsables de groupes domestiques dans deux localités rurales mexicaines (Vizarrón de Montes et Cadereyta, toutes deux situées dans l'État du Querétaro) ont été analysés et interprétés dans le cadre d'une recherche postdoctorale entre 2003 et 2005. Ces deux localités possèdent chacune des populations inférieures à 15 000 habitants et font partie d'une région considérée comme prioritaire pour le gouvernement mexicain [CONAPO, 2001]. À travers la méthodologie de l'analyse relationnelle entre les indicateurs de développement économique domestique et les choix économiques résultant des processus décisionnels des maisonnées rurales, cette recherche tente de mettre au jour les liens existant entre la pauvreté des groupes domestiques ruraux et leur propension à entreprendre des migrations internationales. La taille réduite de l'échantillon ne permet pas pour l'instant de conclusion définitive mais est utile à titre indicatif. Les résultats obtenus sont fortement dépendants de la localisation géographique des zones d'étude sur le territoire mexicain et pourraient varier si la comparaison portait sur des zones plus éloignées de la frontière Mexique/États-Unis.

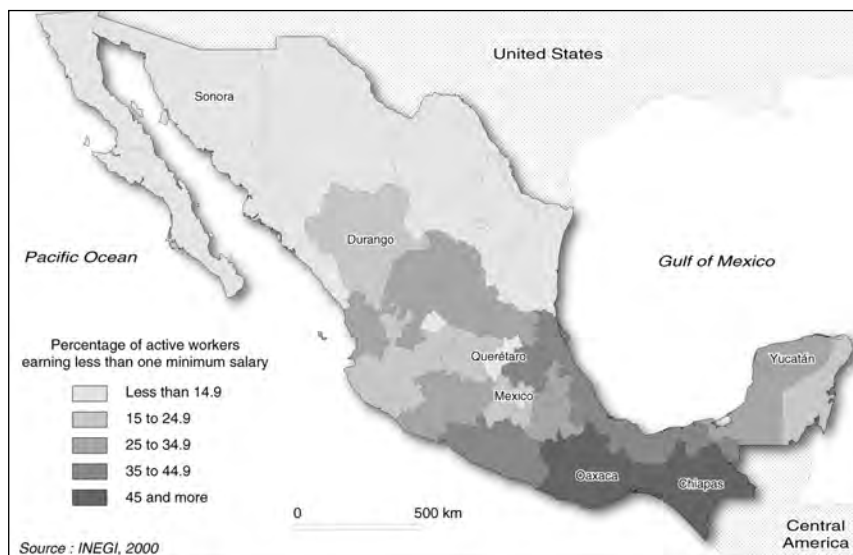
FIGURE N° 1 : L'ÉTAT DU QUERÉTARO ET LES LOCALITÉS ÉTUDIÉES³

L'État du Querétaro, situé au centre du Mexique, assez proche de la frontière mexicano-états-unienne, affiche des conditions économiques assez prospères (voir figure n° 2) et montre des disparités criantes de niveau de développement sur son territoire. En effet, les régions éloignées et marginalisées du nord de l'État (région montagneuse et aride de la Sierra Gorda où se trouvent des communautés indigènes otomi) sont parmi les plus défavorisées du Mexique [CONAPO, 2001 ; Bohórquez Molina *et al.*, 2003]. Les sites choisis pour l'étude se situent au pied de la Sierra Gorda et représentent la frange pionnière avant la région peu hospitalière des *Misiones*.

L'État du Querétaro ne présente pas un bassin significatif de travailleurs migrant vers les États-Unis [INEGI, 2000], si l'on compare avec les États voisins du Guanajuato et du Michoacán, champions en la matière (voir tableau n° 1) [ONU et CEPAL, 2000]. Toutefois, plus de la moitié des familles interrogées (17 sur 30) possèdent des liens étroits avec des travailleurs ayant émigré aux États-Unis. Cet État bénéficie d'un solde migratoire positif dû à l'arrivée constante de Mexicains provenant de la capitale, Mexico, en quête d'une meilleure qualité de vie [Bohórquez Molina *et al.*, 2003]. Après le District fédéral de Mexico, l'État du Querétaro est celui dont le taux de migrants de retour

3. Source : INEGI, 2000 / Laboratoire de cartographie du département de géographie de l'Université Laval, Québec.

FIGURE N° 2 : CARTE DE DISTRIBUTION DES REVENUS AU MEXIQUE, 2000⁴



est le plus élevé, comparativement à ses voisins figurant dans le tableau n° 1. La croissance économique des dernières années de la ville de Santiago de Querétaro, sa capitale, et de ses industries offrent des sources d'emplois non négligeables, mais encore insuffisantes pour absorber les surplus de main-d'œuvre.

À partir des résultats obtenus par les entrevues, une typologie des économies domestiques a été élaborée en utilisant les variables des sources de revenus, des capitaux investis dans la résidence familiale et du degré d'intégration économique des maisonnées au sein du marché des biens de consommation. L'objectif de ce regroupement était d'identifier les stratégies économiques de survie considérées par les différents types de maisonnées rurales selon leur degré d'affluence, de modernisation et de capital humain, et cela en intégrant la perspective temporelle prenant en compte les passages d'une catégorie à l'autre.

Dans son étude sur la marginalité, Gino Germani [1980] a montré que deux types d'intégration économique étaient nécessaires pour réduire la vulnérabilité économique des foyers : 1°) l'intégration au marché des biens de la consommation et 2°) l'intégration verticale des activités économiques domestiques (de manière à réduire le nombre d'intermédiaires et à améliorer ainsi les gains). Lorsque nous considérons la nouvelle réalité des travailleurs ruraux mexicains, un troisième type d'intégration s'impose : l'intégration à des réseaux de migrations en direction des États-Unis.

4. Source : INEGI, 2000 / Laboratoire de cartographie du département de géographie de l'Université Laval, Québec.

TABLEAU N° 1 : FLUX MIGRATOIRES POUR QUELQUES ÉTATS DU CENTRE DU MEXIQUE, 2000⁵

États fédérés	Population totale	Émigration (%)	Migrants de retour (% émigration)	Solde migratoire net (%)
District fédéral	8 550 170	0,89	25,49	-33,24
Guanajuato	4 648 460	3,57	15,59	-6,84
Michoacán	3 959 772	4,23	18,87	-15,23
Quérétaro	1 398 148	1,85	21,50	7,87

Le questionnaire utilisé a permis de documenter ces trois types d'intégration et de fournir des informations sur l'histoire économique des maisonnées, sur leurs cycles de vie, leurs priorités de dépenses et d'investissement, l'évolution du pouvoir d'achat perçu depuis 1995 et les types d'agriculture élevage (de subsistance ou pour la vente). L'analyse relationnelle a mis en lumière les motivations expliquant les choix effectués par les membres des maisonnées selon les priorités identifiées lors des entrevues. La théorie du choix rationnel (*rational choice*) semble souvent motiver les décisions de répartition des ressources et des capitaux, les décisions concernant l'organisation économique des maisonnées répondant à des demandes internes [Roseberry in Mayer, 2002, p. 6]. La famille élargie est un phénomène encore courant dans la campagne mexicaine, les décisions sont souvent prises pour le bien de tous – dans une logique de mise en commun des ressources –, quoique certains jeunes adultes montrent un engouement pour migrer relevant davantage du goût de l'aventure que de nécessités économiques. Macías Gamboa et Reyes Vergara [2004] relèvent à juste titre la présence d'une culture de migrations parmi les jeunes Mexicains, provenant des modèles de pères et d'autres figures d'influence ayant migré, qui pousseraient les plus jeunes générations à les imiter. La migration de jeunes hommes a fréquemment pour but la construction d'un patrimoine familial. Alors que de nombreuses familles ne peuvent compter sur l'existence d'un patrimoine matériel accumulé antérieurement, les migrations internationales permettent de combler cette déficience laissée par les crises et/ou ralentissements économiques (1995 et 1999) précédents [Gravel, 2004].

Un concept qui se révéla fort utile pour évaluer la teneur du capital humain et économique des maisonnées est la « capacité de reproduction domestique » (*householding capacity*). Le concept de *householding* a été développé par Karl Polanyi [1977] pour désigner l'acte d'assurer la continuité de la maisonnée dans le temps en se procurant des biens matériels, alimentaires, des services et les soins nécessaires au bien-être de ses membres [Polanyi in Dapuz et Baños Ramírez, 2004, p. 6]. L'utilisation du concept de capacité de reproduction domestique permet, quant à lui, d'évaluer la résilience de chaque maisonnée dans des temps économiques diffi-

5. Source : INEGI, 2000.

ciles et le degré de vulnérabilité économique. C'est un indicateur de durabilité des systèmes économiques domestiques, de leur capacité de répondre aux besoins essentiels⁶ de leurs membres, de mettre de l'argent de côté pour parer aux urgences, et de faire en sorte que les cycles économiques (et/ou agricoles) recommencent année après année [Polanyi *in* Dapuéz et Baños Ramírez, 2004, p. 6].

Une bonne capacité de reproduction domestique dépend d'un système économique domestique stable (moyennant un revenu suffisant prévisible et stable) et de la présence d'un capital humain évalué à partir des indicateurs suivants : 1°) le degré d'éducation atteint par ses membres, 2°) leur état de santé et 3°) leur habileté et les ressources dont ils disposent (diversité, capacité d'adaptation au changement et aptitude pour générer des rentrées d'argent). À l'opposé, une reproduction domestique défaillante montre chez ses membres des signes de malnutrition, un état de santé déficient, et l'impossibilité d'envoyer les enfants à l'école.

La capacité de reproduction domestique comporte aussi une dimension temporelle : elle varie selon les cycles de vie domestique tels qu'ils ont été illustrés par Goody [1966, *in* Mayer 2002]. Par exemple, de jeunes couples ayant des enfants en bas âge connaîtront une pression économique plus grande que des couples d'âge moyen dont les enfants ont atteint l'adolescence ou l'âge adulte. Avec le temps, la pression économique diminue sur ces maisonnées lorsque les enfants peuvent participer aux activités génératrices de revenus (l'un des moyens mis à leur disposition à l'heure actuelle est de migrer aux États-Unis) et une fois que les paiements d'ordre matériel sont achevés. Cette distinction des cycles de vie rappelle l'importance des catégories ouvertes permettant le passage des maisonnées de l'une à l'autre à mesure qu'elles franchissent un nouveau cycle de vie.

Typologie des économies domestiques rurales mexicaines

Quatre catégories ont été créées pour classer les maisonnées rurales faisant l'objet de l'étude : 1°) la maisonnée traditionnelle ; 2°) la maisonnée de subsistance ; 3°) la maisonnée entrepreneuriale ; 4°) la maisonnée moderne. Un des indicateurs retenus pour cette classification fut le confort matériel de la résidence, l'amélioration des conditions de logement étant un poste prioritaire de dépenses lorsque les chefs de famille disposent d'un léger surplus monétaire, animés qu'ils sont par des élans modernisateurs [Gómez Levy et Ramos Bernardino, 2002]. Cet indicateur est aussi utilisé par le programme du gouvernement mexicain d'aide à la réduction de la pauvreté en tant que révélateur de l'affluence des maisonnées [CONAPO, 2000 et 2001]. Les attributs résidentiels des catégories de maisonnées rurales dégagées dans cette étude sont résumés dans le tableau n° 2.

6. Le concept de « besoins essentiels » dépasse la seule satisfaction des besoins physiologiques pour assurer la survie (aliments, repos et abri). Dans sa définition des « nécessités », Adam Smith n'incluait « pas seulement les biens nécessaires au support de la vie, mais tout ce que les coutumes du pays rendent indécemment de se passer non seulement chez les gens respectables, mais aussi parmi les couches les plus basses » [Smith, 1776, *in* Sen, 2000, p. 7].



TABLEAU N° 2 : SYNTHÈSE DES TYPES DE MAISONNÉES RURALES MEXICAINES
ET DE LEURS ATTRIBUTS RÉSIDENTIELS

Type de maisonnée	Proportion de l'échantillon n=30	Nombre moyen individus/maisonnée	Revenu moyen hebdomadaire (US \$)	Type d'espaces intérieurs partagés	Capacité de reproduction domestique	Matériaux plancher /toit
Traditionnelle	5	8	68,40	Soit salle de bains ou cuisine ou ni l'une ni l'autre	Insuffisante	Terre ciment/ Tôle gaufrée, ciment
Subsistance	11	4,8	125,80	Salle de bains et cuisine	Faible ou insuffisante	Ciment/ ciment
Entrepreneuriale	9	4,7	148,90	Salle de bains, cuisine et salle à manger ou salon	Bonne avec un coussin économique	Ciment/ ciment
Moderne	5	3,4	192,50	Salle de bains, cuisine salle à manger et salon	Bonne mais vulnérable	Ciment, céramique, bois/ciment

La concordance existant entre le degré de division de l'espace domestique, d'une part, et le nombre moyen d'individus par maisonnée, le revenu moyen hebdomadaire, et la capacité de reproduction domestique, d'autre part, reflète le degré de modernisation atteint par chaque type. Lorsqu'il est question de diviser l'espace domestique, il s'agit de comptabiliser le nombre d'espaces partagés par l'ensemble des membres (par exemple : salle de bains, cuisine, salle à manger et salon), résultant de l'incorporation à l'espace intérieur de la résidence de fonctions traditionnellement conduites (dans le Mexique rural) à l'extérieur de la résidence, soit dans l'espace semi-privé de la cour arrière [Tello Peón, 1992 ; Gravel, 2004]. Le lien qui est fait entre la subdivision de cet espace intérieur, la progression des matériaux de construction utilisés dans la résidence physique et le degré de modernisation des maisonnées est justifié par l'utilisation d'indicateurs semblables par l'Institut national de géographie et de statistiques (INEGI) du Mexique et par les résultats d'autres études comme le rapport de Gómez Levy et Ramos Bernardino [2002] : dès que les familles rurales disposent d'un surplus monétaire, elles l'investissent dans l'amélioration des conditions d'habitation. Ainsi, les sols de terre battue sont remplacés par des planchers de céramique, ou en ciment, dans les résidences qui se modernisent (passant de la catégorie « traditionnelle » à la catégorie « moderne »). De même pour les matériaux de toitures, remplacés par de plus récents et plus résistants lorsque l'occasion se présente. Dans le cas d'ajout de pièces fonctionnelles à l'espace domestique, plus de confort et d'intimité sont recherchés. Il faut noter que les maisonnées rurales mexicaines présentent un modèle de consommation unique et un désir collectif d'acquérir un statut social supérieur par l'amélioration de la résidence physique. Après avoir fait un bref tour d'horizon des composantes des économies domestiques de chaque catégorie et de

leur potentiel en capital humain, nous montrerons le lien entre ces dernières et leur propension à effectuer des migrations internationales.

Ce type de maisonnée représente les groupes domestiques qui mènent une vie très liée à la terre – selon la définition de « traditionnel » que donne Timothy Luke [1996] –, à l'autosubsistance, à la solidarité dans la misère et à celle des anciens *ejidatarios*⁷. Ces groupes domestiques sont souvent composés de couples âgés sans enfants ou dont les enfants, d'âge adulte, contribuent peu au bien-être de leurs parents (souvent par manque de ressources). Ancrés dans un mode de vie rural, ces groupes domestiques constituent la dernière génération de Mexicains à afficher leur distance face à la modernité. Ils sont les seuls à ne pas vouloir acquérir davantage de biens matériels et à sembler satisfaits malgré la précarité de leur vie. À titre illustratif, un homme d'un certain âge a confié en entrevue : « Pourquoi voudrais-je davantage ? Je ne l'emporterai pas avec moi dans la tombe ! » Vivant sous le seuil de pauvreté, leurs membres souffrent de nombreuses carences alimentaires, mangent deux fois par jour des *tortillas* de maïs et des *frijoles* (fèves), sont souvent illettrés et travaillent durement pour de grands propriétaires jusqu'à un âge avancé (plus de 80 ans). Ces maisonnées manquent d'eau courante et d'électricité.

Dans cette catégorie se trouvent aussi des familles indigènes ayant de jeunes enfants et des familles monoparentales (souvent des femmes abandonnées par leur mari), d'origine métisse ou indigène. Les nombreux enfants en bas âge (entre 7 et 10 enfants par femme de cette catégorie) rendent difficile la survie quotidienne de ces groupes domestiques et la plupart souffrent de malnutrition. Même si les rentrées d'argent se multiplient, certains pères de famille indigènes ayant jusqu'à trois sources de revenus (la principale est souvent la production artisanale), le revenu global n'est pas suffisant pour envoyer tous les enfants à l'école. La présence d'intermédiaires dans la vente d'artisanat (poterie et confection de vêtements traditionnels par exemple) vient réduire les bénéfices qu'ils pourraient réaliser. Avec l'aide du programme social mexicain de lutte contre la pauvreté, Oportunidades⁸ (autrefois : Progresa), un ou deux enfants seulement de ces familles peuvent bénéficier d'une bourse d'études les aidant à se procurer le matériel scolaire et l'uniforme nécessaires, l'école publique étant gratuite au Mexique jusqu'à l'université.

En général, la survie pour ces groupes domestiques est une lutte quotidienne, tout comme pour la catégorie précédente, mais ces groupes ont un pied dans la modernité et se démarquent du mode de vie rurale. Ils bénéficient de capitaux humains et financiers plus substantiels, et utilisent notamment l'élevage comme

7. Travailleurs sur l'*ejido*, système de tenure de terre collective hérité de la Réforme agraire mexicaine de 1930.

8. Le programme Oportunidades d'Ernesto Zedillo (auparavant le programme Progresa), repris par le président Fox, vient en aide à environ 3 millions de mères de famille et d'enfants les plus défavorisés du Mexique. Les plateformes d'aide sont l'éducation, l'alimentation et la santé, afin d'essayer de rompre le cycle transgénérationnel de la pauvreté. Cet appui symbolique aux familles n'a pas que de bons côtés et impose des corvées aux mères de famille déjà surchargées, les obligeant à faire des kilomètres avant de se rendre à leur travail [entrevue Roldán Rico, 2004].



moyen d'épargne⁹. Disposant de plus de possibilités que le type précédent, ils combinent travail rémunéré et vente de produits de la terre et d'élevage. Les nombreux enfants d'âge adulte contribuent au budget familial : la diversité des sources de revenus et la force de leur main-d'œuvre (peu formée, par contre) permettent leur reproduction domestique dans le temps, quoique fragile. Ces maisonnées parviennent à un certain équilibre économique, mais sont vulnérables face aux imprévus (frais de médicaments et d'hospitalisation, funérailles et autres).

Le fait que de nombreux chefs de famille soient propriétaires d'une parcelle de terre (1-2 hectares) permet de conserver une base rurale, de prélever des produits alimentaires et de bénéficier de l'appui du gouvernement par le biais du programme Procampo¹⁰ (*Programa de Apoyos Directos al Campo*). La surdivision des parcelles de terre depuis la réforme agraire ne permet pas de faire passer en héritage un fonds terrien important, sauf dans le cas des descendants de grands propriétaires espagnols qui ont conservé certains privilèges. Les cycles agricoles sont assurés par une combinaison de recyclage de semences de l'année précédente et l'achat au détail de fertilisants et de semences, preuve que ces groupes ne vivent pas en autarcie (ce qui se rapprocherait davantage du style de vie traditionnel) et montrent une certaine ouverture au marché. L'accès au marché de vente des produits agricoles est difficile pour ces petits producteurs, mais la proximité avec les marchés urbains permet de récupérer certains bénéfices dans un marché informel (sur la rue et dans les marchés publics).

Ces micro-entrepreneurs du milieu rural sont un exemple de groupe qui préfère demeurer au Mexique plutôt que d'entreprendre des migrations internationales risquées. Les membres de la famille élargie sont mis à contribution pour assurer la survie de l'entreprise familiale, souvent située sur les lieux de la résidence. Malgré les efforts d'intégration verticale des activités économiques du commerce – parfois combinées avec l'économie domestique en favorisant le passage de biens matériels et des capitaux de l'un à l'autre – et la présence de capitaux, d'un patrimoine et d'un capital humain diversifié relativement bien formé et flexible, la capacité de reproduction domestique de cette maisonnée ne fait que couvrir les besoins essentiels de ses membres, sans laisser de surplus.

Le secret de la réussite de certaines de ces entreprises familiales repose sur l'accès à la terre, en moyenne plus important que pour les catégories précédentes (7 hectares chacun en moyenne), le maintien d'activités agricoles de subsistance ou

9. Les bêtes d'élevage sont considérées comme des épargnes facilement monnayables, des réserves d'aliments pour les jours de fête et comme des garanties sur des prêts.

10. Procampo est un programme d'appui à la production agricole en vigueur depuis 1993 au Mexique et a été conçu pour soutenir les paysans dans la transition économique néolibérale. Il supporte actuellement un total de 3 millions de producteurs agricoles, ce nombre ira en décroissant jusqu'à la fin du programme. Certains prérequis limitent le nombre d'« ayant-droits » comme d'avoir été propriétaire terrien depuis août 1993 et de cultiver l'une des huit céréales de base : maïs, sorgho, soja, blé, orge, carthame, fèves ou riz (site Web Procampo).

en lien avec le commerce (élevage pour la boucherie) et l'accès à une éducation avancée de ses membres. Leur système économique domestique est le plus diversifié des catégories étudiées, présentant des caractéristiques d'intégration verticale méticuleuse qui réduisent les intermédiaires. L'appel à une main-d'œuvre familiale abondante et peu dispendieuse donne lieu par contre à sa sous-utilisation alors que celle-ci pourrait être mieux payée et souvent davantage mise à profit sur le marché du travail, moyennant des ouvertures sur le marché de l'emploi.

Les producteurs agricoles de cette catégorie semblent avoir été les plus affectés depuis l'ouverture du marché mexicain, lors du virage néolibéral (1982) d'abord et dans le cadre de l'ALENA (1994) ensuite. Les pratiques de *dumping* de produits agricoles américains sur le marché national mexicain ont eu comme conséquence la réduction de la capacité de mise en marché des produits agricoles de la part de ce groupe de producteurs qui, autrefois, dégageaient un revenu substantiel de l'agriculture. Les producteurs interviewés ont exprimé leur difficulté à concurrencer les bas prix des céréales américaines, d'autant plus que la politique de prix garantis du maïs a été supprimée [Appendini, 1998, p. 35]. La seule option demeure de se tailler une place sur les marchés locaux, là où la vente au détail leur fait profiter de leur avantage de proximité. Ce type de maisonnée a une capacité d'épargne, mais cette dernière ne sert qu'à défrayer les coûts des services qui ne cessent d'augmenter tels l'électricité et l'eau. Ces entrepreneurs subissent fortement les conséquences de la chute du pouvoir d'achat depuis 1995, qui a entraîné une diminution des ventes, une difficulté à acheter la marchandise en gros et l'impossibilité de faire crédit à leurs clients comme autrefois.

Malgré son nom, ce groupe ne connaît pas une position économique confortable et la qualité de vie de ses membres fluctue dans le temps et à l'intérieur d'une même catégorie. Affichant le revenu moyen supérieur de cet échantillon, ce type de maisonnée est sujet à de brutales variations dans la composition de son budget domestique étant donné qu'il a rompu ses attaches avec le milieu rural (d'où son appellation « moderne ») et qu'il ne dépend que du revenu salarié, provenant en majorité du secteur tertiaire de l'économie. Bénéficiant d'un style de vie tourné vers la consommation de biens matériels, d'un niveau d'éducation relativement élevé, d'un patrimoine familial hérité de générations passées et ayant une natalité réduite (un à deux enfants par famille), ces groupes domestiques connaissent une nouvelle vulnérabilité économique : la taille réduite de leur famille nucléaire ne permet pas d'avoir accès à une variété de sources de revenus, tandis que leurs biens matériels peuvent difficilement être monnayés, à moins d'accepter une diminution de leur qualité de vie. Riches en patrimoine, ils sont dépourvus de liquidité¹¹, ce qui a souvent un impact négatif sur la qualité de leur régime alimentaire. Espérant que cette situation économique critique ne sera que passagère, ils hésitent avant de se départir de leurs biens matériels. L'ampleur de la variété retrouvée en termes de revenus

11. L'expression anglaise « *house rich, cash poor* » reflète bien cette réalité.



hebdomadaires dans cette catégorie est illustrée par ses extrêmes : le minimum est de 80 dollars alors que le maximum est de 500 dollars. Leur incapacité générale à épargner les tient au bord du gouffre économique. Bref, ces maisonnées « modernes » montrent une nette dépendance vis-à-vis de l'emploi salarié pour conserver leur qualité de vie et présentent une vulnérabilité économique élevée malgré les capitaux dont elles disposent.

Propension relative à joindre les réseaux de migration

Cette étude a montré que les populations indigènes du Mexique n'ont pas de difficultés particulières à prendre part aux réseaux de migration ayant comme destination les États-Unis, ce qui contraste avec leur exclusion sociale historique [VanWey *et al.*, 2005 ; Ramírez Juárez, 2005]. Les inégalités sociales résultant des différences ethniques semblent diminuer dès que le contingent de main-d'œuvre émigrante s'apprête à traverser la frontière séparant le Mexique des États-Unis. Une fois en territoire américain, les travailleurs mexicains se fondent en une seule catégorie de travailleurs d'origine latino, et quelle que soit leur origine, métisse ou indigène. En conséquence, et cela peut constituer un attrait considérable pour les travailleurs indigènes, le fait de migrer à l'international abolit pour eux la hiérarchie mexicaine des classes sociales qui leur causait préjudice [Panagides, 1996]. Par contre, cet avantage acquis, ils se retrouvent au bas de l'échelle sociale états-unienne aux côtés des autres immigrants *latinos*. Cet effacement des différences ethniques semble également s'appliquer aux différences dues au genre : les femmes mexicaines, une fois aux États-Unis, obtiennent davantage de pouvoir face à leur conjoint ou dans la communauté, et les différences marquées par le genre tendent à s'estomper [entrevue Castillo García, 2006]. Or les femmes, seules ou mariées, représentent une part importante des flux migratoires mexicains vers les États-Unis.

Revenons aux catégories d'analyse des maisonnées rurales : de manière générale, l'analyse de l'intégration de l'ensemble de ces maisonnées aux réseaux de migration internationale montre que les catégories les plus pauvres (représentant presque la moitié de l'échantillon étudié, soit 13 sur 30) n'ont pas de connexions avec les réseaux de migrations internationales à l'intérieur de la famille nucléaire. Les maisonnées faisant partie des catégories « traditionnelles » et « au seuil de la subsistance » effectuent plutôt des migrations de travail à court terme, souvent saisonnière, à l'échelle régionale ou nationale, soit vers les grands centres urbains. Même si certains groupes domestiques interviewés faisant partie de la catégorie « au seuil de la subsistance » ont, dans leur famille élargie, des travailleurs ayant migré aux États-Unis, ils ne touchent pas de « migradollars ».

Par ailleurs, ce sont les maisonnées « entrepreneuriales » du milieu rural mexicain qui ont montré la plus forte propension à entreprendre des migrations internationales, car ils disposent d'un capital humain important en termes de nombre de travailleurs, d'éducation et de liquidité de capitaux provenant de l'entreprise fami-

liale. Les maisonnées dites « modernes », de par leur petite taille, ne disposent pas d'un nombre de travailleurs suffisamment grand pour pouvoir diversifier les sources de revenus. Aussi, les paiements récurrents qu'ils doivent faire sur leurs achats les empêchent de prendre le risque d'être sans revenus pendant un certain temps.

Au terme de cette analyse des contraintes à la mobilité des travailleurs demeurent les questions de l'âge, des ressources économiques et des attributs familiaux (âge des enfants, nombre d'enfants, familles monoparentales) comme limites aux migrations internationales. Quant aux ressources économiques nécessaires pour effectuer la migration, ces dépenses sont souvent assurées par des bailleurs de fonds provenant de la famille élargie ou de la communauté d'origine, si ce n'est par le migrant lui-même. La plus grande partie des frais engagés par le migrant sont destinés au déplacement accompagné d'un « *coyote* » pour traverser la frontière de la manière la plus sûre possible et de l'achat de faux papiers. L'intégration en territoire étranger est grandement facilitée par la présence de parents déjà sur place et/ou d'ONG et d'associations de migrants, dont certaines figurent dans le guide du migrant (*Guía del migrante*) publié par le gouvernement mexicain pour chacun de ses États.

Transition économique mexicaine et résilience économique

La restructuration de l'économie rurale mexicaine depuis l'avènement du virage vers la libéralisation du marché (1982) a contraint les économies domestiques à s'ajuster aux nouvelles conditions d'emploi, principalement par le biais de la diversification des sources de revenus. Une des stratégies économiques mises en avant par certaines maisonnées rurales fut d'emprunter la voie de la migration internationale. Cette stratégie n'est pas accessible à tous, et certains types de maisonnées montrent une incapacité à toucher ces « migradollars » et, dans le contexte économique qui prévaut depuis 1995, affichent une nouvelle vulnérabilité économique. C'est le cas des maisonnées les plus démunies en capitaux humains et économiques, mais aussi de celles que l'on croyait être les mieux nanties, les plus modernes, touchant deux salaires (les épouses travaillant dans la fonction publique ayant souvent un salaire supérieur à celui de leur mari) et imitant le style de vie nord-américain fondé sur le travail salarié, la famille nucléaire peu nombreuse et la consommation. Comme Thompson [1992] l'a montré, le fait d'avoir rompu leurs liens avec la terre et la production agricole de subsistance les rend dépendant de l'emploi salarié et les expose à une nouvelle vulnérabilité, qui se manifeste rapidement par la perte de variété dans leur régime alimentaire.

Le contexte économique national mexicain actuel présente des caractéristiques de précarité de l'emploi salarié et un pouvoir d'achat réduit (durant la période 1993-2003, ce pouvoir d'achat a été divisé par trois) [SEDESOL, 2003] ; les capitaux de roulement dont disposent les petits commerçants et les salariés des milieux ruraux sont de plus en plus limités. Dans une telle situation, deux atouts ressortent



pour combattre la vulnérabilité économique et mettre en place des pratiques de résilience, ce qui par ailleurs est loin de signifier le développement économique des maisonnées : un nombre important d'enfants d'âge adulte non mariés et la conservation des liens avec la terre permettent de diversifier les sources de revenus et de terrains où prélever ces revenus.

Ces ajustements face à la transition économique mexicaine ne se font pas sans payer le prix d'une qualité de vie diminuée, pour ceux qui restent en territoire mexicain, comme pour ceux qui s'en vont aux États-Unis. En espérant que ce ne soit que de courte durée, certains responsables de groupes domestiques tirent profit d'activités de la vente sur le marché informel ou de l'existence d'un terrain pour démarrer une production de subsistance, ajoutant ainsi une dimension productive à leur économie domestique qui s'était tournée davantage vers la consommation depuis les années 1970 [Gravel, 2004 ; Pépin Lehalleur, 1992]. Défiant les anciennes catégories d'analyse sociale, cette nouvelle vulnérabilité s'insère dans tous les interstices des économies domestiques rurales affichant une trop grande dépendance sur des sources uniques de revenus, et quelle que soit la classe sociale ou l'origine ethnique.

Peut-on croire alors en un développement durable fondé sur les migrations alors que l'État mexicain ne génère pas d'options pour ceux qui sont exclus des réseaux migratoires internationaux ? Avec l'augmentation potentielle des contrôles à la frontière Mexique/États-Unis, l'État mexicain aurait tout à gagner à chercher des alternatives à ces migrations du côté de la création d'emplois, à appuyer des projets productifs dans le monde rural d'où provient la majorité des émigrants, et à encourager des politiques de redistribution de la richesse à l'intérieur des limites de son territoire.

BIBLIOGRAPHIE

- APPENDINI Kirsten, « Changing Agrarian Institutions: Interpreting the Contributions », in CORNELIUS Wayne A., MYRHE David (ed.), *Transformation of Rural Mexico. Reforming the Ejido Sector*, La Jolla, Center for US-Mexican Studies, University of California San Diego, 1998, p. 25-38.
- BOHORQUEZ MOLINA José Gerardo et al., *Los pobres del campo querétano. Política social y combate a la pobreza en el medio rural de Querétaro*, México, INAH/INI/SEDESOL/CONACYT/COPLA-DEQ/UAQ, 2003.
- CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO), *Índices de marginación, 2000*, México, Consejo Nacional de Población (<http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/indice2000.htm>, page consultée en janv. 2001).
- CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN (CONAPO), *Regiones de atención prioritaria*. México, Consejo Nacional de Población, 2001 (<http://www.conapo.gob.mx>, page consultée en oct. 2004).
- DAPUEZ Andrés, BAÑOS RAMÍREZ Othón, « Transformaciones en el Régimen de la casa maya en Xocen », *Revista de la Universidad Autónoma de Yucatán*, vol. 19, n° 229, 2004, p. 3-27.
- ESTEVA Gustavo, « Los árboles de las culturas mexicanas », in ESTEVA Gustavo, MARIELLE Catherine (coord.), *Sin maíz no hay país*, México, Culturas populares de México, 2003, p. 17-28.
- GERMANI Gino, *Marginality*, New Brunswick, Transaction Books, 1980.
- GÓMEZ LEVY Enrique, RAMOS BERNARDINO Gladys, *Evaluación social del programa de crédito para el desarrollo de las microregiones mexicanas, 1999-2002*, document non publié présenté à l'Union européenne, 2002.
- GRAVEL Nathalie, « Faire plus avec moins : comment survivre à la transition économique au Yucatán, Mexique (1982-2002) », *Les Cahiers de Géographie du Québec*, vol. 48, n° 134, 2004, p. 155-172.
- GRAVEL Nathalie, PATINO HERNÁNDEZ Jorge, « The Mexican Dream: Finding a Way Out », *Focal Point. Spotlight on the Americas*, vol. 2, n° 9, 2003, p. 4-5.
- HAMILTON Sarah, « Neoliberalism, Gender, and Property rights in Rural Mexico », *Latin American Research Review*, vol. 37, n° 1, 2002, p. 119-143.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI), *Censo General de Población y Vivienda 2000. Cuestionario ampliado*, Aguascalientes, INEGI, 2000.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA (INEGI), *El sector agropecuario en el estado de Querétaro*, Aguascalientes, INEGI, 1997.
- JELIN Elizabeth, « Ciudadanía, derechos e identidad », *Latin American Research Review*, vol. 39, n° 1, 2005, p. 197-201.
- LUKE Timothy W., « Identity, Meaning and Globalization: Detraditionalization in Postmodern Space-time Compression », in HEELAS Paul et al. (coord.), *Detraditionalization; Critical Reflections on Authority and Identity*, Oxford, Blackwell, 1996, p. 109-133.
- MACIAS GAMBOA Saúl, REYES VERGARA Araceli, « Migración laboral y deserción educativa », *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, vol. 29, n° 57-58, 2004, p. 173-202.
- MAYER Enrique, *The Articulated Peasant. Household Economies in the Andes*, Boulder, Colo, Westview Press, 2002.
- PANAGIDES Alex, « Mexico », in PSACHAROPOULOS George, PATRINO Harry Anthony (coord.), *Indigenous People and Poverty in Latin America. An Empirical Analysis*, Aldershot, G.-B. Avebury, 1996, p. 127-163.
- PÉPIN LEHALLEUR Marielle, « ¿ Hacia una sociabilidad urbana en el campo mexicano ? Reflexiones a partir de la desunión de producción y consumo », *Les Cahiers de Géographie du Québec*, vol. 48, n° 134, 2004, p. 155-172.



Estudios sociológicos, vol. X, n° 29, 1992, p. 289-313.

- **POLANYI Karl**, *The Livelihood of Man*, New York, Academic Press, 1977.
- **RAMÍREZ JUÁREZ Javier**, « Ruralidad y recomposición social del campesinado en los valles centrales de Oaxaca », communication au 5^e Congrès de l'Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER), Oaxaca, 25-28 mai 2005.
- **ROBERTS Bryan R.**, « From Marginality to Social Exclusion: From "Laissez Faire" to Engagement », *Latin American Research Review*, vol. 39, n° 1, 2005, p. 195-197.
- **SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)**, *Medición del desarrollo. México 2000-2002*, México, SEDESOL, 2003 (<http://www.sedesol.gob.mx>, page consultée en janv. 2004).
- **SEN Amartya K.**, *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny*, Social Development Papers n° 1, Manille, Philippines, Asian Development Bank, 2000.
- **TELLO PEÓN Lucía**, « La vivienda en Yucatán: su especialidad y esencia », *Cuadernos de Arquitectura de Yucatán*, vol. 5, Mérida, Faculté d'architecture de la UADY, 1992, p. 715.
- **THOMPSON Lanny**, « Central Mexico: The Decline of Subsistence and the Rise of Poverty », in **SMITH Joan, WALLERSTEIN Immanuel (coord.)**, *Creating and Transforming Households. The Constraints of the World-Economy*, Cambridge/Paris, Cambridge University Press/Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1992, p. 170-186.
- **ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU) Et COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES**, *Informe de la reunión de expertos sobre remesas en México: propuestas para su optimización*, document non publié, México, 2000.
- **VANWEY Leah K. et al.**, « Community Organization, Migration, and Remittances in Oaxaca », *Latin American Research Review*, vol. 40, n° 1, 2005, p. 83-107.
- **WINSON Anthony, LEACH Belinda**, *Contingent Work, Disrupted Lives. Labour and Community in the New Rural Economy*, Toronto, University of Toronto Press, 2002.

RÉSUMÉ/RESUMEN/ABSTRACT

Malgré le *boom* économique migratoire que connaît le Mexique grâce à la porosité de sa frontière avec les États-Unis, les bénéfices de cette manne ne sont pas également distribués dans la population. De nouvelles divisions sociales sont générées en territoire mexicain par un accès inégal aux réseaux de migrations internationales, conséquences évidentes de l'absence de politiques sociales et de la faiblesse de l'État mexicain. L'article présenté ici met l'accent sur l'émergence d'une classe de « nouveaux pauvres », exclue des courants migratoires, et il démontre leur nouvelle vulnérabilité économique, car ils n'ont pas la possibilité de toucher de « migradollars ». De nouvelles formes d'exclusion sociale défient les anciennes catégories sociales d'analyse, car elles infiltrent toutes les classes sociales du milieu rural mexicain.

No obstante el *boom* económico migratorio en México, posible gracias a la porosidad de su frontera con los Estados Unidos, los beneficios no son repartidos de manera equitativa dentro de la población. Nuevas divisiones sociales han sido generadas sobre el territorio mexicano por un acceso diferenciado a las redes migratorias internacionales, de tal manera que las consecuencias de la debilidad de las políticas sociales y del

Estado mexicano surgen todavía con más fuerza. Este artículo subraya la emergencia de una clase de «nuevos pobres» excluida de tales flujos migratorios y demuestra su nueva vulnerabilidad económica, ya que se ven incapaces de acceder a los «migradólares». Nuevas formas de exclusión social emergen y vuelven a ser un reto para las categorías anteriores de análisis social, debido a que buscan insertarse dentro de cada clase social del medio rural.

Despite the migratory economic boom made possible in Mexico due to its porous border with the United States, the benefits are not equally distributed inside the Mexican population. The fact that not all rural households are capable of sending migrants abroad is often understated and is a problem that calls for nuances in the analysis of the human capital of rural households. The impossibility of joining migration circuits for some households in a context of state downsizing makes life increasingly precarious as they are cut off from an important source of income. This paper argues that a new economic vulnerability emerges among non-migrant rural households. New forms of social exclusion challenge former sets of social categories as they permeate all segments of the Mexican rural population.

MOTS-CLÉS

- Économies domestiques
- Exclusion sociale
- Mexique rural
- Migrations
- Transition économique mexicaine

PALABRAS CLAVES

- Economías domésticas
- Exclusión social
- México rural
- Migraciones
- Transición económica mexicana

KEYWORDS

- Household economies
- Social exclusion
- Rural Mexico
- Migrations
- Mexican economic transition

Virginie Rozée*

L'application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en Bolivie.

**Le cas des droits reproductifs et sexuels
à La Paz et El Alto**

La discrimination à l'égard des femmes (on parle plus tard de discrimination de genre), générale et universelle, constitue une préoccupation de la Communauté internationale depuis de nombreuses décennies, depuis notamment la création des Nations unies en 1946. Des études statistiques, menées et financées par cette instance, ont prouvé que l'égalité des droits des femmes influait sur le bien-être de la société, et « la dévalorisation de la femme fut identifiée comme cause et effet du sous-développement et liée aux problèmes de pauvreté, surpopulation, analphabétisme, dénutrition et insalubrité » [Binstock, 1998, p. 10]. Le thème gagne en visibilité lors de la Première Conférence mondiale sur la femme, à Mexico en 1975, où apparaît la nécessité de créer un instrument qui rappellerait et protégerait les droits humains des femmes, non assumés et non appliqués malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.

* CREDAL – Centre de Recherche et de Documentation sur l'Amérique latine, UMR 7169.

C'est ainsi qu'en 1979, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, plus communément appelée CEDAW, son abréviation anglaise, ou Convention de la femme. Cette Convention propose une révision des droits humains afin d'y intégrer de façon explicite les droits des femmes. Elle insiste particulièrement sur leur statut juridique, sur leur droit de procréer, et sur les incidences de la culture et de la tradition qui peuvent parfois limiter l'exercice de leurs droits fondamentaux.

La CEDAW devient dès lors le principal instrument défendant les droits humains des femmes, et le plus signé des traités onusiens. En la ratifiant, les États parties s'engagent à mettre en place des dispositifs légaux et sociaux pour promouvoir les femmes et faire disparaître la discrimination à leur égard. Cette convention est plus tard renforcée et surtout rappelée par d'autres instruments internationaux tels que le Programme d'action du Caire (en 1994), et la Plateforme d'action de Beijing (en 1995).

La Convention de la femme fut ratifiée par tous les pays d'Amérique latine. Mais la mise en parallèle des applications et des réappropriations des principes de l'instrument international, devenu norme nationale, avec les réalités sociales et politiques souligne un important décalage entre les avancées politiques et normatives et la situation et la condition des femmes dans la région, entre l'égalité de droit et celle de fait. La Bolivie, État partie de la CEDAW depuis 1989, illustre parfaitement les controverses et ambiguïtés de l'injonction internationale en matière de droits humains des femmes. Des mesures gouvernementales sont prises par les gouvernements successifs notamment en matière d'éducation, de travail, de participation et représentation politiques et de violence intrafamiliale, des mesures dont la réalisation et la répercussion marquent des progrès dans la communauté féminine. Mais une telle législation, protectrice du droit des femmes, se heurte à certaines résistances et difficultés quant à son application. La société bolivienne typiquement multisociale, multiculturelle, comporte une part de traditions et de nouveautés inextricablement mêlées. Parallèlement, la Bolivie connaît d'importants problèmes de pauvreté dans une conjoncture sociopolitique instable et difficile. Enfin, la domination masculine est fortement ancrée dans la société et le monde politique. Les normes culturelles pèsent donc, et les mentalités semblent plus lentes à changer que les lois. La Bolivie connaît pourtant une importante expérience politique organisée, une remarquable mobilisation des femmes, populaires notamment, dont une des figures clés reste Domitila Barrios de Chungara, femme de mineur qui s'est battue pour les femmes et contre la dictature. Les femmes du peuple de Bolivie ont toujours tenu un rôle significatif dans les luttes de libération et dans les mouvements sociaux. Les féministes boliviennes sont également des actrices clés pour le



changement de la condition féminine et l'adoption de lois. Elles luttent et se mobilisent aujourd'hui pour l'application et la réalisation de l'exercice des droits reproductifs et sexuels.

De la Cedaw en Bolivie aux droits reproductifs et sexuels à La Paz et El Alto

Les droits reproductifs et sexuels constituent une nouvelle génération de droits revendiqués et reconnus récemment par la Communauté internationale comme droits humains, à la Conférence sur la population et le développement au Caire en 1994, et celle sur la femme, à Beijing en 1995 notamment. Pour de nombreux auteurs et scientifiques féministes, ils seraient la clé de la libération féminine : « la libération des femmes commence au ventre », déclarait Simone de Beauvoir [Beauvoir, 1949]. La discrimination envers les femmes est souvent justifiée par le sexe, ou plutôt par la maternité des femmes. Françoise Héritier affirme en effet que ce n'est pas le sexe mais la fécondité qui fait la différence réelle entre le masculin et le féminin. Le rôle procréateur des femmes, imposé par la société et la culture, les rend vulnérables à une série de pratiques discriminatoires, qui ont pour origine la perception de ces dernières comme cantonnées à la reproduction et à l'éducation des enfants.

La CEDAW promeut de façon implicite l'application légale et sociale des droits reproductifs des femmes, entendus comme « les [*mêmes*] droits de décider de façon libre et responsable du nombre de leurs enfants et l'intervalle entre les naissances, et d'avoir accès à l'information, l'éducation et les moyens qui permettent d'exercer ce droit » [CEDAW, 1979, article 16 e]. Ces droits sont réaffirmés lors des Conférences du Caire et de Beijing, où est introduite la notion de « droits sexuels », définis comme « droits des femmes [*qui*] incluent leur droit à avoir un contrôle sur les questions relatives à leur sexualité, y compris leur santé reproductive et sexuelle, et à décider librement par rapport à ces questions, sans être sujettes à la coercition, la discrimination et la violence » [Plateforme d'action de Beijing, 1995, Paragraphe 96].

En ratifiant la CEDAW, et plus tard les Programmes d'action du Caire et de Beijing, l'État bolivien reconnaît officiellement les droits reproductifs et sexuels des femmes et s'engage à les promouvoir et les appliquer dans les réalités politiques et sociales. Comment ces droits, à travers la contraception et l'avortement (deux composantes clés)¹, sont-ils alors normalisés et promus dans le monde poli-

1. Comme le signale un document de travail de la *Coordinadora de la Mujer*, organisation non gouvernementale (ONG) bolivienne, « le taux de fécondité lié aux enfants désirés et obtenus, et l'utilisation de méthodes de régulation de la fécondité constituent l'indicateur le plus important pour mesurer l'exercice de leur droit à la santé sexuelle et reproductive » [Coordinadora de la Mujer, 2003, p. 69].

PHOTO N° 1 : *CHOLITAS*² MANIFESTANT À LA PAZ – (CLICHÉ DE CHRISTIAN LOMBARDI)



tique bolivien ? Quelles en sont les expressions légales et sociales ? Et surtout, quelle en est la réappropriation par les femmes : peut-on parler à leur égard de maternité volontaire et d'autonomie des décisions reproductives et sexuelles ?

Ces questions ont fait l'objet d'une étude sociologique à La Paz et El Alto, entre 2001 et 2006. La Paz est le siège du gouvernement bolivien. C'est précisément là que sont prises les décisions politiques, mais aussi que s'organise la mobilisation sociale. El Alto, ancien quartier marginal de la capitale, est une ville limitrophe. Il était donc intéressant de voir comment se répercutent et s'appliquent directement auprès de la population les mesures et les actions sociales et politiques là où elles sont adoptées et développées. De plus, les caractéristiques politiques, sociales et culturelles en matière de santé reproductive et sexuelle de ces deux univers urbains se sont avérées intéressantes pour l'étude.

Dans ces deux villes, des entretiens qualitatifs furent conduits auprès de chercheurs et d'universitaires, de responsables politiques, de médecins, de coordinateurs et coordinatrices de projets nationaux et internationaux, soit auprès de plus de cent personnalités liées à la problématique étudiée, qui normalisent et administrent le thème des femmes et de leur santé reproductive et sexuelle. Furent également menées des observations spontanées au sein d'institutions gouvernementales, telles que le ministère de la Santé et ses dépendances, d'ONG telles que le *Centro de Información y Desarrollo de la Mujer*

2. Les « cholos » ou « cholitas » sont les femmes d'origine indigène, aymara ou quechua, que l'on reconnaît en ville par leur tenue traditionnelle, caractérisée par la « manta » (le châle), la « sobremanta » (fin tissu qui recouvre le châle), le « sombrero » (chapeau melon), la « pollera » (jupe bouffante), et l'« aguayo » (tissu andin tissé, très coloré, essentiellement utilisé pour porter les enfants en bas âge ou des marchandises).



(CIDEM), la *Coordinadora de la Mujer* et autres groupes féminins et féministes, et enfin d'organisations internationales, celles de la coopération ou des Nations unies implantées dans le pays.

Nous nous sommes ensuite immergées quotidiennement dans les services gynécologiques et obstétricaux de trois hôpitaux publics de La Paz et El Alto. Nous avons choisi ces établissements car, étant publics, ils appliquent directement les mesures de santé du gouvernement, et les femmes qui s'y rendent ne présentent aucune caractéristique particulière et sont à cet endroit exposées à exercer leurs droits reproductifs et sexuels. Là, nous avons discuté avec plus de cent quatre-vingt femmes hospitalisées, parturientes et consultant externes pour connaître, à partir de leurs propres discours, leurs expériences sur leur vie reproductive et sexuelle. Ces entretiens informels ont suivi les principes méthodologiques du « *Diálogo de Saberes* » (Dialogue des Savoirs), méthodologie d'investigation qualitative reprise et développée par Susanna Rance, qui s'inspire des théories et pratiques de l'Éducation populaire des années 1970 [Rance, 2002].

Le « *Diálogo de Saberes* » appréhende la recherche comme un dialogue entre l'enquêteur et l'enquêté, comme un échange de connaissances, d'expériences et d'idées qui va au-delà d'un profit instrumental ou d'une confirmation de théorie. Dans ce contexte, la conversation ne suit pas les formalités protocolaires de l'entretien, et privilégie ce que les personnes rencontrées veulent raconter. Celles-ci deviennent des sujets actifs et réceptifs de la recherche et contribuent notamment à connaître et à transformer la réalité dans laquelle elles sont impliquées.

Cette méthodologie d'investigation-action, qui promeut le changement social en forme concertée avec le groupe humain impliqué, repose sur une volonté d'écoute, de concevoir l'entretien comme dialogue constructif, selon un processus de préparation préalable. La personne consultée peut alors se confier, dialoguer librement et si elle le souhaite, sans jugement de valeur, préjugé ou méfiance. Ceci constitue également en soi la limite de cette méthode, étant donné qu'il est impossible d'évaluer la pratique à partir du discours présenté. Cependant, cette méthode nous a permis d'avoir une écoute attentive, d'être bien acceptées par les femmes interviewées, et de recueillir ainsi de nombreuses histoires personnelles et pertinentes pour l'étude.

Nous avons également mené, au sein de ces hôpitaux et autres centres de santé, des observations participantes permanentes, pour connaître le milieu médical relatif à la santé reproductive et sexuelle, et les opportunités offertes aux femmes pour exercer leurs droits en matière de reproduction et de sexualité. L'information recueillie fut parallèlement complétée par l'organisation et la réa-

lisation d'ateliers au sein de groupes de femmes de quartiers populaires de La Paz et El Alto, tels que les « Manzaneras de Salud » ou les « Centros de Madres », soit auprès d'une quarantaine de femmes. Ces ateliers, qui portaient sur le thème de la santé maternelle et féminine, suivirent également la méthodologie du « Diálogo de Saberes » et consistaient ainsi à construire des espaces de réflexion collectifs et participatifs sur la santé des mères et des femmes en général, en considérant les idées, connaissances et pratiques de chaque participante.

La réalité sociale des droits reproductifs et sexuels

Lorsque nous demandions aux femmes hospitalisées dans les maternités de raconter l'histoire du nouveau-né, comment celui-ci était arrivé au monde, certaines ont décrit leur grossesse comme décidée et planifiée, mais la plupart des mères ont expliqué que leur grossesse était complètement imprévue, fruit d'un accident, d'une négligence ou d'un viol : « C'est mon deuxième bébé [...] mais le premier fut planifié [...]. Lui, ce fut un peu une négligence de ma part... [...] » (mère de 33 ans, deux enfants, en union libre) ; « [...] Il n'a pas été planifié... Ça a été un accident... » (mère de 34 ans, deux enfants, mariée) ; « Autrement dit s'il a été... s'il a été... et... comment on dit... planifié [...]. Non, non il n'a pas été planifié. Et je prenais des pilules contraceptives... Et j'ai arrêté de les prendre et... je suis tombée enceinte... et je suis tombée enceinte et j'ai décidé de l'avoir c'est tout [...]... et puis il est né » (mère de 22 ans, un enfant, mariée).

Certaines femmes disaient alors qu'elles avaient regretté ou regrettaient leur grossesse. Qu'il ne soit pas programmé ne signifie pas pour autant que le bébé n'était pas attendu avec amour et désiré, et les femmes montraient à cet égard un important dévouement (en cas de complication de la santé du nouveau-né par exemple) : « Ça a été un accident... mais il est bien désiré, aimé [...], il a été bien attendu. C'est ma vie ». Cependant, des observations et des entretiens de futures mères hospitalisées ont permis de soupçonner des grossesses non désirées. Ces femmes dont la grossesse était menacée refusaient de prendre le traitement ou voulaient rentrer chez elles à tout prix, même si cela signifiait la perte du futur enfant. Au lieu d'être soignées pour menace d'avortement ou d'accouchement prématuré, elles demandaient et signaient, contre avis médical, une autorisation de sortie. D'autres femmes hospitalisées ont déclaré ou ont été suspectées par le personnel médical d'avoir ingéré des substances réputées avoir des principes actifs sur les grossesses, des infusions de camomille en particulier³.

Au niveau national, des études et enquêtes rendent également compte d'un important nombre de grossesses non planifiées et surtout non désirées. Le

3. En Bolivie, on considère que l'infusion de camomille a un principe actif et nocif contre la grossesse.

PHOTO N° 2 : MÈRE BOLIVIENNE AVEC SES TROIS ENFANTS À LA PAZ
(CLICHÉ DE FRED SAVARIAU)



taux de fécondité est évalué à 4,2 enfants par femme, alors que le taux désiré atteint 2,6 enfants par femme [ENDSA, 1998]. À moindre échelle, il fut en effet observé dans les hôpitaux que de nombreuses femmes avaient eu plus d'enfants qu'elles n'en souhaitaient.

Ces grossesses non planifiées et non désirées sont justifiées, entre autres, par des demandes et besoins en planification familiale non satisfaits. Des discussions avec des femmes hospitalisées et avec les participantes des ateliers organisés, ainsi que des observations au sein des services gynécologiques et

obstétriques ont rendu compte d'une importante demande pour planifier la famille. Quand nous demandions aux mères si le nouveau-né allait avoir des frères ou des sœurs, la plupart répondaient qu'elles préféraient attendre un peu avant de décider d'avoir un autre enfant, ou expliquaient qu'elles n'en voulaient plus, en avançant des raisons telles que la douleur de la grossesse et de l'accouchement, l'incompatibilité avec le travail, les difficultés économiques⁴, et les priorités et préférences accordées à une éducation de qualité pour les enfants : « Non [...]. Travailler et tout et ça non [...]. À quoi ça sert de le mettre au monde et ne pas lui donner l'attention [...], avec [*un seul enfant*], tu vois ce qui lui plaît, ce dont il a besoin, ce qu'il veut en particulier » (mère de 22 ans, un enfant, célibataire).

Ces remarques rejoignent les conclusions des enquêtes boliviennes officielles. Selon l'Enquête nationale de démographie et santé (ENDSA) de 1998, le pourcentage de femmes qui ne désirent plus d'enfants (en excluant les femmes stérilisées) est de 64,8 % ; et la proportion de femmes qui souhaitent espacer leur prochain accouchement à plus de deux ans atteint 13,2 %. Or cette même enquête estime que la demande de contraception est fortement insatisfaite. Malgré cette forte demande, si la plupart des femmes rencontrées dans les hôpitaux et dans les ateliers connaissaient quelques méthodes pour éviter ou espacer une grossesse, très peu les avaient utilisées ou les utilisaient, ou bien de façon inappropriée.

Les grossesses non planifiées, non désirées, et les demandes non satisfaites en planification familiale alimentent le phénomène prédominant de l'avortement. La majorité des femmes consultées avaient eu plus de grossesses que d'enfants nés ; et avaient donc déjà connu un, voire plusieurs avortements. De même, de nombreuses femmes étaient hospitalisées pour « complication de grossesse », « menace d'avortement » ou « hémorragie ». Enfin, chez les femmes des ateliers organisés, l'avortement était également une expérience familière. Il existe deux types d'avortement : l'avortement spontané et l'avortement provoqué. Il est difficile d'identifier le type d'avortement étant donné que la pratique est illégale en Bolivie. De plus, les dossiers médicaux révèlent un certain tabou de la pratique en utilisant la terminologie « hémorragies ».

L'avortement provoqué est cependant légal, sous autorisation pénale, en cas de viol ou d'inceste, ou lorsque la santé ou la vie de la mère est en danger (article 266 du Code Pénal). Mais cette mesure ne s'applique pas, et les avortements provoqués sont alors pratiqués dans la clandestinité, dans des conditions insalubres et dangereuses. À son tour, l'avortement clandestin entretient donc un taux élevé de mortalité maternelle, estimé en 1994 à 390 pour

4. On peut parler ici de « malthusianisme de la pauvreté » [Cosío Zavala, 1992].



100 000 naissances vivantes [ENDSA, 1994]⁵. Il serait responsable, selon des données officielles du Secrétariat national de Santé de 1994, de 27 à 35 % de ces morts maternelles [Ministerio de Desarrollo Humano *et al.*, 1996].

L'exercice des droits reproductifs et sexuels s'exprime donc socialement par des grossesses non planifiées, non désirées, par une demande en planification familiale non satisfaite, par un fort recours à l'avortement clandestin, et par un taux élevé de mortalité maternelle. Malgré une légère amélioration des indicateurs en matière de santé reproductive et sexuelle (baisse du taux de fécondité, augmentation des connaissances et de l'utilisation des méthodes contraceptives, baisse relative du taux de mortalité maternelle), on peut s'interroger sur les raisons d'une telle réalité sociale de la santé reproductive et sexuelle, réalité officiellement dénoncée et sociologiquement observée. En Bolivie, les femmes rencontrent de nombreuses barrières politiques, sociales, culturelles et médicales pour exercer leurs droits en matière de reproduction et de sexualité.

Les principales barrières à l'exercice des droits reproductifs et sexuels

Le monde politique témoigne d'une importante prise de conscience et d'une démocratisation du thème de la santé reproductive et sexuelle et des droits afférents, depuis notamment la Conférence du Caire, où la Bolivie a montré une position très progressiste. L'expression politique de ces droits repose sur la formulation de mesures spécialisées, telles que les programmes ou les systèmes successifs de sécurité sociale pour la santé sexuelle et reproductive, et sur la reconnaissance de la planification familiale comme un droit, de l'avortement comme un problème de santé publique. La Bolivie compte sur un cadre normatif très avancé par rapport à d'autres pays d'Amérique latine ou d'autres régions du monde. Elle est par exemple l'unique pays latino-américain ayant des normes nationales de suivi post-avortement dans le système public de santé.

Cependant, cette politique est fortement conditionnée par l'instabilité des gouvernements du pays⁶ qui ne permet pas la continuité et la constance des programmes. À chaque gestion gouvernementale, les fonctionnaires changent et les politiques en matière de santé n'étant généralement pas protégées par la loi, d'autres programmes et plans à court terme sont mis en place, sans réelle continuité avec les mesures précédentes.

Mais cette politique est avant tout soumise à des pressions financières des organismes de coopération, sous forme de crédits conditionnés, et à des pres-

5. Selon ENSDA 2003, la dernière enquête de démographie et de santé réalisée dans le pays, le taux de mortalité maternelle fut évalué pour 2003 à 229 pour 100 000 naissances vivantes.

6. Entre 2001 et 2006, durée de l'étude, la Bolivie a changé cinq fois de gouvernement.

PHOTO N° 3 : « INTIMIDAD », BOLIVIE (CLICHÉ ANONYME)



sions idéologiques, notamment celles des États-Unis et de l'Église catholique. Les États-Unis, principale source financière du ministère de la Santé, des ONG et des Programmes internationaux en Bolivie, imposent la Loi d'obstruction globale, qui interdit aux entités créditées par le gouvernement nord-américain de parler d'avortement, de suggérer la normalité ou le plaisir de l'homosexualité, et de dispenser une éducation sexuelle auprès des adolescents présentant le caractère jouissif et normal des relations sexuelles. L'Église catholique⁷, véritable acteur social et politique dans le pays, prône une sexualité procréatrice des femmes et défend le droit à la vie.

7. Selon la Constitution politique bolivienne de 1995, « l'État reconnaît et soutient la religion catholique, apostolique et romaine. Il garantit l'exercice public de tout autre culte. Les relations avec l'Église catholique seront régies par concordats et accords entre l'État bolivien et le Saint-Siège » (article 3).



Les conséquences de cette double dépendance posent des limites prescrites au traitement de la santé reproductive et sexuelle des femmes et à la population en général. En effet, sous ces deux pressions constantes, les politiques n'abordent pas le thème de façon intégrale, et s'intéressent principalement à la santé maternelle. La priorité reste donc celle du binôme « mère-enfant » ou « sexualité-reproduction », à travers notamment le SUMI (*Seguro Universal Materno Infantil*), dernier système de sécurité sociale de santé reproductive et sexuelle, dont les prestations ne couvrent que les femmes enceintes et les enfants en bas-âge (Loi 2426 de 2002). Cette restriction laisse alors en suspens et irrésolues de nombreuses thématiques et composantes de la santé reproductive et sexuelle, telles que la responsabilité des hommes en matière de sexualité et de reproduction, la sexualité des femmes hors reproduction, le problème des grossesses non désirées et de l'avortement clandestin, ou encore la santé de la reproduction et la sexualité des adolescentes et des femmes célibataires.

Au-delà des barrières d'ordre politique, les femmes doivent faire face à des barrières d'ordre social. Les caractéristiques socioéconomiques et socioculturelles sont déterminantes dans l'exercice des droits reproductifs et sexuels. En effet, aucun droit ne s'exerce en marge des conditions économiques et matérielles, sociales et culturelles. Il s'est avéré lors de l'étude que les droits reproductifs et sexuels étaient plus accessibles aux femmes les plus éduquées, à celles qui appartenaient aux strates économiques supérieures. Il est plus facile pour ces femmes d'accéder à la contraception (les connaissances et l'utilisation des méthodes contraceptives sont d'ailleurs plus élevées chez ces femmes que chez les femmes plus pauvres), à de bons soins médicaux, ou de pratiquer un avortement dans de bonnes conditions.

D'autre part, aucun droit ne s'exerce non plus en marge des idéologies qui règnent dans toute la société. Les principales idéologies qui influent sur l'exercice des droits reproductifs et sexuels sont ici la domination masculine, et son corollaire, l'image de la « *madresposa* » (mère-épouse)⁸. La domination masculine, qui règne dans la majeure partie du monde, est fortement ancrée dans la société bolivienne. À travers ses expressions les plus communes, la violence domestique et l'irresponsabilité paternelle, elle est responsable de grossesses à haut risque et contribue aux taux élevés de grossesses non planifiées et non désirées. En ce qui concerne la planification familiale, nous avons observé que l'homme joue un rôle prépondérant, en décidant de l'utilisation ou non d'un moyen de contraception, voire en menaçant la femme qui utilise une méthode contraceptive moderne, symbole d'infidélité et d'émancipation sexuelle.

8. Expression empruntée à l'anthropologue féministe mexicaine Marcela Lagarde [Lagarde, 1990], très influente en Bolivie.

Avant de décider d'une quelconque méthode contraceptive, nous avons observé que les femmes voulaient consulter leur mari : « Donc, ça aussi je vais lui en parler pour décider... Si peut-être un stérilet ou pour lui demander... » (mère de 34 ans, trois enfants, en union libre) ; « J'ai pensé... Ligature des trompes... pour ne pas avoir plus d'enfant... Moi, en vérité, je ne veux pas plus d'enfant. Mais, je dois consulter mon époux, voir ce qu'il dit » (mère de 26 ans, deux enfants, mariée).

Cette domination masculine entretient l'image de la « *madresposa* », une image imposée par la société et par les femmes elles-mêmes, qui condamne ces dernières à la négligence de leur propre santé, les rend entièrement responsables du domaine de la reproduction, et discrimine celles qui avortent, ne sont pas mariées ou mères, et les mères célibataires. De même, ces deux idéologies véhiculent une faible estime de soi et une faible autonomie des femmes boliviennes, nécessaires pour l'exercice des droits reproductifs et sexuels.

Enfin, ce qui conditionne l'exercice de ces droits au niveau social, il y a toutes les représentations et pratiques culturelles existant autour de la reproduction et de la sexualité. Une caractéristique notoire en Bolivie est la diversité culturelle, avec plus de trente-cinq groupes ethniques qui représentent 60 % de la population nationale. Il n'existe donc pas un mais divers patrons culturels du comportement reproductif et sexuel. Les Aymaras, principale population indigène de La Paz et El Alto avec les Quechuas, croient que l'accouchement nettoie et purifie le corps, ce qui pourrait justifier les grossesses suivies, qui sont d'ailleurs considérées comme importantes pour maintenir la santé et l'intégrité de la femme. Lors d'un atelier mené en 2004 à Senkata, quartier marginal d'El Alto, où les habitants sont essentiellement d'origine aymara, les participantes ont effectivement expliqué qu'elles considéraient qu'une femme qui ne tombait pas enceinte finissait par être malade.

Les conceptions culturelles aymaras, et andines en général, entraînent une pratique particulière de l'accouchement, marquée par une relation entre la femme et la terre vierge. Lors de l'accouchement, on insiste sur le fait que la femme doit pousser les forces vers le bas (« *hacia abajo* »), vers la terre. C'est pourquoi la femme andine accouche généralement en position accroupie (« *cuchillas* ») ou à genou. D'autre part, le placenta revêt une importance symbolique chez les Aymaras et les Quechuas, car il représente l'esprit du corps émanant de la mère et de l'enfant. Il meurt dès sa naissance et doit être gardé et enterré par la famille, sans quoi il se vengera.

Les femmes andines accordent beaucoup d'importance à la fécondité du sang menstruel, car la conception humaine dérive du mélange entre le sperme masculin et le sang menstruel féminin, ce qui entraîne une méthode andine de



l'abstinence périodique contraire aux enseignements occidentaux et scientifiques. Comme l'accouchement, la menstruation est également considérée comme un mécanisme nécessaire et naturel qui lave le corps, tel un acte de purification, ce qui peut avoir des répercussions sur l'usage de contraceptifs modernes qui suspendent la menstruation tels que les injections. Ainsi, si de nombreuses femmes boliviennes sont demandeuses en matière de planification familiale, « nécessité ne signifie pas que la planification familiale soit acceptée comme telle par tous les secteurs de la population, puisque interviennent des facteurs culturels, religieux et sociaux qui déterminent et conditionnent la pratique de la planification familiale et, plus spécialement, l'utilisation de certaines méthodes contraceptives » [Ministerio de Desarrollo Humano et Secretaria Nacional de Salud, p. 29].

Les caractéristiques socioéconomiques et les conceptions culturelles, à travers le machisme, les croyances religieuses et ancestrales, sont des éléments qui conditionnent la santé reproductive, et l'exercice des droits reproductifs et sexuels des femmes. Or, comme le souligne Sandra Aliaga, communicatrice sociale sur le genre, importante actrice sociale pour le changement de la condition féminine en Bolivie, et dont le dernier ouvrage porte sur l'histoire reproductive et sexuelle du pays, les mentalités et les pratiques ne changent pas par décret. Étudier la santé reproductive et sexuelle en Bolivie ou intervenir dans le secteur santé requiert la connaissance et la compréhension des logiques sociales et culturelles de la société bolivienne.

L'attention médicale est souvent abordée comme un facteur décisif dans l'exercice des droits reproductifs et sexuels. Le rôle déterminant de la qualité de l'attention médicale dans les décisions et l'autonomie des femmes par rapport à leur sexualité et leur reproduction fut effectivement observé. Il existe une distance significative, un « choc culturel » [Arnold et De Dios Yapita, 2001], entre les médecins et les femmes hospitalisées ou consultantes. Les médecins sont majoritairement des hommes et appartiennent pour la plupart à ce qu'on appelle la « société des Métisses ou des Blancs ». Or les femmes rencontrées, celles d'El Alto en particulier, étaient souvent d'origine aymara et quechua. Ainsi, le personnel de santé et la population destinataire manifestent des attitudes, des pratiques et des connaissances différentes sur la santé reproductive et sexuelle, précisément parce qu'ils proviennent de domaines culturels distincts. Les mesures gouvernementales préconisent le respect des différentes perceptions et pratiques culturelles de la population, telles que la position d'accouchement chez les Aymaras et les Quechuas. Pourtant celles-ci ne sont ni considérées, ni appliquées et restent marginalisées par le personnel de santé, qui les jugent « rétrogrades » et « nocives ».

Les conversations et observations menées dans les hôpitaux de La Paz et d'El Alto, et les discussions au cours des ateliers réalisés présentèrent une attention médicale institutionnalisée, relativement conservatrice, autoritaire, et essentiellement médicalisée. Ainsi, un sentiment de malaise et de discrimination alimente une certaine passivité des femmes quant à leur santé reproductive et sexuelle. L'attention médicale en matière de reproduction et sexualité est marquée par une sous-utilisation des services et une impopularité des contrôles prénataux et des accouchements institutionnalisés.

Si, lors de nos observations et entretiens, des femmes se montrèrent relativement satisfaites de leur hospitalisation, nombreuses furent celles également qui se sont plaintes de l'attention médicale matérielle et immatérielle, du froid, des repas et du personnel jugé non chaleureux et parfois « mauvais ». Le manque d'infrastructure, de matériel et d'espace conditionne une qualité d'attention relative. Les attentes sont longues, les femmes sont nombreuses par chambre, et parfois installées dans les couloirs de l'hôpital ; les accouchements sont assistés « à la chaîne ». D'autre part, nous avons remarqué une certaine déshumanisation du traitement médical, où les femmes sont apparues comme des objets d'auscultation, avec un manque certain de dialogue et de respect de l'intimité. Les portes des cabinets médicaux et des chambres étaient rarement fermées ; de nombreux étudiants et personnels assistaient aux consultations extérieures et internes, ainsi qu'aux accouchements, sans l'approbation des femmes. Lors des visites médicales quotidiennes dans les services gynécologiques et obstétriques observés, les patientes hospitalisées n'étaient pas toujours auscultées et consultées, et attendaient pourtant dénudées dans leur lit. Ces visites médicales étaient plus un échange entre les élèves et les docteurs, plus un cours pour les internes qu'une véritable attention aux femmes. Ainsi, nous avons observé peu de communication avec ces dernières, qui ignoraient pourquoi elles prenaient un traitement, pourquoi elles n'étaient pas autorisées à sortir, ou pourquoi le nouveau-né était décédé.

D'autre part, nous avons précédemment dit que les femmes rencontrées étaient demandeuses en matière de planification familiale. Or, lors de l'étude, l'orientation s'est avérée rare ou inexistante. Les médecins n'abordaient pas ou peu le thème de la contraception, ou se montraient très brefs. Seules étaient orientées les mères dont on estimait qu'elles avaient « trop » d'enfants. Là, la contraception était abordée comme un moyen de régulation de la fécondité, et jamais comme une façon de jouir de relations sexuelles sans risque. Les médecins n'exposaient pas les différentes méthodes existantes, ils ne respectaient donc pas ce qu'on appelle le « libre choix informé », nécessaire à l'exercice des droits reproductifs et sexuels, et se consacraient uniquement à la promotion du stérilet et de la stérilisation chirurgicale. Comme le signale Ineke Dibbits dans *Lo que*



puede el sentimiento, quand l'information est incomplète ou manipulée, quand l'offre d'une partie des contraceptifs existante est minime, on ne peut parler de respect des droits reproductifs et sexuels [Dibbits, 1994]. De plus ces deux méthodes conseillées dépendaient, dans les hôpitaux observés, de l'autorisation conjugale, c'est-à-dire du mari, même si le couple était officieusement séparé. Depuis les Conférences du Caire et de Beijing, cette autorisation n'est plus officiellement requise dans les textes et normes du gouvernement. Cependant, la pratique est restée commune dans de nombreux centres de santé.

De la reconnaissance à la réappropriation vaine des droits reproductifs et sexuels

Après toutes ces observations, peut-on parler d'exercice de droits reproductifs et sexuels par les femmes boliviennes rencontrées ? Grâce à la mobilisation des femmes, et notamment des féministes, à la pression internationale, aux enquêtes officielles qui dénoncent une réalité sociale inquiétante vis-à-vis de la santé reproductive et sexuelle des femmes, la Bolivie a fait preuve d'importantes avancées en matière d'énoncés politiques relatifs aux droits reproductifs et sexuels. Mais cette politique est retombée aujourd'hui dans une période de stagnation et d'hésitation. En effet, ces avancées normatives n'ont pas été accompagnées des conditions politiques, économiques, sociales et culturelles, nécessaires à leur application. Les droits reproductifs et sexuels sont reconnus, mais les engagements de la CEDAW, du Caire et de Beijing sont restés sur un plan théorique. Il existe donc de grandes brèches entre l'existence de normes, leur application, et les nécessités et demandes de la population.

Dans ce contexte, la maternité reste déterminée par la norme politique, sociale et culturelle ; l'autonomie reproductive et sexuelle rencontre les obstacles politiques, sociaux et médicaux évoqués précédemment. Nous avons effectivement observé que les femmes ne sont pas considérées, et ne se considèrent pas comme sujet de droit et de décision en matière de reproduction, et encore moins en matière de sexualité. Les femmes rencontrées n'avaient ni la connaissance ni les opportunités suffisantes et nécessaires pour exercer leurs droits reproductifs et sexuels. La législation avancée repose donc sur une égalité préalable qui n'existe pas en Bolivie. Elle est par conséquent en contraste permanent avec la méconnaissance et la négation de ces droits. D'autre part, la pénalisation de l'avortement, la condamnation de la sexualité des femmes, l'hymne à la maternité vont à l'encontre de la définition des droits reproductifs et sexuels, et surtout de leur reconnaissance et application.

Aujourd'hui, la politique bolivienne semble offrir un nouveau contexte pour les femmes et l'exercice de leurs droits. Evo Morales Ayma, président de

la République élu au suffrage universel direct en décembre 2005, a nommé quatre femmes ministres, et revendique au sein de son gouvernement et de l'Assemblée constituante convoquée en août 2006 la parité et l'équité de genre. Il souhaite, à ce propos, éliminer le vice-ministère de la Femme. Il déclare qu'avoir un ministère indigène ou un ministère de la Femme est une forme de discrimination, et qu'il n'existe pas, par exemple, de ministère des Blancs.

Au niveau de la santé reproductive et sexuelle, d'importantes lois et mesures ont été prises et sont en prévision. Depuis le 1^{er} avril 2006, le SUMI a été élargi à toute la population féminine et couvre les prestations de prévention de cancers féminins et d'infections sexuellement transmissibles. De même, cette loi étend les services de planification familiale à toutes les femmes et adolescentes, indépendamment de leur statut ou situation reproductive. Depuis janvier 2007, le gouvernement veut mettre en place un système de sécurité sociale universel pour tous, hommes et femmes, jusqu'à 21 ans. Ces mesures seront-elles à la hauteur des demandes et besoins de la population féminine, et favoriseront-elles l'exercice par les femmes de leurs droits, de leurs droits reproductifs et sexuels en particulier ? Le contexte semble favorable, mais reste incertain.



BIBLIOGRAPHIE

- **ALIAGA B. Sandra**, *Estudio sobre la evolución de la salud sexual y reproductiva en Bolivia*, Johns Hopkins University/Center for Communication Programs, 2000.
- **ARNOLD Denise, DE DIOS YAPITA Juan et alii**, *Las wawas del Inka: hacia la salud materna intercultural en algunas comunidades andinas*, Serie Informes de Investigación, II, n° 2, La Paz, ILCA, 2001.
- **BEAUVOIR Simone de**, *Le deuxième sexe*, t. 1 et 2, Paris, Gallimard, 1949.
- **BINSTOCK Hanna**, *Hacia la igualdad de la mujer. Avances legales desde la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer*, Serie Mujer y Desarrollo, Naciones Unidas, CEPALC, 1998.
- **COORDINADORA DE LA MUJER**, *Documento de trabajo. Estado de situación actual de los derechos humanos de las mujeres en Bolivia*, 2003.
- **COSIO ZAVALA Maria**, *Transition démographique et développement social dans les PVD*, New York, ONU, 1992.
- **DIBBITS Ineke**, *Lo que puede el sentimiento – La temática de la salud a partir de un trabajo con mujeres de El Alto Sur*, TAHIPAMU, 1994.
- **ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD (ENDSA)**, INE, 1994, 1998 et 2003.
- **LAGARDE Marcela**, *Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas*, UNAM, 1990.
- **MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO, SECRETARIA NACIONAL DE SALUD**, *Expandiendo opciones de Planificación Familiar – Diagnóstico Cualitativo de la Atención en Salud Reproductiva en Bolivia – Revisión Bibliográfica*, non daté.
- **MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO, SNS, CIDEM, UMSA – CARRERA DE ANTROPOLOGIA, OMS, UNIVERSIDAD OF MICHIGAN, CEMICAMP, OMS, POPULATION COUNCIL**, *Expandiendo opciones de Planificación Familiar – Diagnóstico cualitativo de la atención en salud reproductiva en Bolivia*, BM / FNUAP / OMS / PNUD, 1996.
- **NATIONS UNIES ET CEDEF**, *Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes*, 1979.
- **NATIONS UNIES**, *Plateforme d'action de Beijing*, 1995.
- **RANCE Susanna**, « El método del Diálogo de Saberes », in Susanna RANCE, Verónica KAUNE, María Dolores CASTRO, Silvia SALINAS, Claudia DE LA QUINTANA, Ester VELDHIJS, Jacqueline MICHAUX, *Encuentros sobre « Metodologías de Investigación sociocultural » – Experiencias en Investigación Sociocultural*, CIEPP, 2002.

RÉSUMÉ/RESUMEN/ABSTRACT

La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) est un outil international clé pour le progrès de l'égalité de genre et la défense des droits des femmes, nécessaire mais non suffisant pour améliorer la condition et la situation de ces dernières. La Bolivie a ratifié la CEDAW en 1989, s'engageant ainsi à mettre en place des dispositifs sociaux et légaux en faveur de la communauté féminine et à appliquer notamment les droits reproductifs (puis

sexuels), un des principaux thèmes de la Convention. Cette ratification est accompagnée de l'adoption d'importantes mesures qui promeuvent ces droits. La réalité sociale de la santé reproductive et sexuelle, évaluée par des indicateurs qui rendent compte de l'exercice de ces droits afférents, montre alors une certaine amélioration. Mais cette réalité, observée et dénoncée, reste très fortement marquée par des grossesses non planifiées et non désirées, révélatrices d'un choix reproductif relatif, et par un

grand recours à l'avortement clandestin (illégal dans le pays) qui alimente un taux élevé de mortalité maternelle. Les femmes de La Paz et d'El Alto, rencontrées lors de l'étude présentée ici, doivent faire face à de nombreuses barrières politiques, sociales, culturelles et médicales, qui engendrent peu de répercussions et réappropriations des principes internationaux, une maternité volontaire peu fréquente et une faible autonomie des décisions reproductives et sexuelles.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) es un instrumento internacional clave para el progreso de la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres, que es necesario pero insuficiente para mejorar la condición y la situación de las mujeres. Bolivia ratificó la CEDAW en 1989, comprometiéndose a implementar dispositivos sociales y legales en favor de la comunidad femenina, a aplicar los derechos reproductivos (y más tarde también sexuales), que representa uno de los principales temas de la Convención. Esta ratificación es acompañada de la adopción de importantes medidas que promueven estos derechos. La realidad social de la salud reproductiva y sexual en Bolivia muestra un cierto avance, a partir de sus indicadores. Pero esta realidad queda aún fuertemente marcada por embarazos no planeados y no deseados, reveladores de una elección reproductiva relativa. Por consiguiente, las consecuencias del aborto clandestino (ilegal en el país) llevan a una alta tasa de mortalidad materna. Las mujeres de La Paz y El Alto, encontradas durante el

estudio presentado, tienen que afrontar varias barreras políticas, sociales, culturales, simbólicas y médicas, contrarias a los principios internacionales, a una maternidad voluntaria y a una autonomía de las decisiones reproductivas y sexuales.

The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) is an international tool key for the progress of gender equality and the defence of women's rights, at the same time necessary but non sufficient to improve the condition and the situation of woman. Bolivia ratified the CEDAW in 1989, and so committed to organize social and legal mechanism behalf women's community, enforcing in particular reproductive (and later sexual) rights, one of the principal topics of the Convention. This ratification is accompanied with adoption of important measurements which promote these rights. The social reality of reproductive and sexual health indicates the exercise of such rights, showing a certain improvement then. But this reality, observed and denounced, remains very strongly marked by not planned and non desired, revealing pregnancies of a relative reproductive choice, and by a consequent recourse to the clandestine abortion (illegal in the country) which feeds a high rate of maternal. Women from La Paz and El Alto, met during the study presented here, must face political, social, cultural, symbolical and medical obstacles, which causes vain effects and re-appropriation of international principles, a weak decided maternity, and an insignificant reproductive and sexual decisions' autonomy.

MOTS-CLÉS

- CEDAW
- Bolivie
- Femmes
- Droits reproductifs et sexuels

PALABRAS CLAVES

- CEDAW
- Bolivia
- Mujeres
- Derechos reproductivos y sexuales

KEYWORDS

- CEDAW
- Bolivia
- Women
- Reproductive and sexual rights

INFORMATION SCIENTIFIQUE



Xavier Arnauld de Sartre,
Les fronts pionniers
d'Amazonie. Les dynamiques
***paysannes au Brésil*, Paris,**
CNRS Éditions, 2006, 223 p.

Dix ans après l'ouvrage *Les fronts pionniers d'Amazonie brésilienne. La formation de nouveaux territoires*, dirigé par C. Albaladéjo et J. Tulet, X. Arnauld de Sartre revient sur les processus de construction territoriale à l'œuvre dans les espaces pionniers. Tout comme l'ouvrage précédemment cité, qui faisait intervenir des chercheurs d'appartenances très diverses (agronomes, géographes, économistes), l'auteur fait également le pari de l'interdisciplinarité afin de saisir au mieux les relations entre construction sociale et construction territoriale. De nombreuses passerelles sont établies entre géographie (rapport des hommes à l'espace) et sociologie (rapport des hommes dans un espace), démontrant à de nombreuses reprises la complémentarité entre les deux approches. L'hypothèse qui guide sa réflexion est la suivante : les territoires pionniers de la Transamazonienne seraient en train de devenir des espaces ruraux presque comme les autres grâce à un certain nombre de mutations dans les rapports sociaux au sein de l'agriculture familiale. Parmi elles, la remise en cause de logiques paysannes traditionnelles par des conflits plus ou moins ouverts entre générations d'agriculteurs. Après un premier chapitre présentant, dans les grandes lignes, les dynamiques pionnières de 1970 à nos jours, les logiques paysannes en question sont clairement identifiées notamment dans

leur façon de s'inscrire dans le temps et l'espace. Si les agriculteurs familiaux sont plutôt prompts à la mobilité, ce n'est pas toujours synonyme d'échec ou un manque d'adaptation aux conditions du milieu mais un choix : la reproduction de l'agriculture familiale. La migration aurait alors un but simple : donner une terre aux enfants devenus adultes. Ceci constitue un moyen efficace de garder ses enfants auprès de soi, que ce soit pour exercer un certain contrôle sur eux (allant du mariage aux orientations techniques en matière agricole) ou pour pérenniser l'exploitation parentale par le maintien d'une main-d'œuvre facilement malléable, car redevable du sacrifice réalisé par les parents (sorte de contre-don). Tandis que la proximité géographique renvoie au mode de vie communautaire, le système don/contre-don fait référence selon l'auteur à un paternalisme de type paysan, ces deux aspects constituant les fondements mêmes du paysannat traditionnel.

En Amazonie, la reproduction sociale de l'agriculture familiale, dans sa version traditionnelle, passe donc par un déplacement dans l'espace, en général d'une zone pionnière plus ou moins ancienne vers ce que l'on nomme les « terres neuves » de la frontière, et serait par la même occasion responsable de l'augmentation des déboisements enregistrée ces trente dernières années. Si ces logiques évoluent, « se modernisent » pour reprendre l'expression de l'auteur, elle-même inspirée des acteurs régionaux impliqués dans des projets de développement durable, la consolidation territoriale tant attendue des zones pionnières pourrait ainsi se mettre en place.

Certains comprendront par « modernisation » le fait d'empêcher le recours aux migrations, comme le voulait la théorie de la « nécessaire stabilisation » des populations amazoniennes, en vogue jusqu'au milieu des années 90. L'auteur propose toutefois une alternative intéressante à partir de l'étude de six localités situées sur les vicinales (appelées *travessões* dans le livre, en référence au vocabulaire de la région d'Altamira) de la Transamazonienne. Plutôt que de provoquer un changement exogène pouvant être tout aussi néfaste pour la relation des agriculteurs à leurs milieux, l'étude des changements en cours dans un front pionnier ancien peut permettre de prendre des décisions plus adéquates pour le futur. Pour ce faire, X. Arnauld de Sartre a choisi de s'intéresser à un moment charnière des stratégies de reproduction au sein de l'agriculture familiale : le passage d'une génération à l'autre.

Afin d'obtenir un maximum d'information sur ce moment-clé, des entretiens semi-directifs ont été menés tour à tour avec les membres de la première (chapitre 2) et de la seconde génération (chapitre 3, 4 et 5) autour de deux principaux thèmes : les trajectoires de vie, ce qui inclut tant le parcours géographique (migration) que socio-économique (accès à la terre, construction du ménage), et les relations parents-enfants (attentes, projets, critiques et contestations vis-à-vis de l'autre génération). Ainsi, si changement il y a, la confrontation des discours tenus par les deux générations permettra d'en expliquer les origines.

Certaines évolutions sont très visibles, comme une tendance pour les fils et

filles de colons à vouloir être autonomes de plus en plus tôt. Tous les moyens sont bons pour refuser ou négocier les logiques communautaires et traditionnelles : sexualité et mariage en dehors des règles consacrées ; installation indépendante du don de terre par les parents ; départ en ville ou en *fazenda* afin d'éviter une éventuelle migration familiale. La contestation par le travail en *fazenda* étant particulièrement critiquée par les parents, puisqu'il rompt avec un des idéaux qui les a poussés sur les terres amazoniennes au prix de nombreux sacrifices : être un agriculteur indépendant.

D'autres évolutions sont plus difficiles à saisir, qu'elles soient cachées dans les discours à double-sens que les agriculteurs amazoniens manient avec habileté (les lecteurs pourront s'entraîner à loisir à lire entre les lignes grâce aux nombreuses retranscriptions qui jalonnent la démonstration de l'auteur) ou qu'elles soient tout simplement inaccessibles à l'enquêteur. Les perceptions des femmes et filles d'agriculteurs sur la société paysanne sont très difficiles à obtenir, soit parce qu'il est moins évident d'interroger les femmes seules, soit parce que lors des entrevues en présence d'un individu masculin (père ou époux) leurs discours sont très souvent édulcorés. De nombreux indices, glanés çà et là, tendent à prouver que ces dernières seraient tout autant, si ce n'est plus, que les jeunes hommes, de puissants vecteurs de transformation des logiques paysannes. Les femmes de colons poussent les enfants aux études et leurs ouvrent ainsi de nouvelles perspectives de carrière. Les jeunes filles se révoltent contre la double dépendance qui pèse sur elles, celle du



père puis ensuite celle du mari. Elles n'hésitent pas non plus à se rebeller contre un certain nombre de normes communautaires jugées d'un autre âge, notamment les règles autour des *flirts* ou de la sexualité avant-mariage. Plus lettrées que leurs homologues masculins et plus habituées au mode de vie urbain, en renégociant leur position sociale et en participant plus activement à l'éducation des enfants, les filles d'agriculteurs pourraient être à l'origine de la modernisation des familles rurales amazoniennes. L'hypothèse, résumée ici, est plus que plausible, mais des difficultés à obtenir de l'information à ce sujet contraignent pour le moment l'auteur à une certaine réserve.

Les origines de cette modernisation doivent être encore analysées, quoique la confrontation des deux typologies générationnelles apporte quelques éléments de réponse dans le chapitre 5. La transformation des logiques sociales serait donc à l'origine d'un nouveau rapport à l'espace, d'une nouvelle ruralité aux multiples facettes. Multiples dans le sens où ces nouvelles manières de percevoir l'agriculture familiale varient d'un jeune interrogé à un autre, en fonction du *background* social (notamment le degré de rupture vis à vis des normes paysannes), ou bien encore des expériences de vie de chacun, ce que l'auteur nomme les « chocs biographiques » : séjour(s) en ville, passage dans une Maison familiale rurale (MFR), errances aventurières diverses (orpaillage, travail salarié pour autrui) ... Le seul reproche que l'on peut faire à l'ouvrage est de ne pas trop détailler l'application de ces nouvelles formes de ruralités à l'échelle des exploi-

tations même si ce n'est pas son objectif initial. Outre quelques indications sur les orientations agricoles (préférences pour les cultures pérennes ou les pâturages), on ne sait pratiquement rien sur l'usage que les jeunes agriculteurs ont du feu, de la forêt ou des terres « dégradées ». On ne sait pas non plus s'ils sont vraiment plus sensibles aux questions environnementales, ce que postule et espère un grand nombre de syndicats ruraux, associations et ONGs militant pour un développement plus durable de l'Amazonie. Respectent-ils par exemple les normes environnementales édictées pour les projets de colonisation que leurs aïeux ont parfaitement ignoré jusqu'ici ? Ces quelques précisions auraient pu permettre de mieux se faire une idée du caractère prédateur ou économe de l'usage que ces jeunes ruraux font du milieu dans lequel ils ont souvent grandi, contrairement à leurs parents qui, eux, l'ont en général découvert. Si néanmoins vous voulez découvrir de qui dépend peut-être le futur de l'*Hileia* (nom donné à la forêt amazonienne), plongez-vous dans le livre de X. Arnauld de Sartre...

Guillaume Marchand
(IHEAL/CREDAL)

***Politics, economy and society in Bourbon Central America (1759-1821)*, Jordana Dym et Christophe Belaubre (éd.), Boulder, University Press of Colorado, 2007, 310 p.**

Cette œuvre collective est issue d'une collaboration internationale ayant rassemblé une dizaine de chercheurs états-

uniens, français et centraméricains à l'occasion du congrès international de la Latin American Studies Association (Dallas, février 2003). À partir de l'exemple de l'Amérique centrale, brochant un vaste panorama des questions politiques, économiques, sociales mais aussi culturelles, cette équipe se propose avant tout d'apporter sa pierre à l'étude de l'impact des réformes engagées par les Bourbons. Délaissant les approches de l'indépendance menées à l'aide d'analyses qui empruntent à la science politique, les auteurs se placent en amont de l'éclatement politique du monde hispanique et se proposent, selon un questionnement tout aussi classique, d'examiner la manière dont le programme réformiste des Bourbons fit entrer les possessions centraméricaines dans une ère de turbulences.

De fait, l'espace centraméricain fit l'objet d'attentions réformatrices précoces (dès les années 1730), en raison de son intérêt stratégique au cœur d'une zone militairement vulnérable. Malgré tout, il se singularise, au sein de l'Amérique espagnole, comme une aire de relative quiétude, puisque à la différence d'autres régions celle-ci ne connut, durant cette période, ni révoltes indigènes ni menées indépendantistes de la part des élites créoles. À travers neuf articles, sans a priori, mêlant les études de cas et les tentatives de synthèse à l'échelle régionale, les auteurs de ce volume interrogent cet apparent paradoxe. Leur réponse est nuancée : constatant le très inégal achèvement des différentes tentatives de réforme introduites par les Bourbons, la variabilité des réponses locales et le caractère parfois imprévi-

sible des transformations induites par les initiatives royales, ils esquissent le tableau d'évolutions complexes aux conséquences souvent contradictoires.

En rationalisant l'administration, les réformes bourbonniennes visaient à renforcer le contrôle du pouvoir royal sur les hommes et sur les territoires. Presque toujours, ce fut au prix d'un accroissement du prélèvement fiscal et d'une homogénéisation des statuts qui aboutit au démantèlement (partiel) des privilèges des corps anciens, notamment ceux de l'Église et des villes issues de la *conquista*. Ce faisant, le renforcement de l'État, pas toujours conduit de manière efficace, n'aboutit pas nécessairement à l'affaiblissement des corporations. Par ailleurs, en développant l'éducation, en élargissant l'accès au statut de ville et en soutenant l'activité économique, cette politique éclairée visait à dynamiser la société civile : les secteurs les plus mobiles (il semble que ce furent les *castas* et les gens des métiers) en tirèrent avantage au détriment des autres. En Amérique centrale, l'histoire de cette « révolution atlantique » qui finit par la happer n'était donc pas écrite a priori. Au cours des dernières années de la domination espagnole, « cette société très hétérogène demeura fragmentée et différenciée » (p. 9). Comme le montre Gustavo Palma Murga, la diversité des réponses que les acteurs locaux apportent aux défis posés par la politique de libéralisation économique et les contraintes de la guerre l'illustre de manière particulièrement éloquente. Plus généralement, si ces évolutions contradictoires n'engagèrent pas à proprement parler les différents segments



de la société dans un jeu à somme nulle, les évolutions qu'elle connut furent suffisamment divergentes pour qu'aucun mouvement d'ensemble ne poussât l'Amérique centrale sur la voie de la révolution sociale ou même de l'indépendance politique : celle-ci n'intervint qu'une fois consommée celle du Mexique et elle emprunta la voie de la « révolution conservatrice » tracée par le plan d'Iguala.

Bien des études ici rassemblées illustrent la forte résistance des populations et des autorités locales face aux exigences d'un pouvoir monarchique qui se trouvait presque toujours réduit à négocier et à transiger avec ses interlocuteurs. Alors que les réformes bourbonniennes visaient en dernier ressort à renforcer les capacités de défense de l'empire, Madrid échoua franchement, malgré la mise en place du système des intendances et quelques tentatives de peuplement, à reprendre en main la côte des Mosquitos, domaine des « Indiens de guerre », des *cimarrones* et des contrebandiers étrangers. Ici, à cette date pourtant tardive, la présence espagnole était une trop grande nouveauté (article de Doug Thompson). De même, la population de Quetzaltenango, tous groupes confondus, s'opposa victorieusement à la Couronne lorsque celle-ci tenta de lui imposer son monopole sur l'eau-de-vie. Le pouvoir royal dut alors se contenter d'une simple taxe sur le commerce de l'alcool (article de Jorge A. González).

De manière analogue, le mouvement général qui aboutit au renforcement du pouvoir de l'État au détriment de celui de l'Église ne fut pas aussi univoque qu'on pourrait le penser. Si Sajid

Alfredo Herrera, qui étudie le développement de la scolarisation dans le Sonsonate et la province de San Salvador, conclut bien à la marginalisation de l'autorité ecclésiastique, Eugenia Rodríguez Sáenz, qui examine les relations de genre, et Christophe Belaubre, qui étudie le pouvoir des administrateurs des biens ecclésiastiques, aboutissent à des conclusions plus nuancées. Dans le premier cas, il apparaît que l'État fut incapable, sans l'appui des autorités ecclésiastiques, de répondre à la demande sociale en matière de police des mœurs ; dans le second, les attaques contre l'institution ecclésiastique et son emprise sur la société n'empêchèrent pas le développement de son pouvoir financier...

À l'extrême opposé, mais d'une manière rarement prévue et peu maîtrisée, il arrive que les effets produits dépassent les intentions du pouvoir. Ainsi le renforcement de la société civile, l'autonomisation d'acteurs individuels modernes tels que les hommes de finances (article de Christophe Belaubre), les entrepreneurs, les négociants (Gustavo Palma Murga), les acteurs politiques (Jorge H. González, Timothy Hawkins) ou encore le renouveau d'organismes représentatifs tels que les municipalités (Jordana Dym) esquissent-ils un mouvement d'ensemble qui engage la société d'Ancien Régime dans de profondes mutations. Certains auteurs voient là les premiers linéaments des processus qui commandent les conflits sociaux et informent les débats politiques durant les décennies qui suivent les indépendances.

Mais l'enseignement majeur de cette série d'études est peut-être ailleurs : comme bon nombre d'auteurs le relèvent et comme le souligne Stephen Webre dans la conclusion qu'il donne à l'ouvrage, les réformes bourbonniennes n'eurent pas la cohérence qu'on leur prête trop souvent. Si la Couronne avait bien un projet, elle ne put le mettre en œuvre de manière systématique et n'avança qu'à petits pas et dans les directions qui s'offrirent à elle au gré des opportunités rencontrées : l'épisode du transfert de la ville de Guatemala après le tremblement de terre de 1773 en est l'exemple le plus fameux (Jordana Dym, p. 81 et suiv.). En outre, nombre des transformations économiques et sociales que connut l'Amérique centrale dans les dernières décennies du XVIII^e siècle découlèrent d'évolutions générales dont la logique échappait aux acteurs politiques et dont les contemporains ne furent pas nécessairement conscients : expansion démographique, prodromes de la révolution industrielle en Europe, extension et récurrence des conflits armés dans l'aire atlantique, participation de certains secteurs des élites créoles au mouvement des Lumières, etc.

Dans des domaines où les synthèses ne sont pas si nombreuses, ce tableau nuancé et informé apporte tant à la connaissance du XVIII^e siècle centraméricain qu'à la compréhension du développement des réformes bourbonniennes en Amérique. Les contributions généralement fort riches sont souvent servies par des analyses d'une finesse nuancée. Elles sont mises en valeur par une cartographie soignée, un index et une biblio-

graphie générale. Ce livre devrait donc désormais figurer en bonne place dans toute bibliothèque américaniste.

Pierre Ragon
(Université de Rouen/CREDAL,
UMR 7169)

Véronique Marchand,
*Organisations et protestations
des commerçantes en Bolivie,*
Paris, L'Harmattan, 2006, 328 p.

Vendeuses dans les marchés couverts selon les normes commerciales traditionnelles, ou vendeuses de rue organisées en syndicats et en associations, ou encore vendeuses ambulantes plus isolées et moins visibles socialement, qui sont ces femmes boliviennes qui parlent l'aymara ou le quechua en plus de l'espagnol et qui, par leur apparence vestimentaire (jupes bouffantes, châle et chapeau), se distinguent autant des paysannes que des femmes de la ville en robe ou en pantalon ? Qui sont ces *cholitas*, comme on a coutume de les nommer à La Paz, en englobant sous un même terme leur diversité économique et socioculturelle ? Comment évoluent au jour le jour ces vendeuses en proie à des jeux complexes d'identifications statutaires et ethniques, avec quelles possibilités et quelles stratégies de revendications et de mobilisation ?

Le travail de Véronique Marchand, qui reprend les recherches menées au cours de sa thèse de doctorat, apporte un ensemble d'éclairages sur cette population-charnière, entre ville et campagne, modernité et traditions, en l'approchant au plus près par un riche travail



ethnographique mené à La Paz en 1998 et 1999.

La première partie du travail décrit de façon fouillée la grande hétérogénéité sociale de ce groupe de femmes qui ont en commun d'être socialement des intermédiaires ethniques entre les Blanches qui ne les reconnaissent pas comme semblables et les Indiennes qu'elles ne veulent pas ou qu'elles ne veulent plus être. En tant que commerçantes, qu'elles travaillent en marchés couverts ou dans la rue, elles sont organisées chacune à leur manière. Les vendeuses de marchés couverts sont habituellement vendeuses de mère en fille. Elles appliquent le règlement des marchés défini par la municipalité et choisissent leurs « dirigeantes » ou *maestras* pour les représenter et les superviser. Ces dernières sont en effet autant de liens entre l'intérieur (les vendeuses, leurs valeurs et leurs principes) et l'extérieur (la municipalité et ses règles dont elles assurent le respect), d'où leur ambivalence. Les vendeuses de rue sont, elles, dans une situation plus précaire (soumises aux intempéries, à la pollution et pouvant plus difficilement laisser leurs marchandises sur place). Elles témoignent en outre, à partir de l'enquête menée par l'auteure, de parcours professionnels plus variés. Elles sont plus polyvalentes et se dotent aussi de dirigeant(e)s, les « secrétaires généraux/ales » dont le rôle est de les défendre face aux autorités municipales sans l'ambivalence des *maestras*. Quant à la troisième « catégorie » de cette typologie, les vendeuses contraintes à être des vendeuses « ambulantes », elles sont discriminées, mal acceptées et a priori

dépourvues de représentation collective de ce type. S'agissant d'une population moins facile à observer (pas de réunions, pas de lieu de rencontre particulier), c'est à partir d'une vingtaine d'entretiens que l'auteure a fait ressortir une série de parcours (souvent du monde rural vers le service domestique puis la vente). Elles montrent la conquête conflictuelle de leur espace de vente, leur quotidien en proie à la réprobation et aux sanctions, tant de la part des agents municipaux que des autres vendeuses mieux dotées et organisées, et l'obligation pour elles de changer régulièrement de lieu à moins qu'elles n'aient su négocier avec les uns et les autres leur présence à tel ou tel endroit de la ville.

Tout en gardant présente à l'esprit cette typologie des vendeuses, Véronique Marchand, dans la deuxième partie du travail, rend compte des actions collectives menées par les commerçantes dans les années 1980 et 1990. De façon récurrente, l'enjeu principal des mobilisations est la défense des espaces de vente durement acquis dès qu'ils sont remis en cause par les autorités municipales. Celles-ci en effet, voyant d'un mauvais œil la prolifération des vendeuses, tentent périodiquement de mettre en place des projets d'expulsion. Différents cas d'affrontements sont ainsi étudiés comme autant d'exemples de réactions protestataires développées par les groupes de femmes entre 1987 et 1998. Les luttes y sont présentées avec leur composante ethnique et permettent de mesurer à chaque fois le rôle de l'appui syndical. Un cas de lutte menée par des vendeuses « ambulantes » entre novembre 1997 et janvier 1998 avec

pour objectif l'occupation de façon stable d'une ancienne voie ferrée est, certes, la preuve que la démarche protestataire n'est pas l'apanage des deux premières catégories, mais il montre aussi combien, en l'absence de certaines ressources, la mobilisation peut se révéler insuffisante.

La variable contextuelle donne à ces mobilisations et à leurs enjeux à plus long terme une tonalité spécifique. C'est un fait en Bolivie, et à La Paz en particulier, les équipes municipales restent rarement plus d'un an à la tête de la municipalité. De cette fragilité et précarité des dirigeants, les femmes et leurs organisations savent tirer parti, car l'équipe municipale ne peut se permettre de s'aliéner cet électorat conséquent et est donc périodiquement tenté de le satisfaire rapidement. Mais cette même vulnérabilité et cette instabilité politique constituent aussi un obstacle, en cas de rotation, à l'application rapide avec une nouvelle équipe des acquis obtenus avec la précédente. Mais la permanence des organisations de commerçantes veille au suivi des revendications dans le long terme.

L'ouvrage, et c'est une de ses lignes de force, nous permet de voir comment statuts professionnels, familiaux et ethniques s'entrecroisent à des degrés divers dans cette population féminine pour mener la mobilisation à terme avec succès. Qu'il s'agisse de lutter contre la municipalité pour contrecarrer ses tentatives d'ingérence, ou contre l'État pour redéfinir un système de fiscalité qui les désavantage, ou encore contre d'autres associations de vendeuses aux intérêts divergents, ces femmes se battent autour

de leur activité professionnelle de vente et font valoir la légitimité de leurs luttes en mettant en avant leur statut de vendeuse, de mère et de *chola*.

Ce sont tous ces processus de lutte pour la reconnaissance finalement d'une triple identité, professionnelle, de genre et ethnique que Véronique Marchand met au jour dans ce travail.

Françoise Martinez
(Université Paris X/CRIA,
GRECUN)

Jean-Pierre Lavaud et Isabelle Daillant, *La catégorisation ethnique en Bolivie.*

***Labellisation officielle et sentiment d'appartenance,* Paris, L'Harmattan, 2007, 291 p.**

Réunis en 2003, les dix textes composant cet ouvrage ont le mérite de se situer dans un hors temps médiatique. Ils posent un problème d'une urgente acuité tout en inscrivant leurs analyses dans la longue durée ; en ce sens, la prise de recul par rapport à l'élection d'Evo Morales en décembre 2005 est efficace. Les trois premiers articles analysent en effet l'histoire politique des catégories officielles des XIX^e et XX^e siècles, tandis que les sept suivants sont fondés sur des terrains qui permettent d'entrer dans les logiques des termes d'adresse et d'auto-identification.

Pour qui ne connaît pas la Bolivie, le premier texte, signé par Daniel Dory, donne un aperçu géohistorique et une synthèse bibliographique qui impressionnent, même si la simplification qu'il entraîne est parfois problématique et contredit presque la dynamique d'en-



semble de l'ouvrage. Certains mots complexes et sensibles (race, classe, *castas*, etc.) sont heureusement contextualisés par la contribution de Rossana Barragán sur « L'ordre social des classifications au XIX^e siècle : Indiens, Métis et Espagnols/Blancs » et certains chiffres sont déconstruits dans l'article de Jean-Pierre Lavaud. Ainsi, le tableau construit par Daniel Dory, où les différents recensements de 1827 à 2000 font osciller la population indigène entre des estimations maximales et minimales de 73 % et 47 %, est contrebalancé : « du point de vue de la connaissance, il est bon de rappeler encore les 13,5 % d'identification indigène de l'enquête de la *corte electoral* de 1999, obtenus lorsque la possibilité d'une affiliation métisse est introduite » (Lavaud, p. 116).

Ancrés dans des ethnographies fines, souvent portés par une perspective sociologique (individualisme méthodologique et interactionnisme), les articles partent de l'idée selon laquelle toute catégorisation, qu'elle soit ethnique, géographique, sociale, religieuse ou sexuée, a pour objectif de situer autrui ou soi non seulement dans une *différence*, mais aussi sur une *échelle* hiérarchique (Lavaud, p. 12). Nommer et, de surcroît, compter constituent des actes politiques. Les catégories ne reflètent donc pas – mal ou bien – des groupes « réels » objectifs et le chercheur n'a pas pour mission d'évaluer la conformité d'une étiquette avec une réalité. Historicisées et contextualisées, les appellations perdent leur apparente « évidence ». Mais elles ne sont pas moins profondes et significatives. Bien que construites, changeantes et histo-

riques, les classifications sont des opérations symboliques chargées de sens pour les acteurs. Ainsi en est-il quand des paysans de langue maternelle quechua et aymara, récemment devenus mineurs à Potosí, s'imaginent descendants de conquistadors espagnols, dépravés et pervers par l'argent des mines, pour expliquer leurs comportements (Pascale Absi). Les Chimane, qui vivaient relativement en marge du territoire et des dynamiques nationales et ignoraient alors la catégorie même d'Indien, rassemblent *collas* et *cambas* sous un même terme : « les nombreux » (Isabelle Daillant). En ce sens, le travail conjoint des éditeurs de cet ouvrage, l'une ethnologue et l'autre sociologue, donne un équilibre certain à l'ensemble : une égale attention est apportée aux processus sociaux et au travail symbolique, aux parcours individuels et collectifs.

Tout se passe comme si les individus et les groupes engagés dans des dynamiques sociales et économiques maîtrisaient les changements par le travail sur les noms : mineurs de Potosí cherchant à se distinguer des paysans et se rapprochant des élites créoles (Pascale Absi) ; marchandes de La Paz de *pollera* s'éloignant des paysannes comme des femmes de *vestido* urbaines (Véronique Marchand) ; Jalq'a de Sucre qui choisissent de produire une musique et de s'habiller de vêtements « métis » pour être acceptés par les métis *mozos* (Rosalia Martínez) ; Chiriguano qui préfèrent se présenter comme Guarani, Tapii qui font oublier l'étymologie de leur nom (Isabelle Combès). Les « noms » et présentations de soi pour

autrui ne sont pas sans conséquence. Entendus, vus et tenus pour « vrais », ils engagent les corps, les désirs et les subjectivités. « Ce que les hommes pensent être réel est réel dans ses conséquences ». De fait, le caractère performatif de leurs énoncés échappe rarement aux acteurs, qui au contraire manipulent de nouveaux noms ou resignifient à loisir de vieux termes qu'ils choisissent de garder. Les catégories changent alors au moins légèrement de sens chaque fois qu'elles sont proférées. Si bien que rapidement les recherches en sciences sociales utilisent des nomenclatures déjà dépassées, retravaillées par les acteurs.

Qu'elles disent l'inclusion, l'exclusion, la distinction, la dévalorisation, la mise en garde ou la critique, les catégories peuvent également devenir à double tranchant dans la bouche des locuteurs. « L'accès à l'aide économique est le nœud du problème, la clef qui fait comprendre le choix d'un nom, d'une étiquette, la clef aussi qui fait varier, dans les divers recensements, le nombre d'indigènes, du simple au double. Le nom est une arme, c'est un outil politique c'est une arme blanche que l'on retourne, contre le Blanc, quand le besoin s'en fait sentir » (Combes, p. 276).

L'ouvrage est riche pour mieux comprendre l'histoire et l'actualité des classifications internes et des métissages de la société bolivienne. Comme ont pu le souligner les éditeurs du livre par

ailleurs, la prégnance du métissage ressort très largement de tous les articles sous des angles et des sens différents. Au moment où des frontières et des oppositions se transforment (pour se créer, se rigidifier ou s'affaiblir), les passages et les mélanges sont d'autant plus perçus et nommés, que ce soit pour être décriés ou pour être célébrés. Tout d'abord, les catégories dites intermédiaires (*cholas*, *mestizos*) sont anciennes. Ensuite des faits – comme s'exprimer en langue amérindienne – ont été interprétés différemment suivant les époques : au début du XIX^e siècle, lorsque toutes les classes sociales (bourgeoisie comprise) de La Paz parlent aymara et toutes celles de Cochabamba dialoguent en quechua, la langue n'est pas un marqueur d'ethnicité. Elle ne devient un critère de définition et de comptabilisation des Indiens que progressivement. Seul regret : parfois, au lieu de suivre chacune des catégories, le lecteur aurait aimé pouvoir reconstruire les transformations des systèmes de noms, comme Isabelle Combès le fait pour la partie du Chaco et qu'une thèse récente, défendue par Nicolas Richard, approfondit pour le Chaco paraguayen¹. Plus généralement, une réflexion sur « la formation nationale des altérités » internes – pour reprendre un concept proposé par Claudia Briones – permettrait de saisir la dynamique d'ensemble². En comparaison avec le Paraguay, c'est le poids des identifications écono-

1. Nicolas Richard, *Les chiens, les hommes et les étrangers furieux. Archéologie des identités indiennes dans le Chaco boréal*, thèse de doctorat en anthropologie, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, janvier 2008.

2. Claudia Briones, « Formaciones de alteridad : contextos globales, procesos nacionales y provinciales », in *Cartografías Argentinas, Políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad*, Buenos Aires, Antropofagias, 2005, p. 11-44.



miques, soutenues par de puissants syndicats, qui étonne. L'impression finale qui se dégage est que l'identité professionnelle (artisans, mineurs, marchandes, paysans, etc.) surdétermine les désignations, qui se disent, vivent et marquent à travers le langage de la musique et du vêtement – devenant alors « ethniques » (Rosalía Martínez). De nombreuses questions surgissent qui appellent de nouvelles recherches : quel impact à court et à long terme auront les politiques d'Evo

Morales sur les catégories ethniques ? La revalorisation de « l'Indien » entraînera-t-elle les acteurs à abandonner les catégories intermédiaires et à gommer les métissages comme autrefois ils furent amenés à taire certaines différences ? Quelles soient libératrices ou enfermantes, le pouvoir produit de nouvelles dynamiques identitaires. Le débat reste ouvert.

Capucine Boidin
(IHEAL / CREDAL)

LES AUTEURS



Rogelio ALTEZ est anthropologue et professeur à la Escuela de Antropología (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) de l'Universidad Central de Venezuela. Il est également président de la Sociedad Venezolana de Historia de las Geociencias et membre de l'International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO). Il a notamment publié *El desastre de 1812 en Venezuela: sismos, vulnerabilidades y una patria no tan boba* (Caracas, Universidad Católica Andrés Bello – Fundación Empresas Polar, 2006).

Ancienne élève de l'École Normale Supérieure (LSH) et agrégée de sciences économiques et sociales, **Mathilde GAUVAIN** prépare actuellement une thèse en études sur le développement à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, consacrée aux fonctions urbaines de l'économie informelle de rue à Caracas. Ses thèmes de recherche portent notamment sur la cohésion sociale et urbaine et sur l'économie sociale.

Elda GONZÁLEZ MARTÍNEZ, chercheuse à l'Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales du Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espagne), travaille sur la religiosité populaire au Brésil et sur les mouvements migratoires entre Europe et Amérique latine. Elle a notamment publié *La inmigración esperada. La política migratoria brasileña de Joao VI hasta Getúlio Vargas* (Madrid, CSIC, 2003) ; et, en collaboration avec F. Giobellina, *Umbanda: El poder del margen. Un estudio sobre religiosidad popular y experiencia social* (Cádiz, Univ. de Cádiz, 2000).

Ricardo GONZÁLEZ LEANDRO, chercheur à l'Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales du Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espagne), travaille sur l'Argentine des ^{xix}e et ^{xx}e siècles. Il a notamment publié *Curar, persuadir, gobernar. La construcción histórica de la profesión médica en Buenos Aires* (Madrid, CSIC, 2000) et dirigé, en collaboration avec M. Plotkin, *Localismo y globalización. Aportes para una historia de los intelectuales en Iberoamérica. Siglos ^{xix} y ^{xx}* (Biblioteca de Historia de América, CSIC, Madrid, 2001). Il a récemment coordonné le dossier thématique "*Campos e imaginarios profesionales en América Latina*" (*Anuario IEHS*, Tandil, n° XX, 2007).

Nathalie GRAVEL est spécialiste de géographie rurale, sociale et économique. Après une thèse intitulée *Géopolitique de la culture et de la production : le cas des ouvriers ruraux des maquiladoras au Yucatán, Mexique (1995-2001)*, elle enseigne à l'Université Laval du Québec. Présidente de la société de géographie de Québec, elle a récemment publié "Mexican Smallholders Adrift: The Urgent Need for a New Social Contract in Rural Mexico", (*Journal of Latin American Geography*, University of Texas Press, 6 (2), 2007, p. 77-98) et "La función social de las maquiladoras en el campo yucateco, 1995-2003" (in R. Diego et C. Conde (eds), *El cambio en la sociedad rural mexicana. ¿Se valoran los recursos estratégicos?*, vol. III : *Nueva ruralidad, territorialidad, financiamiento y asesoría rural*, México, Association Mexicaine d'Études rurales / Casa Juan Pablos / Universidad Autónoma Metropolitana, p. 79-103).

Guy MAZET, docteur en droit, est chargé de recherches de 1^{ère} classe au CNRS (CRE-DAL – UMR 7169) et enseignant à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. Professeur d'informatique juridique, il a également enseigné dans les facultés de droit des universités de Montpellier, de la République d'Uruguay (Montevideo), Anahuac (Mexico) et La Sagesse (Beyrouth). Expert de l'Institut international du droit du développement (Rome) et consultant en informatique juridique, il est l'auteur de nombreux travaux en matière d'informatique et de droit.

Anne PÉNÉ-ANNETTE est agrégée de géographie et enseigne à l'Université de Versailles – Saint Quentin-en-Yvelines. Doctorante au CREDAL (UMR 7169), elle prépare une thèse intitulée *Urbanisme et aménagement sur les pôles de développement du Grand Est du Venezuela*. Membre du GdR « Réseau Ville », elle a notamment publié « Concurrence sur les usages de l'eau dans les pôles d'industrie lourde de l'est du Venezuela » [*Bulletin de l'Association des Géographes Français*, décembre 2003] ; ainsi que « L'eau convoitée de la Guyane vénézuélienne », *Cybergéo*, 2004 (<http://www.cybergeo.eu>). Elle a récemment présenté, dans le cadre du Festival de Géographie de Saint-Dié des Vosges, une conférence sur « Le Venezuela de Chávez : pétrole, développement, révolution ».

Auteur d'une thèse intitulée *Les tendances récentes de l'urbanisation au Venezuela. Le rôle des villes moyennes* (Université de Toulouse II – Le Mirail), **Nubis PULIDO** est géographe et professeur à l'Universidad de Los Andes (Mérida). Ses principales lignes de recherche concernent la géographie urbaine et les systèmes urbains régionaux. Parmi de nombreux travaux, elle a notamment publié "El Espacio urbano latinoamericano y la globalización. Emergencia de ciudades 'intermedias' y nuevos cambios en Venezuela" [*in América Latina : cidade, campo e turismo*, Buenos Aires, Editorial CLACSO, 2006].

Armelle RACINOX est actuellement étudiante du Master International Planning à la Bartlett Faculty of the Built Environment de UCL (Londres). Elle a soutenu son mémoire de DEA, intitulé *Les métamorphoses de l'espace public à Caracas. De l'influence des tensions de la sphère politique sur l'urbanité de la capitale vénézuélienne*, dans le cadre de l'École doctorale « Sociétés et Milieux du Passé et du Présent » de l'Université Paris X.

Julien REBOTIER est allocataire de recherche en géographie à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine (Université Paris III – Sorbonne Nouvelle). Il termine actuellement sa thèse de doctorat portant sur les enjeux des risques urbains à Caracas, dans la perspective d'une approche globale des risques et de leurs différentes territorialités, de leur gestion par les acteurs publiques et de la planification urbaine. Il a notamment publié "Método de localización de los heridos en el caso de un terremoto en la ciudad de Mérida, Venezuela" [*Revista Geográfica Venezolana*, vol. 47, 2, 2006] et « Au-delà de la ¡Revolución! Un regard critique sur le Venezuela contemporain » [*ÉchoGéo*, n° 3, 2007, <http://echogeo.revues.org>].



Sandrine REVET est docteur en anthropologie et enseigne à l'Institut des Hautes Études de l'Amérique latine. Ses travaux proposent une approche anthropologique des catastrophes dites naturelles. Outre de nombreux articles, elle a récemment publié *Anthropologie d'une catastrophe. Les coulées de boue de 1999 au Venezuela* (Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2007).

Post-doctorante au CREDAL (UMR 7169), **Virginie ROZÉE** est docteur en sociologie et a consacré sa thèse à l'application en Bolivie de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ses travaux conduits dans le pays, à La Paz et El Alto notamment, s'intéressent principalement à la problématique des femmes et du genre, aux mouvements sociaux des femmes et à la vie reproductive et sexuelle de ces dernières.

Docteur en sciences de l'information et de la communication, **Leopoldo TABLANTE** a réalisé une thèse intitulée *Salsa : évolution commerciale d'une musique populaire. Du barrio latino À l'industrie multinationale du disque, 1971-1999* (Université Paris XIII, 2001). Également auteur des essais *Los Relieves de Enrique Bernardo Núñez* et *Los sabores de la salsa*, il est actuellement chercheur au Centro de Investigación de la Comunicación de l'Universidad Católica Andrés Bello et dirige un projet sur la représentation de la pauvreté dans trois journaux vénézuéliens (*El Nacional*, *El Universal* y *Últimas Noticias*).

Emiliano ZAPATA est architecte et prépare actuellement une thèse au sein de l'École doctorale « Ville et Environnement » (ED 448 – ENPC / Paris VIII / EMLV / IFU / ENSG). Ses recherches portent sur les programmes de réhabilitation urbaine dans les zones de *barrios* de Caracas et sur les implications de leur « intégration » du point de vue physique, social et foncier.

Achevé d'imprimer : Belle Page
Dépôt légal n° 80637
juin 2008

